Reflexiones de un constitucionalista del sur de Europa a comienzos del siglo XXI

Antonio Porras Nadales

Selección de artículos de Antonio Porras Nadales para el Grupo Joly (*Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Málaga Hoy, Europa Sur, Huelva Información, El Día de Córdoba, Granada Hoy, Diario de Almería*)

SUMARIO:

AÑO 2003

CHAPAPOTE CONSTITUCIONAL (Sobre la nueva oleada de reforma de los Estatutos). **¿MODERNIZACIÓN O REFORMA?** (El debate sobre la administración). **EL CONTROL DE LA POLÍTICA LOCAL** (Vísperas de elecciones locales).

AÑO 2004

LEGITIMACIÓN O VICTORIA (Vísperas elecciones generales). **¿OFERTAS PROGRAMÁTICAS O CANDIDATOS?** (Campaña electoral). **ANDALUCÍA: EL IMPACTO DE LOS VOTOS NEGROS** (Elecciones generales marzo 2004). **LA CRISIS DE LEGITIMACIÓN** (Reflexión tras las elecciones de 2004). **ELOGIO DE LA ALTERNANCIA** (Tras la constitución del nuevo Congreso). **TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA** (Valoración de los partidos políticos). **Y NO ESTAR LOCO** (Sobre la política socialista en Madrid y Andalucía). **PERDÓNALES, SEÑOR** (A las minorías). **PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA**

AÑO 2005

GOBIERNOS ¿FUERTES O DÉBILES? EL “IMPULSO DEMOCRÁTICO” (Política autonómica en Andalucía). **POLÍTICA O PROZAC. LA DEMOCRACIA ABURRIDA** (Referéndum Constitución europea). **EL FRACASO DE LA POLÍTICA** (Sobre la gobernanza). **SOY UNA NACIÓN. ADIOS, GUNDER FRANK** (Necrológica). **TEORÍA DEL “PUTSCH”** (Revoluciones de los colores). **¿SEGURIDAD O PENITENCIA?** (Ante el terrorismo islámico). **ECOS DE LA TRANSICIÓN. NOSOTROS EL PUEBLO** (Reforma de los Estatutos). **EL OMBLIGO DEL MUNDO** (Fracaso del referéndum del proyecto de Constitución europea en Francia). **LA CLAUSULA SAGRADA** (Reforma del Estatuto catalán). **NO FOTOCOPIABLE** (Tras publicarse el proyecto de Estatuto de Cataluña). **NORTE Y SUR. LAS ESTRATEGIAS FATALES** (Sobre movilizaciones populares). **LOS PARTIDOS “CÁRTEL”**. **¿INSTITUCIONES INDEPENDIENTES O DE CUOTAS?**

AÑO 2006

EL SILENCIO DE LOS CHARNEGOS (Tras el referéndum de ratificación del proyecto de Estatuto catalán). **LECCIONES DEL REFERENDUM ITALIANO** (Tras el referéndum de reforma constitucional de julio 2006 en Italia). **LA “REALIDAD NACIONAL”** (Tras aprobarse el proyecto de Estatuto de Andalucía). **LIDERAZGOS. LAS REGLAS DE JUEGO. LA HORA DE LOS JUECES. EL TREN DE LA SEGUNDA MODERNIZACIÓN. EL SISTEMA DE PARTIDOS. LA CAMPAÑA DE CONVERGENCIA. LA POLÍTICA DE IGUALDAD. LA REALIDAD INVERTIDA. CONSTITUCIÓN O GUERRA** (Palestina)

AÑO 2007

EDUCAR CIUDADANOS. QUE EL SISTEMA FUNCIONE (Fernando Savater). **LO QUE CUESTA UN VOTO** (Ante las elecciones locales). **LIMITAR LOS MANDATOS. AGENDA DE GOBIERNO. LA LINEA ROJA. ESPAÑA, ESPAÑA. CATALUÑA Y LA CONSTITUCIÓN. DOBLE JUEGO. DEBATES PARLAMENTARIOS**

AÑO 2008

SECRETOS ELECTORALES. DIVINAS PALABRAS. EL CASO DE ITALIA. ECOS DEL 68. CONGRESOS Y LEGISLATURAS. ESTOS LODOS. LOS CIENTÍFICOS Y LA POLÍTICA. LA DEMOCRACIA MILITANTE

AÑO 2009

LA ERA DE CHAVES: RETRATO EN SEPIA. EL “NUEVO” MODELO ZAPATERO. FINANCIACIÓN Y HEGEMONÍA. EL SAINETE HONDUREÑO. EL TAO DE LA POLÍTICA. EL RUIDO JUDICIAL

AÑO 2010

SATISFACCION Y CRISIS. DECISIONES Y NO-DECISIONES. EL PARTIDO. LAS LEYES “PROCLAMÁTICAS”. TRANSPARENCIAS (Los papeles de Wikileaks).

AÑO 2011

FUNCIONARIOS

AÑO 2012

EL SUR. ADIOS (A los jóvenes emigrantes). APOCALIPSIS. EL DINERO.

AÑO 2013

LA HORA DE LAS ONGs. IZQUIERDAS. EL TESORO. PROFESIONALES DE LA POLÍTICA. ERRORES DEL GOBIERNO. LA CIUDADANÍA COSMOPOLITA

AÑO 2014

LA INDEPENDENCIA DE PADANIA. VOLVER A LA EDAD MEDIA. EL TRAPECISTA SIN RED (Adolfo Suárez). ESTIGMAS (Política asistencial en Andalucía). PUZZLING (Elecciones europeas). LA ABDICACIÓN ANUNCIADA. ESTILOS DE PROTESTA. EL MANTRA DEL PACTO. FALSEDADES. TODOS QUEREMOS MAS. LOS VENGADORES. NUEVOS PARTIDOS, NUEVA POLÍTICA. GENERACIONES DEL FUTURO. EL CÍRCULO VIRTUOSO

AÑO 2015

SUEÑOS (Sobre la red de internet). DOS TRINCHERAS (Sobre el caso de corrupción de los ERE). PRESIDENCIALISMOS. GOBERNAR. IDEOLOGÍAS Y GUARRADAS. CATALONIA IS DIFFERENT. GUERRA ENTRE CONTROLADORES. ACCION INSTANTÁNEA. QUÉ HACER. LA INERCIA BIPARTIDISTA. EL RUIDO PARLAMENTARIO. LEALTAD Y COERCIÓN (Artículo 155). LAS ELECCIONES MEDIÁTICAS (Tras las elecciones 20 diciembre 2015)

AÑO 2016

JUEGO DE TRONOS. INSTRUMENTOS DE DESBLOQUEO

AÑO 2017

LLAMAR AL PUEBLO (Ante el desafío independentista)

AÑO 2019

EL “ESPÍRITU” DE LA TRANSICIÓN (Tras la muerte de Pérez-Llorca). ¿VACACIONES? ACLAMACIÓN. LO VIEJO Y LO NUEVO

AÑO 2020

EL EFECTO REINA ROJA. MATAR AL ENFERMO. SINDROME DE ESTOCOLMO. QUINCE DIAS (Segundo estado de alarma). LA PELIGROSA REFORMA DEL CGPJ. LA DERIVA AUTORITARIA

AÑO 2021

LA REFORMA DEL REGLAMENTO. EL GOLPE INVISIBLE. LA LEY COVID. JUGAR CON FUEGO. VOLVER AL PASADO. CÁNCER. LA NO-ACCIÓN. BAROJA. ¿ESPAÑA O LA INDIA? LA BANALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA. LA VUELTA A LA NORMALIDAD. LA CÁMARA ESTRELLADA.

AÑO 2003

CHAPAPOTE CONSTITUCIONAL

(Sobre la nueva oleada de reforma de los Estatutos)

2003

Se veía venir: después de algunos años de uso abusivo de la noción de “lealtad constitucional”, cualquiera podía haberse imaginado que no iba a tardar mucho en llegar el reflujo. Pues tan leal es quien apoya a la Constitución como quien propone usar los cauces en ella establecidos para reformarla. Si este argumento se reproduce en la escala autonómica ¡ya tenemos 18 procesos de reforma a la vista! El de la Constitución y los de 17 Estatutos de autonomía.

Por supuesto, nadie puede dudar que sea plenamente legítimo abrir procesos de debate y reflexión sobre las reglas básicas, teniendo en cuenta que tales reglas son al fin y al cabo una creación del espíritu humano, con sus limitaciones e insuficiencias. Por supuesto, también es cierto que la aceleración de los cambios históricos parece exigir una readaptación de nuestro organigrama institucional. Pero cuando tal debate se introduce ficticiamente en la esfera de la competencia electoral, parece que algo empieza a oler a podrido.

Comencemos por abajo: naturalmente que existen numerosas deficiencias en nuestro Estatuto que, al cabo de más de dos décadas, podrían exigir algún retoque o reactualización. Pero más allá de algunos desajustes perfectamente subsanables por vía legislativa ¿acaso ha habido alguna mutación sustancial en nuestro sistema colectivo de valores? ¿Es que los fines u objetivos generales que perseguimos los andaluces no siguen siendo en lo sustancial los mismos que hace algo más de dos décadas? ¿O acaso ya no aspiramos al pleno empleo, al acceso de todos a mejores niveles educativos y culturales o al mejor aprovechamiento de nuestros recursos económicos?

Sí, es cierto que algunas cosas han cambiado sustancialmente: está claro, por ejemplo, que hemos entrado en la era de la globalización y que tal fenómeno nos exige un esfuerzo adicional de responsabilidad colectiva. Ahora ya no podemos limitarnos a mirar a nuestro propio ombligo, y en consecuencia tenemos que hacer un esfuerzo por saber lo que pasa más allá de nuestras fronteras.

Y lo que pasa, en un primer nivel de Estado, es que el sistema autonómico se ha consolidado. Y al consolidarse, todo un flujo de intercambio de conocimientos y experiencias ha ido produciendo,

dentro de la diversidad, un novedoso proceso de homogeneización por abajo de todas las Comunidades Autónomas. Pero he aquí que algunos territorios no parecen satisfechos de verse “homogeneizados” al cabo de más de dos décadas, y en consecuencia proponen que se interrumpa la liga para empezar de nuevo. O sea, proponen algo así como olvidar dos décadas de desarrollo territorial plenamente democrático, para volver a los orígenes: unos orígenes que, como es habitual, se manipulan adecuadamente para suscitar la nebulosa de un “pacto”: el pacto constituyente entre algunas partes (País Vasco, Cataluña) y un todo (España). Obsérvese bien que el sentido de la propuesta supone, nada menos, que todos nos volvamos al siglo pasado, como si más de dos décadas no hubiesen existido; pero a un pasado que ahora se ha “reconstruido” en el imaginario de ciertas minorías territoriales ¿debemos aceptar tal reconstrucción quienes constituimos la mayoría restante?

Aun así, cabría incluso aceptar el envite de volver a discutir nuevamente la naturaleza del poder constituyente “español”, aunque suponga darle marcha atrás a la máquina del tiempo, si no fuera porque de forma paralela el proceso de globalización ha avanzado aceleradamente más allá de nuestras fronteras para consolidarse especialmente en Europa. Porque es aquí donde se sitúa el verdadero eje de la cuestión: la pregunta sería de qué poder constituyente podemos realmente hablar a estas alturas, cuando en efecto parece que hemos roto aguas y estamos en los albores de un parto: pero del parto de la Constitución Europea.

He aquí que, en nuestro esfuerzo por mirar al pasado, por resucitar conceptos decimonónicos como los de soberanía, pactos constituyentes o derechos históricos milenarios de algunas tribus que poblaron la península ibérica, se nos ha olvidado que estamos en el siglo XXI, con una Constitución europea en ciernes; y con todo un conjunto de desafíos abiertos que se refieren a la gobernanza multinivel, la cooperación interterritorial o la formación de redes institucionales adecuadamente coordinadas en una escala supraestatal. ¿Es así, mirando al pasado, como pretendemos hacer frente a los desafíos del futuro inmediato?

Pero dejemos la historia y retornemos al prosaico presente: el presente de las vísperas electorales a las que periódicamente nos enfrentamos, cuando parece que la competencia política obliga a veces a algunos candidatos a ir más allá de sus propias posibilidades para dedicarse a sacar conejos de la chistera. Y como los malos ejemplos abundan, da la impresión de que todos quieren hacerse prestidigitadores.

Se supone que el momento electoral es por definición el momento de la política, cuando las reglas de juego operan con su máxima intensidad para asegurar el buen funcionamiento del

pluralismo. ¿Es el momento adecuado para debatir sobre las propias reglas de juego? Supongamos que, a mitad de un partido de fútbol, los jugadores y el árbitro hacen un alto para discutir sobre el reglamento que regula el partido.

Ya decía Giovanni Sartori que, con frecuencia, el carácter más o menos democrático de un país se demuestra en relación inversa con la frecuencia con que sus dirigentes políticos utilizan la propia noción de “democracia”. ¿Será entonces que, precisamente cuando celebramos el veinticinco aniversario de nuestra Constitución, no es cierto que nuestra democracia constitucional esté tan consolidada como se dice en los discursos? Quienes pretenden meter a la Constitución y al Estatuto en el chapapote de la competencia político-electoral deberían reflexionar seriamente sobre cuáles son a largo plazo las consecuencias y las responsabilidades de su actuación.

¿MODERNIZACIÓN O REFORMA?

(El debate sobre la administración)

2003

¿Reforma de estado, o simple modernización cosmética? Desde hace ya décadas el debate sobre la reforma de la administración presenta dos opciones diferenciadas. Por una parte, la que pretende mejorar la imagen de la administración ante los ciudadanos, asegurando mecanismos de información y transparencia que rompan con la tradicional opacidad del sector público. Es lo que se suele denominar como “modernización cosmética”, que genera una fácil rentabilidad en términos de percepción ciudadana, pero dejando intactos los procesos de decisión pública en su auténtico núcleo duro: es decir, en los circuitos internos que deben permitir una mayor eficacia de los instrumentos públicos, lo que sería más bien una auténtica “reforma” de la administración.

Con el paso del tiempo, esa dualidad de opciones se reactualiza y se vuelve a formular de distinto modo, transformando así la posición de los distintos colectivos afectados: ciudadanos por un lado, y funcionarios o personal público por otro.

La más reciente oleada viene insistiendo en la “e-administración”: es decir, en la posibilidad en que a través de webs adecuadamente interactivas, los ciudadanos puedan resolver “on-line” y de forma cuasi-instantánea todo el cúmulo de los asuntos que les lleva a relacionarse con la administración. Se trata de una

consistente innovación tecnológica, que vendría a sustituir las anteriores iniciativas de puntos de información o ventanillas únicas, con la evidente ventaja de desplazar del centro de atención cuestiones tan arduas y problemáticas como la reforma de la gestión financiera, o la política de función pública y de recursos humanos. Por otro lado, esta atractiva oferta puede venderse con toda la fuerza de ese “conocimiento mágico” que, como ha sugerido Umberto Eco, se esconde tras el boom de las nuevas tecnologías. El elemento motor del proceso no será ya el conocimiento experto de un gestor o de una organización pública capaz de definir y concretar los intereses generales, sino la magia del ratón, el diseño de la ventana de la web, o la sencillez del teclado: ¡la administración en nuestras propias manos!

Desde la perspectiva del conocimiento experto, la nueva opción es también muy clara: ahora serán los ingenieros y los técnicos informáticos los que tendrán que “enseñar” a los funcionarios el modo como éstos deben comportarse. El conocimiento del burócrata es sustituido por el del tecnócrata-asesor externo, experto en diseño de sistemas.

Finalmente, nadie puede negar la autenticidad democrática de este sistema. Con nuestras propias manos dentro del vientre de la burocracia, pocos pueden dudar de que avanzamos hacia la auténtica “e-democracia” del futuro, ni sospechar siquiera que pueda tratarse de una “seudoparticipación” de simple efecto placebo.

Pero habría que destacar las consecuencias de tipo político-ideológico implícitas en esta estrategia. Y es que si toda la administración es o debe ser “e-administración”, tenemos dos posibilidades, o bien nos enfrentamos a la hipótesis de un Estado mínimo, o bien estamos ocultando tras un velo de oscuridad y discreción a los auténticos circuitos de poder: a la “caja negra” desde donde se dirige el sistema. Es decir, o resulta que la administración no tiene prácticamente nada que hacer, o que la dirijan los políticos. De esta forma, se habría resuelto el problema de la reforma de la administración sin ni siquiera plantearla.

Las ventajas de la opción son evidentes: si todo reside en las nuevas tecnologías, no hay que enfrentarse ya a cuestiones tan arduas como el diseño organizativo, la reforma de la función pública, la mejora de los instrumentos jurídicos o el avance hacia políticas públicas eficaces. Sería mejor dejarlo todo como está. Nuestros sistemas públicos se enfrentarían así indolentemente al peor riesgo de las democracias contemporáneas: el de no hacer nada.

Frente a la modernización cosmética, la tarea de una auténtica “reforma” de la administración presenta en cambio un panorama mucho más tortuoso: es más difícil y políticamente más costoso formar auténticos directivos públicos capaces de formular nuevos

valores colectivos y de diseñar estrategias para alcanzarlos; transformar los circuitos prestadores ensanchando la base de las organizaciones y reformando la función pública; o darle, por fin, autonomía y responsabilidad al gestor público ante las posibles intromisiones de los políticos. Frente a la sencillez individual del circuito “on-line”, parece mucho más difícil y complejo diseñar todo un proceso de acción pública basado en debates sectoriales, definición de objetivos, e implementación y evaluación de tareas. Donde, además, no serían ya los informáticos los que deberán enseñar a los gestores, sino justo a la inversa.

Las experiencias que desde hace años se están produciendo en otros países vienen insistiendo en los riesgos de una mera modernización cosmética, y en la dificultad para llevar adelante políticas solventes de transformación y reforma de la administración. Para quienes hemos recibido en nuestros sistemas autonómicos la herencia de una vieja burocracia de corte decimonónico, cargada de politización y de clientelismos, el riesgo de la inercia y la pereza pueden llegar a ser decisivos. Cualquiera puede pensar si no sería mejor confiarlo todo en manos de las webs, y que nos dejen tranquilos a los funcionarios...

Tras la magia de la “e-administración” y sus evidentes potencialidades, se nos aparecen pues nuevos riesgos e incógnitas ¿O es que alguien piensa seriamente que a través de las webs pueden construirse hospitales o carreteras, o ponerse en marcha servicios públicos eficaces?

Por supuesto, si se trata de debilitar al sector público y avanzar por el camino de la semiprivatización, la opción está servida. Pero quienes todavía confiamos en un sistema de servicios públicos solventes, en una gestión pública eficiente y en unas políticas eficaces, esperamos que la consolidación de nuestras autonomías no nos impida encarar esa tarea tanto tiempo pendiente: la reforma de la administración.

EL CONTROL DE LA POLÍTICA LOCAL

(Vísperas de elecciones locales)

2003

El reciente éxito de las juntas electorales controlando las campañas de publicidad institucional debe ser saludado como una evidente muestra de salud democrática. Pese a las reiteradas críticas que han venido recibiendo en España los organismos reguladores de

carácter autónomo o independiente, considerados a veces como instituciones relativamente débiles, o escasamente neutrales frente al apogeo partidista que nos invade, su consolidación al cabo del tiempo y tras un razonable periodo de aprendizaje constituye una prueba evidente de las potencialidades y ventajas del desarrollo democrático.

Lo que resulta una verdadera lástima es que ese control sobre el proceso político se limite, por razones legales, al estricto periodo de la campaña: porque en realidad, la intensificación de la dinámica partidista ha acabado por hacer del electoralismo competitivo una constante a lo largo de toda la legislatura. El bombardeo de las campañas institucionales se ha convertido en un elemento habitual y prácticamente estructural del sistema: no hay nadie en Andalucía que no sepa ya, a estas alturas, que estamos completamente “imparables” en cualquiera de los sectores de nuestra actividad pública o privada. Y aunque sea perfectamente legítimo que los equipos gobernantes traten de informar a los ciudadanos de los logros u objetivos alcanzados, está claro que la idea de marketing político que manejan nuestros publicistas se aproxima más a la estrategia de la mera publicidad comercial o al predominio de la denominada “videopolítica”, que a la lógica de la transparencia y el estricto control de resultados alcanzados.

Pero aún mucho más interesante sería que pudiera controlarse no ya la “venta” de los productos o resultados conseguidos, sino el auténtico “sistema de producción” de nuestros ayuntamientos y gobiernos locales. Porque resulta completamente contradictorio que, en plena retórica del principio de subsidiariedad, y cuando se defienden propuestas originales y avanzadas para configurar a los gobiernos locales desde nuevos parámetros de tipo “semipresidencial”, el entramado interno desde el cual los ayuntamientos deben llevar a cabo su amplia serie de tareas y funciones siga dependiendo de todo un conjunto de circuitos opacos y escasamente transparentes, tras el cual se ocultan mecanismos de “patronazgo” y dependencias de tipo clientelar que se canalizan desde las instituciones políticamente “amigas”. En Andalucía, por ejemplo, coexiste un doble circuito de dependencia institucional perfectamente operativo: mientras los ayuntamientos gobernados por el PSOE encuentran en la Junta de Andalucía y en la mayoría de las Diputaciones sus principales instrumentos de apoyo político y financiero, en cambio, los gobernados por el PP articulan sus principales políticas a través de programas gestionados desde Madrid. Al resto, que Dios les ampare.

Desde hace más de un lustro, los españoles vivimos en la ficticia e ilusionante retórica del llamado “Pacto Local”, desde el cual teóricamente se iba a hacer realidad en nuestro país la exigencia del principio de subsidiariedad establecido en el Tratado de la Unión

Europea: pero los nobles intentos por hacer de este Pacto Local un auténtico instrumento de dimensión institucional, orientado a asegurar la autonomía de nuestros gobiernos locales, no han generado hasta ahora más que resultados bastante exiguos. Más allá del pacto antitransfuguismo, al servicio de los intereses partidocráticos de las propias fuerzas mayoritarias, es difícil descubrir la emergencia de ese anhelado “gobierno local”, plenamente respetuoso de la autonomía municipal, y protagonista activo de los nuevos desafíos que plantea la democracia participativa en nuestro sistema político. La vieja dinámica decimonónica de las “corporaciones locales”, entendidas como entidades administrativas dependientes de los poderes centrales, sigue cabalgando a comienzos del tercer milenio, mientras a nuestros políticos se les hace la boca agua con la consabida retórica del Pacto Local y del principio de autonomía municipal.

¿Realmente estamos los ciudadanos en condiciones de asegurar, a través de nuestro voto, un gobierno democrático local plenamente respetuoso del principio de autonomía municipal? ¿Será posible, en este contexto, que los gobiernos locales se conviertan en la avanzadilla del desarrollo democrático, en el principal circuito de innovación y puesta en marcha de nuevos servicios y formas de atender a las demandas emergentes de la sociedad?

Mientras el desarrollo de la campaña se orienta hacia los grandes temas de la política general, y los medios audiovisuales nos siguen proyectando un espectáculo entendido como auténtico combate de boxeo entre las principales figuras de la política estatal, al ciudadano elector o al simple vecino de los pueblos de España le agradaría, siguiendo el ejemplo de las juntas electorales, que la democracia local tuviera otro tipo de mecanismos de control. Y que los propios ayuntamientos pudieran liberarse de sus circuitos de dependencia, permitiendo así a los ciudadanos decidir libremente sobre el tipo de ciudad que desean. Parece, en definitiva, que la “nacionalización” de la política local constituye al final un índice de nuestro propio subdesarrollo político.

AÑO 2004

LEGITIMACIÓN O VICTORIA

(Vísperas de elecciones generales)

2004

Las vísperas electorales son momentos de gran inspiración para la retórica, algo romántica, de la legitimación democrática. Se consideran como el momento decisivo en que el elector, convertido en auténtico “ciudadano”, asume en sus manos el destino soberano de la comunidad a través del voto. Es el periodo de la noble competencia entre ideologías y programas, la hora de la verdad para los liderazgos y los partidos políticos; cuando el balance colectivo sobre el pasado debe dar paso a la decisión sobre el nebuloso futuro.

Sin embargo, quienes hincan el diente en el desenvolvimiento del proceso político-electoral, acaban teniendo una visión mucho más prosaica de las cosas. Resulta que la competencia no siempre es juego limpio; el pluralismo esconde multitud de intereses espúreos a favor de fuerzas hegemónicas; el debate no es tal debate, sino una superposición de monólogos y de slogans diseñados por publicistas. Como les sucede a los futbolistas los domingos por la noche, las espinillas de los políticos aparecen amoratadas debido a las patadas que dan bajo cuerda los contrincantes. El juego electoral se acaba convirtiendo no ya en una pura movida mediática, sino en un sinfín de pillerías, falacias, mentiras, trucos de tahúres, faroles y trapisondas.

Y es que al final, tras la retórica de la legitimación democrática, la dinámica competitiva acaba imponiendo su ley. De lo que se trata es de ganar: como los gladiadores, con fuerza y honor. Lo que pasa es que el más listillo siempre tendrá algunos trucos para conseguirlo. Sobre todo cuando, como sucede en Andalucía, quienes se enfrentan no son ya dos grandes partidos, sino dos instituciones; nada menos que el gobierno de Madrid contra el gobierno de Andalucía, o viceversa. En este contexto no estamos ya ante la pura dinámica de las superofertas electorales, sino en una movilización conflictiva de recursos públicos y de subvenciones, de desafíos institucionales y de procesos clientelares, a ver quién da más: estrenos e inauguraciones, ofertas de empleo y de subsidios, aperturas y clausuras, el mundo en nuestras manos. Por tener, parece que tenemos ya hasta los mismos servicios secretos metidos en el ajo ¿No estará interviniendo también la CIA?

Es sorprendente que durante muchos años hemos criticado a las instituciones europeas con el reiterado argumento de su “déficit democrático”: Bruselas no ha contado hasta ahora con el sagrado soporte de la legitimación popular directa a través del voto. Pero a la vista del panorama, no sabemos si habría que decir que afortunadamente: todavía hay cosas serias.

Igualmente sorprende la inocencia con que se presentan algunas de las nuevas fuerzas políticas, como las lideradas por Pimentel o por Pacheco: minorías que no han rebasado apenas el umbral mediático y que, sin embargo, tratan de presentar sus ofertas en todas las circunscripciones de un territorio tan extenso como el de Andalucía, sin la prudencia estratégica de hacer un pacto de apoyo mutuo, al estilo del “ballotage” a la francesa.

La misma inocencia que la de suponer que los órganos de control, como las juntas electorales, están realmente en condiciones de controlarlo todo y de asegurar un auténtico juego limpio.

Ganar o no ganar: he aquí la cuestión decisiva que, por unos puntos arriba o abajo, acaba transformando tan trascendental momento democrático en una auténtica depuradora de residuos. ¿Sabremos estar los ciudadanos a la altura de las circunstancias en tan noble empeño, o deberemos acercarnos a las urnas tapándonos las narices?

Tratar de descubrir en tan fenomenal enredo dónde están las líneas estratégicas, cuáles son las auténticas opciones, quiénes merecen realmente nuestra credibilidad, se convierte en un auténtico acertijo chino. Por no saber, ni siquiera sabemos lo que de verdad quieren de nosotros los candidatos: si el resultado de una opción reflexiva en forma de decisión colectiva, o el simple pasaporte para asegurarse la victoria. En este ambiente, nunca llegaremos a averiguar si las ofertas electorales se formulan con la voluntad de cumplirlas realmente, o con el puro deseo incontrolado de ganar. O si lo que de verdad quieren de nosotros es el simple acto mágico de acudir a las urnas, para luego quedarnos en casa viendo en la televisión el “espectáculo” de la política. La crisis de legitimación se ha ido haciendo más amplia y difusa, y al final sólo nos queda la mera legalidad: el que tenga más votos, que gobierne si puede.

Como afortunadamente ya comenzamos a saber que la democracia avanzada es algo más que todo esto, sólo nos quedará el consuelo de pensar que, al fin y al cabo, nadie tiene un “derecho” adquirido para ser el ganador en esta historia: cualquiera sabe si al final no habrá sorpresas.

ANDALUCÍA: EL IMPACTO DE LOS VOTOS NEGROS

(Elecciones generales marzo 2004)

Ni en la peor de sus pesadillas podría un comentarista político tener que pensar en la posibilidad de traducir en claves de racionalidad electoral los dramáticos efectos de un atentado como el del 11 de marzo: tratar de computar el impacto del miedo, de la muerte y de la tragedia, en forma de pautas de comportamiento político-electoral (que teóricamente deberían estar basadas en la libertad y en la racionalidad) constituye una contradicción en sus propios términos. Extraer resultados o conclusiones en términos de legitimación o de proyecto político de futuro, sería casi una auténtica aberración moral.

Para el caso de las elecciones autonómicas en Andalucía sería posible en todo caso ensayar una primera interpretación de carácter evasivo: en realidad, los andaluces no habrían votado en clave autonómica, sino que se habrían limitado simplemente a responder desde Andalucía a los mismos dilemas que envolvían al votante español, inmerso en plena tragedia colectiva. La tenue campaña electoral andaluza, claramente solapada con la nacional, se colapsó precipitadamente en la mañana del día 11. Recordar ahora los términos de las ofertas, los programas, los compromisos, parece como una broma pesada. ¿Realmente alguien ha podido tener el estómago de votar teniendo esos factores en cuenta?

En este contexto, no cabe legítimamente tratar de interpretar los resultados en clave político-ideológica: el ciudadano no ha podido votar ideología, y en todo caso se habría limitado más bien a tratar de votar seguridad. Lo que nos indica una primera consecuencia: situaciones de crisis o de inseguridad generan de forma inmediata un efecto centrípeto, excluyendo a las opciones minoritarias.

El resto es la forma paradójica como se percibe desde Andalucía el mismo tipo de proceso que habría impulsado a la opinión pública nacional: una movilización del electorado joven hacia la alternancia en el poder. Prescindiendo de la tragedia, cualquiera podría entender que se trata al fin y al cabo de un fenómeno "normal": lo que se ha producido sería, simplemente, el mismo efecto que suscitó el triunfo del PSOE a comienzos de los ochenta, o del PP a mediados de los noventa. Es decir, un efecto de *relevo generacional* simbolizado en la imagen fresca y juvenil de Rodríguez Zapatero, apoyado en el trampolín instrumental más grato para la propia juventud, los mensajes de móvil y de internet: la misma red que se movilizó en contra de la guerra de Irak. Un instrumental que se activa fulminantemente, a modo de campaña de solidaridad y expresión de dolor colectivo, en un sentido reivindicativo y en contra del gobierno.

La paradoja, para el caso de Andalucía, sería doble, en la medida en que se traduce en un impacto que ni produce alternancia, ni implica ningún tipo de renovación generacional apoyada en un liderazgo capaz de expresar los valores de la juventud. Antes al contrario, la gerontocracia del PSOE en Andalucía se autoreproduce hasta el extremo de confirmar las características de un auténtico régimen, con tendencias próximas a un cuasiunipartidismo. Nadie podrá ya, a estas alturas, negar legítimamente las comparaciones entre la larga hegemonía socialista y el duradero mandato del PRI mexicano.

Así pues, toda interpretación de los resultados se verá inexorablemente afectada por un dualismo maldito: soñamos con un proceso político normalizado computando millones de votos negros. Negros de luto del dolor de nuestros corazones. Y librémonos todos del riesgo de tratar de indagar, como se ha hecho desde ciertos medios, sobre el sentido del impacto ideológico del terrorismo; sobre el irracional sinsentido de que pueda existir un terrorismo de derechas o de izquierdas (o de efectos electorales a favor de unos o de otros); o sobre la falsa pretensión (propia de ese gran filósofo de la política llamado Carod Rovira) de que, si somos más listos, podremos escondernos en un corralito donde no nos alcanzarán las bombas. Nunca antes en la historia contemporánea la ciencia política habría estado más cerca de la moral.

Por supuesto, la mayoría sobredimensionada del PSOE en Andalucía reposa sobre claves bien conocidas y suficientemente preestablecidas: el vendaval que trae consigo el 11 de marzo se ha sumado a la red electoral ya instalada, tras más de veinte años de mayoría uniforme. El PP sólo mantiene presencias significativas en zonas urbanas o costeras, y el resto se limita a apoyarse en sus suelos electorales.

Y así resulta que, paradójicamente, lo que en España se ha vivido como una sorpresa de cambio, en Andalucía constituye más bien una continuidad sin sorpresas y sin cambios. Dejemos pues que gobiernen los de siempre, que cuatro años no son nada, y los fenómenos de la alternancia y el libre juego del pluralismo son, al fin y al cabo, valores que requieren siempre el postulado de una normalización de la vida pública. La normalización por la que clamamos inútilmente ante un terrorismo globalizado del que ya no podremos escaparnos.

LA CRISIS DE LEGITIMACION

(Reflexión tras las elecciones de marzo 2004)
2004

No es cuestión de que ganen unos u otros, ya sean blancos o colorados. No se trata de negar ni por asomo que quien tenga más votos vaya a gobernar. Es algo más sutil, pero en el fondo mucho más trascendente: se trata del juego limpio en la aplicación de las reglas democráticas que determinan la sucesión en el poder. Sí, ya sabemos quienes venimos con estas historias sobre la legitimación que a veces se nos mira como a bichos raros que estuviésemos hablando del sexo de los ángeles. Pero se nos permitirá recordar al menos que uno de los principales teorizadores contemporáneos sobre la “crisis de legitimación” es precisamente nuestro flamante premio Príncipe de Asturias del pasado año, el alemán Jürgen Habermas, quien confirmó el postulado de que en las democracias contemporáneas el sufragio universal no es suficiente. Se nos permitirá también insistir entonces en que la legitimación no depende estrictamente del número de votos obtenidos porque, si así fuera, uno de los políticos mejor legitimados del pasado siglo sería nada menos que el mismísimo Hitler, quien llegó al poder tras ganar unas elecciones democráticas.

Nadie va a rechazar a estas alturas que en las democracias contemporáneas convivimos con altas dosis de manipulación de la opinión pública debido al apogeo de los medios de comunicación de masas: precisamente por eso tanto la Constitución como la normativa electoral establecen toda una serie de garantías para evitar que, en la recta final de la campaña, pueda manipularse el delicado proceso de formación de la voluntad popular: la jornada de reflexión, la prohibición de publicación de encuestas, la misma prohibición de convocar elecciones durante estados de excepción; y en definitiva, todo un conjunto de reglas no escritas de juego limpio. Son condiciones de legitimidad para la formación y expresión de la voluntad popular. Reglas que a veces pueden violentarse más o menos difusamente, suscitando las sanciones de las juntas electorales o de los tribunales; pero afectando al mismo tiempo a la calidad democrática y a la legitimación del sistema. No puede existir tal legitimación si la decisión colectiva no se produce ni se expresa en condiciones de plena libertad.

Es imposible imaginar un impacto más decisivo sobre la opinión pública que el horror colectivo de los atentados del 11 de marzo. Estaba claro desde esa misma jornada que, ganase quien ganase, nos íbamos a enfrentar a una inexorable crisis de legitimación, ante el impacto del trauma colectivo que venía a coartar el proceso de libre formación de la voluntad popular. Puesto que la opción de aplazar las elecciones era una solución peor, tratar de responder ante semejante

tragedia a las exigencias ideales de libertad en la expresión del voto que impone nuestra Constitución se convertía en un reto imposible. No cabe un auténtico proceso deliberativo libre cuando predomina el puro dolor y el miedo colectivo.

Lo dramático, lo espeluznante fue comprobar cómo casi desde el mismo día de los atentados pudiera ponerse en marcha desde unos u otros sectores un proceso de cálculo electoralista: plantearse la siniestra pregunta de a quién benefician -electoralmente- los doscientos muertos y los mil heridos. Obviamente, respondían, según quién haya colocado las bombas. El ciudadano de a pie debería horrorizarse al comprobar que, en tal caso, el terrorismo se incorporaba ya como un elemento más de la campaña y de la propia decisión electoral, para convertirse en una pura cuestión de cálculo racional. Hubo incluso quien, como Otegui, trató de presentarse a sí mismo como representante del terrorismo "bueno". ¿Deberíamos votar entonces según nuestro libre albedrío -tarea imposible- o según nos indicaran los datos de una investigación terrorista?

Que los orquestadores de tan siniestra campaña pudieran pertenecer a algún partido político, a lo mejor podría hasta llegar a entrar dentro de lo excusable: al fin y al cabo, los partidos son los protagonistas del proceso representativo. Pero lo más terrible sería comprobar que se trataba más bien de grupos mediáticos, de intereses privados organizados, dispuestos a influir en la decisión colectiva del pueblo español. Nuestra democracia secuestrada y capturada, precisamente cuando acabamos de celebrar el veinticinco aniversario de la Constitución.

Alguien podría replicar que no es para tanto: algo parecido sucede ya en Italia, donde el dueño del imperio mediático se impone mayoritariamente a través de un partido político. Pero es que allí no se dan circunstancias extraordinarias y, al fin y al cabo, el líder del partido gobernante es el que da la cara y no está "capturado" por intereses ocultos.

Seguramente será que hemos entrado ya en el futuro, en el siglo XXI, cuando los golpes de mano no se dan como antiguamente a base de divisiones acorazadas sino, como diría el inefable Arzallus, a base de "brunete mediática": o sea, a toda prisa y a ser posible con el apoyo de las nuevas tecnologías.

Dejemos de lado el dato de que nuestra decisión colectiva haya podido coincidir finalmente con el objetivo de los terroristas; de que hayamos acabado siguiendo la singular orientación del gran líder Carod Rovira, en el sentido de tratar de blindar nuestro "corralito" nacional para que no haya más bombas. Todos sabemos que las seguirá habiendo.

Pero el daño irreparable ya estaba hecho. Que el sentido del voto cambió sustancialmente, lo acaban de demostrar los datos

objetivos del voto por correo. Y si hubo por fin una alternancia pacífica, es algo que debemos agradecer a nuestros dirigentes.

Pero por favor, después de todo esto no tratemos de mirar ahora para otro lado, pelillos a la mar que no ha pasado nada. Aunque sólo sea por respeto a las víctimas, no pretendamos regularizar la victoria como si fuera el resultado legítimo de unas elecciones “normales”, ni tratar de analizar el “sentido político” de los resultados electorales como si fuesen indicativos de un supuesto proyecto colectivo aprobado pacíficamente por el electorado en una decisión libre, tal y como exige la Constitución. Cuando todavía suenan las marchas fúnebres no es el mejor momento para hacer retumbar los tambores con el tamtam de la victoria. No permitamos que nuestros politólogos complementen ahora sus análisis y sus índices de correlación de votos y escaños, incorporando un siniestro índice de “cadáveres-votos-escaños”.

Quien tenga que gobernar que gobierne, pero que no nos venga envolviéndose ahora en el dorado manto de la plena legitimación democrática. Las heridas tan profundas tardan demasiado tiempo en cicatrizar, si cicatrizan. El impacto, en forma de crisis de legitimación, tendremos también que sobrellevarlo. Pero lo que no podemos es ignorarlo.

ELOGIO DE LA ALTERNANCIA

(Tras la constitución del nuevo Congreso)

2004

Ha sido como el auténtico efecto mágico de la democracia parlamentaria. El final de la crispación, las tensiones y los enfrentamientos en la política española. Con el nuevo aire fresco que desde el pasado día quince de abril comenzó a soplar en la Carrera de San Jerónimo, el impacto revitalizador de la alternancia democrática nos demostró a todos, empíricamente, los efectos positivos del cambio en el poder y la auténtica funcionalidad de las reglas de juego del parlamentarismo.

Fue como una especie de bálsamo maravilloso que irradiaba hacia todos los puntos cardinales, llevando hasta nuestros corazones esa “sensación de una pena mitigada, como después de haber llorado y rezado mucho”, que decía Valle-Inclán en su corte de los milagros. Hasta sus señorías parecían más guapos y amables, más entrañables y cercanos: era, realmente, el más hermoso de los milagros de la democracia.

Poco importaba que, de forma elegante, el candidato eludiera sutilmente el recuerdo de las vísperas electorales: hubiera sido como recordar el barro en los zapatos blancos del día de la primera comunión. Un recuerdo que le hubiera obligado a ser más prudente a la hora de proponer cambios en las reglas fundamentales del sistema. Porque cualquier experto en teoría de la representación debe saber que, cuando los mandatos tienen un sentido algo ambiguo o insuficiente en su origen, más vale pegarse al terreno de las políticas concretas y dejar para más adelante los grandes consensos de estado orientados a cambiar las reglas de juego, la Constitución y los Estatutos. Claro que, si al final todo se reduce a introducir el listado de Comunidades Autónomas y a dejar constancia de nuestra pertenencia a la Unión Europea (es decir, el modelo “*lifting*”), no debería haber grandes dificultades.

El verdadero problema es que las réplicas a su propuesta de reforma del Senado y de los Estatutos no se han producido aún, no estaban en el debate: se producirán más adelante, cuando algunas Comunidades saquen la daga con la que aspiran al reconocimiento de la asimetría, la singularidad, los hechos diferenciales y demás privilegios. No podemos negar que nos lo hayan advertido. No se trata pues de afirmar si la Constitución puede o no reformarse, sino de si puede modificarse una concepción democrática del poder constituyente para ser sustituida por una concepción de tipo pactista-territorial cuyos orígenes histórico-comparados se remontan al medievo.

Como diría nuestro inefable Rafael Escuredo, ya podemos los andaluces ir echando mano de la cartera: sin fondos europeos y sin la solidaridad del resto de los españoles, tenemos todo un panorama por delante.

Sin embargo, hay en el discurso de investidura un hermoso llamamiento a la dimensión más auténtica de la política. La que no consiste tanto en la pura visión mecánica de la aplicación del programa electoral (si es que alguien pudo, en las duras jornadas de marzo, acordarse de los programas), sino en el llamamiento al diálogo, al consenso, a la comunicación abierta con pleno respeto a las reglas de juego: el famoso “*talante*”. Sin duda una buena ocasión para recordar al gran mago de la negociación política, el inolvidable Adolfo Suárez (ahora que parece que él ya no puede acordarse de nosotros): ¿será capaz del joven Presidente de reproducir su mano maestra, cuando parecemos lanzados hacia una especie de reconstrucción ficticia de la transición?

Sobrevuela en sus brillantes e inconcretas propuestas un difuso error metodológico -bastante habitual en algunos discursos de investidura- consistente en confundir los medios con los fines: la negociación, el pacto, el consenso, son instrumentos para conseguir

determinados fines. No son un fin en sí mismo. Bienvenidos sean como expresión de una forma de actuación que, al fin y al cabo, parece exigida por un gobierno que carece de mayoría absoluta. Pero en este caso la valoración dependerá de los resultados, no de las buenas intenciones. Bienvenido sea también el talante de la oposición liderada por Mariano Rajoy: afortunadamente, Zapatero Presidente no tendrá que sufrir una oposición caníbal.

El resto son simples ajustes en la programación política, pues ya sabemos que en la actualidad las grandes políticas se diseñan en Bruselas y se ejecutan en las Comunidades Autónomas. Lo importante, lo verdaderamente decisivo, ha sido el aire fresco de la alternancia, la renovación de los equipos y de los discursos. Justo en un momento en que al anterior partido gobernante aún no le había dado tiempo de embarrarse en las aguas negras de la política. Todo un ejemplo.

El único problema es que, a estas alturas, los ciudadanos ya no sabemos exactamente cuál es el sueño y cuál la realidad: si las siniestras nubes negras del terrorismo fundamentalista globalizado que circula por nuestras calles y mezquitas, o las dulces melodías de Zapatero en el Congreso. ¿Cómo será finalmente nuestro despertar?

TRANSPARENCIA DEMOCRATICA

(Valoración de los partidos políticos)

2004

Lo que nos faltaba. Tal como está el patio y viene el reciente informe de *Transparencia Internacional* a meternos el dedo en la misma llaga. Ahora resulta que la ciudadanía percibe a los partidos políticos como las instituciones más corruptas del mundo. Precisamente a quienes son los auténticos protagonistas activos de la política global, quienes dirigen los destinos del planeta, controlan a las instituciones públicas y tienen en sus manos el destino de todos nosotros. Tras culminarse el apogeo histórico de la democracia de partidos al nivel mundial, ya tenemos el diagnóstico colectivo que nos sirve de balance para enfrentarnos al siglo XXI: el de la corrupción.

Difícil panorama para quienes se empeñan en desautorizar a las voces críticas, para tanto tertuliano y opinólogo a quien se le ve el plumero antes de soltar su cotidiana sentencia, para tantos dirigentes que sólo entrevén soluciones en el marco de los conciliábulos de su respectiva organización partidista.

Claro que no será porque nuestros gobernantes no hayan percibido de forma inmediata y clarividente la necesidad de regenerar la democracia y de incrementar la transparencia. Por lo pronto, ya tenemos en España nuestro manual de buen gobierno del gobierno, que obligará a nuestros dirigentes a hacer públicos sus patrimonios. Seguramente con eso ya hemos resuelto algo de la cuestión, aunque cualquiera sabe hasta dónde llegarán las carcajadas de los expertos en ingeniería financiera al contemplar la inocencia de tales medidas. Menos mal que siempre nos quedará la semántica, el lenguaje; y como ya vamos a dejar de llamar “excelentísimos” o “ilustrísimos” a nuestros gobernantes, podemos considerarnos satisfechos. Es una lástima que haya desaparecido también aquella encantadora coletilla del “cuya vida guarde Dios muchos años” que se redactaba en las viejas instancias y solicitudes, porque seguramente ya no se adapta al lenguaje de lo políticamente correcto.

Y es que nuestros dirigentes partidistas parece que no escarmentan. Siguen empeñados en avanzar gloriosamente hacia el futuro sin darse cuenta de la basura que les queda por detrás sin barrer. Con ZP avanzamos hacia un futuro de diálogo, transparencia y buen talante sin que todavía nadie en nombre del PSOE haya pedido disculpas por el terrorismo de estado, y mucho menos por sacar a los piqueteros a la calle en vísperas electorales.

Y otro tanto le sucede a la inversa al Partido Popular. Después de la magistral exhibición de elegancia democrática que nos dio Mariano Rajoy la noche del 14 de marzo (probablemente la mejor lección democrática de la derecha española en muchas décadas), ahora nos vienen en Andalucía con el espectáculo de la alcaldesa de Jerez negándose a cumplir un pacto escrito que le obligaba a apartarse de la alcaldía. Desde los tiempos del infame *Bartolín*, aquel concejal de Jaén que se autosecuestro él solito, no habíamos contemplado un bochorno semejante.

Pero ¿qué es lo que sucede realmente con los partidos? Para algunos, la clave parece estar en la variable sociológica: resulta que quienes se dedican a la actividad partidista suelen ser normalmente aquellos que no han acabado de encontrar una salida profesional suficiente en la vida civil. Es decir, estaríamos ante la más asombrosa de las paradojas de la democracia: quienes nos gobiernan serían precisamente los más mediocres. Algo que frecuentemente resulta incluso revalidado por las urnas.

Para otros, se trata más bien de un dilema organizativo, la llamada “ley de bronce” que formulara el alemán Michels a principios del siglo pasado y que conduce al predominio de unas oligarquías que acaban restringiendo el pluralismo y la democracia interna de los partidos. Las demandas de mayor transparencia del sistema en las

democracias avanzadas se verían así irremisiblemente frustradas ante la reiterada opacidad de las organizaciones partidistas.

Pero también está la variable funcional o institucionalista. Desde esta perspectiva, el problema radicaría en que los partidos han acabado acumulando más poder del que realmente les corresponde, hasta terminar colonizando a esferas institucionales que teóricamente deberían operar en claves de independencia y neutralidad, como la judicatura, la administración pública; e incluso hasta el propio tejido social. El edificio del Estado de derecho, que se diseñó como un sistema de frenos y contrapesos destinado a impedir la hegemonía de un sólo sector, tendría su principal punto de quiebra en el crecimiento patológico e incontrolado del poder de los partidos. Seguramente esta es la razón que explica por qué desde la Unión Europea se está apostando cada vez más por reforzar el papel de las llamadas “instituciones no-competitivas”, o agencias independientes.

A lo mejor el problema es que en España no acabamos de saber todavía qué son las instituciones independientes y por eso muchos siguen creyendo firmemente en la peregrina ida de que no existe vida fuera de los partidos políticos.

Y NO ESTAR LOCO

(Sobre la política socialista en Madrid y Andalucía)

2004

Así decía la vieja canción de Antonio Machín, recientemente versionada por el Cigala, la de los dos amores a la vez. El problema era buscar una explicación ¿cómo podía ser? Una explicación política es la que necesitaríamos los andaluces para poder entender cómo podemos vivir dos socialismos a la vez. Y -se supone- sin estar locos.

De un lado tenemos las brillantes luces artificiales del nuevo orden social que nos trae el gobierno del PSOE de Madrid. El reconocimiento universal de derechos civiles para las minorías marginadas, la política como apertura del armario: el nuevo orden laico que reconoce y ampara no ya a otras religiones sino incluso a otras visiones del mundo donde a veces ni se percibe la separación entre la religión y la política o el respeto a algunos derechos humanos. El nuevo orden civil para las minorías homosexuales que por fin ven reconocido su derecho al matrimonio, junto a la definitiva consagración de las políticas de género. El nuevo estilo político de la aceptación de todas las demandas, aceptar y rectificar, la apoteosis

del talante. Y por supuesto, recuperar memoria histórica porque, al fin y al cabo, parece que todos somos hijos de la represión franquista.

Del otro lado, contemplamos la línea gris de continuidad de una larga inercia política en el gobierno de la Junta de Andalucía, cuya mayor originalidad parece ser, definitivamente, la de no hacer nada. Por no hacer, ni siquiera mantener ya la gran oferta que nos venía desde antes, la de la llamada segunda modernización de Andalucía.

¿Será entonces que los andaluces estamos locos, o más bien que necesitamos una explicación?

Porque si no estamos locos, es decir, si realmente sabemos lo que queremos, entonces ya podríamos estar detectando el tufillo preelectoral que despiden las políticas de Madrid. Donde algunos de sus elementos sustanciales como, por ejemplo, la espectacular oferta de la política de vivienda parece que finalmente se disuelve entre los recovecos de la realidad como un auténtico azucarillo. Donde las pautas de la política territorial no las marca realmente el gobierno sino sus honorables aliados. Y donde, finalmente, las expectativas de una política exterior basada en la apertura, el diálogo y el talante, parece que no acaban de encontrar su ubicación ante la que se nos viene encima tras la victoria de Bush.

A cambio de todo eso, se supone que ya estamos tocando con las manos los valores del nuevo orden progre de la posmodernidad, la política joven y guay, tan alejada de las casposas sotanas como del realismo geoestratégico internacional.

En teoría habría que entender que se trata de dos versiones del mismo socialismo. Incluso cabría imaginar que la imparable política andaluza, consolidada tras décadas de éxito, podría servir ahora como faro de guía a los jóvenes cachorros del socialismo de Madrid. Pero afortunadamente parece que no es así, porque las grandes y luminarias ofertas del gobierno de Zapatero no alcanzan a tener continuidad alguna en Andalucía. Entonces ¿es que son en realidad dos socialismos distintos? ¿O más bien dos formas distintas de capturar al electorado?

Sin duda alguna los andaluces necesitamos una explicación. Pero el problema añadido es que, si de lo que se trata finalmente es de cambiar las reglas de juego, la Constitución y los Estatutos, entonces es que definitivamente ya no sabemos siquiera a qué estamos jugando.

Hubo un tiempo en que la ideología socialista se caracterizaba por unos contenidos progresistas comunes más o menos definidos y en consecuencia era relativamente sencillo encontrar unas pautas de similitud o de congruencia entre gobiernos del mismo color. Pero ahora parece que los contenidos sustanciales de las políticas se han extinguido definitivamente ante la apoteosis de los estilos, el apogeo de las formas, el éxito del talante. Hubo también un tiempo en que se

soñaba con nociones como la lealtad institucional y con la pretensión de que los proyectos políticos tuviesen una cierta capacidad movilizadora. Pero ahora parece que cada uno va a lo suyo, y así la única preocupación palpable del reciente debate sobre los presupuestos andaluces parece haber sido la de descubrir cuál es su auténtica distribución en la escala provincial ¿pero es que realmente existe una entidad territorial llamada Andalucía?

El analista extranjero que, sin conocer los datos con antelación, pretendiera descubrir las similitudes que existen entre las políticas de Madrid y de Andalucía, se quedaría sumido en la más absoluta perplejidad. Como en la letra de la vieja canción ¿No será acaso que, definitivamente, los andaluces nos hemos vuelto locos?

PERDÓNALES, SEÑOR

(A las minorías)

2004

Han sufrido en sus carnes la humillación de la derrota. La sequía de votos que les trajo la dura primavera electoral de 2004. Y además han sido acusados de ser ellos y solamente ellos los culpables de tal desastre: por eso han purgado y están purgando sus supuestos errores, acusados con el dedo amenazador que les señala desde el olimpo de los ganadores.

Son, lógicamente, las minorías, el “*tercer sector*”, quienes tratan ilusamente de hacer creíble en nuestra tierra el valor del pluralismo político consagrado en la Constitución.

Y lo más singular es que, al parecer, se lo han creído. Cual víctimas de un nuevo “*síndrome de Estocolmo*”, ahora resuenan en sus débiles organizaciones los gritos y lamentos del infierno de Dante. Autocríticas, sanciones, reformulaciones, ajustes de cuentas: hasta amenazas, nada menos, que de romper el cordón umbilical. Víctimas de una maldición dictada desde las altas instancias, han acabado asumiendo su propia culpabilidad y hoy se devoran entre ellos ante el horizonte perpetuo de llegar a la nada.

¿Pero, qué es lo que hicieron mal? ¿Cuáles han sido sus auténticas culpas, por las que deben purgar en el infierno de la exclusión y la vergüenza? Si analizáramos el proceso electoral hasta el mismo y dramático día de las bombas, cabría decir que nada. Y lo que vino después fue como un combate de lucha libre donde sólo se quedan en el ring los combatientes, y los segundos, fuera.

Por eso la auténtica pregunta debería ser no por qué pierden los que pierden, sino más bien por qué siguen ganando los que siempre ganan. Porque en Andalucía las minorías no se enfrentan electoralmente a un partido sino a todo un sistema de poder donde la propia institución se identifica con quienes la gobiernan. Pretender jugar inocentemente el juego de la libre competencia electoral en este contexto supone ignorar la presencia de poderosos factores extraelectorales que, al final, acaban decidiendo en la voluntad de los votantes. Quienes integran el tercer sector de las minorías, pocos, pequeños y separados, apenas pueden subsistir en sus suelos electorales o ni siquiera llegan al umbral de la percepción colectiva.

Si lo que hubiera que seguir ahora fuese el dictado de los ganadores, las minorías sólo tendrían una alternativa: disolverse. Quién sabe si no sería al final la mejor decisión: disuélvanse, y dejemos que el sistema se autogobierne por sí mismo. Porque cuando los índices del pluralismo se sitúan crecientemente en la frontera del unipartidismo, como sucede en Andalucía, hablar de democracia pluralista puede acabar pareciendo un auténtico sarcasmo. Cualquiera sabe si después de todo no llevaba razón Robert Mugabe, el presidente de Zimbawe, cuando calificaba al pluralismo político como un lujo de los países desarrollados.

El resultado, ya lo estamos viendo: el proceso de la alternancia en Madrid sirve finalmente para reproducir la misma foto en negativo. Las Comunidades que antes eran dóciles al poder central, ahora son rebeldes e hipercríticas, y a la inversa. Las políticas serán conservadoras o progresistas según quién las defienda en cada caso: ¿realmente qué es más conservador o más progresista, trasvasar o desalar, contratar al profesorado universitario mediante un sistema abierto o hacerlo a través de las propias universidades, defender el principio de igualdad o apostar por la discriminación positiva?

Y así, todo acaba adquiriendo una sensación de “*dejà vu*”: las mismas historias, los mismos argumentos, las mismas estrategias para controlar esferas independientes como la judicatura; las mismas batallas mediáticas para condicionar y manipular a la opinión pública; las mismas estrategias de imagen para consolidar al nuevo gran líder. La superposición de un cuasiunipartidismo en Andalucía con un emergente bipartidismo en la escala estatal, acaba reduciendo la dinámica del proceso político hasta reproducir la misma instantánea, en positivo o en negativo, como dos versiones alternativas de la misma realidad. Aunque una sola y reiterada en Andalucía.

Para las minorías, ignorar el carácter excepcional de las últimas convocatorias electorales siguiendo las directrices de nuestro particular pensamiento único, supone reconocer una culpabilidad que seguramente no les corresponde. Porque sólo cuando la competencia opera en un plano de igualdad de armas y de auténtico “*fair play*”

cabría empezar a hablar de auténtico pluralismo. Salvo implorar el perdón colectivo por un pecado que nadie sabe si han cometido, parece que imponerles un castigo adicional sería, simplemente, pedirles su disolución. ¿Podría subsistir nuestra democracia sin minorías?

PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA

2004

Esta fue la más conocida consigna que hizo famoso a Julio Anguita. Aunque su reiteración suscitaba a veces un fino cachondeo entre la ciudadanía, como aquella coletilla de "*España va bien*" de Aznar. Es posible que, en la mente rigurosamente marxista del antiguo califa de Córdoba, sus implicaciones se proyectaran hasta las viejas concepciones verticalistas de la acción política propias de la planificación soviética; cuando toda acción de gobierno se entendía como el riguroso desarrollo de un plan "racional" diseñado desde instancias superiores. Epígonos de la milenaria concepción aristotélico-tomista de un mundo terrenal emanado de la voluntad divina.

Es cierto que tal construcción se ha renovado considerablemente en el contexto contemporáneo: la personalización de los liderazgos que imponen los medios audiovisuales tiende a concentrar la confianza en aquellos líderes que cumplen con sus compromisos. Y, por lo tanto, las promesas del candidato y su cumplimiento efectivo se convierten en una especie de cláusula sagrada que consolida la confianza colectiva en los dirigentes. El inconveniente es que esta concepción personalista de la representación se ajusta muy difícilmente a un sistema como el nuestro, donde la lógica partidocrática y su sistema de listas cerradas y bloqueadas tienden a objetivar, y por lo tanto a despersonalizar, el mecanismo de la representación.

En todo caso, subyace en esta concepción una especie de visión prospectiva de los programas electorales entendidos como previsiones milagrosas capaces de anticipar el futuro; otorgando así una dosis de seguridad al precario presente, lleno de incertidumbres, en que se desenvuelve nuestra política real.

Sería una pregunta demagógica plantear cuántos ciudadanos han leído realmente los programas de los partidos y se han dejado influir por sus contenidos, una vez conocidos, comparados y ponderados. El auténtico problema viene a ser que los programas se

formulan como previsiones teóricas para un contexto de razonable normalidad y, por lo tanto, no son capaces de prever los acontecimientos sobrevenidos, las circunstancias excepcionales o súbitas que impactan sobre el proceso político y a las cuales los gobernantes no tienen más remedio que responder, aunque sea al margen de toda previsión programática. El gobernante que se atenga rigurosamente al cumplimiento del programa podrá presumir de ser fiel a sus compromisos; pero si no es capaz al mismo tiempo de enfrentarse a las nuevas necesidades o circunstancias sobrevenidas, podrá ser acusado de carecer de reflejos o de no saber responder a los nuevos desafíos y problemas emergentes que trae la realidad. Al final, será considerado como un mal gobernante.

Es posible, como ha sugerido José Aguilar en estas páginas, que el PSOE elaborara su programa para las pasadas elecciones generales de 2004 pensando que iba a perder, y así van las cosas. Lo que en todo caso parece evidente es que la gran movilización del voto en las dramáticas jornadas previas al 14 de marzo se orientó más bien a castigar al chivo expiatorio considerado como “culpable” de los atentados (Aznar), y no tanto a apoyar un determinado programa. Pero como ahora parece que hemos entrado en un estado de amnesia colectiva por los efectos del “shock” post-traumático, sólo nos queda un palo al que agarrarnos: el consabido programa.

La cosa no sería tan grave si el famoso programa se limitara a prever cambios legislativos o nuevas orientaciones políticas: el verdadero problema es que, al parecer, se trata nada menos que de adentrarnos en una especie de nueva transición, jaleada especialmente por algunas minorías nacionalistas que nunca han demostrado una lealtad suficiente a nuestra normativa fundamental. ¿Fue eso lo que votamos los españoles en las traumáticas jornadas de marzo? ¿Realmente éramos conscientes de que estábamos apostando por reabrir el gran consenso histórico que dio lugar a la transición y a la Constitución de 1978? Que los zarpazos del terrorismo globalizado puedan llegar a provocar un cambio de gobierno, bien está (que se vayan preparando Bush y Blair); pero que encima tengan que decidir todo un cambio en nuestra normativa fundamental, ya sería demasiado.

A lo mejor no hemos caído en la cuenta de que, si en nuestro afán por olvidar el pasado inmediato nos empeñamos en reabrir las compuertas de la historia lejana buscando raíces que van más allá de la etapa constituyente y del consenso de la transición, es posible que los fantasmas del pasado se acaben despertando finalmente para incorporarse a nuestra política del presente. Y ya sabemos que un modelo bipartidista fuertemente competitivo como el nuestro, unido a una memoria colectiva que hunde sus raíces en la tragedia de la guerra civil, viene a ser como un bombero con una manguera de

petróleo en las manos. A veces parece como si los españoles no lleváramos realmente veinticinco años de convivencia pacífica bajo el espíritu civilizador de la Constitución.

El caso es que, si nos seguimos empeñando en negar lo evidente, en ignorar el carácter excepcional de las elecciones de 14 de marzo, es difícil que podamos encontrar respuestas congruentes a los nuevos problemas. Y entonces, seguramente, sólo nos quedará el programa.

AÑO 2005

GOBIERNOS ¿FUERTES O DÉBILES?

2005

El argumento surgió durante las décadas finales de siglo, en el contexto de las democracias avanzadas sometidas a un ambiente político lleno de exigencias complejas y demandas contradictorias. En este entorno problemático se empezó a intuir que las experiencias de gobiernos “fuertes” apoyados en mayorías sólidas representaban una falsa solución de los problemas. Frente al rodillo de una mayoría estable emergía el paradigma alternativo y flexible de un gobierno entendido como centro estratégico de imputación para la negociación, la cooperación multinivel o el diálogo social abierto.

Puesto que en las modernas democracias complejas toda actuación pública requiere estrategias deliberativas plurales y abiertas, con procesos diferenciados de negociación, conciliación y diálogo social, la respuesta más operativa serían unos gobiernos relativamente “débiles”, más sensibles a las demandas del medio social y a las oscilaciones de la opinión pública ante coyunturas nuevas o imprevistas. De este modo se evidenciaba una relativa superación del viejo paradigma de los gobiernos fuertes sometidos a los imperativos programáticos estables y rígidos que imponen las mayorías absolutas o los liderazgos carismáticos.

En el contexto español la teoría parecía encajar de un modo perfecto: el último mandato Aznar ha sido criticado desde diversas perspectivas siguiendo este argumento. La serie de errores nacidos de una mayoría absoluta (por más que se tratara del último mandato) culminaron en su nefasta participación en la coalición de apoyo a la guerra de Irak. Como reacción frente a esa experiencia negativa, la respuesta de Zapatero tendría entonces una justificación congruente al apostar por la alternativa de un gobierno “débil” y, por lo tanto, esencialmente dialogante.

Debe recordarse que esta opción por un gobierno débil apoyado en un pacto de legislatura constituye en nuestro caso una alternativa consciente y deliberada, puesto que en la primavera de 2004 existía igualmente la opción de un gobierno (“fuerte”) de coalición: pero el desarrollo de las coaliciones de gobierno parece exigir un tipo de cultura política que hasta ahora no ha tenido un desarrollo suficiente en nuestro país.

Fuertes o débiles, habría que recordar que todo gobierno debe responder a una serie de exigencias que se expresan en términos de seguridad en la agenda política. Por más que un gobierno decida plegarse a las servidumbres aleatorias de la negociación, el diálogo o el consenso, no puede nunca renunciar a precisar con un mínimo de claridad cuáles son sus prioridades estratégicas en términos de agenda. Aunque suene a pura retórica política, esta sería la demanda justificada que en alguna ocasión ha reiterado el líder de la oposición Mariano Rajoy: la necesidad de clarificar un marco de referencia, una determinada orientación estratégica o posicionamiento ante las incertidumbres del proceso político.

Por eso no ha hecho falta mucho tiempo para detectar los inconvenientes del nuevo modelo. Se trata en primer lugar de un problema de opacidad, en el sentido de que los pactos de legislatura no tienen el grado suficiente de visualización o transparencia frente a la alternativa de un pacto de coalición, donde la presencia activa de ministros de los distintos partidos coaligados permite percibir y visualizar mejor el grado efectivo de compromiso asumido por las distintas partes. En cierta medida este es el problema que viene atenazando la labor del ministro Montilla, cuyo papel queda entreverado entre distintas dimensiones funcionales: ¿cuál es al final la que predomina, miembro del gobierno, líder del PSC, o representante de Cataluña en el gobierno?

Pero en realidad los problemas más sustantivos son otros. Y es que los gobiernos débiles son por definición las víctimas más propensas para caer en riesgos de captura. Es una de las inevitables servidumbres que trae consigo el proceso de la globalización: gobiernos débiles capturados por intereses privados fuertes. Y no se trata solamente de la hipótesis más normal en todo fenómeno de captura, es decir, la posibilidad de ser influido por grupos de intereses o imperios mediáticos poderosos, sino incluso de la posibilidad de que los propios “socios” del gobierno desarrollen en la práctica un tipo de táctica más inspirada en la lógica de la demanda-chantaje que en la corresponsabilidad política ante el conjunto de la acción de gobierno. Algo que podemos intuir en algunas ambiguas maniobras del tripartito catalán.

En todo caso hay siempre un comodín estratégico que no suele anticiparse en la agenda gubernamental: y es que todo gobierno débil podría ser el mejor preludio para, tras una disolución anticipada, conseguir ampliar la mayoría y formar un gobierno fuerte. Pero conforme pasa el tiempo parece que también este elemento de la agenda gubernamental se la ha pasado el presidente Zapatero: disolver cuando las encuestas comienzan a detectar un sesgo en contra, no parece lo más rentable políticamente.

De este modo nos queda lo más elemental, el conocido error (tan habitual en Andalucía) que rodea a todo gobierno, en el sentido de confundir el ser con el estar. Aunque democráticamente lo legítimo es que esté en el gobierno quien haya ganado las elecciones, la propia noción de gobierno no puede confundirse con la no-acción, es decir, con el mero “estar”. Porque estar en el gobierno significa actuar, definir objetivos colectivos y formular horizontes de futuro dándole congruencia y seguridad a la agenda política.

EL “IMPULSO DEMOCRÁTICO”

(Política autonómica de Andalucía)

2005

Ni reforma del Estatuto ni segunda modernización. Finalmente, el asunto prioritario durante la decisiva etapa inicial de la actual legislatura andaluza ha resultado ser el proyecto de medidas de impulso democrático.

Para un observador externo, y dejando a un lado posibles contenidos ocultos, la propuesta no deja de suscitar algunas dudas. Unas medidas de impulso democrático se supone que deben responder a un diagnóstico previo que, en este caso, sólo puede ser el de un “déficit democrático”. No se sabe si es que, de tanto invocar la memoria histórica, nuestros representantes han descubierto, después de un cuarto de siglo, que la transición no se ha consolidado suficientemente en Andalucía. Lo que puede deberse o bien a la falta de alternancia o bien a que en nuestra realidad política cotidiana subsisten algunos obstáculos que exigen medidas correctoras: ¿se habrá descubierto acaso que el comportamiento electoral de los andaluces no responde a pautas de auténtica libertad de voto sino a factores clientelares o de manipulación mediática? ¿Habrá comprobado alguien que hay restricciones o autorrestricciones a la libertad de opinión y de expresión en Andalucía? ¿O se han localizado algunas fuerzas ocultas que están actuando como auténticos “enemigos” de la democracia andaluza?

La verdad es que un análisis de la agenda política andaluza y de su evolución sólo suscita en principio una razonable sorpresa: no hace falta mucha memoria para recordar que hasta hace escasos meses Andalucía estaba imparable; y ahora va a resultar que en realidad estábamos viviendo bajo una democracia deficitaria o amenazada, necesitada de todo un conjunto de medidas urgentes de impulso o de corrección.

En realidad, lo grave del asunto no es tanto lo que pueda suponer de rechazo a otros ejes temáticos alternativos: si finalmente asuntos como la reforma del Estatuto o la segunda modernización no van a ser prioridades estratégicas de Andalucía, en el fondo será algo perfectamente secundario y sin duda justificable por razones concretas; o bien porque Andalucía no está dispuesta a dejarse influir por agendas externas, o bien porque es demasiado duro despertar del dulce sopor de la autocomplacencia cuando -según las encuestas- todo va tan bien.

El verdadero problema sería el que se refleja en el trasfondo de este discurso: lo sugería paradigmáticamente el gran maestro Sartori cuando afirmaba que el nivel de desarrollo democrático de un país viene a ser inversamente proporcional al uso retórico o argumentativo de la propia noción de “democracia” en el discurso político cotidiano. O sea, que mientras más invocamos el calificativo “democrático” en el debate y en el discurso político diario, más se nos ve el pelo de la dehesa de nuestro escaso nivel de auténtica cultura democrática. En países con democracias desarrolladas y consolidadas los proyectos o las estrategias no se justifican calificándolas de “democráticas” sino que se fundamentan en argumentos sustantivos que pasan a formar parte del debate político cotidiano. Qué podríamos decir entonces de esos líderes tan nuestros que suelen dirigirse en sus discursos a “los demócratas” cuando parece que se están dirigiendo en realidad a los ciudadanos en general.

Claro que, ante esta perspectiva tan ácida, alguien podría negar la mayor y pensar si al viejo Sartori no se le estará aflojando la mollera: en tal caso la alternativa será entonces que, efectivamente, debe existir un déficit democrático en Andalucía y en consecuencia sería una tarea urgente determinar (como hizo en su momento el filósofo Karl Popper) quiénes son los auténticos y ocultos “enemigos” de nuestra democracia. Si todavía gobernara Aznar en Madrid, la respuesta estaba cantada. Ahora bien, si tenemos en cuenta que los asuntos que hasta ahora han suscitado un mayor debate en esta agenda de impulso democrático se han referido al status subjetivo de la clase política, es decir, de nuestros gobernantes ¿no será entonces que los enemigos de la democracia andaluza son precisamente los propios miembros de la clase política?

Ante semejante despropósito, a uno sólo le cabe sugerir que algo no ha funcionado muy bien en la determinación de la agenda inicial de la legislatura: o bien todo ha sido una trampa del astuto Arenas, o es que estamos usando inadecuadamente los conceptos y las categorías. O a lo mejor va a ser que, en realidad, Andalucía se está adelantando ya a la agenda de la propia Constitución europea y lo que estamos tratando es de avanzar desde ya hacia esas nuevas categorías de la transparencia, la gobernanza, y otras innovaciones

del constitucionalismo del siglo XXI. O sea, como quien dice, la tercera modernización.

POLÍTICA O PROZAC

2005

Al borde del abismo. Así es como se ha percibido en la política catalana y española un suceso en el fondo tan inocente como el hundimiento de unos edificios por la perforación de un túnel. Y es que seguramente el auténtico factor de riesgo no eran los problemas geológicos o los referidos a la contratación pública de la obra, ni el supuesto porcentaje de comisión que alguien se haya llevado. No. El verdadero factor de riesgo era y es el efecto de malestar social que esto puede producir en una barriada estratégica de Barcelona. Una barriada habitada por charnegos, es decir, por inmigrantes españoles; a los que indirectamente se ha acusado incluso de irresponsabilidad o de negligencia en su propia construcción.

¿Qué puede suceder con un chispazo de malestar social agudo en un sector estratégico como los charnegos de Cataluña? Tengamos en cuenta la posibilidad de que sea como la gota que colme el vaso. El vaso de la paciencia infinita de quienes se vieron despojados de su lengua y de su cultura para poder sobrevivir en la emigración; en su país, pero al mismo tiempo en tierra extraña, rodeados de un ambiente hostil que los condenaba a la inmersión lingüística impuesta por los sectores dominantes; y cuando ya se han perdido los tenues vínculos que acaso sobrevivían de relaciones con el viejo terruño que les vio nacer, a ellos o a sus padres.

Un chispazo de levantamiento social de los charnegos de Cataluña podría llegar a ser como el fulminante de un explosivo social, la llamada a la toma de la calle, el riesgo de descomposición inmediata de los precarios equilibrios entre fuerzas y sectores sociales dominantes. La ruptura al fin de un modelo social más o menos estable que, en su proyección electoral, mantiene en el gobierno de Cataluña a Maragall e indirectamente a Zapatero en Madrid. Es decir, supondría la puesta en marcha de un proceso de efecto dominó cargado de consecuencias imprevisibles a medio plazo.

Por eso, ante el riesgo tan grande ya han empezado a actuar los servicios sanitarios: igual que con las víctimas del 11M, el apoyo psicológico ha derivado en atención sanitaria. Y es que los vecinos del Carmelo se encuentran muy mal, psicológicamente muy afectados; prácticamente al borde de la depresión. O sea, auténtica dinamita social si se les deja sueltos.

Así era como se gestaban los grandes levantamientos populares durante los momentos revolucionarios en los siglos pasados: no se trataba ni de locos ni de visionarios, sino de puros ciudadanos honrados y trabajadores a los que se dejaba con sus familias al borde mismo del abismo. Así fue como las clases oprimidas movieron las instituciones y sacudieron las ramas del orden establecido, así se lanzaron a las barricadas

y acabaron tomando la Bastilla y el palacio de invierno. Así se escribió la historia.

Pero como dicen que ahora vivimos en la sociedad del riesgo, disponemos ya de suficientes estrategias preventivas: y por supuesto tenemos el mejor de los remedios, no ya el dinero que algo hace, sino algo todavía mejor. Tenemos un sistema de tratamiento médico, el Prozac o su sucedáneo de turno. El medicamento tranquilizante o antidepresivo que desinflará la desesperación, apagará la cólera y disolverá la rabia. El que acabará sentando a los ciudadanos en un sillón y les pondrá dulcemente ante la pantalla de la tele.

A veces parece como si no nos diéramos cuenta, porque esa fue la gran aportación del sistema soviético tardío: la transformación de los campos de concentración del primitivo *gulag* en clínicas psiquiátricas de control social, donde el disidente se ha transformado ya en un enfermo. De los campos de Siberia a la caja de cápsulas o medicamentos con receta del seguro. Y por supuesto, esa es la gran aportación complementaria que la investigación químico-farmacéutica viene desarrollando desde hace décadas.

Así ya podemos decirle adiós a los viejos y heroicos tiempos revolucionarios: todos, al fin, tranquilos, pasivos y aborregados ante la pantalla y con la caja de pastillas al lado por si nos viene la angustia. Y el riesgo está ya desactivado; con eso y unas pesetillas -como decía un gran dirigente político- todo arreglado. Con razón decía Claus Offe que en realidad tras la expansión del moderno Estado de bienestar se esconde toda una amplia proyección de la noción seguridad para el propio orden social establecido. Esa sería pues la auténtica y genuina seguridad social, la que previene de los riesgos de estallido social, de levantamientos populares o procesos revolucionarios. Y así los ciudadanos podemos sentarnos ante la pantalla para contemplar el gran espectáculo: el de la política que representan nuestros líderes.

LA DEMOCRACIA ABURRIDA

(Referéndum del proyecto de Constitución europea)

2005

Afortunadamente, parece como si por fin hubiera llegado. Sin tensiones ni crispaciones. Sin atentados ni campañas mediáticas, e incluso sin atisbo de piqueteros por las calles. Aunque los de siempre intentaron poner cadáveres sobre la mesa, pero esta vez sin éxito. Por haber hubo hasta una coincidencia de posiciones entre los partidos mayoritarios. Todo ello sería como un reflejo del discreto encanto de la democracia europea: algo aparentemente tan sencillo y aburrido, pero en el fondo tan difícil de conseguir.

Claro que al final no se trataba más que de un referéndum. Su resultado, preciso y rotundo, concede un plus de legitimidad democrática a la que será en un futuro más o menos inmediato nuestra nueva norma fundamental. Los términos algo reduccionistas del debate sostenido durante la campaña quedan así superados: si era Constitución o mero Tratado, si eran galgos o podencos, neoliberal o no, todo eso se convierte ya en agua pasada. El dato cierto es que se trata de una constitución ratificada de forma directa por el electorado español.

Por otra parte, unos resultados tan abiertos siempre tienen la ventaja de poder contentar a todos: a los partidarios del sí, porque se ha demostrado rotundo; a los del no, porque ha sido suficientemente significativo; y a los partidarios del abstencionismo, porque al significar todo y nada al mismo tiempo, sirve igual para un roto que para un descosido.

La verdadera lástima sería no haber llegado a superar esa barrera psicológica del 50 por 100 de participación, que nos hubiera situado en horizontes triunfales: pero es natural que las contradicciones se paguen, y un partido gobernante con una clara postura a favor de la constitución europea apoyado por aliados con una postura contraria, resulta siempre un fenómeno chocante. En todo caso, parecería como si el tirón gubernamental vinculado al efecto ZP estuviese perdiendo algo de fuelle, al cabo de casi un año.

Pero lo realmente significativo del mapa resultante es el modo tan paradigmático como las cifras finales reflejan la profunda dualidad del eje norte/sur de nuestra geografía política peninsular. Seguramente una nueva muestra de que, efectivamente, progresamos adecuadamente en nuestro impulso europeísta y por eso somos más euroescépticos conforme más desarrollados.

Así resulta que las comunidades más ricas, aquellas cuyas variables en renta o producto interior están más próximas a la media europea, suelen ser las más euroescépticas: como Cataluña, Navarra y País Vasco. Y a la inversa, conforme nos alejamos del norte desarrollado, las posturas proeuropeas resultan ser más rotundas: son aquellas comunidades donde se reflejan porcentajes de voto afirmativo claramente superiores al 80 por 100, como Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla La Mancha o Canarias. Alguien podrá tener otros argumentos, pero parece que la mayoría del electorado español no acaba de entender la aparente dimensión “neoliberal” de la Constitución europea, ni su teórica renuncia al Estado de bienestar. Antes al contrario, para los electores del más profundo sur, la Unión Europea se aparece más bien como la tabla de salvación que puede ayudarnos a salir del atraso y el subdesarrollo, y ojalá que así sea por mucho tiempo.

En cuanto al eje contrario, nos enfrentamos igualmente con una explicación paradójica: decir -como ha sugerido el inefable Maragall- que se ha votado en mayor proporción “no” porque en realidad lo que esto significaba es que se quería apostar con mayor intensidad por el “sí”, o sea, que se quería en realidad más Europa que la que establece la propia Constitución, no pasa de ser un ejercicio de retórica que ha resonado contradictoriamente en las vísperas del referéndum. Siendo exquisitamente lógicos, los datos parecen demostrar que las comunidades más desarrolladas del norte de España son las que apuestan con “menor” intensidad por el proyecto europeo, llegando incluso hasta porcentajes negativos superiores al tercio en ciudades como Gerona, Pamplona u Hondarribia. El rechazo relativo al proyecto europeo sólo puede significar, en pura lógica, que se inclinan más bien por un modelo alternativo, como puede ser el africano. O sea, digámoslo con claridad, un sistema donde los ricos sean tratados de forma diferenciada, donde sus privilegios sean reconocidos y respetados como hechos únicos, singulares y diferenciados. Es decir, nada que ver con Europa.

Pero, en fin, ya sabemos que las decisiones públicas prosaicamente apoyadas en la mayoría constituyen una pauta habitual de esa democracia aburrida, propia de sistemas políticos bien consolidados, como suelen ser los europeos.

EL FRACASO DE LA POLÍTICA

(Sobre la gobernanza)

2005

Los desafíos que se marcaban con claridad a finales del pasado siglo parecen finalmente conducir al fracaso. El concepto mágico, que se dio en denominar como “*gobernanza*” tras el Libro Blanco de la Unión Europea en 2001, imponía un claro desplazamiento del eje de gravedad desde el circuito competitivo-electoral de la “política” hacia el ámbito de la gestión pública o de las “políticas públicas”. Teóricamente se trataba de avanzar más allá de la vieja noción de gobernabilidad, limitada a la mera estrategia partidista de alcanzar mayorías estables de gobierno, para atribuir un nuevo protagonismo a las esferas públicas o institucionales autónomas que se moverían según una filosofía distinta, en una estrategia de gestión orientada a asegurar una mayor eficacia de los aparatos públicos, sobre todo en sus relaciones con el tejido social. De alguna manera se intentaba así darle una nueva y original

respuesta a la recurrente crisis del Estado de bienestar y a la ineficacia reiterada de ciertas políticas.

Naturalmente el planteamiento dependía de una incógnita que finalmente no se ha cumplido: que los políticos -preocupados exclusivamente por sus claves de electoralismo- retiraran sus manos de la esfera de “las políticas”, donde se juega en última instancia el bienestar de los ciudadanos, para atribuir las a agencias gestoras participadas democráticamente. Hasta existía incluso una clave semántica que pretendía describir este sesgo: unos debían llevar el timón, mientras otros remaban. Pero todo esto exigía de los gobernantes una cierta habilidad para mover, como los directores de orquesta, sus dos manos de una forma diferenciada: una para mantener el ritmo, el tiempo o la cuadratura; otra para atribuir a los instrumentos (los gestores públicos) su mayor protagonismo en cada caso.

Sin embargo, nuestros gobernantes se han comportado finalmente como si fueran directores de orquesta mancos: o sea, han pretendido mantener su protagonismo decisonal, reforzando los circuitos que aseguran la confianza electoral y la facultad de impulso político del gobierno, mediante el recurso a viejos y manidos argumentos. Bien reiterando el sentido “contractualista” del programa electoral, o bien tratando de intensificar las claves de confianza personal y liderazgo carismático (mediado ahora por nuevos factores de estilo o de talante). Viejas y superadas teorías que no pueden ocultar el oscuro trasfondo que les da su aliento: la pura y simple manipulación mediática. Lo comprobamos con claridad en el caso americano: cada vez que Bush da un traspies, viene el mago Karl Rove a poner en marcha la correspondiente campaña mediática para recuperarlo en las encuestas. En definitiva, entre unos y otros, no nos hemos querido dar cuenta de que, a estas alturas, el sufragio universal ya no es suficiente.

Y así ha sucedido que finalmente los dirigentes políticos no han sido capaces de otorgar a los ámbitos propios de las políticas públicas el grado necesario de autonomía para el cumplimiento de sus objetivos, respondiendo a los desafíos de la gobernanza. Por el contrario, las esferas administrativas e institucionales, teóricamente autónomas, han seguido siendo víctimas de una reiterada colonización política y partidocrática, que acaba asfixiando sus pretensiones de una gestión pública eficaz. Sin autonomía y sin transparencia, ni siquiera sabemos con un mínimo de certidumbre cuáles son las políticas que van bien o cuáles las que fracasan: el reciente acuerdo sobre la financiación sanitaria, por ejemplo ¿confirma el éxito o el fracaso de las políticas autonómicas de sanidad?

El resultado final de este proceso lo podemos comprobar en la dinámica de un sistema político aparentemente tan alejado del nuestro como el japonés: el prestigioso gobierno Koizumi fracasó rotundamente en su proyecto de sacar a Japón del marasmo financiero en que había caído su economía tras la crisis de los noventa. El proyecto consistía en actuar sobre el sistema de ahorros de su caja postal: una vieja y venerable institución, enraizada en lo más profundo de su tejido social. El fracaso de esta política (un típico fracaso de “gobernanza”) ha dado lugar como respuesta a la disolución del parlamento y convocatoria de elecciones (en clave de “governabilidad”). Y el objetivo de la campaña electoral y nuevo proyecto de gobierno parecen ahora bastante claros: reformar las reglas de juego del sistema. La respuesta, vista en la distancia, es tan simple como la del jugador que maneja la banca y pierde una jugada: antes de la siguiente, lo que pretende es cambiar las reglas de juego.

Tan sencilla y elemental respuesta es la que, sin apenas percibirla, estamos viviendo los españoles. Cuando teóricamente nos enfrentábamos al desafío de poner finalmente en marcha unos instrumentos de acción eficaces para nuestras políticas públicas (instrumentos que deberían operar fundamentalmente en la escala autonómica y desde claves de gobernanza), nuestros dirigentes nos responden con una propuesta de cambio de las reglas de juego.

Naturalmente, enfrentar a los ciudadanos a las incertidumbres propias de un momento fundacional, de un cambio en las reglas fundamentales del sistema, puede tener su utilidad desde la perspectiva de los propios líderes políticos: ante la conciencia colectiva de precariedad y de incertidumbre, la clase política se nos aparecerá ahora como un heroico colectivo de salvadores, auténticos líderes carismáticos dispuestos a salvar la patria a cambio de un voto. Por eso, cuando se nos llama a una reforma del sistema, lo primero sería preguntarnos qué es lo que ha ido mal, qué es lo que ha fracasado: si la Constitución, o los Estatutos de autonomía; o más bien si los que han fracasado han sido los propios políticos.

SOY UNA NACION

23 octubre 2005

Lo descubrí recientemente al despertarme por la mañana, tras una noche de pesadillas y duermevela. Me pasó casi igual que al protagonista de la metamorfosis de Kafka, sólo que mi proceso fue

distinto. Primero discurrí en sueños a través del laberinto de mis singularidades, de aquellas cosas que me hacen ser diferente de los demás. Luego buceé en mi pasado más remoto, desde los milenarios ancestros tartésicos, pasando por la bética romana y el califato de Córdoba, hasta el hallazgo de mis abuelos jornaleros y su papel en la guerra civil. A continuación comenzó un ensamblaje alucinante de elementos simbólicos, sensaciones, valores, banderas, músicas, percepciones y sentimientos. Y al final, cuando ya el corazón se me desbordaba de emoción, llegó el chispazo final, el definitivo corolario: alcancé la auténtica conciencia de mi ser, el alma retornó al cuerpo y lo descubrí. Soy una nación.

No crean que me conformé con tal experiencia. Al día siguiente me apresuré a consultar mis manuales de teoría del estado y comprobé que, efectivamente, allí estaba todo. Mi propio territorio (la casa adosada) con sus fronteras bien delimitadas, mi población (yo mismo), y mi poder con el que decido sobre mi propia vida. Es difícil explicarles que también poseo mi propia lengua porque no lo entenderían: es un lenguaje único que sólo lo hablo yo conmigo mismo. Y por supuesto, una historia personal única y diferenciada.

Armado de semejante conciencia he decidido firmar mi propio pacto con el Estado español. No crean que se trata de una locura: ya lo decía el propio Rousseau al hablar del contrato social. Yo mismo fijaré las cláusulas de ese acuerdo y adquiriré un reconocimiento institucional único y diferenciado. Quiero aclararles que no se trata exactamente de un pacto “foral”, aunque en él se establecerá con precisión qué es aquello que decido transmitir a la voluntad general o de todos; mientras que el resto, naturalmente, sólo me pertenece a mí mismo. Por eso soy una nación.

Aunque resulte algo extraño o paradójico estoy seguro de que todos ustedes lo comprenderán, siempre que consiga explicarlo de forma adecuada. Confío en llegar a convencerles de que se trata de una pretensión legítima y aceptable. Supongo que coincidirán conmigo en que la palabra nación no es más que eso, una palabra. Estoy convencido de que encontraré mentes comprensivas y tolerantes entre las autoridades que nos gobiernan, dispuestas a admitirlo y aceptarlo. No creo que sea necesario que lleguemos a una “guerra civil” (entre comillas). Al fin y al cabo, yo siempre he sido un ciudadano activo y diligente; pago mis impuestos y puedo asegurarles que no he practicado nunca la violencia. Además, cuando me ha tocado arrimar el hombro lo he hecho como el primero. Por eso voy a poner en marcha una campaña explicativa, de la que este artículo es la primera entrega.

Espero que nadie lo entienda como una manifestación de egoísmo o de falta de solidaridad. Se trata más bien del puro reconocimiento de un hecho diferencial de carácter único y exclusivo.

Por supuesto, estoy convencido de que esto no vulnera en absoluto la Constitución española, pues en ella se reconocen hechos diferenciales de carácter histórico y se consagra la libertad de todos, comenzando por el propio individuo. Es más, creo que comenzaré muy pronto a redactar mi propia Constitución o estatuto nacional: les aseguro que será un texto memorable, que incluso los niños podrán cantar en las escuelas. Contendrá todo un cuadro de derechos fundamentales y asegurará el mayor bienestar, delimitando con todo detalle cuáles son las competencias que me pertenecen de forma exclusiva: conseguiré redactarlo en apenas varios centenares de artículos. Por supuesto, el texto será aprobado con todo el consenso posible: o prácticamente por unanimidad, aunque siempre habrá una parte de mí mismo que se resista.

Bueno, como sospecho que en realidad no acaban de fiarse del todo, tengo que confesarles algo más: en realidad yo soy miembro de la comunidad de propietarios de mi urbanización: de mi voto depende la junta directiva. De la junta directiva de mi comunidad depende el equilibrio de poder de un concejal de mi pueblo. Del voto del concejal de mi pueblo depende el equilibrio de poder de la diputación. Del voto en la diputación depende indirectamente el gobierno de la comunidad, y de éste el del gobierno central. De todo este complejo juego de equilibrios depende al final, aunque les parezca increíble, la estabilidad del propio presidente de la Comisión Europea. O sea, que al final yo soy quien decide realmente el gobierno de Europa.

Por eso he resuelto que a partir de ahora seré una nación. Y por eso, mi estimado lector, lamento tener que comunicarle que toda esta argumentación que acaba de leer tiene en realidad un solo objetivo: demostrarle que sólo yo soy una nación, mientras que usted no.

ADIOS, GUNDER FRANK

(Necrológica)

2005

De tu obra y de tu pensamiento guardaremos la memoria de lo que no tuvo continuidad ni consistencia en nuestras elaboraciones ideológicas. Y es que hoy seguramente ya nadie se acuerda del trasfondo teórico que se debatía en el momento de la transición; cuando tus famosas teorías de la dependencia y del intercambio desigual constituyeron parte de la argamasa en la que se fundieron muchas de las reivindicaciones territoriales de protesta del sur contra los egoísmos del norte desarrollado. Nadie guarda apenas la memoria

de que tu pensamiento era una de las piezas que fundamentaba científicamente la protesta de los pueblos y tierras atrasadas; sobre todo cuando tuvo lugar aquella gran explosión de rebeldía colectiva que culminó en el referéndum de iniciativa autonómica en Andalucía.

Hoy, el pensamiento del subdesarrollo así como el paradigma constructivo del desarrollo endógeno, apenas han quedado encogidos entre los sueños y pesadillas de algunos movimientos indigenistas del tercer mundo. Pero nadie mantiene la conciencia viva aquí, en el seno de la Europa opulenta, de las relaciones de desigualdad que operan entre centros y periferias, entre el norte y el sur.

Y menos que nadie, algunas de esas minorías radicales que, además de defender los egoísmos territoriales de sus respectivos pueblos, tienen encima la caradura de calificarse como ideologías “de izquierda”: ¿sabrán el inefable Carod Rovira o algunos de sus acólitos de la llamada “izquierda republicana” quién era André Gunder Frank? Si realmente lo supieran no nos ofenderían cotidianamente con el argumento de sus balanzas fiscales, cuando éstas son simplemente el reflejo de una balanza comercial deficitaria a su favor: ellos son ricos porque somos nosotros quienes consumimos sus manufacturas.

Preguntarnos por qué razón, al cabo de apenas dos décadas, tan fértil fuente de pensamiento quedó olvidada e ignorada, seguramente es una tarea enormemente sugestiva, aunque por desgracia cargada con el agrídulce sabor de la autocrítica: ¿fueron acaso aquellas célebres fundaciones alemanas, los dineros de flick y de flock, las que reorientaron las elaboraciones ideológicas de quienes aquí se siguen llamando de izquierda? ¿O se trata al fin del inevitable apogeo del pensamiento único que nos llega del imperio, ese imperio de cuya “escuela de Chicago” tú llegaste incluso a formar parte?

Pero mucho más triste aún sería tener que constatar que, en realidad, nuestros flamantes y competitivos partidos políticos no se limitaron a desplazar tus postulados teóricos para sustituirlos por otros propios de la Europa civilizada, sino que simplemente se dedicaron a prescindir de toda teoría, de toda ideología, de toda ciencia, para ajustarse a los nuevos paradigmas de la videopolítica: sustituyendo el pensamiento por la imagen, la ideología por el talante, la doctrina política por las estrategias de imagen. Los contenidos teóricos por la más absoluta nada.

Al cabo de algo más de dos décadas, la teoría de la dependencia apenas constituye ya más que un recuerdo en las hemerotecas o, como máximo, una débil apoyatura para ONGs despistadas o para unos pocos románticos tercermundistas algo trasnochados.

Cuando nuevamente asistimos al resurgimiento de la insolidaridad y al apogeo del egoísmo colectivo de las tierras y

pueblos más desarrollados del norte, cuando el difícil equilibrio territorial que conseguimos pactar en los albores de la democracia se tambalea bajo las dentelladas de las comunidades más ricas contra un gobierno débil e inexperto, seguramente es el momento de preguntarnos por qué un diagnóstico tan certero como el del subdesarrollo, que preside el horizonte fundacional de nuestro Estatuto de Autonomía, ha podido ser olvidado tan precipitadamente. Y por eso, en el contexto presente las fuerzas políticas se mueven en un marasmo de estrategias miopes o de maniobras a corto plazo carentes de toda orientación científica, de postulados ideológicos fuertes, de una doctrina solvente que les sirva para dar consistencia a sus posiciones políticas.

Seguramente fue nuestra culpa, que ahora simplemente purgamos con justicia, esperando a que alguien venga a salvarnos desde Bruselas; o a que, en todo caso, virgencita, nos quedemos como estábamos. Adiós, Gunder Frank, adiós.

TEORIA DEL “*PUSTCH*”

(Revoluciones de los colores)

2005

La revolución de los colores. Esta es la más original expresión de la nueva y sorprendente oleada democratizadora que se viene manifestando en algunos estados periféricos de la antigua Unión Soviética. Es una lástima que no hubiese sido anunciada por el prestigioso Samuel Huntington en su ya vieja teoría de las “oleadas democráticas”, anterior en el tiempo a su más famosa del choque de civilizaciones.

Lo curioso es que se trata de movilizaciones surgidas en torno a interpretaciones dudosas de determinados resultados electorales: o sea, levantamientos populares que operan en el contexto de la propia dinámica democrática, contando generalmente con la ambigua neutralidad de observadores internacionales de variada extracción. Y esto es lo que provoca una sensación ambivalente a la hora de su valoración. Porque en realidad no sabemos si estamos ante auténticas movilizaciones “heroicas” donde se manifiestan toda una serie de impulsos democratizadores populares que estarían barriendo definitivamente las pavesas de la vieja dictadura soviética; o más bien si constituyen en realidad nuevas y originales manifestaciones de la vieja técnica del “*putsch*”, del golpe de mano, que tantos éxitos cosechó en las débiles democracias surgidas en Europa tras la

primera guerra mundial. Con la diferencia de que ahora los viejos elementos conspirativos estarían siendo sustituidos por factores de mayor impacto mediático como el uso de los colores, el eco de las movilizaciones populares o la nueva imagen al estilo occidental de los líderes (no se sabe si viejos o nuevos) llamados a sustituir a los grises herederos de la nomenclatura soviética.

La auténtica duda que suscita esta nueva fenomenología histórica sería la de delimitar cuál es su verdadero ámbito de proyección. En principio cabría sugerir la hipótesis de que se trate de un tipo de riesgo más o menos previsible en democracias precarias o en fase de consolidación; o sea, simples problemas de ajuste a modo de crisis de crecimiento que se traducirían en episódicos desbordamientos populares en el seno de sociedades dotadas al fin y al cabo de una escasa tradición democrática, aunque con una clara percepción colectiva de los ideales occidentales. Estaríamos pues ante un movimiento estratégico significativo en la semiperiferia del sistema mundial, pero dotado de una proyección geográfica limitada y, por lo tanto, controlada. En el fondo, como una especie de apagafuegos destinado a crear un cinturón sanitario ante la amenaza islamista asiática.

Sin embargo, si nos molestamos en recordar en una breve panorámica histórica el carácter “contagioso” que durante el periodo de entreguerras tuvieron las experiencias del golpe de mano (Pilsudski en Polonia, Voldemaras en Lituania, Ulmanis en Letonia, Zankov en Bulgaria, etc.); es decir, si consideramos lo fácil que puede ser en el fondo el recurso al *putsch* (hasta el punto de que llegó a ser teorizado por aquel excéntrico postfacista italiano llamado Curzio Malaparte en su libro “*Técnica del golpe de estado*”), entonces el panorama se tornaría algo más proceloso. ¿Y si se tratara al final de un nuevo tipo de riesgo histórico emergente de carácter global, susceptible de afectar a cualquier tipo de sistema democrático, incluso a los occidentales?

Pensemos que, al fin y al cabo, irregularidades electorales puede haber en cualquier sistema, y que las garantías de estabilidad democrática nunca son completamente seguras cuando soplan vientos tan oscuros en la escena política mundial. Imaginemos qué hubiese sucedido, por ejemplo, si hace cinco años el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Al Gore, se hubiese negado a aceptar los falsos y tramposos resultados electorales de su aparente empate técnico con George Bush y hubiese lanzado a sus seguidores demócratas a la calle amparados en sus colores y apoyados en sus empresas mediáticas. Y es que el riesgo se incrementa ante casos electorales procelosos, sucios o tramposos: recordemos, por ejemplo, que hasta el alemán Schröder fue acusado de ocultar datos reales sobre la situación económica de

Alemania en vísperas de la última campaña electoral, lo que condicionó el comportamiento final de los votantes. Por no hablar de otros ejemplos más próximos.

Desde esta perspectiva, la singular casuística de las revoluciones de los colores en la periferia rusa adquiriría un sentido al mismo tiempo más global y amenazante, dentro de la creciente dinámica interactiva en que opera la política mundial. No sabemos pues si estamos ante la búsqueda de mecanismos más operativos para forzar la alternancia en contextos políticos donde las fuerzas en el poder son capaces de cerrar al paso a las alternativas plurales de la oposición; o si es que acaso estamos entrando sin danos cuenta en una nueva etapa histórica donde los soportes tradicionales de la decisión colectiva expresada en las urnas no se consideran ya suficientes si no van acompañados de una adecuación visualizable al contexto mediático mundial. En el oscilante cromatismo que nos ofrece este nuevo *putsch* de los colores, quizás podemos entrever algunos de los principales desafíos que condicionarán el futuro de la democracia durante el siglo XXI.

¿SEGURIDAD O PENITENCIA?

(Ante el terrorismo islámico)

2005

A lo mejor Samuel Huntigton no estuvo en realidad tan acertado con su teoría del “choque de civilizaciones”. Porque al final parece que no era un choque de civilizaciones sino de religiones. Y del mismo modo, el presidente Zapatero tampoco acierta con su contrapropuesta, pues no se trataría de una alianza entre civilizaciones sino entre religiones.

Ni los teóricos de la ciencia-ficción pudieron nunca imaginar lo fácil que podía resultar introducirse en el túnel del tiempo para dar un salto colectivo hacia el pasado: retornar a la oscura época de las guerras de religión. Por una parte, la ofensiva de la “*yihad*” se monta como siempre sobre minorías iluminadas, integradas no por los más pobres o humildes, sino por aquellos héroes y mártires capaces de asumir la auténtica esencia del mensaje divino: eliminar a los no creyentes. Por otra, la respuesta del mundo cristiano no deja de ser igualmente un ejercicio religioso paradigmático: los atentados, los muertos, constituirían una especie de castigo divino por nuestras malas acciones, la expiación colectiva por los pecados que hemos cometido.

¿Que cuáles han sido nuestros pecados? Un adecuado examen de conciencia nos mostraría no sólo que hemos sido algo “tibios” ante la injusta cruzada del imperio contra los infieles, también sacaría a la luz otros “pecadillos” no menos relevantes: el problema es que no hemos sabido integrarlos adecuadamente en el marco de una adecuada convivencia multicultural. No les hemos construido suficientes mezquitas ni hemos respetado sus costumbres singulares y diferenciadas. Todo esto lo hemos hecho mal y por eso somos víctimas del castigo divino. Quién sabe si hasta el famoso laconismo británico de los londinenses no sería sino una demostración indirecta de que también ellos, en el fondo, son unos buenos cristianos que aceptan con resignación los designios del cielo.

Sin darnos cuenta, nuestra respuesta colectiva se ajusta igualmente al paradigma de nuestra propia tradición religiosa: las desgracias no son sino un castigo divino. Por eso, aprovechando que habrá que sacar pronto a pasear a los santos para las rogativas por la sequía, quizás deberíamos también emprender otras acciones de penitencia: como el rosario de la aurora o algo por el estilo.

Solamente hay una pieza que no encaja en este proceso: el intento de reforzar la deriva laicista de nuestro sistema constitucional. Salvo que se trate de una estrategia de largo calado destinada a asegurar la vigencia efectiva del multiculturalismo y la convivencia entre las distintas religiones. Pero si este planteamiento se consolidara, nos dejaría sin argumentos: porque si todos nos hacemos finalmente laicos, no encontraremos explicación alguna a los atentados suicidas. Y como no siempre podremos disponer de un Aznar a quien linchar de forma inmediata cual chivo expiatorio, nuestra visión explicativa de la realidad se quedará sin respuestas. Quienes se empeñan en eliminar la religión de nuestro sistema educativo no habrán caído en este pequeño inconveniente.

Este conformismo colectivo y esta aparente resignación cristiana no son sino los síntomas de debilidad de una civilización decadente y hedonista que no puede entender a esos “mártires” que se rebelan contra el orden establecido. Cuando mártires de otro tipo eran también, en la época romana, los propios cristianos que se dejaban devorar entre cánticos por los leones.

Empeñados en nuestras visiones exculpatorias de la realidad, preferimos ponernos una venda en los ojos para no darnos cuenta de que el primero de los valores que deberíamos tutelar es el de nuestra propia supervivencia, el de la seguridad colectiva. Pero apostar por este postulado supondría retornar al oscuro vientre del pensamiento de Hobbes y a las complejas claves de la justificación originaria del orden social en un entorno de violencia y de lucha de todos contra todos. Al vértigo que nos produce tener que enfrentarnos a una especie de nuevo contrato social para salir de este nuevo “estado de

naturaleza” y posibilitar la defensa del orden y la seguridad (algo que creíamos ya asegurado desde hace siglos), se contraponen ahora el espejismo de esa arcadia feliz de la interculturalidad, tras la que se emocionan nuestros tiernos corazones.

Creíamos tener tan cerca esa arcadia feliz, tan superados los procelosos argumentos hobbesianos y su universo social de lucha de todos contra todos, que ahora simplemente nos negamos a plantearnos racionalmente una defensa coherente del valor seguridad (incluso en su dimensión preventiva). Y por eso, como no sabemos si estamos viviendo una pesadilla o si acabamos de despertarnos de ella, sólo nos queda aceptar la inexorabilidad de los designios divinos. ¿Será que hemos vuelto, sin darnos cuenta, al periodo de las guerras de religión, o más bien simplemente es que tenemos que hacer más penitencia por nuestros pecados?

ECOS DE LA TRANSICION

2005

La convicción de que el nuevo proceso de reformas de los Estatutos de Autonomía supone una especie de reapertura de la transición no ha despertado una especial preocupación entre los españoles. La filosofía “adanista” del presidente Zapatero y su pretensión de poner a cero el reloj de la historia parecen haber sido aceptadas con un claro optimismo colectivo.

Es posible que las causas de este optimismo se deriven de la propia visión idílica que los españoles tenemos acerca de lo que fue nuestra transición. Durante bastantes años, los españoles -y especialmente los constitucionalistas- nos hemos sentido depositarios de ciertas claves herméticas o fórmulas magistrales especialmente adecuadas para enfrentar procesos de cambio histórico con resultados exitosos. Hasta nos hemos permitido a veces el lujo de asesorar a otros países en situaciones parecidas (régimenes del este, o algunos sistemas latinoamericanos), para enfrentar procesos de transición.

Ya sea porque confiamos en la clarividencia de nuestras mentes pensantes y en su capacidad para diseñar cambios institucionales, o bien por la creencia en las sólidas virtudes colectivas del pueblo español, el caso es que nos consideramos como una especie de sociedad elegida para la convivencia democrática.

Lástima que nuestra visión de la historia no vaya algo más atrás en el tiempo, para recordar ejemplos de otras épocas más pretéritas.

Pero eso, ya se sabe, es tarea propia de los historiadores. El caso es que desde el periodo de la transición hasta nuestros días han transcurrido ya unos treinta años: precisamente el lapso de tiempo que suele tomarse como referencia para que los propios historiadores comiencen a meter sus narices en ese periodo. Lo que implica pues el manejo y análisis de todo un amplio material documental, archivos, memorias de los protagonistas, etc., unido a la introducción de enfoques más científicos y reposados.

Pues bien, lo que empieza a emerger de esta nueva visión historiográfica de la transición no coincide con las idílicas concepciones que hemos mantenido hasta ahora. La seguridad colectiva con la que los españoles miramos hacia el pasado inmediato no parecen hipótesis suficientemente acreditadas en manos de los historiadores: ya sea por los posibles cabos sueltos o problemas sin resolver que se dejaron en la agenda; o más bien por la sensación de que, en realidad, en aquella ocasión a los españoles nos sonó la flauta por casualidad. Es decir, que tuvimos la fortuna de que se conjugaron positivamente todo un conjunto de variables que, en otras circunstancias, podrían haber generado resultados bien distintos.

Por eso, cuando parece que nos encaminamos inexorablemente hacia un nuevo proceso de transición, parece el momento adecuado para recordar las semejanzas o diferencias entre nuestro actual momento histórico y el que se desencadenó hace ahora unos treinta años. Y por supuesto la primera diferencia es que entonces los españoles salíamos de una larga dictadura mientras que ahora vivimos en una democracia consolidada. Parece de lo más elemental y evidente, pero el espíritu con que se enfrentaba la transición tenía algo de inexorable, en el sentido de que no cabía marcha atrás: el esfuerzo de consenso colectivo significaba “entrar” en la democracia, a partir de un sistema emergente de partidos aun escasamente perfilado y de unas fuerzas sociales dispuestas a apostar (como hicieron en los Pactos de la Moncloa) por un marco de entendimiento.

Treinta años después no tenemos ante nosotros un dilema colectivo semejante, puesto que no se trata de salir de una oprobiosa situación histórica; mientras que el sistema de partidos parece algo anquilosado y el ambiente político se caracteriza más bien por una creciente crispación y desencuentro.

Pero aún más significativa es la comparación cuando se sitúa en el tema territorial: obviamente durante el periodo de la transición el *Estado de las autonomías* era una vaga nebulosa por construir, mientras que hoy es una realidad institucional plenamente consolidada. Los dualismos que se establecían difusamente en la Constitución se referían entonces al proceso autonómico, pero no a las posibilidades del modelo de llegada, donde finalmente ha

resultado una homogeneización que se puede entender casi como una garantía de igualdad federal. La reapertura del proceso sólo parece tener hasta ahora una finalidad: reintroducir en el sistema una desigualdad que no pudo consolidarse en el momento de la transición.

En este contexto los españoles nos enfrentamos al dilema de intentar a ver si nos suena nuevamente la flauta: sólo que en este caso parece que no se nos va a permitir que lo intentemos todos a una, sino de una manera fragmentada y parcial. Y en este ambiente, algunos podrán poner sobre la mesa su capacidad para hacer caer el gobierno Zapatero si no se atienden sus demandas. Ante la sospecha de que la historia no siempre se repite dos veces, parece que el murmullo lejano de la transición nos devuelve ahora unos ecos deformados por la distancia.

NOSOTROS EL PUEBLO

(Reforma de los Estatutos)

2005

Esta especie de fórmula mágica, que constituye el encabezamiento de la Constitución norteamericana, se ha convertido definitivamente en una clave de éxito. Lo declaraba sin el menor rubor el Presidente de la Generalitat, Maragall, en una reciente entrevista, al hablar de su visión ideal del nuevo estatuto catalán. Lo reitera con otras palabras Ibarretxe cuando alude a la decisión de “su” país de caminar hacia nuevas fórmulas asociativas con el estado español.

De pronto, parece que en España nos hemos situado ante un nuevo momento fundacional y estamos dispuestos a enfrentarnos al futuro con esas dosis de solemnidad y con esa especie de espíritu místico que requieren habitualmente los grandes acontecimientos históricos destinados a marcar época.

Se trata de un estilo grandilocuente que, sin embargo, aparece acompañado de una notable dosis de localismo. Lo que resulta paradójico es que nuestro auténtico gran momento fundacional de carácter colectivo, el de la Constitución europea, no aparezca acompañado de unas dosis similares de solemnidad histórica. Frente la loable lógica de una fórmula al estilo de “nosotros el pueblo europeo” que sería capaz de representar un auténtico desafío creativo y progresista ante al desorden creciente del universo globalizado, parece que en nuestro país se ponen en marcha todo un conjunto de impulsos localistas e insolidarios dispuestos a aprovechar la debilidad del gobierno ZP para reproducir nuestra recurrente dinámica histórica de enredarnos en reinos de taifas. Sólo nos faltaba, para completar el panorama, el desafío de una formulación al estilo de “nosotros el pueblo

lepero...”. La historia interrumpida de la I República española estaría así nuevamente a punto de echar a andar.

Es posible que el problema consista en una falta de ubicación adecuada del marco socioinstitucional de debate donde deben definirse o redefinirse los soportes originarios para la convivencia civilizada en nuestro país; es decir, la fórmula que establece en qué consiste nuestro propio “poder constituyente”. Por ahora, parece que tal soporte se sitúa en el artículo 2 de la Constitución, que establece unos parámetros de soberanía más o menos similares a los del contexto comparado: en este caso, “nosotros” -el poder constituyente- somos el pueblo español. La decisión de lo que deban ser las actuales comunidades catalana o vasca dependerá en consecuencia de nuestra propia decisión, la del pueblo español. El único referéndum posible será así el de todos los españoles. Y si todos decidimos que catalanes y vascos sean otra cosa, bien estará. Esa sería nuestra decisión colectiva y democrática, como la de si decidimos consumir cava catalán en vez de sidra asturiana.

Sin embargo, parece que ahora nos enfrentamos a un procedimiento perverso y distinto, donde la decisión fundacional no corresponderá al todo (los españoles), sino a cada una de las partes. En consecuencia, el todo no sería al final más que la pura suma de esas partes. Y allá vamos: si cada una de las Comunidades denominadas “históricas” se autodefine a sí misma como nación, a las demás sólo nos quedará participar en la subasta subiendo el precio. Todos acabaremos siendo pues finalmente auténticas “naciones” fundamentadas en un poder colectivo originario y arraigado en tradiciones milenarias. En consecuencia, la vieja noción de España no resultaría ser al final más que un vergonzante residuo franquista que debemos superar cuanto antes.

Si a través de este procedimiento invertido resulta que algunos vamos a acabar finalmente siendo engañados, esa sería nuestra propia responsabilidad en un juego plenamente democrático: la responsabilidad de haber sido secularmente el mercado donde se alimentaba el capitalismo catalán o vasco, que ahora prefiere invertir sus excedentes sociales en sus propios territorios. La responsabilidad de seguir consumiendo sus mismos productos, frutos de un tejido empresarial desarrollado que se alimentó históricamente de nuestro mercado y de nuestra mano de obra emigrante.

Pero ya se sabe que, frente a la historia real, siempre acaba teniendo más fuerza la historia recreada o imaginaria: la de aquellas remotas tribus que poblaron la península ibérica desde hace milenios y cuyas culturas estarán siempre presentes en la profundidad de nuestra propia alma colectiva. O sea, nosotros el pueblo.

Menuda debe ser la sonrisa de superioridad y el cachondeo con que nos estarán contemplando ahora nuestros compatriotas europeos.

EL OMBLIGO DEL MUNDO

(Fracaso del referéndum del proyecto de
Constitución europea en Francia)

Junio 2005

Era inevitable. Pretender que Francia y los franceses adoptaran una decisión colectiva tan trascendente dejando de pensar en sí mismos, parecía un auténtico imposible. ¿Cómo explicarles que desde hace tiempo se han quedado desfasados en su nacionalismo provinciano y centralista, en sus sueños inertes sobre la “*grandeur*” y en su interminable memoria colectiva de ser la cuna de la revolución universal? “*Olvidar París*” -decía el filósofo de la posmodernidad Giacomo Marramao- constituye una primera y esencial pieza para comprender el orden desordenado del mundo moderno. Pero cómo iba a ser posible que olvidaran París los propios franceses.

El detalle, en apariencia desapercibido, se detectaba incluso en la comparecencia oficial de la Presidencia la misma noche del 29 de mayo, cuando apenas se había hecho pública la victoria del no: Chirac se dirigía a los franceses “*de la metrópoli y de ultramar*”. ¡Ultramar! Los viejos sueños incumplidos del imperio colonial francés cabalgando nuevamente nada menos que para decidir sobre el futuro de Europa, nuestro futuro.

Sólo desde esta mediocre y desfasada perspectiva se comprenden la sucesión de errores y desajustes de un debate que viene finalmente a hacer embarrancar el proceso europeo. Y es que los franceses no han discutido sobre Europa, sino sobre ellos mismos. No han sido capaces de ir más allá de su propio corralito provinciano y narcisista; de la fracasada dinámica de bipolarización política en que se han ido sumergiendo con su inefable sistema de doble vuelta.

Y no será porque no había habido ya suficientes avisos: porque pretender que la última elección presidencial -cuando el contrincante de Chirac resultó ser nada menos que la ultraderecha- constituía un reflejo significativo de la realidad social francesa, era ya un absurdo más que suficiente para encender todas las alarmas.

De ahí la inevitable desubicación e incongruencia del debate: divisiones en el seno del socialismo, ocultas ambiciones presidenciales, estirados tecnócratas, populistas incendiarios, campesinos provincianos, unión estratégica entre la extrema izquierda y la extrema derecha... Todo un cúmulo de absurdos en una sociedad que, paradójicamente, carece de muchos de los graves problemas que padecen otros estados de la Unión.

Y lo más contradictorio es que quienes van a tener que entonar ahora el *mea culpa* son precisamente los otros: los dirigentes de la Unión, los líderes de los otros países; y por supuesto el conjunto de

los ciudadanos de Europa a quienes se nos va a frenar un proceso histórico que nos remontaba decididamente hacia el futuro.

Claro que a lo mejor es que realmente los demás no hemos acabado de entenderlo, y por eso no queremos aceptar la evidencia de que, en efecto, París es el ombligo del mundo, la meca de la moda, el paraíso de lo *fashion*. Y precisamente los más *fashion* resulta que es decir *no*. En pleno desmadre de la globalización, en el ambiente generalizado de desorientación colectiva que nos atenaza, en la confusión reinante sobre los cauces históricos que deben movilizar nuestra estrategia de cara al futuro, ya tenemos la respuesta de la capital de la moda: lo que está de moda es decir *no*. Como aquella vieja canción de la muñeca que decía “no”. Y por supuesto, sin perspectivas de remontar el vuelo más allá de los intereses egoístas e inmediatos de cada comunidad, de cada colectivo.

Pero seguramente los españoles somos los que menos deberíamos extrañarnos de este comportamiento: ya sabemos que precisamente nuestros territorios más ricos y desarrollados, los más cultos y avanzados, los más *fashion* en suma, son precisamente los que más acentúan su egoísmo colectivo, la defensa de su propio corralito. ¿Qué pensábamos que iba a pasar en la mucho más desarrollada Francia?

Ahora solamente nos toca recomponer los remiendos y armarnos nuevamente de paciencia ¿quién pensaba que Europa se disponía ya a dar un paso de gigante necesario para convertirse en el nuevo interlocutor decisivo de la política mundial? Avanzaremos decididamente desde nuestros respectivos corralitos nacionales, hasta el horizonte infinito de esa Unión Europea que todavía no puede ser. Olvidar París.

LA CLAUSULA SAGRADA

(Reforma del Estatuto catalán)

2005

Por lo que nos importa a nosotros los andaluces, lo que vaya a hacer o dejar de hacer el legislativo para corregir el borrador de Estatuto catalán resulta en parte secundario. El verdadero trasfondo es el impacto sobre el “espíritu del 28F”, la cláusula de igualdad que tras la movilización de los andaluces a comienzos de la democracia constituye el auténtico fundamento de la decisión constituyente sobre nuestro del sistema territorial.

Si, ya sabemos que últimamente se ha ninguneado y ha vuelto el sarcasmo del “café para todos”. Lo extraño es que, lo que aplicado a los andaluces puede suscitar una sonrisa, es lo mismo que aplicado a la más vieja constitución federal del mundo, la de los Estados Unidos, reviste la máxima solemnidad y trascendencia. Esa sagrada cláusula de igualdad es el fundamento mismo de la más antigua constitución vigente; el entramado de base que dio pie al edificio de la federación americana hace más de dos siglos sin que nadie haya manifestado nunca ni el más mínimo atisbo de intención de reforma.

Nos hemos cansado de repetir que la Constitución de 1978 no establece ningún criterio de desigualdad en el modelo resultante de su diseño territorial. Las únicas desigualdades, las que afectaban a la famosa dualidad entre regiones y nacionalidades, se referían al *proceso* autonómico, y dejaban abierta la posibilidad de su configuración final. Por eso la auténtica decisión constituyente, la que llenó de sustancia el esquema abierto de nuestra norma fundamental, fue la iniciativa autonómica de Andalucía. Nuestra fue la inflexión definitiva, la que decidió un sistema de Comunidades para todos con la perspectiva de que, al final de un largo proceso, todos los territorios fueran iguales. La vieja cláusula de igualdad, la misma de la constitución americana y de la revolución francesa. La que pretende que pobres y ricos, territorios o personas, sean iguales ante el Estado. Y que fue seguida y apoyada por el resto de los ciudadanos de las distintas Comunidades.

En el tiempo transcurrido desde entonces algunos sectores de la doctrina han intentado convencernos de las ventajas del llamado “federalismo asimétrico”, el ideal de Quebec trasplantado a nuestra tierra. Pero no hay nada en nuestro sistema que permita tal comparación. Un federalismo singular y asimétrico al estilo de Quebec sólo puede producirse cuando frente a un determinado territorio diferenciado existe un todo restante homogéneo. Pero esa fue precisamente la decisión que excluimos los andaluces hace 25 años: la respuesta no fue un todo restante homogéneo, sino un sistema de Comunidades iguales para todos.

Claro que es posible que esta realidad haya sido deliberadamente ignorada: o al menos así lo han entendido desde algunas de las mal llamadas comunidades “históricas”. ¿A qué se debe, si no, el reiterado boicot que han llevado a cabo contra las conferencias sectoriales, los organismos encargados de la coordinación interterritorial? Puede sonar a broma, pero la razón era así de simple: ¿cómo puede sentarse un consejero vasco o catalán en la misma mesa que uno andaluz o extremeño? Ciudadanos de primera y de segunda, ese es el objetivo descarnado de la nueva propuesta.

Visto desde una perspectiva general, si consideramos los síntomas de crisis del sistema de valores que alumbró al Estado de bienestar, el fenómeno no tiene en realidad nada nuevo: hace tiempo que en Italia la *Liga Norte* viene clamando en su particular revuelta fiscal contra el sur. La misma que atenaza a los alemanes desarrollados occidentales frente a los territorios del este. Igualdad y solidaridad son en efecto valores amenazados por los intereses egoístas de los pueblos desarrollados del norte.

Lo mismo sucede en España. El seudonacionalismo con el que se revisten las Comunidades ricas del norte sólo sirve como mero enmascaramiento: se trata en realidad de una pura y simple revuelta fiscal, y nos engañan quienes pretenden llamarse “de izquierdas” defendiendo tales propuestas.

Lo más paradójico es la falsa sensación de extrañeza que muestran algunos portavoces catalanes ante el creciente malestar que su propuesta ha suscitado. Cuando los viajeros de un tren, que entre todos dirigen a quien lleva la locomotora, comprueban que uno de ellos pretende establecer una relación bilateral aparte con el maquinista ¿qué sensación se produce? No nos engañen, por favor, con su falsa inocencia. La posible ignorancia que los españoles teníamos de estos asuntos durante el periodo de la transición podría ser disculpable, pero a estas alturas -con lo que ha llovido desde entonces- todos sabemos ya de qué va esto de las autonomías. Y lo que tenemos es la realidad histórica consolidada de nuestro sistema democrático que se fundamenta en un sagrado principio constituyente, la cláusula de igualdad.

A los andaluces nos han tocado en la cláusula sagrada. Y ha sido el gobierno Zapatero. La última vez que se hizo esto fue a cargo del gobierno de la UCD y así empezó su hecatombe.

NO FOTOCOPIABLE

(Tras publicarse el proyecto de Estatuto de Cataluña)
2005

Dicen que es un fenómeno derivado de la globalización y la revolución de las comunicaciones, aunque en realidad se trata de algo que ya existía hace tiempo. Las copias, las reproducciones o imitaciones ilegales inundan nuestros mercados sin que los titulares de la propiedad o de la patente puedan hacer poco más que protestar. Y es que seguramente es como ponerle puertas al campo: al fin y al cabo, el progreso de la humanidad ha consistido siempre en imitar las

buenas prácticas ajenas. El inventor del hacha, del arado o de la noria no eran exactamente titulares de una propiedad sino auténticos benefactores de la humanidad cuyas innovaciones fueron imitadas por todos. En eso consistió el progreso humano.

Sucede lo mismo a diferente escala en la evolución de nuestro Estado autonómico. Por más que apliquemos la lupa para detectar minúsculas originalidades o singularidades estatutarias, la realidad es que todos hemos ido copiando de aquí y de allá, imitando lo que se podían considerar como buenas prácticas o innovaciones institucionales. Pero sobre todo, como es lógico, se ha copiado de los que empezaron primero: sus aciertos y sus errores ha sido, en el mejor de los casos, como una pauta de guía para el resto.

Gracias a este fenómeno de interacción plural el proceso autonómico ha avanzado en España a un ritmo espectacular, hasta situarnos en un marco institucional prácticamente cuasifederal. La única lástima es que, si algunas de las Comunidades que son imitadas se enojan por este fenómeno, no tendrán más remedio que aguantarse, ya que no hay una especie de registro de propiedad, un “*copyright*” que les proteja frente a las fotocopias no autorizadas. Sólo así sus modelos institucionales serían únicos y exclusivos, no imitables por nadie más.

Este ha sido el auténtico problema de fondo que ha embargado a los redactores del nuevo proyecto de Estatuto catalán: cómo hacer un texto que no pudiera ser fotocopiado por el resto. Para entender que ésta era exactamente la situación basta comprobar a qué ha respondido la actitud del equipo gobernante en Andalucía: el compás de espera, el ritmo cansino, el *impasse* político, sólo tienen una única razón de ser: el objetivo consiste en esperar y ver. En la esperanza de que el ritmo que baile la primera pareja será el que después marcaremos todos los demás.

Pero como por desgracia no hay un registro de la propiedad para iniciativas públicas, la única forma posible de hacer que un Estatuto no sea fotocopiado es elevar su contenido político más allá de sus límites posibles. O sea, no hacer en realidad un nuevo Estatuto sino más bien una Constitución. Y como ya sabemos que el poder constituyente carece de límites más allá del respeto a los derechos humanos, a ver ahora quién puede más.

La historia no pasaría de lo puramente anecdótico si no fuera por un detalle: que la estabilidad del gobierno Zapatero depende del apoyo catalán. Y es aquí donde reside el auténtico *copyright* del nuevo Estatuto de Cataluña: porque ni Andalucía, ni Galicia, ni Castilla-La Mancha ni otras comunidades pueden hacer caer al gobierno Zapatero. Y como para algunos la estabilidad gubernamental puede llegar a ser en la práctica un valor supraconstitucional, el escenario final está servido: sólo quien disponga de la llave de la gobernabilidad

podrá rebasar los límites. Y el resto ya no podremos bailar el mismo baile que marca la primera pareja.

Quienes consideren que lo más importante es el mantenimiento del PSOE en el poder, entenderán que en este caso el fin justifica los medios: si para ello hay que darle a Cataluña lo que no puede dársele a los demás, ya se camuflará el cambalache bajo una buena campaña de información institucional. De hecho a lo mejor ni eso: bastará con apoyar la propia campaña emprendida por el gobierno catalán. En cambio, quienes no consideren justificable tal estrategia, quedará claro que en el fondo son anti-PSOE; quién sabe si también partidarios de Aznar y de la Guerra de Irak...

Empeñarnos ahora, como hacen algunos, en cargar las culpas contra la propia Constitución de 1978 es como errar el tiro por elevación. Sean cuales fueran las posibles deficiencias del texto constitucional, parece claro que, dos décadas después, había permitido un notable desarrollo territorial sin parangón en la historia política de España: no nos empeñemos en cargar sobre la normativa fundamental responsabilidades que son atribuibles más bien a quienes nos gobiernan.

Si finalmente el gobierno Zapatero consigue sacarnos del abismo en que nos ha metido, ya tendremos a quien votar en las próximas elecciones. Pero si seguimos considerando que la estabilidad gubernamental es un valor que debe situarse por encima de la propia normativa fundamental, lo único que podremos hacer es constatar el grado de deformación monstruosa que el Estado de partidos ha acabado produciendo sobre el edificio de la democracia constitucional. El Estado ha muerto, viva el partido gobernante.

NORTE Y SUR

2005

La confirmación de la alternancia política en Galicia nos permite comprobar el modo como se está reordenando el mapa geopolítico español al cabo de 25 años de vida democrática; cuando encaramos ya la segunda gran oleada histórica de transformación de nuestro sistema.

Hubo un tiempo, a comienzos de la andadura constitucional, en que Galicia constituía un elemento más de la periferia del sistema; es decir, una comunidad que pese a su ubicación geográfica se comportaba como si fuese más bien una pieza del “sur” subdesarrollado, reflejando un proceso social y político caracterizado

por el atraso histórico, el lastre de la emigración y un cierto pesimismo antropológico que se traducía en demandas de desarrollo económico. Un cuarto de siglo después, Galicia comienza a presentar en su comportamiento características propias de las comunidades del norte, donde predomina un cierto pluralismo y donde los procesos de alternancia constituyen una realidad más o menos normalizada.

Haciendo un balance global sobre la evolución del mapa político español, podemos constatar que las únicas Comunidades donde no se ha producido hasta ahora ningún proceso de alternancia son Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. La delimitación del eje norte-sur no puede ser más precisa desde el punto de vista geográfico. Tan exacta como el modo en que se proyectan sobre este eje las reivindicaciones territoriales: para el norte, predominan las demandas reforzadas de mayor financiación, como expresión del nuevo impulso que canaliza los egoísmos colectivos en la escala territorial. Para el sur, el cansino aliento de una demanda de solidaridad que cuenta cada día con menos posibilidades de éxito.

En esta dialéctica, puede constatarse también que la variable ideológica comienza a ser algo perfectamente secundario: porque con independencia de que haya mayorías de derecha o de izquierda, las reivindicaciones de las comunidades del norte suelen tener un claro componente de egoísmo territorial que es repercutido y expresado por sus respectivas elites políticas al margen de su distinto componente ideológico. Y así el papel que desempeña en la práctica la izquierda republicana de Carod-Rovira en Cataluña viene a ser el mismo que representa la Liga Norte en Italia. La defensa de los intereses de las zonas desarrolladas del norte frente a una responsabilidad fiscal que parece beneficiar a las más atrasadas del sur.

Si aceptamos que pluralismo y alternancia constituyen elementos propios de un sistema democrático consolidado, la gran interrogante sería determinar cuáles son las razones que explican el retraimiento hacia el cambio que se produce en el sur de la península; es decir, por qué en estas comunidades (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía) no se ha desarrollado al cabo del tiempo un grado similar de pluralismo y alternancia. Suponiendo que no aceptemos como correcta la hipótesis de una mayor capacidad política de la clase gobernante en estas Comunidades (pues ya sabemos que en todas partes cuecen habas, y que no hay grandes diferencias en la clase política), la duda sería si todavía siguen cabalgando en España los viejos lastres históricos del latifundismo decimonónico, o si la clave reside más bien en las pautas socioculturales de un sur caracterizado por su tejido social desvertebrado y dependiente, propenso a caer en las redes del clientelismo político. Porque tengamos en cuenta que, al fin y al cabo, la dinámica del clientelismo se da en todas partes; y que tan

bochornosa es la práctica de la “*omertà*” (es decir, del silencio mafioso) en torno al 3 por ciento de Cataluña como en el descabezamiento de concejales críticos del PA de Sevilla.

Aunque nos resulte muy duro aceptar la hipótesis, formulada hace años por el dictador africano Robert Mugabe, de que el pluralismo es como un lujo de los países desarrollados del norte, el caso es que, mientras más al sur, el panorama experimenta unos síntomas de erosión y decrepitud que comienzan a ser preocupantes. Y la mejor prueba la tenemos en el paradójico debate sobre el estado de la Comunidad celebrado recientemente en Andalucía, donde el líder de la mayoría gobernante no ha podido enfrentarse en un debate parlamentario abierto a los líderes de los restantes partidos, simplemente porque éstos no son miembros de la cámara autonómica. La apoteosis de la mayoría gobernante no permite ocultar el grave déficit institucional de una cámara que no puede configurarse en la práctica como el foro de enfrentamiento entre los líderes de las distintas fuerzas políticas representativas en nuestra Comunidad.

Si esta ha sido la dinámica histórico-política que se ha generado en España durante un periodo histórico de pleno apogeo de la financiación europea hacia las regiones atrasadas del sur, más vale no pensar en lo que nos espera ante los nuevos horizontes financieros que se avecinan. ¿Será verdad entonces que el pluralismo y la alternancia son como un lujo de los países desarrollados del norte?

LAS ESTRATEGIAS FATALES

(Sobre las movilizaciones populares)

2005

Ya sabemos que la teoría de la democracia esconde a veces concepciones ideales que no se corresponden con la realidad. Como por ejemplo, la idea de que un sistema democrático es siempre permeable a las demandas ciudadanas y que éstas tienen un cauce institucional para desenvolverse, hasta formar parte de los procesos deliberativos de los órganos del estado.

Pero ocurre que a veces no nos damos cuenta de que las vías en apariencia más fáciles en un contexto democrático para resolver problemas concretos, acaban presentando a medio plazo riesgos imprevistos. Así, las manifestaciones populares constituyen una libertad pública de carácter fundamental garantizada por la

Constitución: pero su uso como un arma política cotidiana puede constituir un reflejo de profundas deficiencias en la permeabilidad del sistema, y acabar generando a medio plazo una perspectiva de incertidumbre hasta volverse como un *boomerang* contra las propias instituciones democráticas.

Y es que el impulso populista que lleva a ocupar la calle, a invadir con las masas el espacio público, se presenta frecuentemente como la manifestación suprema de la democracia, con resonancias del viejo imaginario colectivo de la toma de la Bastilla. Parece como si los gobernantes en el poder padecieran un alto grado de sordera, que obliga a los ciudadanos a asumir un tipo de comportamiento heroico o radical, echándose a la calle. El riesgo consistirá en que, avanzando en esa dinámica, tales manifestaciones puedan llegar a concebirse y a utilizarse como instrumentos de una estrategia para provocar la alternancia.

El peligro lo hemos comenzado a percibir en algunos países de la antigua periferia soviética, donde las llamadas “revoluciones de los colores”, basadas en la movilización popular y contando con un tácito apoyo de poderes mediáticos de occidente, han conseguido algunos éxitos. Aunque la oleada se ha tornado algo más peligrosa en Latinoamérica, golpeando ya a Ecuador y provocando una situación de caos insostenible en Bolivia. ¿Estamos ante el triunfo de la nueva democracia globalizada, presidida por la presencia directa del pueblo en la calle, o se trata más bien de la amenazante zarpa de una nueva estrategia del “*putsch*” destinada a desestabilizar los sistemas democráticos débiles o en fase de transición?

Aunque hay que recordar que no se trata de un problema de países más o menos periféricos. Precisamente el Partido Popular parece que acaba de recuperar su auténtico pulso tras haber llenado las calles de Madrid en la manifestación de las víctimas del terrorismo; la misma estrategia que siguió el PSOE de Zapatero en la oposición. ¿Se trata entonces del triunfo de la democracia del ruido, donde minorías radicales organizadas pueden llegar a imponerse sobre las mayorías silenciosas? Hay que recordar que se trata además de un circuito de doble eje: donde la manifestación debe ir acompañada de la correspondiente orquestación mediática, tras la que pueden ocultarse otro tipo de intereses organizados.

En la incertidumbre, no sabemos en realidad si es que las instituciones públicas han llegado ya a tal grado de esclerosis que son incapaces de detectar nuevas demandas y de incluirlas en la agenda pública, o si es que más bien hemos entrado ya en una nueva fase histórica -no precisamente más “avanzada”- donde predomina la democracia vocinglera, el rajo populista y los hiperliderazgos bananeros. El resultado a medio plazo parece evidente: la estrategia de la movilización popular conduce a una intensificación de los

conflictos, paraliza la capacidad de respuesta de las instituciones y hace derivar el sistema hacia una peligrosa cuesta abajo donde las estrategias radicales y algunos seudoprogres iluminados pueden hacer su agosto. Los espacios deliberativos, encargados de asegurar la racionalidad y la capacidad de integración del sistema, acabarán así decayendo ante el impacto del slogan y el señuelo de la movilización popular; una fenomenología que inevitablemente preludia la vieja teoría de la “acción directa”, tan grata a los movimientos fascistas de principios del siglo XX.

El hecho de que nuestros partidos políticos necesiten apoyarse en los movimientos de masas para adquirir mayor confianza, no sería al final más que un síntoma de su propia debilidad: o al menos, de su incapacidad para captar y procesar demandas ciudadanas. Seguramente tan preocupados por conservar y mantener sus nichos electorales, no se dan cuenta de hasta dónde pueden conducir determinadas estrategias fatales.

LOS PARTIDOS “CÁRTEL”

2005

Este parece ser el nuevo paradigma de la teoría de partidos. Más allá del apogeo electoralista de los que fueron denominados desde finales de los años sesenta como partidos “*catch all*”, la nueva teorización sobre los partidos “*cártel*” desarrollada a finales de siglo por Richard S. Katz y Peter Mair, se nos aparece como una sofisticada reelaboración de las visiones economicistas del mercado electoral. Sólo que, en este caso, el *cártel* de partidos no depende solamente de la propia decisión de los ciudadanos votantes, sino también de los crecientes recursos que suministra la financiación pública en forma de subvenciones estatales, asegurando así la reproducción de las mayorías y dificultando al mismo tiempo el protagonismo de los partidos minoritarios. Una lógica de mercado que autoreproduce la hegemonía de las grandes organizaciones y que se refleja finalmente a través del propio sistema de los *mass media*.

Destaca también en este nuevo modelo una cierta lógica funcional que permite responder razonablemente a las demandas de pluralismo del sistema: porque en todo sistema democrático la mayoría gobernante “necesita” de la presencia de algún *partenaire* con el que poder atender a las exigencias deliberativas de la vida parlamentaria y responder a las periódicas demandas de consenso en torno a ciertas políticas de estado. De este modo, la lógica del sistema

de partidos *cártel* sirve a las necesidades de autoreproducción del sistema y a sus perspectivas de futuro. Es decir, que al final los miembros de la clase política se necesitan entre sí e incluso se apoyan recíprocamente, aunque sea de forma indirecta, durante los difíciles periodos en que alguno de los partidos *cártel* tiene que estar en la oposición. El nuevo modelo de partidos daría así respuesta a la creciente necesidad que tienen los políticos profesionales de rebajar los costes de una derrota electoral, al mismo tiempo que se restringe la entrada de nuevos protagonistas en la arena de la competencia electoral.

Pero a cambio de esta estabilidad “por arriba” parece que, alternativamente, los partidos políticos se estarían alejando progresivamente de la sociedad para pasar a depender más bien de la esfera del estado. Es posible que aquí radique alguna de las claves del creciente fenómeno de alejamiento entre la esfera política-competitiva y los soportes sociales que deben constituir su base, colocando a los afiliados y militantes en un papel secundario. Y así, en última instancia, el pluralismo político se ajustaría a unas pautas similares a las del mercado, pues las diferencias entre los partidos-*cártel* acabarían siendo las mismas que justifican la opción entre la Coca-Cola o la Pepsi-Cola.

Si tal desarrollo del sistema de partidos es consistente, probablemente nos permite una clara explicación para entender la nueva reorientación que viene experimentando el proceso de reforma de los Estatutos de autonomía en España, siguiendo la pauta marcada por la experiencia valenciana. Una explicación que sería aplicable también al reciente acuerdo entre Manuel Chaves y Javier Arenas para otorgarse un trato preferente en el debate sobre la reforma del Estatuto de Andalucía. Son acuerdos que permiten entrever una cierta normalización del proceso político después del traumático marzo de 2004. Aunque siempre dependiendo en nuestro caso de cual sea el órdago final con que nos aguarda el tripartito catalán: la amenaza de hacer caer al gobierno Zapatero si no se atienden sus demandas exclusivas y diferenciadas.

Pero esta dinámica partidista tipo *cártel* serviría también para explicar el progresivo retraimiento de amplios sectores de la sociedad, así como la relativa marginación de aquellos grupos políticos minoritarios u organizaciones sociales que aportan alternativas sustanciales al sistema y que, conforme a este modelo, parecen inexorablemente condenados a una eterna condición de minorías.

En alguna medida el panorama nos recuerda el largo periodo de estabilidad que vivieron los partidos de cuadros o de notables durante la etapa histórica del liberalismo, en el siglo XIX, cuando el mecanismo del sufragio censitario servía para excluir a una gran parte de la población de la vida política activa; eran unos partidos que

convivían pacíficamente vinculados al estado y relativamente de espaldas a la sociedad. Y del mismo modo que el movimiento sindical sirvió entonces como un banderín de enganche para los sectores excluidos, ahora serían los nuevos movimientos sociales y las vías de protesta directa los únicos instrumentos con los que la sociedad intenta remover las tendencias oligopolistas que se registran en el sistema dominante de partidos.

La estabilidad por arriba del sistema que trae consigo este nuevo modelo de partido “*cártel*” parece provocar al mismo tiempo una inevitable restricción a las posibilidades de desarrollo democrático desde abajo, condicionando así los desafíos de una sociedad democrática avanzada en el siglo XXI.

¿INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, O DE CUOTAS?

2005

Cuando en la década final del siglo pasado el gran filósofo Jürgen Habermas formuló su llamamiento de un “retorno a las instituciones” levantó una gran oleada de expectativas en el pensamiento político contemporáneo. Diversas corrientes científicas como el neoinstitucionalismo, la crítica radical a la democracia y muchas otras, parecían encontrar ahora un nuevo marco de síntesis que podía servir como respuesta histórica a los desafíos de la crisis en los estados democráticos.

Pero bien pronto el debate comenzó a entrar en terrenos pantanosos. Porque cuando se habla de recuperar las instituciones ¿se trata de una visión de las mismas como pura arena dentro de las cuales quienes operan al final son exclusivamente los partidos políticos? ¿o por el contrario, se trata de ir más allá del tradicional ámbito de la competencia y el pluralismo para otorgar a las instituciones una proyección autónoma, más general y estable?

Desde diversos medios académicos, y también desde el seno de la Unión Europea, se ha venido apostando por la denominada opción no-mayoritaria; es decir, por considerar que al menos ciertas instituciones independientes deberían ser ámbitos no sometidos al “cortoplacismo” y a las servidumbres electoralistas y clientelares que impone la lógica partidocrática. Se trata de una filosofía que teóricamente debe encontrar su mejor ámbito de proyección en las

instituciones llamadas de control, como por ejemplo el Consejo Consultivo o el nuevo Consejo Audiovisual de Andalucía.

Por desgracia parece que este nuevo discurso apenas ha tenido hasta ahora una recepción perceptible en España, y menos aún en Andalucía. La concepción de ciertas instituciones como esferas “independientes” (por más que se les atribuyan efectivamente competencias inspiradas en los principios de imparcialidad, neutralidad o independencia) parece algo extraño y exótico en nuestra práctica cotidiana, frente a la consagrada lógica de las cuotas partidistas corregida en su caso por factores territoriales o de género.

Subyace en esta concepción tradicional un sordo rechazo a la propia existencia de un conocimiento independiente, de carácter más o menos “científico”, susceptible de incorporarse a los procesos de decisión o de control en la esfera pública. O sea, que aquí todos seremos al final o del Real Madrid o del Barça, pero los llamados independientes, realmente no existen. ¿Será que nuestros medios intelectuales y académicos han acabado por convertirse en simples epígonos de las organizaciones partidistas? ¿De qué nos servirá entonces invocar a esos “técnicos y científicos” cuando se requiera su conocimiento para dilucidar determinadas cuestiones?

La paradoja consistirá entonces en determinar cómo pueden tales instituciones emitir informes o resoluciones teóricamente “independientes” cuando sus miembros son al final designados (y se supone que controlados) siguiendo la lógica de las cuotas partidistas. Su actuación y hasta su mismo rendimiento final se ajustará a la postre a la lógica previsible de las relaciones entre mayoría y oposición: y la independencia institucional acabará siendo una pura fachada.

Habrá que imaginarse cuántos profesionales independientes se habrán tenido que morder la lengua, laminar sus críticas o practicar en silencio la autocensura, con el objetivo de poder ser considerados como candidatos idóneos para un buen nombramiento. Y también, cuántos mediocres afiliados habrán repetido hasta la saciedad su voluntad de estar siempre a disposición del partido para lo que el partido quiera: ya sea un roto o un descosido.

Cuando diariamente percibimos los bloqueos y disfunciones que experimenta la arena de la competencia política, empeñarse en reiterar la lógica de las cuotas partidistas en la designación de instituciones independientes equivale a ponerle las anteojeras al burro para que siga dando vueltas a la noria. Todo controlado. O como se decía antiguamente, “atado y bien atado”. Y así los andaluces volvemos a demostrar cuál es nuestro auténtico nivel de cultura democrática.

En este contexto, la única preocupación sería la que se nos viene encima con las exigencias de la *gobernanza* europea: porque

cuando se trate de generar mecanismos de cooperación, sistemas de red o procesos horizontales e interactivos en las relaciones entre instituciones públicas ¿habrá que operar teniendo en cuenta exclusivamente el color político de las mismas, y tendremos entonces que trasladar todas estas exigencias a la lógica de la competencia partidista? Realmente es una lástima que nuestro problema, al final, siga siendo Europa.

AÑO 2006

EL SILENCIO DE LOS CHARNEGOS

(Tras el referéndum de ratificación del
proyecto de Estatuto catalán)

2006

Todos sabemos que un referéndum de ratificación tiene escasa relevancia política. No es más que una especie de visto bueno final a una decisión previamente adoptada por las instituciones correspondientes. Puede servir en todo caso para tomar el pulso a la opinión pública, pero sin grandes sorpresas ni hallazgos espectaculares. Como máximo, podrá ofrecer algunos vagos indicios o sutiles indicaciones de por dónde respira el electorado, pero poco más. Por añadidura, un referéndum será aún más inoportuno si se convoca en un soleado domingo veraniego, alterando el ocio playero de los ciudadanos.

Lo paradójico y lo preocupante es que un acontecimiento de tan escaso interés ciudadano haya venido precedido de tan alto grado de crispación y juego sucio entre los protagonistas del proceso político; un mal indicio del modo como se sigue canalizando la competencia política en nuestro país, con un desfile de despropósitos que van desde grupúsculos de reventadores jaleados por altos dirigentes del Estado hasta el mismísimo presidente de la Generalidad bordeando los límites marcados por la Junta Electoral. ¿Volveremos algún día a recuperar en nuestro país la sensación de que el llamamiento de las urnas es el momento del juego limpio, donde hay que prescindir de las fullerías, los engaños y las zancadillas?

Por eso la sensación final a la vista de los resultados y del escaso grado de participación no deja de suscitar una cierta perplejidad: ¿en esto consistía finalmente la gran demanda de ruptura de las reglas de juego impulsada por Cataluña? ¿Era esta la sociedad catalana que no se sentía cómoda con el anterior Estatuto, la que se consideraba víctima de un expolio fiscal por parte de los españoles e injustamente agredida como pueblo por un gobierno centralista burdo y desconsiderado?

Si tenemos en cuenta el tremendo impacto que el nuevo Estatuto catalán va a tener sobre la configuración futura de un sistema autonómico que definitivamente parece haber dado por perdidos los valores de la igualdad y la solidaridad interterritorial, lo lógico desde el punto de vista de los espectadores externos, de aquellos a los que no

nos ha sido dada la voz ni el voto para manifestar nuestra opinión, hubiera sido un punto menos que la práctica unanimidad de todos los catalanes: la manifestación rotunda de una voluntad colectiva de ruptura con el “estado español”.

Pero o bien nuestra percepción estaba equivocada o los que estaban algo equivocados eran los propios políticos catalanistas. Al final resulta que poco más de un tercio de los electores catalanes eran quienes al final mantenían tal proyecto: 1,8 millones de ciudadanos los que en la práctica han ejercido este nuevo poder constituyente fragmentado que va a afectar al conjunto del país. ¿Dónde está la voluntad diferenciada como pueblo de todo un conjunto de 5,2 millones de electores?

El caso es que ahora parece que en Cataluña no había sólo catalanes, sino también otros ciudadanos venidos de la inmigración: andaluces, negros, castellanos o magrebíes. O sea, maquetos y charnegos de todo tipo, a los que en democracia no se les puede privar del voto. Por supuesto, algunos de ellos seguramente serán también fieles militantes de sus respectivos partidos, quién sabe si hasta disciplinados piqueteros al servicio de los intereses dominantes que representan sus líderes en Cataluña.

Es posible incluso que en esta dualidad de estratos sociales resida la auténtica madre del cordero: el sorprendente escenario de una venerable y antigua sociedad catalana amenazada por las olas migratorias de los nuevos bárbaros del sur que se multiplican hasta el punto de poder incluso convertirse en mayoría. El riesgo de que lo que no llegó a lograr el franquismo pueda ahora ser conseguido por los procesos migratorios que trae consigo la globalización. Toda una pesadilla para tantos honorables catalanes y *botiguers* pendientes tan sólo de su propio corralito.

Pero no hay por qué asustarse: primero, porque se trata de unos procesos migratorios donde el peligro no viene ni de negros ni de musulmanes, pobres gentes, sino de los genuinos y auténticos charnegos castellanohablantes: los andaluces o los hijos o nietos de andaluces. Por eso era tan necesario contar con su afiliación y su militancia activa, por eso es tan decisivo contar con líderes catalanes venidos del sur, por eso era tan importante cerrar cuanto antes los agujeros del barrio del Carmelo, porque es la propia existencia de la sociedad catalana lo que está en juego. Pero en segundo lugar, debe recordarse que al cabo de más de veinticinco años de mayoría catalanista, el pujolismo y sus políticas educativas han debido producir ya sus efectos: y muchos inmigrantes de segunda generación, sujetos a tan eficaces políticas de inmersión lingüística, han debido ya sentir los efectos propios del síndrome de Estocolmo.

Ante semejante conjunto de despropósitos, nuestros charnegos, esos pacíficos emigrantes dispuestos a buscar un trabajo

y un futuro en una sociedad abierta que esconde en sus entrañas un auténtico volcán, seguramente no han podido encontrar una respuesta clara frente a tal cúmulo de contradicciones. Y su opción ha sido al final la de un sonoro silencio. Lo comprobamos en los datos de algunas de las principales colonias de inmigración de la periferia de la capital: las tasas de participación han sido en Santa Coloma el 40,5 %, en San Adriá del Besós el 39,3, en Badalona el 42,7, en Hospitalet el 45,4, en San Boi el 43,3, en Moncada el 43,8. No le pidamos demasiadas responsabilidades a nuestros emigrantes porque al final, con tanto silencio y tanta abstención, parece que la montaña parió un ratón.

Afirmar en este contexto que nuestros políticos parecen vivir en un mundo distinto al del resto de los ciudadanos, seguramente constituye ya una absoluta obviedad. Que Dios les mantenga iluminados.

LECCIONES DEL REFERENDUM ITALIANO

(Tras el referéndum de reforma constitucional de julio en Italia)

2006

Son las paradojas de la globalización: tan preocupados por mirarnos nuestro propio ombligo, parece una sorpresa comprobar cómo la política comparada nos devuelve una visión distinta de los acontecimientos. Porque el parecido entre el proceso territorial italiano y el español era evidente: se trataba de poner en marcha un proyecto de reforma territorial que en principio iba a beneficiar a las regiones más desarrolladas del norte. Un proyecto apoyado por las fuerzas conservadoras, la derecha y la Liga Norte. Y que contaba, por supuesto, con la oposición de quienes defienden la igualdad y la solidaridad: las fuerzas políticas de la izquierda y, a la vista de los resultados, la inmensa mayoría del pueblo italiano.

Ha sido toda una lección constitucional de nuestros vecinos que deberíamos tener bien presente: con un impecable comportamiento democrático, nada menos que el 53,6 % de los electores (una alta participación no prevista), pero de *todos* los electores italianos, se ha encargado de rechazar rotundamente un proyecto de reforma constitucional (61,3 % en contra, 38,7 % a favor) que pretendía un desarrollo adicional del proceso regional con la posibilidad de romper los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la propia Constitución.

La lección no puede ser más clara: el resultado del referéndum supone una rotunda superación del mito de una Italia dividida en dos

mitades, y sobre todo un rechazo explícito a una reforma desordenada y carente de un auténtico espíritu constituyente en términos de consenso general. A la inversa, el mensaje constituye un claro apoyo a la Constitución vigente y a su configuración de un sistema equilibrado de poderes y de valores: la lección democrática es evidente en cuanto viene a confirmar que una Constitución no puede ser cambiada por la apuesta de una minoría, es decir, que la norma fundamental no está a disposición de las aventuras políticas coyunturales de algunos líderes carismáticos.

Lo primero que sorprende de la experiencia italiana es la forma tan transparente como se perciben las posiciones ideológicas de las partes: quienes están a favor de la asimetría territorial son las fuerzas conservadoras de derecha, quienes apoyan los principios de igualdad y solidaridad son las fuerzas progresistas de la izquierda. Quienes apuestan por el proceso de cambio son las fuerzas conservadoras; quienes se oponen, las fuerzas progresistas. ¿A alguien le suena?

Lo segundo es el modo tan directamente democrático como se ha gestionado el proceso: no se trata de encarar los cambios a retazos, a base de pegar tirones de la manta con el riesgo de dejarla hecha jirones; es por el contrario una llamada directa al pueblo, a *todo* el pueblo italiano, titular indiscutible del poder constituyente.

Y finalmente, la claridad del resultado en las urnas: un mayoritario rechazo a las propuestas de romper el orden constitucional establecido. ¿Cuál sería la posición mayoritaria de los españoles si se nos consultara a todos sobre la posibilidad de reformar la Constitución siguiendo las pautas marcadas por el Estatuto de Cataluña?

Hubo un tiempo en que los españoles considerábamos la experiencia de las democracias europeas como modelos ejemplares a imitar: de hecho, así fue como nació nuestra propia Constitución de 1978, a imitación de los modelos europeos vigentes. El conocimiento de las experiencias ajenas, especialmente en las viejas democracias de nuestro continente, no puede ser ignorado.

Por eso, cuando se nos anima a los españoles a apostar por la innovación y el cambio en nuestra normativa fundamental, la primera pregunta debería ser la de qué tipo de cambio es el que se nos propone: porque todos sabemos o intuimos lo que significan los principios de igualdad y de solidaridad establecidos en nuestra vigente Constitución, como también sabemos lo que significa una experiencia histórica donde a lo largo de más de veinticinco años hemos logrado construir un sistema territorial más o menos equilibrado.

¿A quién le interesa entonces cambiar ese modelo para apostar por la asimetría y el bilateralismo? Obviamente a los territorios más ricos y desarrollados de nuestro país. Embarcarse en ese proyecto constituye así, desde la transparente lección que nos ofrecen

los italianos, apostar por unos valores ideológicos conservadores y de derechas. Lo demás es el puro enmascaramiento de propagandistas camuflados de falsas ideologías. Porque desde los mismos albores del orden histórico contemporáneo, es decir, desde la propia Revolución Francesa, la defensa de los valores de igualdad y solidaridad se configura como expresión de ideales *progresistas* que favorecen a la mayoría y benefician a los más débiles. Pero parece que en España nos hemos hecho tan “modernos” que ya no sabemos ni siquiera distinguir la auténtica solidaridad de la pura expresión de los egoísmos territoriales.

Por eso con la experiencia italiana tenemos por fin un criterio de veracidad: la asimetría cuenta con el apoyo de la derecha, mientras que la igualdad y la solidaridad son y siguen siendo los grandes valores progresistas de la izquierda. Y que cada partido aguante su vela.

LA “REALIDAD NACIONAL”

(Tras aprobarse el proyecto de Estatuto de Andalucía)
2006

Los actores de la recta final del nuevo Estatuto han representado su función correctamente. Alto grado de consenso en un final feliz precedido de su razonable dosis de incertidumbre y suspense. Como es lógico, al final han acabado predominando los intereses políticos de los partidos en la escala territorial sobre la escala estatal.

Focos y luminotecnia sobre el proscenio para ocultar posibles comparaciones odiosas ¿seguimos estando los andaluces en la misma primera línea en que están los catalanes, o esta vez ya ha quedado marcada la diferencia a favor del norte? Mutis de la minoría andalucista a la espera de tiempos mejores.

La opción metodológica por la que se ha apostado parece más que justificada. Si hace 25 años el grito de guerra era que ya somos “del 151”, las nuevas pautas de reordenación del mapa territorial no permiten establecer con claridad un ranking de primeros y segundos: confusión que sin duda beneficia a los que todos sabemos, pero nadie se atreve a decir.

Por eso, en ausencia de un ranking objetivo, más vale beber en las siempre ambiguas aguas de la historia: sobre todo cuando se trata de historias patrias y raíces nacionalistas. Mitos y epifenómenos; episodios singulares que acaso conmovieron escasamente a nuestros

abuelos, pero en los que ahora conviene rebuscar a la búsqueda de las difusas claves para un consenso. Sus detalles, qué más dan; cosas de historiadores y especialistas en andalucismo. Cuando todos nos sentimos protagonistas de la gran tarea de recuperar la memoria histórica los matices pueden resultar secundarios ante la necesidad de salvar la cara.

La pregunta de a quién le interesa realmente si Andalucía es o no una realidad nacional históricamente configurada, seguramente es algo que carece ya de sentido a estas alturas. Cuando en lugar de optar por diseñar sistemas institucionales innovadores y orientados hacia el futuro, los primeros en mover ficha decidieron que se trataba de una cuestión de competencias y de identificación nacional, las claves de la partida quedaban ya claramente condicionadas: y a ver quién va a ser menos.

El problema es que, puestos a ser cómplices, en realidad no sabemos exactamente dónde nos hemos metido: apostar por la bilateralidad significa rechazar la multilateralidad. Es decir, o somos confederales o somos federales, pero lo que no podemos es ser las dos cosas al mismo tiempo. Lo que sucede es que la filosofía del “como sea” parece que se ha consolidado ya en nuestro país incluso en asuntos tan graves como los que se refieren a nuestra normativa suprema: ¿nos vamos a relacionar ahora los andaluces con España de tú a tú, como ya están haciendo los catalanes? ¿Seguimos siendo españoles todavía, o ya somos por fin extranjeros? Y es que en realidad los matices ahora son lo de menos: lo que importa es la foto, el final feliz, el futuro de progreso y bienestar que sin duda nos espera con el nuevo Estatuto.

Confundir las románticas teorías del nacionalismo y su visión organicista de los pueblos y las naciones entendidas como entidades espirituales conformadas a lo largo del tiempo y de la historia, con las exigencias de los egoísmos e insolidaridades de los pueblos más ricos, no es más que una forma sutil de ocultar las auténticas realidades. Al fin y al cabo los italianos lo tienen más claro y el mensaje de la Liga Norte no admite confusiones: el dinero de los pueblos más desarrollados debe ser sólo para ellos y no para repartir en viejas apuestas de solidaridad interterritorial o en valores obsoletos como la igualdad.

Pero nosotros tenemos ahora la obligación de imitar a los que van por delante y los que vengan detrás que arreen. Si se trata de hallar las claves históricas que definieron nuestro ser nacional en un incierto pretérito, es sólo cuestión de buscar y ya las encontraremos: quien sabe si así estamos contribuyendo a repetir la jugada y va a resultar que nos encontramos, como a principios del siglo XX, ante la descomposición aguda de un régimen que fue incapaz de consolidarse históricamente. Sólo nos falta, para culminar la jugada,

acudir todos al Parlamento europeo para adquirir el ansiado reconocimiento internacional.

Con el hallazgo de las auténticas raíces históricas de nuestro ser nacional, los andaluces ya estamos admitidos en el selecto club de las naciones que conformarán la futura confederación ibérica. El único detalle, apenas sin importancia, está en el papel de las masas: aquellas movilizaciones populares del 4 de diciembre, aquel heroísmo colectivo del referéndum de iniciativa ¿de qué nos sirven ahora? Seguramente como un nuevo bagaje para enterrar en el baúl de la historia.

LIDERAZGOS

2006

La investidura de José Montilla al frente del gobierno catalán ha suscitado un aspecto de interés para la teoría política. Y es que por primera vez en la experiencia española un gobernante ha tratado de definir los perfiles de su propio liderazgo: lo que constituye una evidente novedad, en la medida en que normalmente los perfiles del liderazgo de un gobernante los establecen sus propios receptores, es decir, los ciudadanos; o, en todo caso, los periodistas que se encargan de destacar los elementos más característicos de su personalidad y su proyección pública.

Durante el siglo XX el liderazgo político ha evolucionado en paralelo a la expansión de los medios de comunicación. Así en la primera mitad del siglo era la voz del político, retransmitida a través de la radio, la que marcaba el perfil del gobernante: Churchill o de Gaulle se configuraron como héroes de la resistencia contra Alemania gracias a su presencia en las ondas. En la medida en que la percepción visual era más bien escasa, la imagen del líder se transfiguraba hasta convertirse en una especie de superhombre, en un auténtico héroe con unos rasgos que lo hacen superior a los demás. De hecho, el propio liderazgo que proyectaban los dirigentes de los regímenes fascistas se ajustaba a estos parámetros.

La llegada de Kennedy en los años sesenta marca el nuevo apogeo de la televisión, que inicialmente trata de reproducir los mismos elementos heroicos: la sonrisa perfecta, el maquillaje a punto, el discurso cuajado de elementos seductivos.

La siguiente fase evolutiva parece marcar un cambio en la proyección mediática surgiendo la figura del líder como un hombre corriente, con sus fallos y sus defectos que le hacen parecer más

humano y por lo tanto más aceptable ante los ciudadanos: cuando Gerald Ford se tropezaba en las escaleras del avión o cuando Ronald Reagan perdía la memoria o el apoyo en la chuleta y salía del apuro contando un chiste, suscitaban oleadas de comprensión y simpatía. Es lo mismo que podía pasarnos a cualquiera de nosotros.

Teóricamente nos encontraríamos ya en una tercera etapa donde las características del liderazgo no aparecen tan bien definidas, entre otras razones porque el abanico de estilos se ha hecho más plural e incluso multicultural: desde el rajo caribeño de Hugo Chávez hasta el indigenismo militante de Evo Morales, pasando por los diversos matices del “buenismo” ibérico o el liderazgo tranquilo que practican algunos líderes europeos como Angela Merkel.

Lo paradójico del caso Montilla es que, más que un líder político, pretenda transmitir la imagen de un buen gestor. El problema es que, al carecer de un balance brillante al frente del ministerio de industria, la única capacidad gestora que finalmente puede ofrecer sería la del propio aparato del PSC. Y eso es precisamente lo contradictorio: porque gestionar el aparato de un partido supone moverse en ámbitos de opacidad, de luchas entre facciones y conflictos de influencia canalizados a través de reglas no formalizadas donde prima la competencia, la ambición y a veces el juego sucio: la cara oscura de la política desde los remotos tiempos de Maquiavelo. La capacidad para gestionar el aparato consiste en la habilidad para sobrevivir y predominar en el ambiente más gris y mediocre que ofrece la vida política: lejos de los ciudadanos y al margen de toda publicidad y transparencia. ¿Es ese el bagaje que pretende ofrecer Montilla a los ciudadanos catalanes?

La terrible duda que se nos suscita es que ese estilo venga a ser algo así como la aportación andaluza a la nueva política del siglo XXI: que dirigir el mundo cerrado y competitivo de un aparato partidocrático pretenda ser la pauta en la que se inspira la experiencia de un gobernante; y que la “cultura” adquirida en tales ambientes sea la que pretenda imponerse en la ciudadanía. La partidocracia como paradigma de la nueva política.

Dejando a un lado las justificaciones concretas del caso Montilla (pues al fin y al cabo, cuando quien accede a la presidencia del gobierno es el líder del partido que más votos ha perdido en las elecciones, seguramente no cabe pedir demasiado en términos de liderazgo), lo que resulta preocupante es que algunos gobernantes pretendan convencernos de que bastan algunas frases de estilo “buenista” para superar los perfiles de imagen -espalda encorvada, mirada huidiza, nariz alargada, sonrisa falsa- que son propios del profesional de la política de aparato.

A la vista de este panorama, no sabemos si sería mejor pedir que nos dejaran a los propios ciudadanos decidir quiénes y por qué son realmente dignos de convertirse en nuestros auténticos líderes.

LAS REGLAS DE JUEGO

2006

La imagen la describió brillantemente el filósofo John Rawls al referirse al modo como deben definirse los principios de justicia que rigen en todo orden social: hablaba de un “velo de ignorancia” en el sentido de que, cuando se trata por ejemplo de repartir una tarta, los sujetos que participan en el reparto no deben saber de antemano cuál es la porción que le va a corresponder a cada uno. Sólo de esta manera se conseguirían unos criterios de reparto entendidos como principios de justicia que fueran plenamente justos y válidos para todos.

Aunque teóricamente éste podría ser un criterio aplicable a toda la actividad legislativa, parece que los parlamentos contemporáneos hace tiempo que ha abandonado esta pauta. El viejo ideal de las leyes entendidas como normas justas, generales y permanentes que surgen de forma espontánea del propio orden social -a través de la costumbre o de la práctica judicial- y que solamente tienen que ser “formalizadas” por los parlamentos, ha sido sustituido por la noción de ley concebida como pura decisión política de la mayoría: una decisión orientada hacia ciertos objetivos o metas, donde los criterios de justicia no pretenden tener ya un carácter absoluto sino meramente instrumental u operativo. Lo que seguramente explica las numerosas deficiencias de técnica legislativa que se detectan en los ordenamientos contemporáneos así como los resultados a veces sorprendentes o imprevistos que producen ciertas leyes.

Sin embargo, la exigencia del filósofo americano seguiría manteniendo su vigencia cuando se trata no ya de leyes ordinarias sino de las normas fundamentales, como la Constitución o los Estatutos. En la práctica, éste suele ser precisamente el contexto histórico donde se producen los procesos constituyentes cuando, tras instaurarse un nuevo régimen, los partidos recién elegidos aún no saben cuáles van a ser sus perspectivas electorales de futuro. En este contexto, su labor de definición de las normas fundamentales tiene algo de ese “velo de ignorancia” del que hablaba Rawls, porque no se sabe quiénes van a ser en el futuro las mayorías o las minorías.

En cambio, cuando se trata no ya de crear *ex novo* las reglas básicas sino de modificarlas sustancialmente, la situación cambia drásticamente porque los partidos se ven obligados a apostar en el juego teniendo en cuenta sus perspectivas electorales de futuro que -ahora sí- pueden calcular con cierta aproximación. Esta parece haber sido la dinámica infernal que llevó a los partidos catalanes a proponer un texto de Estatuto tan

maximalista, más parecido a una auténtica Constitución: inmersos en una dinámica competitiva de autodefinición nacionalista, todos se empeñaron en apostar por ver quién daba más. Y así salió lo que salió.

El problema es que tampoco los partidos representados en las Cortes Generales se ven libres de esta contradicción: y como todos se empeñan en apostar para ganar, nadie sabe si al final el proceso de consenso se va a traducir en un feliz reflejo de los nobles intereses generales, o si se trata más bien de una timba de tahúres que intentan engañarse unos a otros. La situación se complicaría adicionalmente cuando, al tratarse de varios procesos de reforma de Estatutos, los cálculos de posibles pérdidas o ganancias se multiplican e incluso pueden llegar a visualizarse por parte de los propios ciudadanos. En este contexto la pretensión de algunos políticos de que al final todos saldremos ganando, sólo puede interpretarse por los ciudadanos como una auténtica sarta de mentiras.

La sobredosis de competitividad electoralista en que nos movemos produce a veces el efecto de impedirnos percibir los efectos a largo plazo de ciertas decisiones o normas fundamentales de carácter institucional. Y cuando los árboles no nos dejan ver el bosque, puede llegar a diluirse la distinción entre medidas políticas coyunturales (al servicio de la competitividad electoral a corto plazo en que se mueve el sistema de partidos) y reglas de juego de carácter fundamental destinadas a tener vigencia a largo plazo. Por eso cuando se trata de cambios en la normativa fundamental, no cabe encontrar una justificación suficiente en la existencia de una “voluntad política”, por más que ésta trate de ampararse en el sagrado manto de la decisión de los electores.

Esa misma distinción entre reglas de juego y cálculos políticos de coyuntura es la que parece estar presente en las paradójicas y contradictorias valoraciones del conflicto suscitado a propósito de las caricaturas sobre Mahoma. Si aceptamos que la libertad de expresión es una regla fundamental de las sociedades libres, parece claro que todo conflicto producido por una eventual lesión sobre otros derechos o valores tendrá que remitirse a la instancia judicial. Pero si nuestras valoraciones se dejan llevar por cálculos de coyuntura o por prejuicios valorativos de carácter ideológico, en tal caso (y si no aceptamos como bueno el diagnóstico del miedo que reflejaba la portada del semanario satírico “*El Jueves*”) sólo podremos acabar llegando a donde ya hemos llegado: por una parte opiniones teóricamente calificables como de “izquierda” defendiendo las posiciones del islamismo, y por otra perspectivas procedentes de la “derecha” apostando por la defensa a ultranza de la libertad de expresión.

Ni el mismísimo Picasso, en su etapa más cubista, podría haber imaginado una “deconstrucción” tan monumental del orden de valores que surge de un elemental sentido común. Prisioneros de la competitividad bipolar en que ha decaído el sistema, no sabemos recordar que hay principios que están más allá de la derecha o la izquierda.

LA HORA DE LOS JUECES

2006

Que la investigación judicial y policial consiga sacar a la luz algunos casos de flagrante corrupción política constituye siempre una buena nueva. Sería la prueba evidente de que nuestra democracia mantiene mecanismos de control que permiten asegurar la transparencia y la limpieza de la gestión pública.

Naturalmente, ya sabemos que en nuestro país la justicia es muy lenta y por eso sólo cabe lamentar que sus actuaciones no sean más rápidas. Ahora resulta que todos sabíamos lo que pasaba en Marbella, y más que nadie nuestro desaparecido maestro Félix Bayón. Pero hasta que los jueces no se han decidido a actuar, parecía como si todo fuese un secreto a voces que carecía del necesario reconocimiento oficial. Al parecer ni siquiera los propios inspectores de Hacienda se enteraban muy bien de lo que estaba pasando.

Lo curioso es que los casos más recientes estén localizando diversos asuntos de corrupción que no afectan a los partidos mayoritarios: algo que en principio se supone que deberíamos considerar como una buena noticia. Cualquiera podría extraer entonces la ilusionante conclusión de que, en consecuencia, la mayor parte de la gestión pública de nuestras administraciones y organismos públicos, la que está en manos de los partidos mayoritarios, se desenvuelve con toda limpieza y con la mayor transparencia. Una magnífica conclusión que sería plenamente correcta si no fuera porque choca con el más elemental de los postulados de la ciencia política: el de la probabilidad estadística.

Por eso, cabría plantearse la duda razonable de si las recientes actuaciones judiciales forman parte de una auténtica campaña general de limpieza contra la corrupción en cualquier ámbito o sector de la cosa pública, al estilo de la gran campaña de "Manos Limpias" que en Italia consiguió acabar con el anterior sistema hace algo más de una década; o si de lo que se trata por el contrario es más bien de "limpiarle el camino" al *cártel* de partidos dominantes de cara a las elecciones locales del próximo año. Y en consecuencia, si el sistema judicial está actuando con plena independencia y autonomía, tal como exige la Constitución, o más bien si se mueve como un instrumento dirigido o subordinado a las exigencias de los grupos dominantes que controlan el proceso político.

La clave, como siempre, parece encontrarse en el reiterado electoralismo que preside nuestro proceso político. Y es que ya se sabe, cuando se aproximan las elecciones (en este caso, las locales de 2007) todos empiezan a moverse para ver quien saca la mejor tajada. Y como al final las elecciones son cosa de los partidos, pues a ver cómo se las entienden entre ellos. Los casos de corrupción serían así como auténticas armas arrojadas, instrumentos oscuros al servicio de la propia competencia entre partidos: papeles, documentos y dossiers que circulan misteriosamente entre los pliegues ocultos de la actividad política. Un tipo de asuntos que al parecer manejaba con maestría el mismísimo Jesús Gil en Marbella.

Lo paradójico es que en esta reiterada tensión electoralista que enfrenta a los partidos, nadie se acuerde al final de los ciudadanos. Porque se supone que, en definitiva, los que tenemos el protagonismo en última instancia en las elecciones somos los ciudadanos, en nuestra condición de votantes. Y como ciudadanos votantes, hay algunas cosas que deberíamos tener perfectamente claras con anterioridad a la convocatoria de las próximas elecciones locales previstas para el año 2007. Algunas cosas que afectan a la vigencia efectiva de las leyes y que seguramente deberían aclararnos los jueces. Por ejemplo, deberíamos tener claro si en vísperas electorales podremos dedicarnos impunemente al divertido juego de apedrear las sedes del partido gobernante, o a organizar manifestaciones “espontáneas” en contra del gobierno, o a poner en marcha campañas paralelas a través de mensajes de móviles incluso durante la jornada de reflexión.

Se supone que son asuntos sobre los que existen previsiones legales establecidas en la Ley orgánica del régimen electoral general; mandatos normativos sobre cuya vigencia efectiva los jueces deberían aclararnos algo con anterioridad a la próxima campaña. Porque, en caso contrario, los ciudadanos nos sentiremos en la más absoluta impunidad, y la propia campaña electoral correrá el riesgo de acabar convirtiéndose nuevamente en una especie de guerra de todos contra todos donde al final el ganador será quien tenga la zarpa más poderosa, los piqueteros más activos o el apoyo mediático más decisivo. Y a ver quién es el Berlusconi que acepta luego pacíficamente los resultados.

Por eso debemos recordar que la responsabilidad de los jueces en su fundamental tarea de control de la cosa pública no afecta solamente al proceloso mundo de la competencia entre partidos. Somos también los propios ciudadanos los que necesitamos que alguien nos limpie el camino y nos aclare algunas dudas sobre nuestras pautas de conducta cuando comienzan a sonar las trompetas que nos llaman a las urnas. Y en este caso, el plazo de actuación de los jueces tiene un término perfectamente fijado: el de la próxima convocatoria electoral de 2007.

EL TREN DE LA SEGUNDA MODERNIZACION

2006

La suerte está echada. Como ha recordado Manuel Clavero en estas páginas, si definitivamente Andalucía va a dejar de ser una región perceptora de ayudas europeas en la próxima década y si vamos a contar con límites a la solidaridad nacional establecidos en el nuevo Estatuto de Cataluña, sólo nos queda preguntarnos cómo

vamos a conseguir adaptarnos a los niveles de competitividad que exige la nueva situación histórica.

Parece que los tiempos de la autosatisfacción y el ensoñamiento han pasado: recordar una vez más lo que Andalucía ha avanzado en las últimas décadas no nos sirve ya de nada ante la inminencia de los que nos queda por avanzar. Por eso, puede ser un buen momento para preguntarnos cómo están nuestros motores.

Pese a la prioridad que hasta ahora ha tenido el debate catalán, debe recordarse que en Andalucía el horizonte programático se llamaba *Segunda Modernización*. Algunos seguramente han imaginado que ese horizonte llegaría por sí mismo, con el apoyo de los fondos europeos o la panacea de un nuevo Estatuto, contando con el piloto automático de nuestros aparatos públicos. Pero es precisamente aquí donde reside el problema, en la creencia de que una vez formulado un horizonte programático sus objetivos se alcanzarán por sí mismos gracias a la eficiencia de nuestros motores institucionales. Sólo hay que esperar y ver: comprobar las líneas de desarrollo y el ritmo de avance.

Que existe capacidad de programación en el sector público andaluz es algo que nadie puede negar a estas alturas: en la práctica tales capacidades se han movilizado ya en torno a ciertos objetivos como la investigación y el desarrollo, el bilingüismo o las políticas de género. Hay otros sectores que mantienen su tenue inercia anterior, como el desarrollo de un espíritu emprenditorial, la innovación tecnológica o la lucha decidida contra la pobreza. Y también ámbitos donde las perspectivas de innovación no consiguen desprenderse de los lastres de una considerable lentitud, como la reforma del sector público, la configuración del territorio o de nuestro sistema de comunicación.

A la hora de la verdad resulta que, como siempre, los avances puntuales no nos permiten echar las campanas al vuelo: los riesgos de una mera modernización cosmética, de limitarse a cambiarlo todo para que al final todo permanezca igual, de rectificar ligeramente las inercias adquiridas sin transformaciones sustanciales, siguen estando presentes. El auténtico desafío, consistente en incrementar nuestra capacidad de implementación de los programas públicos, no parece tener aún una respuesta suficiente. Y en esas condiciones, soñar con un horizonte sin fondos europeos ni solidaridad de los pueblos más ricos de España, puede ser más bien una pesadilla.

Por eso la cuestión no sería tanto el balance en términos de sumas y restas sino cuál es el ritmo de marcha que sigue el tren de la *Segunda Modernización*. Y un tren no puede funcionar sin un maquinista que alimente sus calderas. La elemental pregunta que deberíamos hacernos es quién lleva el tren de la *Segunda Modernización* de Andalucía.

Parece claro que, más allá de su pura formulación como horizonte programático, no se trata de un proyecto presidencial. El Presidente Chaves ha consolidado a lo largo del tiempo una inercia institucional de tipo arbitral o “suprapartes”, y no parece interesado en controlar directamente las riendas de un proyecto que tiene que orientarse ahora entre los recovecos de la compleja realidad, imponiendo un ritmo de avance frente a los más diversos obstáculos y resistencias. Por lo tanto, la cuestión sería si existe un maquinista que haga avanzar a buen ritmo el tren de la *Segunda Modernización*.

Mientras duró la fase de debate y formulación del proyecto, ese maquinista existía: se llamaba Manuel Pezzi y fue capaz de imponer un ritmo decidido, transmitiendo adecuadamente las sinergias de cambio que exigía el proyecto. Pero ahora da la impresión de que el tren camina dejado a su propia inercia, o a merced de las iniciativas de cada uno de los jefes de estación comprometidos con el mismo. Y un tren sin maquinista es como un proyecto sin rumbo que corre el riesgo de acabar retenido en cualquier estación sin término.

La formulación de un proyecto de acción pública no puede separarse de los condicionamientos estratégicos que impone su dimensión transformadora de la realidad: y entre esos factores estratégicos está el de la persona responsable del programa, el maquinista del tren. En ausencia del padre del proyecto, de la figura de Manuel Pezzi, sin una batuta que dirija la orquesta, sin una mano que aparte los obstáculos, sin una voz que reitere el mensaje de cambio histórico al que parecíamos enfrentados, sin alguien en el puente de mando que dirija el rumbo más allá del organigrama competencial de la Junta, el horizonte de la *Segunda Modernización* parece diluirse entre el complejo entramado del sector público andaluz y el choque ante la propia realidad.

Sería un tópico reiterar los diagnósticos tan habituales en Andalucía de la apatía, el conformismo o la existencia de una opinión pública manipulada. Cuando parece que los andaluces no nos ponemos en pie ni siquiera para oponernos a los proyectos de reintroducir la asimetría y la desigualdad territorial en nuestro sistema autonómico, sería absurdo hablar de una falta de motivación colectiva ante un proyecto como el de la *Segunda Modernización* que ni siquiera ha calado todavía adecuadamente en el propio tejido social. Por eso, parece que lo que realmente necesitamos ahora los andaluces es al maquinista del tren.

EL SISTEMA DE PARTIDOS

2006

Durante años hemos vivido bajo la creencia idílica de que los partidos políticos no eran más que nuestros representantes. O sea, unas organizaciones subordinadas a nuestra propia voluntad soberana, la de todos los ciudadanos, y carentes de una línea propia de actuación que no fuera la que a través del voto le marcamos los electores.

Ya hemos comprobado que esta visión tan inocente no se corresponde con la realidad: que lo que los partidos hacen o dejan de hacer no responde exactamente a las demandas ciudadanas sino a una lógica competitiva que les impulsa en una estrategia incontrolable hacia la conquista del poder, con la voluntad de permanecer indefinidamente en él. Lo que supone que nuestra condición de electores se asemeja finalmente a la del ciudadano-consumidor que cree ser plenamente libre y soberano en sus decisiones, cuando en la práctica está sometido a las prioridades que establecen las grandes marcas comerciales y sus estrategias de marketing.

Y del mismo modo que la actividad comercial parece cada día más controlada por las grandes empresas de producción y comercialización, igualmente nuestro comportamiento político se ha ido dejando atraer por las ofertas de los grandes partidos: lo que al cabo del tiempo se ha traducido en una reducción del pluralismo y en una consolidación progresiva del bipartidismo.

La afirmación de que el sistema bipartidista constituye el modelo ideal, como defendiera al francés Duverger en los años sesenta, se demuestra sin embargo bastante incongruente ante unas encuestas sociológicas que confirman más bien la hipótesis alternativa de que el gran banco de votos suele estar en el centro del espectro ideológico. En consecuencia, la dinámica bipartidista sería una simple fachada política tras la que subyace una mayoría de población relativamente ajena a las tendencias de radicalización bipolar que imponen las estrategias partidistas; unas estrategias que, en el fondo, estarían simplemente tratando de “capturar” el gran mercado de votos situado en el centro del espectro ideológico. En otras palabras, si los líderes políticos se radicalizan y se polarizan, la sociedad civil permanecería relativamente ajena e inmune a esta intensificación de la conflictividad.

En principio podría afirmarse que esta es la hipótesis que prevalece en las democracias del universo anglosajón, donde la propia historia ha consolidado a lo largo de siglos un bipartidismo estable, pero dotado de un grado de conflictividad atenuada y apoyado en unas amplias capas medias que prefieren el pragmatismo y la moderación a los grandes alardes de radicalismo ideológico.

La incógnita sería si esa dinámica bipartidista es capaz de operar de forma igualmente constructiva en otro tipo de sociedades, acaso menos habituadas históricamente a la dinámica bipolar y, en consecuencia, dotadas de un menor grado de autonomía frente a los envites de la política. La incógnita de si, en lugar de mantener su autonomía y su propia dinámica, la sociedad civil se acabe dejando enganchar por la tensión de la bipolarización, la agresividad verbal y el discurso bronco y desafiante que acompaña a la deriva bipartidista, en unos países con una escasa tradición histórica en este tipo de sistema de partidos. Y no digamos nada si se trata de una sociedad estimulada por una reanimada memoria histórica de tipo “guerracivilista”, donde izquierdas y derechas pueden contemplarse recíprocamente como candidatos a engrosar listas de fusilables.

El verdadero problema consiste en que, en nuestro país, las únicas opciones que teóricamente podrían considerarse como fuerzas “centristas” son más bien las que, en algunas Comunidades, operan dentro de claves nacionalistas y cuya única estrategia política parece consistir en obtener beneficios territoriales del gobierno de Madrid. Salvo excepciones, cabría pues afirmar que, en rigor, estos serían más bien auténticos partidos anti-sistema, o extra-sistema, en la medida en que sus estrategias y sus ideologías no contemplan como arena de juego la realidad estatal sino sus respectivos corralitos territoriales. Y de hecho, los casos en que se han producido apoyos de fuerzas nacionalistas al partido gobernante en Madrid, se han configurado en la práctica como auténticos intercambios de beneficios territoriales sin una responsabilidad compartida en el gobierno del estado.

De este modo nos enfrentamos a un doble riesgo: por una parte el de considerar como legítimas las interminables demandas de las minorías nacionalistas para arrancar beneficios adicionales al Estado central a cambio de su apoyo parlamentario; por otra el de dejarnos enganchar por la tensión conflictual que trae consigo el bipartidismo hasta llegar a proyectarlo en la propia arena de la sociedad civil.

Cuando parecemos enfrentados a una dinámica de cambio histórico, una de las cuestiones que deberíamos plantearnos los electores es en la conveniencia de cambiar, mediante nuestro voto, el vigente sistema de partidos.

LA CAMPAÑA DE CONVERGENCIA

2006

Debo confesar que, como andaluz, me he sentido muy halagado al saber que *Convergencia i Unió* estaba preparando una campaña en Andalucía para “explicarnos” el Estatuto catalán. Seguramente -pensé- es que se han acordado de nosotros. Les interesa en el fondo nuestra opinión. Aún no se si la campaña ha comenzado ni cuáles son sus contenidos, pero la idea me ha gustado mucho: ¿nos preguntarán después de informarnos qué nos parece su nuevo Estatuto? ¿Será que al final han comprendido que casi la mitad de su población charnega procede de Andalucía? Desde luego, si tratan de crear opinión en Andalucía será porque nuestra opinión les interesa, no cabe duda.

Es probable que con esta campaña nos enteremos con claridad si realmente existe o no un “expolio fiscal” en Cataluña, del que seguramente nosotros debemos ser cómplices activos sin saberlo. Puede que incluso a partir de ahora nos preocupemos de aprender algo de catalán, porque nunca se sabe. También nos explicarán mejor si su famosa “Comisión bilateral” (que no ha sido eliminada por el Congreso) se va a convertir o no en una especie de “*metagobierno*” al que tendrá que dirigirse el Consejo de Ministros antes de decidir ciertos asuntos. Y entenderemos, probablemente, el sentido del artículo 111 mediante el cual se elimina la potestad normativa de las Cortes Generales a la hora de elaborar leyes de bases. Quién sabe si no nos llevaremos al final la sorpresa de descubrir avergonzados que nosotros somos ese famoso “estado español” -en situación de práctica extinción histórica- con el que Cataluña se va a entender de tú a tú a partir de ahora.

Estoy seguro de que, al comprobar que los catalanes esperan sentirse más cómodos con su nuevo Estatuto, nosotros también experimentemos algo de esa sensación de comodidad: al fin y al cabo, parece fuera de duda que los andaluces somos todos muy solidarios. Mediante esta campaña tendremos, por otra parte, una visión más clara y realista de situación política actual, tan llena de mensajes confusos y contradictorios. Comprenderemos que, al fin y al cabo, es algo perfectamente natural que quienes tienen un mayor poder económico quieran también tener un mayor poder político. Que es lógico y razonable que el protectorado de la economía catalana sobre la del resto de España se proyecte también sobre el propio sistema de gobierno. Que es natural, en definitiva, que los más poderosos sean al final los que manden. Por eso no me cabe duda de que los andaluces y los españoles vamos a aceptar con ilusión esta nueva desigualdad que se añade a la de los sistemas forales, que ya fue aceptada en nuestra propia Constitución el año 1978.

Y es que, al final, de lo que se trata es de que todos nos sintamos más cómodos. Por eso, venir ahora con esas cantinelas de la solidaridad interterritorial, con las viejas ideas de la cohesión o la vertebración o con cláusulas de igualdad territorial (cuando no con la invocación de los viejos discursos “franquistas” sobre la realidad histórica de España), todo eso constituye un mensaje claramente desfasado, propio más bien de otras épocas, de los tiempos de la Constitución y la democracia. Aventuras románticas del periodo de la transición. Ahora lo que se lleva es el futuro de la innovación y el cambio, y como nosotros también vamos a cambiar nuestro Estatuto, al final todos montados en la ola del cambio nos sentiremos mejor colectivamente.

Tampoco sé si nos seguirá quedando claro que acabamos de vivir los veinticinco años más constructivos de la historia política española, porque a lo mejor con la campaña de Convergencia terminaremos por descubrir que -sin nosotros saberlo- había en realidad otros pueblos “oprimidos”, como el catalán o el vasco, que a pesar de sus Estatutos de Autonomía llevaban en realidad todo un cuarto de siglo aspirando a alcanzar su liberación colectiva como pueblo. Un derecho que sin duda debemos reconocerles, como supongo que ellos también reconocen a nuestros emigrantes el derecho a seguir expresándose en su lengua materna.

Por eso me manifiesto claramente a favor de la campaña de Convergencia, porque estoy convencido de que en democracia lo que vale al final es la opinión de los ciudadanos. Y cuando todos estemos finalmente a favor del Estatuto catalán, a ver quién es el magistrado del Tribunal Constitucional que, previamente achantado por un referéndum y por una opinión pública favorable, se atreve a opinar otra cosa.

Sólo les aconsejaría a los creativos publicistas que a lo mejor están diseñando ahora la campaña que, por favor, acudan a los disfraces: es algo que se lleva. No me refiero a que se disfracen de negritos o negritas, bastaría tan sólo con unos trajes de flamenca y algún sombrero cordobés; y algo de música del Fary o de los Chunguitos. Quién sabe si no les interesaría contar también con el asesoramiento de Lauren Postigo, una voz andaluza donde las haya. Pero no me utilicen por favor el acento catalán, porque puede acabar sonando algo mal: todo en *andalú*, muy nuestro. Contando con el apoyo de los grandes medios de comunicación de Andalucía, estoy seguro de que lo conseguirán.

LA POLÍTICA DE IGUALDAD

Agosto 2006

Constituye, sin duda alguna, la política estrella. La única que consigue movilizar las ilusiones y los esfuerzos de todo tipo de organizaciones y colectivos progresistas. Seguramente también la más rentable electoralmente. Es posible que la clave de su éxito se deba a que constituye una especie de punto de encuentro entre las viejas tradiciones de la socialdemocracia europea y los nuevos movimientos anti-globalización.

Por eso, hace tiempo que las elaboraciones teóricas y doctrinales más actuales han entendido que debía darse por superada la vieja concepción formal de la mera "igualdad ante la ley": una construcción de la burguesía del siglo XIX tras la que se escondía el predominio de los varones propietarios y que en la práctica impediría el desarrollo de políticas activas en favor de los más desfavorecidos. La política de igualdad pretende recoger así la más noble tradición histórica del *estado de bienestar* y su apuesta por la solidaridad, imponiendo actuaciones positivas de los poderes públicos que deberán desagregarse atendiendo a las diferencias existentes en la propia realidad social: diferencias de género, socioeconómicas, de culturas o tradiciones, de procedencia según los flujos de migración, y por supuesto diferencias de religión y de creencias. Todas ellas merecedoras de un tratamiento respetuoso y distinto, exigiendo en su caso actuaciones de discriminación positiva.

Por más que numerosos juristas no dejen de mesarse los cabellos ante el impacto fragmentador y deconstructivo que este tipo de políticas provocan sobre el consagrado postulado de la igualdad ante la ley y sobre las exigencias de una configuración coherente del ordenamiento jurídico, parece evidente que la nueva política de igualdad se acaba traduciendo en la paradójica emergencia de un universo social de tipo *posmoderno* caracterizado por la diversidad, la heterogeneidad y el respeto a lo diverso, tras el que subyace la confusa polémica entre las nociones de interculturalidad y de multiculturalidad; una polémica semántica que, en todo caso, no consigue alterar la deriva histórica hacia una realidad fragmentaria y compleja, donde la responsabilidad de los poderes públicos parece que debe consistir en atender de una forma diferenciada a las diversas problemáticas sociales que genera el universo globalizado del siglo XXI.

El problema consiste en que, teóricamente, la política de la diversidad y la diferencia se supone que debe coexistir con el propio *Estado de bienestar*, implicando unas exigencias de solidaridad que vinculan a todos los ciudadanos. Pues al final, las políticas de asistencia a los más desfavorecidos requerirán del apoyo del

presupuesto público, es decir, del dinero de todos. Y aquí es donde emerge la contradicción: porque si la solidaridad es por definición una exigencia transversal y universalista, que debe permitir la aplicación de los recursos públicos a determinadas demandas o necesidades sociales contando con el apoyo de todos, el problema consiste en cómo cuadrar el círculo de un desarrollo expansivo de la solidaridad ante un universo social fragmentado, compartimentalizado, deconstruido y dividido en realidades autónomas de tipo social, cultural o religioso. ¿Es posible aplicar el valor universalista y racionalista de la solidaridad a una realidad fragmentada y dividida, tras la que emergen múltiples egoísmos sociales? ¿Es posible atender con los recursos de todos a las necesidades singulares de cada colectivo, de cada comunidad, de cada grupo social, a través de políticas activas que deben apoyarse en la financiación pública?

Se trata de un problema que, por su dificultad, procura eludirse bajo la varita mágica de imaginar que la hacienda pública estará siempre rebotante de caudales dispuestos a ampararnos a todos bajo la cobertura del Estado protector. Pero en la práctica el valor solidaridad sólo se ejerce socialmente de una forma activa y responsable allí donde existe un cierto grado de homogeneidad o de unión entre todos. Este era el auténtico sentido comunitario que tenía el estado del siglo XX cuando consiguió dar a luz al hallazgo del *Estado de bienestar*: el último gran impulso de la modernidad occidental.

El problema es que una realidad social fragmentada, cuajada de egoísmos difusos, corre el riesgo de debilitar los vínculos solidarios, suscitando la respuesta alternativa de que las diferencias se las pague cada cual de su propio bolsillo. Esta realidad nos resulta relativamente fácil visualizarla en su proyección territorial explicando el egoísmo de ciertas Comunidades autónomas; pero el proceso de feudalización de la realidad contemporánea se proyecta igualmente en sus múltiples recovecos sociales, afectando a todo tipo de grupos, comunidades o colectivos diferenciados. Cuando los viejos revolucionarios desplegaron sus consignas de libertad, igualdad, solidaridad, seguramente no eran conscientes del cúmulo de contradicciones históricas que acabarían emergiendo al cabo del tiempo.

LA REALIDAD INVERTIDA

2006

La secuencia es bien conocida por todos: un jugador de fútbol golpea a otro con un tremendo cabezazo y es inmediatamente sancionado y expulsado. Unas semanas después, el jugador agresor es aplaudido como un héroe y el agredido es menospreciado como un oscuro villano. La única incógnita parece consistir en descubrir la justificación; porque se da por supuesto que la agresión estaba justificada: ¿qué fue lo que le dijo para provocar tan razonable reacción? Ni los primeros teóricos franceses del *situacionismo* pudieron soñar con una inversión tan absoluta de la realidad.

Es posible que se trate de una peculiar manifestación masificada del nuevo tipo de pensamiento débil propio de la posmodernidad. El único riesgo consistiría en optar por la vía fácil de deslizarse a través de esta nueva forma de reconstrucción de la realidad para comprobar sus consecuencias en cualquier otro tipo de circunstancia. Así cabría entender, por ejemplo, que la agresión israelí contra el sur del Líbano estará igualmente justificada (“desproporcionada” es la dulce versión que nos ofrece el lenguaje diplomático). Del mismo modo que habrá que aceptar que, en realidad, las elecciones mexicanas las ha ganado López Obrador y por ello estará plenamente justificada su labor de agitación y movilización de masas: porque las masas, ya se sabe, nunca se equivocan.

La anunciada emergencia del irracionalismo propio de los tiempos más oscuros de la humanidad nos sitúa ante el caleidoscopio de un presente heredero de todas las posmodernidades, donde parece que resulta fácil y al alcance de todos reconstruir una nueva versión virtual de la realidad, para que así cada cual pueda identificarse más fácilmente con ella: nuevas historias de buenos y malos que nos permitirán encajar de una forma más cómoda las duras manifestaciones del tiempo presente. Porque al final, parece que lo que importan no son los hechos sino el “buen rollito”. Más vale no imaginar lo que surgiría de la aplicación de este argumento a la relación entre los terroristas y sus víctimas. Y no digamos nada si de lo que se trata es de reconstruir con estos mimbres la propia historia: por esta vía, ya conozco yo a unos cuantos amigos historiadores que estarán soñando con una prejubilación anticipada.

Es probable que el impacto perverso de esta nueva forma de interpretar la realidad se haya generalizado imperceptiblemente de tal forma que, a estas alturas, ya no nos interesa la propia realidad sino sus versiones reconstruidas. Y así podremos concluir que se trata de un problema de todos y que, por lo tanto, no afecta especialmente a nuestros dirigentes: al fin y al cabo, ellos -los políticos- no serían sino

unas víctimas más de esta nueva forma de entender las cosas, y acaso de este modo podremos valorarlos de una forma más benévola. Pues todos sabemos en el fondo lo que significaban afirmaciones tales como que España va bien o que Andalucía está imparable; o como la ocurrencia de acordarse de la alianza de civilizaciones en pleno bombardeo de Beirut.

Se ha celebrado hace poco el aniversario de la resolución del famoso *affaire* Dreyfus, que conmovió a la sociedad francesa hace un siglo: una historia de manipulaciones, mentiras, odios y racismos que ahora hace cien años consiguió resolverse felizmente con el triunfo de la verdad. En sus diversos mensajes y discursos conmemorativos, algunos representantes de la sociedad francesa han insistido en que el *affaire* Dreyfus simbolizó en cierta medida el advenimiento de Francia a la modernidad permitiendo así que el libre juego de los elementos democráticos de la sociedad francesa se enfrentaran con éxito a las fuerzas del oscurantismo y la manipulación, hasta conseguir el triunfo de la verdad. Un siglo después, nuestra visión de este acontecimiento histórico nos llena de dudas y perplejidades ¿tan poco tiempo, sólo un siglo, ha durado entonces la modernidad?

Frente al apogeo de la razón y el triunfo de los paradigmas científicos como instrumentos para el análisis de la realidad a partir de los cuales fue alumbrado el mundo moderno, ahora parece que nos dejamos llevar por el ensueño del pensamiento débil en una nueva oleada de visiones deformantes de la realidad llenas de irracionalismo y prejuicios. ¿Qué pensaría el pobre Dreyfus ante el nuevo ídolo de masas que utiliza heroicamente su cabeza como instrumento contundente de agresión?

Como intuitivamente sugerían los primeros teóricos franceses del *situacionismo*, probablemente sólo nos queda una forma de enfrentarnos a esta reconstrucción ficticia de la propia realidad: la de troncharnos de risa. Por eso, mientras los científicos sigan trabajando en sus laboratorios y los investigadores en sus departamentos, podemos dejar que el velo de una tenue y escéptica sonrisa ilumine nuestra percepción de la realidad reconstruida, visualizada ahora a través de estos espejos deformantes. Pero cuidado, que esta forma de ver las cosas no se salga de los estadios, porque entonces sería reír por no llorar.

CONSTITUCION O GUERRA

(Palestina)

2006

Este parece ser el auténtico dilema al que se enfrenta la humanidad en el tormentoso siglo XXI: o la urna o el fusil. No se trata de un comentario sobre el proceso vasco. Es por el contrario la más dramática de las decisiones que se haya adoptado en el mismo vértice donde se decide el futuro conflictivo de la humanidad: en Palestina, la llamada tierra santa, allí donde llegó hace más de dos milenios aquel mensaje de paz y amor para todos los hombres que conmemoramos por estas fechas.

La decisión del Presidente, Mahmud Abbas, al borde mismo de la guerra civil, de disolver la cámara y convocar elecciones tanto parlamentarias como presidenciales constituye probablemente el acontecimiento más dramático de la historia universal del parlamentarismo: o los fusiles o las urnas, he aquí la decisión simple y clara que deberán adoptar los sufridos palestinos, víctimas de las más oscuras fuerzas e intereses en conflicto que tensionan la política mundial. Son esos ciudadanos palestinos los que ahora tienen la palabra final, en una batalla decisiva que se desenvuelve en las mismas fronteras del mundo civilizado.

Pocas veces en la historia contemporánea del mundo ha sido tan intensa y dramática la tensión entre las dos orillas, civilización o barbarie, por las que discurre la evolución de nuestra especie. Pocas veces una decisión colectiva libre ha tenido o va a tener tantas consecuencias para el desarrollo del orden mundial.

Quienes contemplamos el espectáculo desde las pantallas de la televisión en nuestro cómodo invernadero occidental, dulcemente inmersos en el sopor del consumismo y las ensoñaciones de nuestras campanitas de navidad, seguramente no somos del todo conscientes de la trascendencia del envite. Porque el llamamiento a las urnas, la vigencia efectiva de los principios constitucionales, son factores que constituyen por definición la antítesis de la guerra civil. Por eso el constitucionalismo no acaba de llevarse muy bien con los proyectos de recuperación de una memoria histórica gerracivilista. Lejos del grito de la barbarie, de la ebullición del odio y de la sangre, la llamada a las urnas trata de invocar el sentido civilizado de la convivencia pacífica, donde los conflictos tienen un espacio para canalizarse sin degenerar en la lucha salvaje de todos contra todos. Y el uso de esos instrumentos constitucionales implica la apuesta por el orden civilizado frente a los gritos del odio y el horror de los disparos y las armas.

Deliberada o inconscientemente, no lo sabemos, Mahmud Abbas nos está dando a los ciudadanos occidentales y a todos los

habitantes del mundo una última lección de supervivencia civilizada: el resto será la decisión de los propios palestinos: ¿sabrán estar a la altura de las circunstancias? ¿Serán conscientes de la trascendencia histórica del desafío al que ahora se enfrentan? Porque el llamamiento a las urnas desborda ampliamente los tópicos argumentativos más al uso, como la petición de ayuda internacional o el compromiso de los “grandes” por llevar la paz a oriente medio; significa darle la capacidad de decisión a los propios ciudadanos. Y es posible que aquí sea donde radique la verdadera singularidad y trascendencia del fenómeno: si los impulsos hacia la guerra civil pueden ser alimentados por fuerzas externas, por quienes suministran armas, dinero o consignas, o por quienes promueven el odio y el terror, en cambio la decisión de comparecer ante las urnas prescinde de todo factor de dependencia exterior: es una decisión autónoma y soberana, el milagro endógeno de la democracia, la búsqueda de la paz mediante el ejercicio de la autorracionalidad por parte de cada uno de los ciudadanos votantes. Nunca las urnas, columna fundamental del orden democrático, tuvieron que soportar tanto peso.

Si hace escasas semanas tuvimos la ocasión de ver el comportamiento heroico de muchas mujeres palestinas que se interponían como escudos humanos frente a los ataques del ejército israelí, ahora ese papel de escudo parece que sólo lo pueden desempeñar los propios votos de los ciudadanos. La opción, vista en la distancia, parece sencilla: o dejarse llevar por el odio y empuñar las armas o apostar por la decisión reflexiva y atender a la llamada a las urnas. Sólo quienes hoy se ven sumergidos en lo más profundo de la vorágine pueden ahora poner en marcha sus propios instrumentos para salir de la misma. Ojalá todos podamos aprender algo de esta lección. En tiempos de conmemoración de la paz y el amor universal, parece que el desafío para lograr una convivencia pacífica sólo tiene ahora una salida: el camino democrático de las urnas.

AÑO 2007

EDUCAR CIUDADANOS

2007

La pregunta de si el buen ciudadano nace o se hace no parece tener una respuesta clara. Las experiencias históricas nos demuestran que las grandes revoluciones democráticas fueron impulsadas por una población formada bajo regímenes despóticos, habituada a una cultura de resistencia, que en algún momento consiguió desbordar a las instituciones establecidas para eclosionar en un movimiento popular: lo que significa que las masas revolucionarias no fueron entonces “formadas” en determinadas pautas de educación, sino más bien impulsadas hacia formas de rebeldía en coexistencia con la injusticia y la falta de libertades. Sin embargo, parece que la consolidación en el tiempo de toda democracia implica ciertamente una práctica cotidiana de valores cívicos que deben tener algún medio de transmisión.

En todo caso, la pretensión de “educar” a los ciudadanos ha tenido siempre unos contenidos algo sospechosos, que quienes tienen ya una cierta edad suelen identificar en nuestro país con la vieja “*Formación del Espíritu Nacional*” del franquismo, aquella dudosa asignatura bajo la cual se trasmitían unos conocimientos con frecuencia algo ambiguos e indefinidos.

El problema es que en España, cuando hablamos de educación, parece que llueve sobre mojado. Primero, porque el artículo 27 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la educación, constituye probablemente uno de los principales aspectos no resueltos por el famoso “consenso” que presidió el proceso constituyente: contiene al mismo tiempo el derecho a la educación y la libertad de enseñanza; cabría decir lo blanco y lo negro, sin forma de síntesis.

Segundo, porque si hay una política pública que, al nivel de Estado, pueda considerarse como un rotundo fracaso en nuestra vida democrática, esa es la política educativa, donde cada mayoría gobernante parece que viene con sus correspondientes leyes bajo el brazo impidiendo que los respectivos programas educativos tengan un tiempo suficiente para consolidarse y producir sus efectos previstos. Los resultados cantan periódicamente en forma evaluaciones o estudios estadísticos sobre el nivel de nuestro alumnado sin ofrecer un balance satisfactorio.

Tercero, porque la política educativa constituye uno de los ámbitos competenciales más característicos de las Comunidades Autónomas, y la tormentosa relación entre éstas y el Estado tiene aquí uno de sus ejemplos más característicos, dando lugar a resultados heterogéneos y escasamente coordinados: un reflejo al fin y al cabo del modo como funciona nuestro sistema autonómico.

Finalmente debe recordarse, en relación con las suspicacias de algunos sectores católicos, que nuestra Constitución de 1978 no es una constitución laica sino aconfesional: lo que significa que no existe legítimamente una responsabilidad de los poderes públicos para la defensa activa del laicismo como valor a transmitir en el sistema educativo, sino que éste sería en todo caso un componente programático de una eventual mayoría de gobierno. Una política educativa que pretenda alterar este modelo sería materialmente una especie de mutación constitucional, algo a lo que ya casi parecemos acostumbrados en la actual legislatura.

Con estos mimbres resulta razonable entender que, desde nuestro acceso a la democracia en los años setenta, se haya considerado que la mejor forma de educar ciudadanos sea precisamente la de renunciar a cualquier tipo de adoctrinamiento o de formación específica. Para eso están, lógicamente, las asignaturas propias de humanidades y de sociales, que se supone contribuyen a la formación de nuestros estudiantes desde una perspectiva neutral y científicamente consistente.

El problema sería si esta pauta educativa mantenida hasta ahora ha resultado ser o no suficiente ¿están nuestros jóvenes bien educados en valores sociales o, víctimas del pasotismo y las “botellonas”, se han convertido más bien en una generación hedonista movida por el egoísmo y bordeando a veces de forma cotidiana el puro gamberrismo? ¿Se trata en su caso de un problema que pueda encararse desde la bondadosa hipótesis de que una nueva asignatura a impartir en nuestros centros docentes vaya a conseguir el milagro del “buen ciudadano”, frente a la multiplicidad de impulsos cotidianos que llevan a nuestros jóvenes en una dirección contraria?

En este contexto problemático las dudas resultan más que razonables. De pensar que estamos ante la gran clave de bóveda que conseguirá hacer presentes los valores constitucionales en el conjunto de la ciudadanía, podemos llegar al resultado final de que se trate simplemente de introducir una nueva “*maría*” en nuestro sistema educativo.

QUE EL SISTEMA FUNCIONE

(Fernando Savater)

2007

La pregunta se la formulaba algún periodista de las tertulias radiofónicas al filósofo Fernando Savater, en relación con la creación de su nueva fuerza política UPyD, surgida junto a los “Ciudadanos” de Cataluña.

Para muchos, esta nueva fuerza política en formación presenta todo el atractivo de una bocanada de aire fresco en un ambiente sórdido y enrarecido: frente a la esclerosis del sistema de partidos y las opacas disfuncionalidades de la bipolarización, su simple existencia como proyecto nos aporta la indecible ilusión de comprobar que el pluralismo constituye, todavía, una realidad viva en nuestro país.

No sabemos si las neuronas de Fernando Savater son exactamente de derechas o de izquierdas, según los nuevos descubrimientos de la neurología: lo que sí sabemos es que son indudablemente unas buenas neuronas, sólidamente colocadas en una cabeza bien puesta.

El periodista le preguntaba al filósofo sobre cuáles iban a ser las nuevas propuestas programáticas de su partido. En un ambiente preelectoral como el que vivimos, el envite era para el puro lucimiento. Después de la reforma de la Constitución, de los Estatutos, de los nuevos matrimonios, de las hipotecas gratis para los divorciados que ganen menos de tres mil euros, el listón está ya rozando las alturas celestiales. Hay que recordar además que los “Ciudadanos” parecen ser muy creativos en esto de la elaboración de nuevos programas: por eso, el PSOE de Canarias no tuvo que molestarse más que en copiar su programa para comparecer con una oferta atractiva ante los electores en las últimas autonómicas, y a punto estuvo de alcanzar el poder.

¿Qué nueva e inspirada propuesta se le podía ocurrir a un brillante profesor de ética como Savater? ¿Reformar el Tratado de la Unión Europea o la Carta de las Naciones Unidas; descubrir una nueva forma de eutanasia; modificar las reglas del mercado globalizado; incorporar al Código Civil los derechos de los animales; o monitorizar mediante *webcams* a las pateras y cayucos desde sus puntos de origen?

Durante unos segundos el oyente radiofónico sintió crecer sus expectativas hasta el mismo borde del vértigo, preludiando los perfiles de un futuro alucinante. Y la respuesta cayó como un chispazo eléctrico en plena tormenta: no queremos reformar nada, nos conformamos con que el sistema funcione.

Desde los gloriosos tiempos del primer Felipe González no había oído nada igual. ¿Se acuerdan? Fue cuando el famoso mito del cambio, que impulsó la gran oleada electoral del año 1982. A la pregunta de en qué consistía el famoso cambio, Felipe contestó: consiste en que España funcione. Eran tiempos románticos en que creíamos terminada la transición y definitivamente consolidada la democracia en nuestro país.

Que el sistema funcione: he aquí el horizonte utópico de la más utópica de las nuevas fuerzas políticas en gestación. Tratando de salir del *shock*, intenté imaginar una realidad cotidiana donde efectivamente el sistema funcionara. O sea, donde por ejemplo la Constitución fuera

considerada como una norma jerárquicamente superior a los Estatutos, o donde las leyes aprobadas en el parlamento se aplicaran de una forma efectiva e inmediata. Entonces comencé a percibir la inconmensurable dimensión utópica del mensaje. Que el sistema funcione significaría que los portavoces del partido gobernante hablarían del partido, no de las medidas concretas del gobierno; que las políticas públicas serían responsabilidad de la administración pública, no de los dirigentes de los aparatos de los partidos. Que el sistema funcione significaría que las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción llegarían siempre hasta sus últimas consecuencias, sin frenos ni barreras cuando pudieran afectar a la administración o al partido gobernante. Que el sistema funcione significaría incluso que la normativa sobre horarios de anuncios comerciales en televisión se cumpliría rigurosamente. Entonces comencé a comprender que, llevado por su inclinación a la metafísica, al bueno de Savater se le estaba yendo la olla.

Y es que ya se sabe: como señalaba el politólogo Sartori, cuanto más minoritario es un partido más se aleja de la realidad, llegando a formular propuestas radicales y utópicas. ¡Que el sistema funcione! Es que los seres humanos parece que no tenemos hartura: no nos basta con oír lo que todos los días nos dicen nuestros dirigentes cuando se aproximan las elecciones, ni nos basta con soñar el horizonte de felicidad colectiva que nos aguarda. Puestos a pedir, cualquier día hasta alguien va a pedir que los husillos de las calles funcionen correctamente cuando caen las primeras lluvias. Ilusos.

LO QUE CUESTA UN VOTO

(Ante las elecciones locales)

2007

Pasen y vean, que la función ha comenzado: a ver quién da más. El largo carrusel llega por fin a su apogeo y ahora nos van a llamar a los perplejos espectadores. Ha llegado el momento de elegir, la hora decisiva, la opción final. Aunque a cualquiera le puede entrar la sospecha de si no se tratará de una especie de intercambio, o sea, que nos van a dar algo así como un premio si al final votamos del modo correcto.

Es posible que, por deformación profesional, quienes estamos habituados a leer a veces a los grandes clásicos de la democracia sintamos ahora una sensación algo extraña e inexpresable: seguramente en esto debe consistir el ejercicio de la soberanía, la más profunda esencia de la democracia, el acceso a la universal condición de auténticos ciudadanos, la tarea de conformar la legendaria "*volonté generale*" del gran Rousseau.

El problema es que uno no acaba de entender bien a qué estamos votando. Si, ya sabemos, elecciones locales, pero lo que no entendemos exactamente es en qué consiste ¿qué es en concreto lo que debemos votar? Acaso una nueva avenida recién asfaltada, un flamante parque acabado de inaugurar, o un futuro de cambios y de nuevas ilusiones. ¿A los de siempre o a otros nuevos? Es cuestión de saber dónde está exactamente la prioridad: ¿es el transporte o el desempleo? ¿La seguridad o la vivienda? ¿La resolución de mi pequeño problema y mi particular corralito, o la visión generosa del conjunto y los intereses de todos?

Debe ser en el fondo auténtica ignorancia, porque los más avisados lo tienen claro: la cuestión consistiría en que hay unas claves decisivas para elegir que dependen de la ideología de cada uno. Por eso al final ya se sabe, o izquierda o derecha, para qué andarse con zarandajas y posturas diletantes. Pero la duda es que, a la vista de lo que nos venden, uno no acaba de descubrir la ideología con facilidad. Por ejemplo, un carril-bici ¿es que izquierdas o de derechas? ¿Acaso será algo más centrista un tranvía, o quizás un nuevo puente? ¿Una ciudad verde o una ciudad turística? Si debo responder a la ideología con la que realmente comulgo, debería tener estas cosas algo más claras.

Es posible que en el fondo yo sea un mal ciudadano y de ahí vienen mis dudas. Si fuera un ciudadano consciente ya me habría leído los programas electorales de todos los partidos que se presentan en mi ciudad y a estas alturas lo tendría claro. Pero cuando los he ojeado brevemente sólo he descubierto cosas positivas, hermosos horizontes de futuro, magníficos listados de propuestas programáticas. Si al final no consigo localizar las diferencias ¿no podría votarlos a todos? Si, ya sé, es imposible.

La duda que se me suscita entonces es por qué el nivel de los servicios públicos, la calidad de las políticas, la eficacia de los poderes públicos para atender a las necesidades ciudadanas, son factores que tienen que depender de quién gobierne: como yo no soy racista ni creo en la desigualdad natural del ser humano, no consigo entender que gobiernen mejor los de derecha que los de izquierda o viceversa. A estas alturas del desarrollo democrático español ¿no podríamos aspirar a tener buenos servicios públicos, políticas urbanas correctas, en todos los municipios sea cual sea el color político de quién gobierna? Deben ser los misterios de la política.

Aunque a lo mejor hay otra alternativa: si no tengo claras las premisas ideológicas, si no consigo decidir entre los contenidos de las propuestas, al final siempre me quedarán las personas, la confianza en los líderes. Los tengo ahí delante, en hermosas fotografías convertidas en carteles repartidos por todas las calles: han salido un poco hieráticos, rodeados de colores. Pero aun así, me sabe a poco

¿no será cosa del maquillaje o del fotógrafo? Realmente se trata de una decisión importante para la que tengo escasos elementos. Si me acerco a oírles en algún acto o en un medio de comunicación, todos tienen un balance lleno de aciertos y presentan propuestas atractivas; los que se equivocan son siempre los otros.

Pero ese aspecto tan atractivo de la foto ¿lo será también en la realidad? ¿Puedo confiar en que me escucharán cuando hayan pasado las elecciones o debo suponer que lo que esperan de mí es que, una vez emitido mi voto, me vaya a mi casa para ver desde la televisión el bonito espectáculo de la política?

Sumergido en este mar de dudas me entra la mala conciencia de ser un mediocre ciudadano. Ni consigo concretar mis prioridades objetivas, ni logro apoyarme en una ideología, ni acabo de sentirme entusiasmado por la imagen de los líderes. Un desastre. Para que luego digan lo poco que cuesta un voto.

LIMITAR LOS MANDATOS

2007

Parece un hecho confirmado que todos los cambios estatutarios de la actual legislatura no han supuesto apenas innovación alguna en el terreno estrictamente institucional. Si los nuevos Estatutos se han mostrado beligerantes en ámbitos como las competencias, las nuevas tablas de derechos sociales, las relaciones externas de la Comunidad o incluso la administración de justicia, en cambio los aspectos referidos a la forma de gobierno constituyen más bien una pura continuidad respecto de los modelos anteriores.

Seguramente se trata de un resultado inevitable considerando el modo como se ha encarado el proceso de reforma, teniendo siempre a la vista lo que hacían los catalanes. Y si ellos no apostaban por innovar en el ámbito institucional, pues los demás tampoco.

La decisión no deja de tener unas consecuencias cuyos efectos tardaremos algo en percibir: y es que probablemente no se ha pensado que la nueva serie de derechos sociales va a exigir todo un conjunto de respuestas en forma de prestaciones y servicios por parte de una organización pública que, sin embargo, no ha experimentado apenas modificación alguna. La pregunta parece pues evidente: ¿serán capaces las mismas estructuras preexistentes de dar respuesta a toda esta nueva serie de exigencias históricas?

Pero la ausencia de una reflexión suficiente sobre la necesidad de reformar el sistema institucional ha afectado igualmente a otras cuestiones pendientes, en particular a la necesidad de limitar los mandatos presidenciales. Ha sido seguramente una ocasión desaprovechada para reflexionar acerca de la figura central del sistema, la del Presidente de la Comunidad, que ya venía siendo caracterizada como una institución dotada de ciertos componentes "presidencialistas" debido no sólo a su doble condición representativa, sino sobre todo al consistente proceso de centralización y liderazgo que al cabo del tiempo han venido adquiriendo los presidentes en los sistemas de "parlamentarismo racionalizado", donde la posición del ejecutivo adquiere una especial preponderancia no sólo frente al parlamento sino ante el conjunto de la sociedad.

A estas alturas da un cierto sonrojo tener que recordar que el debate sobre las instituciones debe abordarse completamente el margen de la figura concreta que en cada momento ocupe el correspondiente cargo. Del mismo modo que resulta superfluo recordar que la limitación de los mandatos debe afectar a los gobernantes, no a los dirigentes de la oposición que, precisamente por ser minorías, no gobiernan.

La limitación de los mandatos se considera en general como un instrumento destinado a equilibrar posibles excesos de poder de ciertas instituciones: por eso los presidentes populistas latinoamericanos se suelen empeñar, una vez han accedido al poder a través de las urnas, en eliminar las cláusulas constitucionales que limitan sus mandatos. Y así tenemos a Hugo Chávez dispuesto a cantar rancheras por los tiempos de los tiempos.

En el caso de Andalucía lo original es que el nuevo Estatuto no sólo ha mantenido el mismo sistema, con su impronta presidencialista anterior, sino que incluso ha reforzado adicionalmente la posición del Presidente de la Junta. Entre otros aspectos, en una cuestión tan decisiva como la potestad para convocar consultas populares sin necesidad de autorización del parlamento ni deliberación previa del Consejo de Gobierno: recordemos que la Constitución, cuando autoriza al Presidente del gobierno a convocar referéndum, exige la previa aprobación del Congreso.

Ahora que todos parecemos tan preocupados por el órdago de Ibarretxe, no nos acordamos de que el Estatuto de Andalucía ya establece unas previsiones redactadas de forma bastante confusa, donde se atribuye al Presidente (artículo 117.4) esta potestad de forma completamente autónoma. El dato confirmaría no sólo la escasa reflexión con que se ha redactado el nuevo Estatuto, sino el considerable incremento de poder que experimenta el Presidente. Dejando por ahora de lado las razonables dudas de inconstitucionalidad que surgen del tramposo argumento de sustituir

la noción de referéndum por la de “consulta popular”, parece claro que una potestad presidencial que se ejerce al margen del parlamento equivale a afirmar que se puede ejercer incluso “en contra” del mismo; o sea, saltando todas las pautas propias del sistema parlamentario. Y un reforzamiento tan considerable de la potestad presidencial sólo tiene una posible línea de contrapeso en el constitucionalismo: limitar los mandatos del Presidente.

Como podemos comprobar, no es una cuestión de personas, sino del adecuado equilibrio de poderes institucionales.

AGENDA DE GOBIERNO

2007

La coincidencia de fechas ha debido ser una pura casualidad. Pero el caso es que, apenas producido el relevo con motivo del reciente cambio ministerial, la vicepresidenta Fernández de la Vega le ha echado una buena riña a la comisión de subsecretarios por la ausencia de proyectos en marcha y la falta de actividad. El tema es más grave de lo que parece si tenemos en cuenta que la citada comisión es el órgano que en la práctica bombea los asuntos sobre el Consejo de ministros, determinando su agenda real de actividades. O sea, que la vicepresidenta ha descubierto de pronto que el gobierno, aparte las fotos y los discursos, no hace apenas nada.

Aunque bien pensado, la sorpresa en realidad es sólo relativa. Si consideramos las trascendentales modificaciones estatutarias que se han operado durante esta legislatura y si le damos un repaso al listado competencial amplificado que se enumera en las mismas - además de lo ya recorrido con anterioridad en el proceso autonómico -, la respuesta parece bastante clara: en efecto, el gobierno (del estado) no tiene apenas nada que hacer, porque casi todo es ahora competencia de los gobiernos autonómicos. Nuestra inocente concepción del gobierno como gran centro motor de la actividad del Estado seguramente responde a una visión arcaica e inercial que a estas alturas se ha transformado ya por completo. En la práctica, lo que entendemos por acción de gobierno parece que se limita a un conjunto de discursos y de imágenes que se proyectan en el universo virtual de la videopolítica con el objetivo de alimentar el eterno debate electoralista y su dimensión competitiva. Nuestra creencia de que, dirigido por el brazo de hierro de la vicepresidenta, el gobierno de la nación vela día y noche por los intereses de todos los ciudadanos, constituye en realidad una especie de imaginario que se desmonta

con toda facilidad cuando analizamos la agenda de trabajo de la comisión de subsecretarios.

Definitivamente parece que estamos entrando ya en la nueva era de la “*gobernanza*”, donde la acción pública responde en realidad a la actuación de múltiples esferas públicas en las escalas local, autonómica o institucional, y donde el gobierno central apenas tiene responsabilidades de tipo exterior además de la función de coordinar (cuando puede) el emergente sistema de red de nuestra compleja realidad territorial. El problema es que ni los ciudadanos ni seguramente los propios gobernantes parecen haberse dado cuenta de tales cambios y por eso mantenemos una visión inercial y desfasada de las cosas.

Por eso la paradoja se hace más intensa cuando escuchamos los discursos de los nuevos ministros y descubrimos la cantidad de nuevas y brillantes iniciativas y proyectos que están preparando. Nuestras políticas de cultura, de vivienda o de salud parece que van a encarar en el futuro inmediato toda una serie de iniciativas innovadoras y llenas de interés. Lo que confirmaría que el cambio de gobierno ha sido un rotundo éxito.

Solamente se suscitan un par de dudas: la primera es que cultura, vivienda y salud son competencias autonómicas; y por lo tanto lo que en estos ámbitos pueda hacer el gobierno de Madrid apenas tiene relevancia. La segunda es que quedan pocos meses para el final de la legislatura. ¿Realmente pretenden los nuevos ministros llevar a cabo tantos y tan valiosos proyectos, o es que con las fotos y los discursos no han tenido tiempo ni de pararse a mirar el calendario?

La impresión que podemos obtener es que o bien nuestros gobernantes son unos auténticos vendedores de humo o es que realmente hemos perdido por completo la noción de lo que debe ser la acción de gobierno. Al comienzo pensábamos que el gran balance del gobierno Zapatero iba a ser el cambio en las reglas de juego, con la trascendental modificación del sistema territorial y el incremento del autogobierno de las Comunidades Autónomas. Luego suponíamos que incluso se iba a llegar nada menos que hasta una reforma de la Constitución. Posteriormente confiamos en la gran revolución asistencial de una ley de la dependencia donde ni apenas se han constituido todavía las comisiones evaluadoras. Pero ahora descubrimos que hasta algunos sectores que creíamos paralizados, como salud, cultura o vivienda, presentan una nueva agenda llena de apuestas e innovaciones. Y a todo esto, resulta que la comisión de subsecretarios andaba casi paralizada.

Definitivamente parece que huele a elecciones. Pero mientras tanto, no sería demasiado pedirle a nuestros gobernantes que si tienen algo en qué gobernar que lo hagan, pero que no aprovechen encima para tomarnos el pelo.

LA LINEA ROJA

2007

Parece una paradoja de los más desarrollados. La progresiva complejidad que trae consigo la vida urbana y el desarrollo socioeconómico generan a veces una saturación de servicios y de infraestructuras que, ante sobrecargas imprevistas, pueden llegar a traducirse en colapsos colectivos e incluso en auténticas crisis de determinados servicios públicos. Por una curiosa casualidad, son como catástrofes anunciadas que se localizan sobre todo en tiempo de verano: justo cuando las avalanchas humanas requieren precisamente de unos servicios más eficientes.

En Estados Unidos han sido el hundimiento del puente de Minneápolis y la inundación del metro de Nueva York. En España, el fenómeno se ha concentrado durante este verano igualmente en la zona más desarrollada: apagón eléctrico de Barcelona, colapso en la autopista de Tarragona y difusos y reiterados problemas ferroviarios en la red catalana de cercanías.

Es cierto que todo ello puede ser al final el simple reflejo de un cierto grado de chapucería difusa, tan habitual en nuestro país, que tan sólo sale a la luz pública en momentos de sobrecarga: ni las líneas eléctricas disponen de instalaciones adecuadas ni los puentes y carreteras son capaces de encajar reiteradamente los desbordamientos de uso que generan los grandes movimientos de población. Lo paradójico es que nuestra seguridad colectiva se haga más precaria precisamente en las zonas más desarrolladas y en los momentos más críticos, provocando la aparición de líneas rojas que ponen en cuestión la consistencia de nuestros procesos de desarrollo y de nuestros niveles efectivos bienestar.

Las dificultades para comprender este fenómeno suscitan a veces las respuestas más primarias y elementales, tratando de buscar inútilmente un chivo expiatorio. Que si los españoles estamos en realidad expoliando a Cataluña impidiendo que el nivel de inversiones en infraestructuras se adecue a sus niveles reales de consumo. Que si las advertencias que se recogen en las inspecciones periódicas de las infraestructuras no son atendidas por los poderes públicos. Que si el responsable es la autoridad autonómica, o la central, o las empresas privadas encargadas de la gestión de tales servicios, o todos juntos y al final nadie será el responsable. O que si nuestros políticos invierten más en recursos de autobombo como las cadenas autonómicas de radio o televisión en lugar de atender y mantener las infraestructuras y los servicios.

El panorama final viene en definitiva a poner de manifiesto la otra cara del desarrollo social y económico: la hipótesis de la “sociedad del riesgo” que, más allá de falsos alarmismos, ha desarrollado el sociólogo alemán Ulrich Beck. Los momentos de saturación o sobrecarga, cuando los servicios colectivos se colapsan, pueden desencadenar ese nuevo tipo de catástrofes cotidianas, propias de las sociedades más desarrolladas, que bloquean el funcionamiento de los recursos colectivos y nos hacen ser más conscientes del grado real de precariedad en que se desenvuelve la vida cotidiana en las grandes aglomeraciones. Y por alguna paradójica “ley de Murphy”, resulta que todo ello se suele producir justo cuando más necesitamos de esos recursos públicos en nuestro afán por disfrutar del ocio veraniego.

Lo más preocupante es la inexistencia de capacidad de respuesta pública ante estas situaciones de emergencia, o su carácter siempre limitado o tardío: las exigencias de respuesta instantánea propias de las democracias avanzadas parecen más bien un espejismo que sólo se produce en la realidad virtual de nuestros ordenadores. Como apuntaba un representante catalán hace unas semanas ¿Qué hubiera sucedido en una autopista colapsada a lo largo de más de setenta kilómetros si en ese momento se hubiese desencadenado un incendio? Los instrumentos habituales de gestión pública, diseñados para un contexto de normalidad ciudadana, se hacen torpes e ineficaces cuando tienen que enfrentarse a situaciones imprevistas de emergencia: por eso algunos defienden la creación de células de gestión de crisis, capaces de imponerse a la habitual descoordinación de la burocracia pública, donde el responsable que debe tomar determinadas decisiones nunca aparece en el lugar adecuado ni en el momento preciso.

La generalización de procesos de desarrollo hacia los que todos parecemos movilizarnos parece hacer cada día más sutil esa tenue línea roja que separa la normalidad cotidiana y el funcionamiento ordinario de los servicios públicos -de los que depende nuestro bienestar cotidiano- frente a las emergencias fulminantes e imprevistas que nos empujan hasta el borde mismo de las catástrofes colectivas.

ESPAÑA, ESPAÑA

2007

Si alguien pudo imaginar aquello de que España se rompe, parece que estaba equivocado. El gobierno español ha decidido por fin acallar cualquier duda mediante la preparación de un nuevo logotipo con la imagen “*Gobierno de España*” que va a resolver todas las incertidumbres. Ni descomposición territorial estatutaria, ni egoísmos autonómicos, ni sueños de una futura confederación ibérica: los españoles nos vamos a sentir por fin plenamente unidos e identificados tras el nuevo símbolo.

El gobierno, no cabe duda, ha dado en la diana. Da igual que las razones que le hayan impulsado hacia tal iniciativa sea comprobar que su política territorial le estaba produciendo una grave pérdida de votos a la que había que tratar de dar una respuesta en vísperas electorales. El gobierno sabe perfectamente que, por encima de las solidaridades, de los conflictos de competencias, de los problemas de la financiación o del agua, están los símbolos. Tan bien como lo sabían los viejos dirigentes franquistas.

Con esta nueva iniciativa, que se proyectará brillantemente a través de todos los grandes medios audiovisuales, los españoles despegaremos definitivamente hacia el horizonte de una nueva realidad virtual. De las viejas exigencias de la gobernabilidad, de los complejos procesos de la moderna gobernanza, el gobierno ha remontado el vuelo hacia la nueva dimensión del futuro: la *gobermedia*. De este modo el equipo de Zapatero se va a asegurar un rotundo éxito en la recta final de la legislatura presentando a todos los españoles a bombo y platillo su gran resultado: el nuevo logo del gobierno de España. Un brillante balance para acudir a las elecciones con posibilidades de éxito.

Ha sido una pura casualidad que tal iniciativa coincida en el tiempo con el embarrancamiento y la definitiva retirada del proyecto de ley de aguas. Tan importante proyecto, abanderado por la ministra Narbona, trataba de hacer realidad el principio de la solidaridad interterritorial en relación con los recursos hídricos. De hecho no tenía ningún problema constitucional, pues la norma suprema atribuye con claridad al Estado en su artículo 149.1.22 la competencia para legislar sobre recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma. En la medida en que la Constitución -se supone- es una norma jerárquicamente superior a los Estatutos de Autonomía, daba perfectamente igual lo que éstos dijeran en su nueva redacción: establecer un uso exclusivo sobre los tramos de río o sobre las aguas de la cuenca que discurran por un territorio, consagrar un derecho a recibir aguas excedentes o limitar unilateralmente los trasvases, todos estos recursos estatutarios no debían ser obstáculos para la legislación estatal.

Sin embargo parece que tal explosión de egoísmos colectivos ha acabado agotando la imaginación del legislador y la propia

capacidad de iniciativa gubernamental, pese a tratarse de una clara competencia atribuida por la Constitución. La ministra no ha sido capaz al final de recomponer el cuadro cubista de nuestra realidad territorial; simplemente no le ha salido el *puzzle*. Que vaya tomando nota el ministro Solbes.

Pero eso no quiere decir en absoluto que España se rompa: en el fondo qué nos importa a los españoles la desertificación de las áridas cuencas de levante cuando ahora por fin vamos a tener un símbolo que nos unificará virtualmente. De ser una unidad de destino en lo universal, España ha pasado a ser una realidad virtual.

Lo único que acaso no ha previsto el gobierno es la explosión de nuevos logotipos territoriales que nos espera: ¿cuánto tardarán los gobiernos vasco o catalán en iniciar una nueva ronda de renovación de sus símbolos de identificación? Pero como ellos van a llegar después, al final las ventajas del gobierno serán evidentes: primero, porque el gobierno siempre tendrá mayores soportes y recursos mediáticos; y segundo, porque al fin y al cabo una guerra territorial virtual tiene siempre la evidente virtud de que se proyecta en una arena inmaterial. Lo otro es pura memoria histórica. Definitivamente, parece que España ha dado el salto desde las guerras civiles decimonónicas a la arena virtual del futuro. En eso debe consistir la nueva noción de progreso histórico: en cada nueva etapa de modernización, un paso decidido hacia atrás.

El éxito previsto va a ser tan memorable que nadie podrá afirmar ya que España se rompe: seguramente los grandes sabios y expertos del gobierno estarán ahora en sus gabinetes rodeados de asesores y publicistas empeñados en algún nuevo descubrimiento, como por ejemplo el *euribor* virtual, que resolverá definitivamente todos nuestros males.

CATALUÑA Y LA CONSTITUCIÓN

2007

La tensión que rodea la tramitación del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña ha servido al menos para clarificar una cuestión: la opinión de los dirigentes catalanes sobre el asunto.

Sus voces se están levantando de forma reiterada y unánime para responder a la eventualidad de una declaración de inconstitucionalidad. Y el sentido de esas opiniones no deja lugar a dudas: si el Estatuto es declarado inconstitucional lo que habrá que cambiar será la Constitución y no el Estatuto. Se trata de una opinión

en la que coinciden las fuerzas mayoritarias del panorama político catalán: el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana y Convergencia y Unión. Y a ello se añaden las reiteradas amenazas de derribar al gobierno de Zapatero.

Se han repetido tanto los argumentos que hemos acabado por banalizarlos ignorando su auténtico sentido: el monstruoso atentado contra la democracia que supone afirmar que la voluntad de los catalanes expresada en el referéndum de ratificación de su Estatuto debe prevalecer sobre la voluntad de todos los españoles representada en nuestra norma suprema, la Constitución. Así pues, a partir de ahora el postulado esencial de la democracia que proclama la igualdad de todos los ciudadanos deberá ser revisado en España, para acabar aceptando que la voluntad de los catalanes vale más que la de todos los españoles.

Invocar ante este panorama ciertos valores inmateriales como el principio de lealtad institucional o el de primacía de la Constitución no pasa de ser un ejercicio retórico sin trascendencia práctica: a la hora de la verdad el pastel está servido y la opinión de los dirigentes catalanes perfectamente clara. La afirmación de que España es un Estado de derecho donde cualquier norma puede ser declarada contraria a la Constitución por el Tribunal Constitucional no sería más que un recurso estéril para reiterar una verdad incómoda.

Resulta paradójico que la gran capacidad de respuesta instantánea que demuestran los dirigentes del gobierno ante cualquier manifestación del Partido Popular sea sustituida por un vergonzante silencio ante las reiteradas manifestaciones de los dirigentes catalanes. Porque la gravedad del asunto es evidente: ¿estamos o no ante una voladura del estado español regulado en la Constitución de 1978?

Admitir semejantes declaraciones supone entre otras cosas aceptar que lo que los profesores de derecho constitucional estamos explicando a nuestros alumnos ya no vale, porque no se corresponde con la realidad. De este modo, casi imperceptiblemente, parece que hemos vuelto en España a los oscuros tiempos del franquismo, cuando lo que los constitucionalistas explicaban en las aulas universitarias no coincidía con la realidad vigente en nuestro país.

El alto grado de confusión que rodea al debate político, la retórica y la vaguedad que acompañan al discurso de nuestros dirigentes, han ido creando una cortina de humo en la opinión pública que impide al conjunto de los ciudadanos apercibirse realmente de lo que está pasando. Y como en esa confusión todos nos seguimos mirando nuestro propio ombligo, la minoría catalana se siente con fuerzas para seguirle echando un pulso al gobierno español amenazando con derribarlo si no se atiende a sus demandas de chantaje. Esta y no otra es la auténtica madre del cordero.

Y lo que refleja el silencio de la mayoría gobernante parece bastante claro: ¿qué vale al fin y al cabo una hoja de papel como la Constitución frente al chollo de mantener en el poder a Zapatero? Porque, entre otras cosas, con este gobierno los constitucionalistas están casi todos colocados: y si los constitucionalistas guardamos silencio ¿quién va a dar la voz de alerta?

Por eso debemos alegrarnos de que la situación se haya clarificado y de que la voz de los catalanes resuene tan clara y transparente. Ya está bien de engaños y confusiones, de ambigüedades y cortinas de humo, de dineros cómplices y falsas alianzas. Ya sabemos que lo que nos jugamos ahora no tiene nada que ver con la participación en el referéndum andaluz. Porque la lógica de la imitación, la de nosotros lo mismo que ellos no vayamos a ser menos, es un planteamiento que en esta ocasión ya no sirve: no son nuestros intereses singulares como andaluces los que resultan afectados sino nuestra condición general de ciudadanos españoles.

Por eso en estos momentos tenemos que ser conscientes del desafío y debemos percibir claramente cuál es la auténtica bofetada que los dirigentes catalanes nos están dando a todos los españoles: que, si no se cumplen sus condiciones, la Constitución española se convertirá en papel mojado.

DOBLE JUEGO

2007

Por más que llevamos décadas tratando de habituarnos a la complejidad del sistema autonómico, al final siempre salta la sorpresa. Y es que los intereses estratégicos que mueven a los grandes partidos estatales no consiguen sustraerse de las contradicciones del doble juego que impone la política estatal frente a la dinámica autonómica.

La cuadratura del círculo, la perfecta homogeneidad de discurso y de estrategia en ambos niveles no se ha conseguido hasta ahora ni parece previsible que se alcance en un futuro inmediato. Y por más que el presidente Zapatero se empeñe en florituras verbales, las tensiones han acabado por estallar en el partido socialista de Navarra ante el proceso de formación de gobierno: definitivamente los afanes del presidente por contentar a los de aquí y a los de allá están dejando de funcionar y parece que a nuestro principal mandatario se le está acabando su irresistible magia.

Para la teoría política, las reglas de juego que presiden la formación del gobierno en un sistema parlamentario están perfectamente claras. De hecho son las mismas en la esfera central y

en la autonómica: se trata simplemente de conseguir una mayoría estable de apoyo al gobierno. Los hallazgos teóricos por los que discurre el pensamiento político en torno a nuevas nociones como la “*gobernanza multinivel*” sirven bastante bien para entender algunas de las complejidades del problema territorial, incluso en su dimensión europea; pero hasta ahora no han aportado soluciones suficientes en caso de tensiones o conflictos entre los distintos niveles. Y cuando se producen tales tensiones, la lógica partidista parece ser todavía la fuerza dominante.

La propia noción de representación, que se supone está en la base de todo gobierno democrático, se mueve ambivalentemente entre su dimensión territorial y su proyección funcional, sin ninguna clave de equilibrio. ¿Ante quién responden realmente los diputados socialistas en el parlamento navarro, ante sus propios electores o ante la organización directiva del PSOE? ¿Puede haber intereses estratégicos del partido más allá de las pautas que marcan las exigencias de la política territorial de cada comunidad?

Aunque las jóvenes generaciones andaluzas ya no lo recuerden, se trata de una vieja historia que tuvo en la Andalucía de los años ochenta algunos de sus principales campos de experiencia: recuérdese que los dos primeros presidentes de nuestra autonomía, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, no fueron excluidos del poder por las urnas sino por su propio partido. Las tensiones que imponía la defensa de los intereses de Andalucía frente a las exigencias del PSOE en Madrid hicieron saltar por los aires la lógica de la representación territorial, imponiendo el predominio de los intereses del aparato. Hoy día casi nadie parece acordarse ya de las veleidades andalucistas de aquellos gobernantes, que al intentar priorizar los intereses políticos de Andalucía frente a la lógica del aparato del partido gobernante, acabaron como acabaron: y ello a pesar de haber conquistado en las urnas mayorías más que suficientes. Por eso no debe sorprendernos el desenlace del conflicto en Navarra si recordamos que se trata de una historia ya sabida, con un final anunciado.

Y es que en este caso ni siquiera cabe defender que el valor en juego sea la gobernabilidad de la Comunidad navarra. Porque cuando no existen mayorías claras para formar gobierno el sistema dispone de su correspondiente cláusula de salida: la disolución automática y la convocatoria de nuevas elecciones para que sean los ciudadanos quienes decidan. Pero es bien sabido que los políticos, en el fondo, le tienen un cierto horror a las urnas y por eso al final las tensiones se resuelven mejor aplicando la lógica del aparato. Porque de lo que se trata en el fondo no es del gobierno de Navarra, sino de las perspectivas del futuro gobierno del Estado: ¿qué pensaríamos el resto de los españoles ante un partido socialista gobernando en

Navarra en coalición con una organización política próxima al radicalismo vasco? ¿Cuántos votos del resto de España se perderían a cambio del gobierno de una concreta comunidad?

En el doble juego que protagonizan los grandes partidos estatales lo que interesa al final es el tamaño del botín a repartir. Por eso, cuando empiezan a soplar los vientos de próximas elecciones generales y los partidos se plantean el acuciante problema del futuro reparto de la tarta, la lógica comparativa emerge con todas sus consecuencias en un simple cálculo electoralista ¿Qué interesa más, la tarta pequeña de una determinada Comunidad autónoma o la tarta grande del Estado?

DEBATES PARLAMENTARIOS

2007

Los debates sobre el estado de la nación son una relativa novedad en los sistemas parlamentarios europeos. Tienen su origen en Estados Unidos, un sistema de separación de poderes donde el ejecutivo comparece cada año ante el legislativo para hacer un balance de actuaciones y una presentación de sus líneas de acción futura.

Su incorporación a la experiencia española, tanto al nivel autonómico como estatal, es una buena muestra del modo como la globalización del constitucionalismo y el uso de experiencias comparadas puede servir para enriquecer la práctica parlamentaria, pese a tratarse de modelos políticos diferentes.

El problema es que con el paso del tiempo su sentido teórico originario se ha ido transformando al compás de la propia evolución de la dinámica parlamentaria y del modo como se sustancian en la práctica las relaciones entre mayoría y oposición. Así, en un sistema de mayoría hiperestabilizada como Andalucía, y en coincidencia con la ausencia de los líderes de la oposición en la cámara, el debate anual sobre el estado de la Comunidad apenas consigue reflejar la pluralidad de visiones políticas sobre Andalucía, para transformarse más bien en una reiteración de críticas a la línea de gobierno de nuestra Comunidad. Por más que la voluntariosa Teófila Martínez o las restantes portavoces de los grupos minoritarios agudicen sus argumentos de crítica, en la práctica apenas consiguen visualizar la presencia de alternativas consistentes, dando lugar así a un espectáculo parlamentario rutinario y de escaso interés ciudadano.

La reiterada práctica de culminar tales debates con un paquete de resoluciones apenas constituye algo así como un puñado de

migajas para consolar a las minorías. Porque -hay que decirlo con claridad- en realidad, tales resoluciones sólo se llevan a cabo si el gobierno lo considera oportuno: no existe ningún tipo de mecanismos que aseguren su cumplimiento efectivo. Son una reminiscencia de aquella vaga categoría del llamado “impulso político” que, procedente de Italia, se importó a España en los años setenta permitiendo teóricamente al parlamento “compartir” algunas líneas programáticas o de orientación del ejecutivo: pero en la práctica sólo se cumplen si el gobierno quiere. En Andalucía ya tuvimos una demostración efectiva, la prueba del nueve, durante el famoso periodo de la pinza, en el bienio 1994-96.

Por supuesto el interés de estos debates puede incrementarse cuando el ambiente huele ya a elecciones, como ha sucedido con el reciente debate en el Congreso. El problema es que en tales casos se acentúa la línea estratégica habitual que sigue el discurso de los líderes, en clave electoralista. Y así los debates parlamentarios, que teóricamente debían suponer un enfrentamiento entre líneas argumentativas diferentes o visiones distintas del Estado, se convierten más bien en monólogos superpuestos donde cada portavoz se dirige a los suyos reproduciendo sus propias pautas habituales de discurso.

Hasta aquí podríamos decir que no hay nada nuevo: hace tiempo que las cámaras dejaron de ser espacios deliberativos para convertirse más bien en cajas de resonancia de las estrategias partidistas, o cuanto más en espejos encargados simplemente de “reflejar” el pluralismo del sistema. En el fondo, una especie de nicho singular de la gran arena mediática, donde se sustancia el enfrentamiento político en las democracias contemporáneas.

El problema es que, como sucede en cualquier espectáculo competitivo, al final más que dirigirse a su propio electorado los líderes lo que buscan es el apoyo de sus “*hooligans*”, es decir, de las minorías fundamentalistas que constituyen su fuerza más incondicional de apoyo. Es probable que sea una consecuencia no prevista del modo como se viene intensificando la competencia política en un contexto caracterizado por el impacto de la videopolítica y la aplicación de técnicas de marketing para alcanzar el éxito electoral. Del mismo modo que las grandes marcas comerciales buscan la “*costumerización*” de sus clientes suscitando mecanismos de lealtad emocional que aseguren el apoyo irracional de sus incondicionales hasta el punto de identificar ciertos productos con auténticos como “estilos de vida”, igualmente los grandes partidos políticos tratan de consolidar su posición en el mercado competitivo dirigiéndose a los segmentos más radicales y comprometidos de su propio electorado.

El resultado de esta dinámica lo conoce muy bien cualquier aficionado al fútbol: cuando un equipo no busca el apoyo de toda su

afición sino tan sólo el de sus *hooligans*, las previsiones de una futura radicalización pueden darse por seguras.

AÑO 2008

SECRETOS ELECTORALES

(Sobre los programas electorales)

16 enero 2008

La noticia, en apariencia intrascendente, ha pasado casi desapercibida: al parecer, en su última sesión de trabajo, el selecto equipo electoral del Partido Popular ha establecido toda una serie de medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de filtraciones sobre su futuro programa.

Debe entenderse que no se trata de que el programa electoral sea una especie de secreto de estado, sino de un conjunto de precauciones destinadas a evitar lo que hace tiempo se viene ya produciendo: que los programas electorales se copian unos de otros. Atrás quedaron aquellos viejos y heroicos tiempos en que las diferencias ideológicas entre los partidos eran tan drásticas que la posibilidad de una coincidencia de propuestas resultaba prácticamente imposible: los partidos de derechas tenían -se supone- unos programas de derechas y los de izquierdas unos programas de izquierdas.

Pero ahora resulta que las propuestas electorales se han convertido ya en un conjunto de medidas creativas al servicio de una estrategia comercial, similares a las que ponen en marcha las empresas privadas. Y del mismo modo que la compañía Coca-Cola procura ocultar sus estrategias comerciales ante su competidora la Pepsi-Cola, los partidos deben establecer medidas preventivas ante los riesgos de espionaje por parte de sus competidores.

Nadie parece acordarse ya del famoso “caso Watergate” en los años setenta, que llevó hasta la dimisión del Presidente Richard Nixon por un asunto de espionaje entre partidos, en el más sonado proceso de *impeachment* de la historia política norteamericana. Ahora, las ideas originales que puedan aportar los “creativos” de los distintos partidos se convierten en propuestas seductivas que pueden ser “robadas” por otros partidos. La transparencia del mercado de las ideas se convierte así en un auténtico obstáculo para la competencia política.

Los propios hechos demuestran que tales iniciativas -por más que puedan parecer auténticas fulleras- acaban produciendo incluso una evidente rentabilidad electoral: así el éxito del partido socialista de Canarias en las últimas elecciones autonómicas se produjo tras

comprobarse que habían copiado literalmente el programa de *Ciudadanos por el Cambio*, de Cataluña.

Lo realmente singular no consiste en el descubrimiento de las trampas y engaños que rodean al proceso electoral sino en lo que se deduce de este fenómeno: en primer lugar, que las diferencias ideológicas entre los partidos se han acabado convirtiendo en simples retóricas competitivas y que, en consecuencia, las claves del éxito electoral dependerán del puro marketing político. Los enfrentamientos, las discrepancias, la bronca reiterada, no son en realidad el reflejo de trincheras políticas ideológicamente diferenciadas sino simples estrategias orientadas a asegurar la hegemonía en el mercado electoral.

En segundo lugar, que el mecanismo de la representación política hace tiempo que ha dejado de ser un proceso de agregación de demandas sociales a efectos de su conversión en estrategias de gobierno, para transformarse en un puro juego competitivo movido por las ofertas seductivas de unos partidos que no se enfrentan entre sí para imponer determinadas concepciones del mundo o para desarrollar estrategias transformadoras de la realidad, sino para ganar en el mercado de votos. Y lo mismo que sucede con las estrategias comerciales de las empresas privadas, lo importante son las ideas brillantes y originales para desplegar la correspondiente campaña publicitaria.

Pero lo verdaderamente dramático sería más bien comprobar que, tras la relativa banalidad de las propuestas programáticas, lo que se oculta al final es una auténtica falta de ideas acerca de qué hacer con el gobierno, es decir, de cómo gobernar una vez que se ganan las elecciones. Tomar propuestas de aquí o de allá a ver si funcionan: propias o ajenas, qué más da. Y entonces resulta que lo realmente importante no es gobernar sino conquistar el gobierno. El gobierno no es un medio de acción sino un fin en sí mismo.

Nuestro proceso de modernización democrática ha avanzado tan aceleradamente que al final hemos acabado por darle la vuelta completa al circuito para acabar en el punto de partida: no se compete para gobernar sino para ganar. En consecuencia el gobierno ya no puede ser entendido como un instrumento diseñado para resolver problemas sociales o para atender al bien público de la nación, sino que se ha convertido en un fin en sí mismo: o sea, es como el premio que reciben los ganadores. Y el premio, ya se sabe, consiste en el reparto del botín en forma de nombramientos de altos cargos y control del presupuesto público.

Definitivamente la primavera ha llegado a la política española. Ha llegado con su bagaje de renovadas promesas, idealizados deseos y voluntades de enmienda; ha rebrotado desde sus raíces profundas dibujando ese eterno proceso que impulsa un nuevo ciclo vital.

Y su llegada se ha estrenado con la palabra mágica: la palabra *consenso*. Esa voz idílica que nos retrotrae a los orígenes utópicos del momento creativo, la época de la Transición, cuando los conflictos políticos tenían como telón de fondo ese escenario de consenso que nos situaba a los españoles ante la sensación evidente de que habíamos entrado definitivamente en la era de la civilización. De que habíamos dejado atrás dictaduras, tensiones, represiones y guerras civiles. Aromas de aquella Arcadia original, de la que apenas nos quedan ya algunos idealizados recuerdos casi borrados de nuestra memoria, como de la memoria en blanco de su gran artífice, Adolfo Suárez, consumido por el alzheimer.

Con la primavera vuelven por fin aquellas mágicas, divinas palabras. Y con el nuevo Gobierno parece que vienen los pactos, el diálogo, los acuerdos. ¿Son palabras que vuelven para quedarse o más bien una floración efímera, destinada a olvidarse con los primeros embates del rifirrafe cotidiano? La única incógnita parece ser, por ahora, la de quién lanza la primera piedra, quién asesta la primera puñalada. Agazapados a la espera del primer golpe, aturdidos en plena guerra de facciones, ante la fragilidad de esta primavera, apenas conservamos ya una capacidad colectiva para soñar. Para soñar algo tan concreto e inmediato como el consenso *a la alemana*: la cuadratura del círculo, un bipartidismo convertido por la magia del consenso en clave de gobernabilidad.

Pero una vez perdida nuestra capacidad para soñar sólo nos queda limitarnos a percibir esa sutil floración de la primavera, el delicado aroma de la mágica palabra: consenso. Tras poner nuestra decisión colectiva en las urnas en un intento de apostar por la gobernabilidad, movidos por los imperativos mediáticos que orientan nuestro comportamiento electoral, nos hemos sumergido inexorablemente en el bipartidismo. Y en este bipartidismo acentuado la mágica categoría del consenso no pasa de ser una sutil melodía primaveral, apenas un momento pasajero. Luego vendrán los ajustes de cuentas, el reparto del botín, los cargos para los vencedores y la humillación para los vencidos: la inexorable lógica del bipartidismo.

Cuando celebramos ya el treinta aniversario de la Constitución de 1978, la hija de aquel lejano consenso, parece que nos resistimos a comprender con claridad la inexorable y dura lógica del bipartidismo.

Nuestros deformados recuerdos del espíritu fundacional nacido de la Transición nos impiden entender que ahora las cosas son al estilo Westminster; es decir, siguiendo el simple y duro sistema donde unos gobiernan y otros ejercitan la oposición y la crítica. El problema es que seguramente hay que tener en los genes colectivos esa profunda dosis de exquisita educación y cultura política que tienen los británicos para lograr que la dinámica bipartidista no degenera en una bronca pugna entre facciones, en un nuevo y sordo *guerravicalismo* de trincheras enfrentadas. Y donde, en consecuencia, aquellas mágicas, divinas palabras, aparecen ahora reconvertidas en cantos de sirena, pura retórica mediática, recursos estratégicos de imagen para hacer que unos sean percibidos como los buenos y otros como los malos: toda una regresión de los partidos políticos a su originaria condición de facciones enfrentadas.

Tampoco sabemos si es que el espíritu mismo de nuestra Constitución, hija del consenso, resulta ser parcialmente incompatible con un sistema bipartidista acentuado. ¿Qué hacer ahora con las instituciones *independientes*, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, o el Defensor del Pueblo, todas esas piezas que nuestros constituyentes diseñaron pensando en clave de consenso?

Primero procedimos a sustituir las exigencias de consenso por el tramposo sistema de las cuotas partidistas; luego utilizamos los pactos o los acuerdos como si fueran un auténtico objetivo estratégico del Gobierno, sin entender que los acuerdos son un medio, pero no un fin en sí mismo. Y así las mágicas, divinas palabras, se han convertido en soporte cotidiano de la retórica política, destinadas a incidir en la división maniquea entre buenos y malos, cortinas de humo frente a los enemigos.

La floración de la primavera sólo sirve para anunciar el tórrido verano de la sequía, donde las viejas y divinas palabras se agostarán, como el latín, con el simple paso del tiempo.

EL CASO DE ITALIA

24 abril 2008

El reciente triunfo de la derecha en Italia ha suscitado reacciones paradójicas en nuestro país. Así se ha destacado, en primer lugar, la divergencia de resultados, dando la impresión de que España e Italia reflejarían modelos antitéticos de comportamiento electoral, lo que pondría de manifiesto unas líneas de evolución

contradictorias entre las dos principales democracias del sur de Europa.

No se han subrayado, sin embargo, las significativas coincidencias que se observan en los resultados de ambos países, cuyas realidades sociales son tan próximas en muchos aspectos. En primer lugar, parece evidente que Italia avanza decididamente hacia el bipartidismo, igual que España, suscitando una línea de evolución que parece romper con la inercia histórica de los anteriores modelos pluralistas y "consociacionales", caracterizados por la presencia de minorías centristas que aseguraban un sistema de gobernabilidad basado en claves de consensos y acuerdos plurales entre las distintas fuerzas políticas. En ambos casos con numerosas críticas a la normativa electoral vigente. Tal bipartidismo coincide igualmente con un reforzamiento de los factores personalistas de la competencia política, concretizadas en torno a sus dos principales líderes, reflejando así un lento declive de las lealtades partidistas frente al apogeo de los liderazgos personales.

Este proceso constituiría en ambos casos un reflejo coherente de la predominancia de los factores mediáticos como pauta explicativa del comportamiento electoral: la lógica competitiva de la "videopolítica" tiende a excluir inexorablemente a las minorías, reduciendo selectivamente las opciones de éxito y haciendo derivar el sistema político en un sentido mayoritario. Las claves del apogeo mediático de Berlusconi en Italia no tienen ningún secreto: es el propietario de las principales cadenas de televisión del país. Y además, se ha esmerado previamente en retocarse su rostro y su cabellera para poder dar la imagen adecuada en televisión. Su personalidad consigue reflejar una dimensión más "divertida" del liderazgo frente al serio, discreto -y algo aburrido- Walter Veltroni. Seguramente Berlusconi se configura así como el mejor referente visual de las equilibradas tendencias "modernizadoras" de la sociedad italiana.

Pero el apoyo de las mayorías televidentes ha sido complementado adicionalmente por el éxito de la Liga Norte, cuyo electorado parece reflejar una respuesta de insolidaridad de las zonas más desarrolladas del norte frente al sur subdesarrollado, aunque ese electorado se encuadre predominantemente por sectores trabajadores procedentes de la inmigración del sur. La similitud con el caso de Cataluña resulta, pues, evidente, pues no en balde la estrategia de la Liga Norte viene inspirándose reiteradamente en el ejemplo catalán.

Igualmente cabe destacar otras similitudes, en este caso en las opciones que finalmente han resultado perdedoras en las elecciones: y es que en ambos países las fuerzas políticas que han apostado más decididamente por la defensa de la igualdad, sobre todo en su

proyección territorial, han resultado ser las grandes derrotadas: en Italia ha sido Walter Veltroni, apoyado por la izquierda, quien ha asumido la defensa de la unidad de la República frente a las tendencias centrífugas, del mismo modo que hizo Rajoy en España. El relativo equilibrio entre derecha e izquierda en ambos países parece romperse debido a la posición estratégica de aquellos segmentos del electorado que, desde las zonas más desarrolladas, consiguen orientar el sistema hacia la defensa de la desigualdad territorial y el regionalismo asimétrico, basado en teóricos "hechos diferenciales". La defensa de la igualdad y de los principios de solidaridad interterritorial parece así perder fuerza en el entorno de la Europa mediterránea frente al predominio segregacionista de los intereses de un "norte" desarrollado.

Lo curioso, finalmente, es que tanto en Italia como en España la tendencia al reforzamiento bipolar parece ser más bien un fenómeno inducido desde la propia esfera competitiva de la política y sus soportes mediáticos, y no tanto un reflejo de las tendencias profundas que se expresan en el seno de la sociedad; pues en ambos países sigue siendo el electorado moderado o centrista el que mantiene su mayor potencial de voto.

Desde estos parámetros, seguramente el caso italiano no se nos aparece ya tan lejano y distinto. En ambos países mediterráneos se trataría al final de un reflejo del modo en que los procesos de modernización impactan sobre unas pautas de comportamiento electoral crecientemente condicionadas por la lógica mediática.

ECOS DEL 68

25 mayo 2008

Como todo acontecimiento trascendental que con el paso del tiempo se acaba convirtiendo en historia, el "mayo del 68" se ha transformado ya en un evento destinado a justificar posiciones del presente. Multitud de revisiones, semblanzas, recuerdos, frustraciones y reinterpretaciones se suceden en esta efemérides del cuarenta aniversario, donde parece predominar la paradójica conclusión de que, al final, lo de mayo del 68 apenas sirvió para nada, aparte de para "aligerar" ciertas costumbres.

Pero entre tantas interpretaciones posibles también está, lógicamente, la estrictamente política; o al menos la que puede deducirse de las pautas de evolución de las democracias occidentales

durante el siglo XX. Porque en este punto, mayo del 68 sí que señala con claridad un antes y un después.

Se ha destacado que el levantamiento universitario fue tan sólo una "protesta": o sea, que carecía en rigor de horizontes estratégicos o "revolucionarios" definidos, aunque llegara a contar con el apoyo del sindicalismo obrero francés. Y efectivamente, se trataba de una protesta: una protesta contra el modelo de democracia que se había establecido tras la segunda guerra mundial, una vez consagrado definitivamente el sufragio universal.

Ese modelo de democracia se basaba lógicamente en la dominancia del circuito representativo expresado a través del sufragio, dando lugar a un monopolio plenamente legitimado de los partidos políticos como protagonistas activos del mecanismo de la representación. Era también, al mismo tiempo, el momento de partida del Estado de bienestar que, tras algunos años de expansión económica, había conseguido incrementar los niveles de consumo y los estándares de vida, sobre todo entre las clases medias. Democracia de partidos y bienestar social constituían las claves del éxito de las consolidadas democracias occidentales durante los años sesenta.

Y esa realidad fue precisamente el objeto de la protesta del 68. Una protesta que venía a poner de manifiesto, por primera vez en la historia, que el sufragio universal era insuficiente. Que ya no bastaba para legitimar al poder público con el simple hecho de acudir una vez cada cuatro años a depositar un papelito en la urna. E incluso, que por más políticas de bienestar que se pusieran en marcha desde ese Estado benefactor y paternalista, el puro monopolio partidista del poder no bastaba para reflejar una nueva realidad social que, por primera vez, comenzará a ser analizada desde las exigencias del nuevo paradigma de la "democracia avanzada".

Por eso los protagonistas de la revuelta no fueron las víctimas del sistema, el subproletariado, sino sus élites mejor situadas, los universitarios. Y por eso a partir de entonces, en las democracias avanzadas la mera legitimación democrática del poder no se considera suficiente si los gobernantes no son capaces de abrir cauces participativos adicionales a los ciudadanos. Esta será la razón de que, desde entonces, los propios gobernantes sean precisamente los que no quieren enterarse de lo que representó aquel acontecimiento: desde De Gaulle a Sarkozy, pasando por los demás gobernantes de las democracias occidentales, los desafíos que impone la noción de democracia avanzada siguen siendo, todavía, una larga tarea pendiente. Porque abrir cauces de presencia adicional a los ciudadanos equivale a disminuir el monopolio decisorio de los representantes. Desde esta perspectiva, la línea más clara de continuidad del movimiento de mayo del 68 tuvo su principal expresión

intelectual en la *Escuela de Frankfurt*, donde la noción de democracia avanzada encontrará su mejor desarrollo teórico.

Pero tan amplias ambiciones colectivas tuvieron también, paradójicamente, su propia contraargumentación negativa en el mismo contexto del 68. La denominada "Internacional situacionista" venía a señalar cuál iba a ser desde entonces el flanco débil desde el cual los gobernantes tratarían de encontrar cauces suplementarios de legitimación más allá de las urnas: el ámbito de la videopolítica, desde el cual se va a asegurar el control político de los *mass media* permitiendo una mejor presencia virtual de los gobernantes mediante el espejismo de la imagen y la manipulación de los ciudadanos.

A la hora de conmemorar el aniversario, debe quedar claro que existe, en efecto, un antes y un después. Un hito histórico que marca el comienzo del malestar ciudadano ante las democracias formales y preludia los desafíos políticos del presente: la necesidad de avanzar, desde el paradigma de la democracia avanzada, más allá del sufragio universal. Los ecos del 68 aún resuenan estrepitosamente en el orden político del presente.

CONGRESOS Y LEGISLATURAS

21 julio 2008

Hubo un tiempo en que las legislaturas constituían la auténtica unidad de medida de la vida democrática de un país. Todavía incluso en viejos manuales y webs algo desfasadas se sigue entendiendo así. Se trataba naturalmente de concebir al Parlamento como la arena nuclear de la actividad política y a las elecciones como el centro motor de la misma, marcando así el discurrir del tiempo a lo largo de periodos cuatrienales.

Durante ese tiempo los acontecimientos de la vida interna de los partidos parecían revestir una importancia secundaria. Tan sólo cuando el final de la legislatura preludiva la convocatoria de nuevas elecciones podía adquirir un mayor sentido la revitalización de la actividad congresual de los partidos, con el objetivo de renovar o afinar sus propuestas programáticas y preparar las futuras candidaturas.

En cambio hoy en día parece que la vida de los partidos y sus reuniones congresuales se desenvuelven de forma perfectamente autónoma y por completo al margen de las circunstancias que marcan

la agenda de cada legislatura, lo que demostraría hasta qué punto la dominación partitocrática se ha consolidado en detrimento del protagonismo ciudadano.

Por supuesto, como organizaciones asociativas de carácter privado, los miembros de un partido pueden organizar sus congresos cuando y como quieran. Es razonable incluso que quienes han perdido las elecciones se apresten a la tarea de la renovación desde un primer momento. Pero la cuestión se hace algo más delicada cuando se trata del partido gobernante y cuando algunas de las nuevas propuestas programáticas aprobadas en el correspondiente congreso pretenden llevarse a cabo de forma inmediata. Es decir, ahora resulta que las propuestas que se les ocurren a los dirigentes del partido gobernante en cualquier momento se pueden convertir en acción de gobierno sin necesidad de ningún tipo de mediación ciudadana y sin tener que pasar por las urnas.

Ya sabíamos todos que la democracia parlamentaria se estaba convirtiendo desde hace tiempo en una mera carcasa formal tras la que se esconden las verdaderas fuerzas del poder. Asumimos incluso que el sufragio puede llegar a tener una importancia secundaria, especialmente en contextos históricos de incertidumbre o de crisis sobrevenidas que hacen inviables las propuestas electorales previamente confirmadas en las urnas y revalidadas posteriormente en el correspondiente proceso de investidura del Gobierno.

Pero parece que el grado de autoconfianza adquirido por los partidos en el gobierno ha llegado ya hasta el extremo de dar por supuesto el correspondiente apoyo ciudadano, como si se tratara de una especie de postulado implícito. Lo que significa dar por supuesto que las propuestas estratégicas de los partidos, diseñadas en principio para competir en las elecciones, se pueden convertir directamente en actuaciones de gobierno en la medida en que van a ser asumidas por el partido gubernamental y vendidas a todos a través de su espectacular marketing mediático. Del mismo modo que cualquier empresa privada puede ofrecer, en el momento que le parezca oportuno, nuevos productos o servicios al mercado con la certidumbre de que pueden convertirse en un éxito comercial.

Naturalmente eso no quiere decir -sería demasiado- que los partidos nos consideren a los ciudadanos como si fuésemos auténticos borregos, sino más bien que la lógica de los gobiernos privados y las estrategias corporativas propias de las grandes empresas se han internalizado ya en el mismo sector público. Y por eso, del mismo modo que las empresas privadas manejan sus estudios de marketing que les sugieren el grado de aceptación de sus nuevas ofertas, o el segmento social al que deben dirigirse, igualmente el Gobierno maneja sus sondeos que le indican de forma

más o menos aproximada el grado de aceptabilidad de sus nuevas propuestas programáticas.

La importancia que en este contexto puede tener finalmente el voto ciudadano resultará ser muy escasa: apenas algo así como un mero requisito formal, heredado de las viejas democracias burguesas del siglo XIX. Y es que definitivamente la centralidad de los parlamentos parece haber sido desplazada por la centralidad de la nueva arena mediática, cuya agenda se desenvuelve completamente al margen de las coordenadas propias de cada legislatura. La convocatoria electoral y el debate de investidura se acabarán convirtiendo en puros trámites formales, apenas hitos secundarios ante la espectacularidad del show mediático permanente. Es posible que todo esto no sea más que una nueva etapa dentro de los recurrentes procesos de "modernización" en que estamos inmersos.

ESTOS LODOS

8 agosto 2008

De aquellos polvos vinieron estos lodos. A qué extrañarse ahora de que los gobiernos catalán y vasco emprendan una nueva ofensiva para avanzar en un sentido confederal, rompiendo con todo atisbo de solidaridad interterritorial en España: desde el momento en que, en lugar de negarnos, de establecer barreras, de decir que *no* en voz bien alta, decidimos apostar por la dinámica de la aceptación y la imitación, lo que nos sucede ahora es la consecuencia lógica de nuestra actuación anterior.

Primero aceptamos la posibilidad de que desde la esfera estatutaria se interfiriera en la órbita del poder constituyente, que nos corresponde a todos los españoles. Luego admitimos que un texto de naturaleza auténticamente constitucional, como el aprobado por el Parlamento de Cataluña, se convirtiera con ligeros retoques en un Estatuto. Después nos pusimos incluso a imitar el propio modelo catalán, como si otra vez fuera cosa de todos lo mismo. Hemos mirado para otro lado cuando se han introducido en esos Estatutos convocatorias de consultas populares (tramposo juego de palabras para eludir la noción de referéndum) que preludiaban el llamamiento a la independencia. Y de nuevo miramos para otro lado al constatar al escasísimo grado de apoyo ciudadano que los nuevos textos suscitaban.

Y ahora, cuando comprobamos que -como era previsible- el sistema no funciona, quién puede extrañarse de que el Gobierno

vasco se empeñe en convocar un referéndum soberanista o de que el catalán reemprenda su estrategia del chantaje bajo la falsa justificación del expolio fiscal de Cataluña.

Embarcados en el espejismo de que los nacionalismos periféricos son modernos y progres, no nos hemos molestado siquiera en mirar más allá de nuestras fronteras, como a la vecina Italia, para comprobar los argumentos de la izquierda y de sus principales medios académicos en contra de un regionalismo diferenciado que trata simplemente de consagrar los privilegios de las zonas más desarrolladas del norte. Pero como los vientos del bienestar económico soplaban entonces a nuestro favor, nos seguimos empeñando en contemplar un mundo color rosa, donde todo iba bien y donde la única fuente de todos los males había sido el gobierno Aznar.

Mientras tanto, tampoco hemos querido tomar conciencia de las oportunidades que estábamos perdiendo: la oportunidad de apostar decididamente por las esferas locales como la nueva trinchera en la que se va a decidir el futuro del Estado de bienestar; y es que, de tanto expandir las competencias autonómicas, no nos hemos dado cuenta de que al mismo tiempo estábamos estrangulando el circuito del poder local, hoy ya en estado casi comatoso. O la oportunidad de progresar decididamente hacia el plano de la denominada gobernanza multinivel, donde las distintas esferas institucionales (local, regional, estatal, europea) deberían ser capaces de integrar esfuerzos coordinadamente con un marco abierto de cooperación efectiva; cuando la realidad emergente es, por el contrario, la del reforzamiento del modelo reinos de taifas y el puro autismo institucional de cada uno a lo suyo. O incluso la oportunidad de avanzar en un horizonte colectivo de tipo cosmopolita y abierto, adecuado a las exigencias del universo globalizado; cuando la realidad cotidiana nos empuja alternativamente hacia un provincialismo cateto con el apoyo de nuestros inefables medios audiovisuales.

Y por eso ahora ni contamos con esferas locales adecuadas para atender al nuevo tipo de servicios colectivos que necesitamos, ni estamos avanzando en pautas de gobernanza multinivel para desarrollar proyectos en clave de cooperación interinstitucional, ni conseguimos salir del provincialismo cateto y endocentrado en que nos hemos metido. Como en aquel momento no lo pensamos, como lo que importaba era asegurar la estabilidad de un gobierno precario, tras inclinar la balanza del lado territorial la dinámica subsiguiente fue la de una bola de nieve creciendo a velocidad acelerada.

Pero que a nadie se le ocurra ahora hablar de errores del pasado. Si hasta en la misma Bélgica están ya casi nosotros, más vale que nos consolemos con un mal de muchos. La única sorpresa

es que algunos ahora se acuerden nada menos que de la Constitución: virgencita, cuesta abajo y sin frenos, que nos quedemos como estábamos. Pero con las vacaciones de verano, ya no es tiempo de sufrir con tantos problemas: bastante tenemos con la crisis económica. Y seguro que al final nuestros gobernantes nos sacan del atolladero: los mismos que nos metieron en aquellos polvos de los que vinieron estos lodos. Todos felices a la playa, que el gobierno vela por nosotros.

LOS CIENTÍFICOS Y LA POLÍTICA

19 agosto 2008

Que la actividad de gobierno se apoye en el conocimiento científico constituye un ideal colectivo donde a veces se comprueba el grado de civilización alcanzado por algunas sociedades. Es un ideal que cuenta con prestigiosos antecedentes, desde Platón en la Grecia clásica o Saint-Simon en los albores del desarrollo industrial europeo hasta lo que algunos han denominado con la "quinta rama" del Estado (Jasanoff) en el contexto contemporáneo.

Pero para que el conocimiento científico pueda incorporarse adecuadamente a la acción pública debe ser independiente y haberse gestado en ese ambiente de libertad intelectual y capacidad crítica que, en teoría, sólo se encuentra en los claustros de ciertas universidades o a la sombra de prestigiosas fundaciones o centros de investigación. En algunos estados de bienestar avanzados su papel resulta fundamental en distintas políticas públicas, hasta el punto de incorporarse normalizadamente en el proceso de diseño y evaluación de numerosos programas de acción pública.

Esta incorporación del conocimiento científico a la acción pública requiere un cierto ejercicio de humildad: en primer lugar, por parte de los gobernantes, que deben constatar que los recursos cognoscitivos del sector público a veces son limitados y, por lo tanto, el conocimiento *externo* constituye un valor sustantivo al servicio del buen gobierno. El problema consiste en que con la deriva mediática que parece presidir el desarrollo de la acción de gobierno, las condiciones de incorporación del conocimiento científico al gobierno experimentan un cierto enrarecimiento. Porque todo diagnóstico científico de la realidad debe ser, por definición, de carácter "crítico". Trata de identificar los núcleos problemáticos de una determinada realidad para deducir las líneas de actuación que deben generarse en respuesta a la misma. Pero cuando la realidad se percibe de forma

idílica, cuando el presente viene condicionado por la llamada "paradoja de la satisfacción" y su proyección mediática, cualquier diagnóstico crítico puede ser percibido como una desautorización de la actuación gubernamental. Y aceptar la crítica es un ejercicio de democracia tan sublime que parece lógico que algunos gobernantes se sientan incómodos. Si el marco de percepción de la realidad se sitúa en una visión idílica de las cosas, resulta mucho más gratificante rodearse de una cohorte de aduladores.

Cuando esto pasa, la realidad sólo se percibe de forma crítica si la propia crisis se ha desbordado hasta un punto extremo, hasta arrasar con la realidad como una auténtica emergencia. Ese es el momento en que los gobernantes se acuerdan de los técnicos y científicos. El caso más pintoresco en nuestra tierra fue el famoso desastre del vertido de Aznalcóllar, del que se han cumplido diez años. Una muestra paradigmática del buen hacer de nuestra clase gobernante: durante días o semanas, en pleno vertido tóxico, ningún gobernante hizo acto de presencia ante la opinión pública. España parecía un país sin gobiernos, ni en la escala local ni en la autonómica ni en la nacional: nadie quería comparecer para no *quemarse* al ser percibido como el responsable público. Y al cabo del tiempo se encontró la solución: llamar a los técnicos y científicos para que ellos remediaran el desastre. Como suele decirse, acordarse de Santa Bárbara cuando truena.

Pero la incorporación del conocimiento científico a la esfera pública requiere también un ejercicio paralelo de humildad por parte de los propios científicos. Primero es necesario homogeneizar posiciones, lo que no siempre sucede en el mundillo académico: de ahí que en las teorías de gestión pública se hable más bien de "grupos de conocimiento", es decir, sectores de expertos o académicos que comparten posiciones y estrategias ante los problemas, a veces desde una perspectiva interdisciplinar. Una exigencia que no se ajusta el modelo de departamentos y áreas propio de nuestras universidades, concebidos a menudo como auténticos reinos de taifas. Pero también es necesaria una cierta humildad para entender que el conocimiento científico tiene ahora un sentido instrumental, que no se trata de descubrir la *verdad* absoluta sino tan sólo de diseñar una actuación eficaz al servicio de los intereses colectivos.

Cuando estas condiciones no se cumplen, el papel de los científicos corre el riesgo de degradarse, de caer en la manipulación política bajo las interferencias que el dinero público impone a los programas de investigación. Y en ese contexto los científicos pueden perder su independencia para, al final, acabar convertidos en simples intelectuales y artistas.

LA DEMOCRACIA MILITANTE

21 septiembre 2008

La pregunta de si la democracia debe ser un sistema político capaz de tolerar y de convivir con sus propios enemigos ha tenido durante años en nuestro país una respuesta muy generosa. A diferencia de lo que indicaba la experiencia de otros países, los españoles hemos creído desde la transición que la nuestra era una democracia más *avanzada* precisamente porque los instrumentos de ilegalización de partidos contrarios al orden constitucional, aunque previstos formalmente en el ordenamiento, eran en la práctica de muy difícil utilización.

Frente al modelo de las llamadas "democracias militantes", como Alemania, donde se ha entendido -tras una larga experiencia histórica- que la democracia debe defenderse a sí misma frente a sus enemigos mediante el uso de los instrumentos legales, nuestra visión de las cosas era mucho más laxa y generosa. Existían, sí, en teoría, mecanismos capaces de permitir la ilegalización de un partido, pero su uso tenía en la práctica tales incertidumbres y falta de soportes procesales que se convertía casi en un caso de laboratorio. ¿A qué partido se le podía ocurrir, por ejemplo, incluir en sus estatutos la previsión de cometer delitos o de atentar contra el orden constitucional establecido? En la vida política, parece evidente que los enemigos no operan a cara descubierta, sino tratando de apoyarse en las propias instituciones y de ampararse en la confortable sombra del presupuesto público.

En ese contexto, algunos podían hasta soñar que al final nuestra democracia resultaba ser más auténtica y *avanzada* que la de otros países, en el sentido de que se toleraba la existencia de fuerzas políticas afines al terrorismo y absolutamente contrarias al orden constitucional vigente: es decir, de que podíamos convivir con nuestros propios enemigos. El coste que esa actitud tan inocente y presuntuosa haya podido tener, tanto en vidas humanas como en el propio funcionamiento democrático, es algo que tendrán que aclarar algún día los historiadores.

Sin embargo, desde la última reforma de la Ley de Partidos de 2002 las previsiones legales parecían ya mucho más explícitas, y así se pusieron en marcha con la ilegalización de Herri Batasuna en 2003. España pasaba, pues, a alinearse con los modelos de democracia militante, utilizando los instrumentos legales en su propia defensa. El uso tramposo de nuevas siglas tras las que enmascarar la misma

oferta política se ha confirmado también como una artimaña ilegal, de acuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo ilegalizando Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Pero en ambos casos la decisión judicial adolecía de unas consecuencias imprevistas: y es que una cosa es ilegalizar a un partido (al fin y al cabo una suerte de asociación privada de ciudadanos) y otra muy distinta proceder a la disolución de los cargos públicos que tal partido ha obtenido en unas elecciones. Pues desde el momento en que los candidatos de un partido político han recibido la bendición de los electores, se convierten en representantes de los ciudadanos amparados en la irrevocabilidad del mandato representativo.

El juego interesado que el Gobierno Zapatero ha mantenido tras su frustrado diálogo con ETA ha impedido que las medidas legales previstas desde 2002 se aplicaran con toda su contundencia antes de los comicios municipales de 2007, ilegalizando todas las candidaturas presentadas, lo que al final parece que va a otorgar algunos años de impunidad para los más de cuatrocientos concejales electos de ANV en el País Vasco y Navarra. La perspectiva de que pueda producirse una disolución de los más de cuarenta ayuntamientos gobernados por tal coalición se enfrenta a todo un cúmulo de dificultades e incertidumbres, no sólo en términos estrictamente jurídicos, sino también en el sentido de falta de alternativas reales de gobierno. Demasiado complicado para llevarlo a cabo con éxito.

En todo caso, es posible que a partir de ahora en el entorno del universo social *abertzale*, alimentado a lo largo de décadas de sordas complicidades y tolerancias, empiecen a entender que, para el conjunto de los ciudadanos, no son esa suerte de héroes románticos, especie de luchadores por la libertad de su tierra que pretenden ser, sino puros y simples enemigos de la democracia, cómplices indirectos de los asesinos terroristas.

Lo único que no deja de resultar sorprendente es que, para llegar a este punto, los españoles hayamos tenido que esperar nada menos que treinta años. Y es que, cuando se ignoran las experiencias extranjeras, el aprendizaje democrático parece que requiere al final de ese bagaje de conocimientos que sólo da el paso del tiempo.

AÑO 2009

LA ERA DE CHAVES: RETRATO EN SEPIA

(Tras la dimisión de Manuel Chaves)

12 abril 2009

Un final de etapa en medio de tan profunda crisis económica no parece el mejor escenario para un balance triunfal. Salvo que se considere un triunfo el propio hecho de mantenerse en el poder durante casi dos décadas, lo que sería confundir un buen gobierno con un gobierno meramente estable o duradero.

En realidad, lo que sorprende del largo periodo de gobierno Chaves es la serie de grandes ilusiones colectivas que al final quedaron prácticamente en nada: ya era una ilusión el comienzo mismo de la década de los noventa, con su Expo 92 y su flamante AVE, envidia del resto de España; como lo siguió siendo, pese a la crisis de los noventa, el proyecto de Maastricht y su generoso maná de ayudas públicas. Ninguno de ellos eran en realidad proyectos del gobierno Chaves. Trató de serlo ya a comienzos de siglo el programa de la Segunda Modernización, pero tras una década de pura inercia dedicada a la mera gestión de las cosas, resultaba difícil movilizar el grado de liderazgo suficiente para hacerlo creíble. Ni siquiera el nuevo Estatuto de Autonomía, que al final resultó una gris copia del modelo catalán, ha constituido un factor de reorientación o de cambio en la dirección política de Andalucía.

Al final, el estilo del gobierno Chaves se ha situado más bien en un modelo de tipo arbitral y algo ausente, simple factor de equilibrio y de continuidad frente a las tensiones internas del propio aparato. Y probablemente aquí es donde reside el perfil más característico de su forma de gobierno: un gobierno para asegurar y mantener los equilibrios del partido gobernante. De donde podríamos deducir que, más que un gobierno de Chaves, era en realidad un gobierno del partido de Chaves. Del que se supo -eso sí- hacer una defensa contundente durante la única etapa peligrosa, el proceloso bienio de la pinza durante los años noventa.

Un gobierno del partido seguramente no es nada nuevo ni original para una democracia parlamentaria relativamente reciente, pero resulta algo anticuado frente a las tendencias innovadoras de la gobernanza o los hiperliderazgos dinámicos de otros sistemas, capaces de responder de forma inmediata a las exigencias de

renovación y cambio histórico. Porque al final, el gobierno de Chaves se ha limitado a ser un simple reflejo de los equilibrios internos del aparato de su partido: con sus cuotas territoriales, sus cuotas de género, sus conflictos solapados, sus corruptelas silenciadas. Los únicos aparentes soportes de brillantez eran los que aportaba su gran instrumento mediático, Canal Sur, donde contemplamos nuestra propia imagen colectiva reflejada en el espejo: catetos autosuficientes y satisfechos.

Ni siquiera algunos de los supuestos grandes logros de este periodo soportan un balance crítico ante tan prolongado espacio de tiempo: una política sanitaria con ínfulas de estrella que no ha conseguido superar sus riesgos constantes de sobrecarga; o unas políticas sociales que se esfuman como pavesas ante el vendaval de la crisis económica. En el resto, cómo no, se han desarrollado conocimientos, experiencias y esfuerzos positivos y dispersos: pero al cabo del tiempo la maquinaria pública de la Junta parece desilusionada ante al predominio de la mediocridad y la rutina, y paralizada ante los síntomas crecientes de esclerosis y la falta de una orientación política bien definida.

Como sucedió en los años finales de la dictadura soviética, el circuito de poder controlado por un único partido y proyectado sobre una sociedad dependiente y colonizada por la política, ha acabado por canalizarse mediante una “nomenklatura” estable y envejecida, donde triunfa una concepción patrimonialista del poder y donde los procesos sucesorios se desenvuelven mediante el sistema del “dedazo”, como se denominaba en el argot mexicano, o sea, siguiendo una alternancia desde arriba. A estas alturas nadie puede extrañarse de que semejante concepción patrimonialista se acepte como un fenómeno natural, propio de nuestra vieja cultura del sur: nuevos equilibrios dentro de los mismos equilibrios, viejos frenos para las nuevas inercias, recomposición del orden dentro del mismo orden. Sin cambios dentro del cambio. Sin espacio para la utopía o para ilusiones colectivas de modernidad o innovación.

Se vuelve Chaves a Madrid tal como vino: llamado desde arriba, sin brillos ni alharacas, una simple y discreta pieza dentro de un orden de aparato que diseña impávido su propia autoreproducción; suscitando apenas un leve murmullo en las vísceras profundas que se remueven en el vientre de la bestia, pero bien lejos del calor de las masas o del apoyo profundo de los ciudadanos. Imagen en sepia de una realidad que ni se conmovió durante su mandato ni parece conmoverse por su ausencia.

EL “NUEVO” MODELO ZAPATERO

1 junio 2009

Definitivamente parece que el Presidente Zapatero ha acabado por encontrar su fuente más preciosa de inspiración: el socialismo andaluz. Se trata de un modelo de gobierno caracterizado por sus periódicas llamadas hacia horizontes utópicos que pretenden incidir sobre la opinión ciudadana: pero no tanto bajo el postulado del impacto real de la acción de gobierno sobre la sociedad o la economía, sino más bien desde una estrategia que persigue la generación de nuevas visiones colectivas de esa realidad.

Los periódicos ciclos de “modernizaciones” marcarían en efecto un intento de incidir sobre el lado inmaterial de la sociedad andaluza, sobre las mentalidades colectivas y sus representaciones simbólicas, suscitando así un ambiente de opinión renovado y actualizado que consigue expandir al mismo tiempo un espíritu de optimismo y satisfacción colectiva.

No se ha destacado lo suficiente que este tipo de enfoque supone un alto grado de adecuación al entorno contemporáneo de desarrollo de la videopolítica y de la dimensión audiovisual de la vida colectiva. La primera modernización de Andalucía, durante la década de los ochenta, vino acompañada de la aparición de Canal Sur; y aunque en su sentido originario pretendía desprender a la sociedad andaluza de su viejo complejo de subdesarrollo y pesimismo nacido del final del franquismo, en la práctica comenzó a generar un tipo de sociedad enganchada al circuito mediático y dispuesta a dejarse “representar” en las imágenes de Canal Sur. El proyecto relativamente frustrado de la segunda modernización, a principios de siglo XXI, trataba de adecuar ese imaginario colectivo a los desafíos de las nuevas tecnologías y valores: su proceso de implementación estuvo acompañado de una fuerte dosis de optimismo que se reflejaba en los conocidos eslóganes de la Andalucía imparable o al máximo.

En ambos casos se trataba de horizontes programáticos que respondían a diagnósticos más o menos fundamentados o debatidos entre circuitos académicos o intelectuales de nuestra tierra. La novedad del nuevo modelo de tercera modernización o de apuesta por un modelo productivo sostenible consiste acaso en que su aparición es producto del liderazgo mediático del propio Zapatero. Es decir, no ha sido elaborado, que se sepa, por ningún “*think tank*” andaluz, aunque incorpora los mismos estratos de fuerte impacto mediático y renovada apuesta por las nuevas tecnologías.

Como los anteriores, pretende básicamente una nueva forma de representar la realidad: si la realidad socioeconómica andaluza refleja cifras abismales de desempleo y parálisis económica, será posible percibirla positivamente desde la convincente sensación de

que disfrutamos de buenos subsidios de desempleo y desde la posibilidad de calificarla como una economía “sostenible”. Si nuestras variables educativas no rebasan el umbral de cualquier evaluación, será posible reinterpretarlas desde la perspectiva de que, en todo caso, se trata de una educación en valores. Si nuestro tejido productivo no alcanza apenas niveles de competitividad con el entorno, siempre nos quedará la satisfacción de que es ecológicamente limpio. Si nuestra cultura es la que es, siempre nos quedará la romería del Rocío.

La realidad se convierte así en una instancia perfectamente reconstruible, susceptible de representarse de forma subjetiva y de proyectarse en una dimensión virtual y optimista. Son, en efecto, los nuevos “valores” los que califican a esa nueva realidad; y lo único que se necesita es un nuevo color del cristal con que se mira. El desafío de Zapatero está claro: si se consigue que esa nueva realidad virtual sea aceptada y compartida por la mayoría, la próxima victoria electoral estará asegurada. Y Andalucía habrá resultado ser, efectivamente, el modelo de referencia para el gobierno socialista español.

No sabemos si en las hoscas tierras del norte, más dadas a una visión dura y cartesiana de la realidad y menos proclives a dejarse autorepresentar en visiones optimistas por vía mediática, la gente se mostrará propensa a seguir estas nuevas pautas que los andaluces estamos dispuestos a marcar. Salvo que se dejen contagiar por la alegría colectiva que esa nueva realidad virtual puede generar en la práctica: será el triunfo de la Andalucía para España y la humanidad. Del mismo modo que los ministros y ministras andaluces de Zapatero han marcado una pauta de referencia en Madrid, ahora los andaluces podremos convertirnos en la referencia colectiva para otros pueblos de España.

Pero no tenemos de qué asustarnos: el sueño terminará con la próxima victoria electoral y después empezaremos con otro nuevo.

FINANCIACIÓN Y HEGEMONÍA

2 agosto 2009

La gobernanza de nuestro complejo sistema territorial tiene uno de sus puntos críticos en el tema de la financiación autonómica: un sector donde las exigencias de cooperación y consenso se desenvuelven a través de un complejo proceso de negociación que suscita la periódica reaparición del fantasma de la gobernabilidad y el

consabido precio de los apoyos necesarios para asegurar el gobierno de Madrid.

Pero si en el pasado tales procesos de negociación se solían justificar en base a los principios y valores constitucionales - solidaridad o igualdad, en mayores o menores dosis-, parece que el nuevo sistema, según la versión ofrecida por algunos gobernantes catalanes, sustituye la dinámica de la cooperación por la de la competencia y, en consecuencia, el orden constitucional es reemplazado por un nuevo paradigma preconstitucional: el de las relaciones de fuerza o de hegemonía entre territorios.

Es un problema que viene detectándose hace tiempo, en paralelo a la progresiva pérdida de sentido del valor solidaridad, y que se concreta en un fenómeno de revuelta fiscal de las zonas ricas del norte desarrollado: en la vecina Italia el proceso se desencadena desde la década de los noventa a través de la Liga Norte que defiende el rechazo del norte desarrollado a seguir financiando vía fiscal a las zonas más desfavorecidas del sur. En España el fenómeno se inicia en rigor desde el privilegio foral que la Constitución otorgó a las comunidades vasca y navarra, pero experimenta una considerable expansión a lo largo del tiempo. El caso más significativo en los últimos tiempos es el de Cataluña, donde se parte de un diagnóstico bastante claro: según los catalanes, Cataluña estaba siendo expoliada fiscalmente por el resto del Estado y por eso el nuevo sistema viene por fin a hacer justicia frente a tamaño abuso histórico.

Podemos imaginarnos el panorama: o sea, que con el dinero que le expoliábamos a los laboriosos y diligentes catalanes, los vagos e indolentes andaluces nos montábamos cada año una romería del Rocío o algún fiestongo similar, en plan borrachera colectiva. Un abuso que evidentemente había que cortar.

El nuevo panorama de la financiación autonómica viene así a eliminar las máscaras y justificaciones extraídas de la vieja Constitución de 1978: ahora retornamos a una especie de orden premoderno o preconstitucional, donde estas cuestiones se sustancian en clave de pura hegemonía: hegemonía en primer lugar económica, claramente reforzada por los efectos de la crisis; ¿dónde se elaboran la mayor parte de los productos y mercancías que consumimos los andaluces y los españoles todos? Obviamente en la industrial Cataluña. ¿Dónde está pues la hegemonía económica? Y de la hegemonía económica viene, como una consecuencia lógica, la política. En el fondo, para qué engañarnos, es lo de siempre: los más poderosos son los que mandan. Y los más ricos siempre consiguen más, precisamente porque son más ricos.

Los viejos sueños de un orden justo y solidario basado en grandes valores constitucionales habrá pues que darlos por olvidados. En plena crisis económica más vale prescindir de bellos valores

colectivos como la igualdad: que cada cual se eche mano de la cartera y cada uno a lo suyo.

Al final, la pérdida de cualquier horizonte para una gobernanza territorial inspirada en principios de justicia parece tener una justificación clara: se trata de la estabilidad del gobierno, esa deidad en cuyo altar se ofrecen en sacrificio los últimos jirones territoriales del Estado. A cambio de la pérdida de tales valores constitucionales tenemos a un gobierno Zapatero instalado en el poder de forma estable, con su apoyo parlamentario correspondiente.

Se supone que todo esto puede ser una nueva consecuencia del propio diseño inestable de nuestro modelo autonómico. Es posible que los españoles hayamos avanzado tanto en nuestro proceso autonómico que al final, desbordando a la propia Constitución, nos acabamos reencontrando con el orden medieval originario, el de los reinos de taifas. Del modelo presuntamente justo de la Constitución hemos retrocedido a un tipo de relaciones interterritoriales basadas en claves de hegemonía.

Como decía Ortega y Gasset en 1937 “Romper la continuidad con el pasado, querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender y plagiar al orangután”. Nuestro pasado más inmediato era sin duda el de un ordenamiento constitucional, sustituido ahora por un modelo de relaciones de fuerza que se sustancian en clave de hegemonía. Nuestra regresión hacia el pasado avanza sustancialmente: a los españoles sólo nos faltaría ya, recordando a Ortega, empezar a subirnos a los árboles.

EL SAINETE HONDUREÑO

2009

Solía darse por entendido que la política centroamericana constituía la versión más tópica del modelo colonial latinoamericano, con sus dictadores de pacotilla, sus militarotes sanguinarios teledirigidos por la CIA, sus sociedades indolentes y descompuestas: el paradigma más perfecto de la auténtica república bananera, reflejada en innumerables obras literarias que siguen la estela de la inmortal “*Tirano Banderas*” de Valle-Inclán. Quién no recuerda por ejemplo al inefable Anastasio Somoza afanándose los fondos de la ayuda internacional por el terremoto del Salvador, o al singular Omar Torrijos con su sombrero tejano y su enorme veguero “gobernando” desde su hamaca la política panameña. Todo un contexto social profundamente “guerracivilista”, lleno de hambres, miserias e

injusticias; auténtico imagen en negativo de lo que debe ser una democracia.

Paradójicamente Centroamérica es también una de las áreas que ha recibido los mayores esfuerzos de cooperación y ayuda al desarrollo, especialmente de España, con proyectos a veces heroicos llevados a cabo por distintas ONGs y numerosos voluntarios. Lo que seguramente ha permitido que la oleada democratizadora de finales del siglo XX genere en esta región algunas de sus consecuencias positivas.

¿Cuál de los dos elementos es que acaba dominando en el contexto presente? Como sucede en otros países, hay allí una cláusula constitucional sagrada que suele marcar la barrera donde el sistema democrático se rompe para dar lugar a la aparición de los caudillismos: la limitación de los mandatos. Se trata de una norma habitual en los sistemas de tipo presidencial, cuya existencia se reclama incluso en los modelos parlamentarios de tipo europeo.

La generalización del fenómeno de los hiperliderazgos presidenciales y la acción puramente electoralista de los gobiernos están colocando a las democracias contemporáneas en una tesitura semejante a la que supuso en su momento el fenómeno conocido como “bonapartismo”: la tentación de buscar el apoyo directo del pueblo en forma de referéndum para permitir una perpetuación en el poder aparentemente legitimada en las urnas. Recordemos que en su momento, durante el siglo XIX, el bonapartismo representaba una opción aparentemente “progresista”. Del mismo modo, en la larga serie de líderes populistas que buscan en Latinoamérica superar la limitación de los mandatos, no solamente hay dirigentes de derechas: también aparecen gobernantes que se autodefinen como de izquierdas e incluso auténticos revolucionarios. O sea, la deriva dictatorial parece afecta por igual a las derechas y a las izquierdas, y tan manipulables son las masas en un caso como en otro. Del mismo modo que las tentaciones por perpetuarse en el poder afectan en el fondo a todo tipo de gobernantes, incluso a los del occidente desarrollado.

Pero lo de Centroamérica parece que a veces supera los límites de la política para rozar el auténtico esperpento, adornado con los ritmos dulzones de la salsa caribeña. El intento de Manuel Zelaya por perpetuarse en el poder en Honduras convocando un referéndum para reformar la Constitución ha sido colapsado por el rechazo de los poderes legislativo y judicial complementado por el oportuno golpe de mano militar. En apariencia un golpe preventivo que recuerda lejanamente la intervención del ejército argelino para bloquear al partido fundamentalista tras su triunfo electoral. Pero en los tiempos que corren el paradigma emergente resulta ser el multilateralismo y el apoyo internacional a semejante actuación resultaría algo

contradictorio además de profundamente equivocado. Sobre todo, cuando parece que este golpe de mano viene a poner en crisis la creciente hegemonía “bolivariana” en la región caribeña.

En este contexto la defensa de la democracia constitucional se convierte en una auténtica aventura que se complica adicionalmente por la presencia de los más típicos elementos de la política bananera. Lástima que los Vargas Llosa o García Márquez estén ya un poco mayores para cuajar sobre este caso una nueva obra maestra. Acampado el expresidente Zelaya en la frontera hondureña, al modo como hizo López Obrador en la plaza del Zócalo mexicana, parece empeñarse en recuperar con el apoyo de un coro de voces internacionales una legitimidad institucional que él mismo fue el primero en socavar. Agitadores infiltrados, servicios secretos, fuerzas armadas especiales, organismos internacionales, líderes vociferantes con fuerte apoyo mediático, conforman la nueva visión de la política bananera: todo un sainete hondureño que a veces nos trae ecos lejanos de las más rancias tradiciones hispanas.

EL TAO DE LA POLITICA

19 septiembre 2009

Aunque puede que algunos lo ignoren, en la remota tradición del taoísmo chino se encuentran algunas de las raíces fundamentales de nuestra modernidad. La dialéctica hegeliana, que está en la base del marxismo, sigue en efecto una secuencia metodológica que reproduce las pautas de aquella vieja ideología oriental donde la visión dual de la realidad, que se expresaba en las categorías del *yin* y el *yan*, encontraría su culminación armónica en el *tao*; del mismo modo que en la dialéctica hegeliana la tesis y la antítesis tienen su resultado perfecto en la síntesis.

Lo que no sabíamos es que nuestros dirigentes, acaso sin ser conscientes de ello, están operando una reelaboración creativa de esa dialéctica taoísta-hegeliana para enfrentar mejor los complejos desafíos del nuevo milenio. La clave está en la forma de responder a la más elemental y decisiva de las preguntas que preocupan a nuestra sociedad: ¿cuál ha sido realmente la causa de la crisis? ¿Por qué razón nuestros gobiernos no pudieron preverla, detectarla a tiempo y poner en marcha las respuestas adecuadas?

La forma como nuestros gobernantes responden a estas cuestiones refleja en efecto una sofisticada reelaboración de las tesis taoístas y de sus posteriores desarrollos hegelianos. ¿Quién es el

responsable de la grave crisis económica que se desencadena en España a partir de 2008? Evidentemente la oposición. Da igual que el equipo gobernante llevara ya agotada una legislatura en el poder; da igual la venerable lógica del parlamentarismo según la cual la responsabilidad política corresponde en todo caso al gobierno. La nueva línea estratégica del gobierno-protesta puesta en marcha por Zapatero permite en efecto invertir las pautas de imputación para culpar a la oposición de los males de la acción de gobierno.

En realidad, se trata de un estilo que contaba ya con singulares precedentes en Andalucía donde los datos negativos que reflejan el resultado de la acción pública no son considerados en ningún caso como una responsabilidad del gobierno socialista sino de la nefasta oposición: son ellos, los señoritos y neoliberales de la derecha, los auténticos enemigos de Andalucía. Yendo incluso más allá en el tiempo podemos encontrar otras raíces lejanas de esta teoría en el remoto franquismo. ¿Quiénes eran los responsables de los males que asolaban a España durante aquella época? Obviamente no el propio gobierno sino la conspiración judeo-masónica, los enemigos externos que conspiraban permanentemente contra los intereses de la patria.

El argumento ha tenido tanto éxito que ha llegado incluso a afectar a las tradicionales voces críticas de las democracias occidentales, los sindicatos. En su discurso de acceso a la renovación al frente de UGT Andalucía, el líder ganador Manuel Pastrana manifestaba en efecto ese perfil crítico y radical que caracteriza desde hace casi dos siglos al movimiento sindical: sólo que la crítica de Pastrana se dirigía ¡contra la oposición! O sea, en lugar de decir lisa y llanamente que UGT apoya al gobierno, lo que afirmaba -para éxtasis de las masas obreras- es que ellos están en contra de la oposición. La milenaria lógica del taoísmo no podía encontrar una vía más espectacular para su resurrección.

El uso de esta revolucionaria estrategia tiene evidentes ventajas: si el gobierno se opone, entonces no tiene por qué preocuparse de gobernar. Basta con oponerse a la oposición y así llegamos al equilibrio perfecto, al *tao* de la política. La proyección de tal dialéctica sobre el universo virtual que domina en la práctica nuestro proceso político asegura que estos ejes de imputación se proyecten de forma efectiva sobre la opinión pública. Y así, la vieja teoría de la conspiración judeo-masónica ha acabado siendo sustituida con éxito por el nuevo eje del mal: los Bush, Aznar, y los neoliberales o *neocón*.

Pretender a estas alturas reiterar la vieja lógica y el elemental sentido común que caracteriza desde sus raíces británicas al régimen parlamentario (donde el gobierno gobierna y se hace responsable, mientras que la oposición se opone, critica al gobierno y se ofrece como alternativa al mismo), seguramente implica ignorar las

complejas implicaciones de la nueva posmodernidad virtual, así como el fabuloso hallazgo de esta nueva dialéctica de raíces milenarias. Al desarrollar una estrategia de gobierno que consiste fundamentalmente en oponerse a la oposición, Zapatero está llevando a nuestro país al elevado escenario del *Tao*.

Probablemente algunos, engolfados en la prosaica tradición del parlamentarismo, aún no somos conscientes del trascendental hallazgo que esta nueva estrategia supone para nuestra política.

EL RUIDO JUDICIAL

14 noviembre 2009

Algunas de las recientes sentencias judiciales que afectan a la actividad de la Junta parecen sugerir la preocupante hipótesis de que los tribunales andaluces están comenzando a bloquear un número creciente de líneas de actuación del gobierno autonómico. Lo que hasta ahora parecía una simple batalla localizada en algunos puntos conflictivos más o menos estables, como la política de personal relativa a los interinos o el control de la actividad urbanística al nivel local, parece que empieza a desbordarse en otras líneas estratégicas que afectan a otras materias más nucleares como la educación, determinadas políticas de bienes culturales, o el diseño de algunos mecanismos de agencialización de la Junta.

A estas alturas de desarrollo autonómico resulta un poco sorprendente constatar que la Junta de Andalucía no haya sido aún capaz de poner en marcha unas líneas estratégicas suficientemente consistentes como para resistir los embates del control jurisdiccional, necesario en todo Estado de Derecho. ¿Se trata de una deficiencia de diseño legislativo del derecho autonómico o de un reforzamiento de las líneas judiciales de oposición al sistema? ¿Un resultado de la relativa ingenuidad de los poderes autonómicos a la hora de orquestar sus mecanismos de instrumentación jurídica, o un enrocamiento numantino de ciertos jueces iluminados que creen estar desempeñando una misión de resistencia histórica, como la que presidió su defensa de la seguridad jurídica frente al franquismo tardío? Cabría suponer que el grado de entendimiento o de comprensión mutua entre dos esferas institucionales comprometidas en el mismo tipo de objetivos comunes debería tener a estas alturas un mayor número de puntos de encuentro que de conflictividad. O a lo mejor se trata simplemente de que la Junta ha venido descuidando una de sus líneas de apoyo a la hora de desarrollar sus políticas, la

que se refiere a su diseño normativo y posterior defensa en la instancia judicial.

El asunto debería preocupar seguramente a nuestros gobernantes autonómicos: recordemos, por ejemplo -en un ejercicio de memoria- que uno de los principales proyectos de nuestra historia autonómica, el de la reforma agraria, acabó embarrancado no en la suprema instancia del Tribunal Constitucional (que aceptó la constitucionalidad de la ley) sino en los recovecos de las instancias judiciales ordinarias. Desde aquella época hasta nuestros días parece razonable pensar que han debido establecerse suficientes mecanismos de comunicación y de aprendizaje entre las esferas burocráticas y las judiciales como para permitir no sólo una adecuada comprensión mutua sino una instrumentación jurídica suficiente en los soportes legales y normativos de la actuación de la Junta.

Entonces ¿qué está fallando, los poderes autonómicos o las instancias judiciales? Por parte de la esfera autonómica es posible que nuestros legisladores se hayan dejado caer del lado de un cierto “buenismo”, entendiendo que el derecho intervencionista consiste básicamente en el establecimiento de determinados principios programáticos, objetivos o fines, y que la coherencia de tales objetivos finalistas se justifica por sí misma sin necesidad de mayores recursos regulativos o parámetros de enjuiciamiento de la labor pública. Al final, un problema de pura calidad legislativa. Por parte de la esfera judicial es posible que, además de constatar insuficiencias o errores en el derecho autonómico, no haya una comprensión suficiente de lo que significa el derecho intervencionista contemporáneo y se sigan aplicando pautas de control propias de otras épocas. Resulta sorprendente por ejemplo que a comienzos del siglo XXI se siga utilizando todavía la débil argumentación de la “huida del derecho administrativo” y el subsiguiente enfrentamiento entre derecho público y derecho privado; cuando las fronteras entre derecho público y privado, que tan intensamente se dibujaron en la época de la segunda posguerra, tienen a estas alturas las suficientes brechas como para operar en un entorno de mayor permeabilidad, acaso no suficientemente clarificado por el legislador. No olvidemos que el mandato constitucional establece un sometimiento de la administración a la ley y al derecho, pero no a un determinado “tipo” de derecho.

Habría que recordar que, pese a las propuestas de la Segunda Modernización, la Junta aún no ha conseguido abordar un diseño unitario y sistemático de su modelo de agencialización, siguiendo con un sistema *adhocrático* que parece responder más a un estilo de tipo “chiringuito” que a un diseño legal consciente y deliberado orientado a asegurar una mayor eficacia administrativa. Lo lamentable es que, apenas llegados a la nueva época Griñán, la Junta deba seguir

pagando por ineficiencias jurídicas que proceden de épocas anteriores.

AÑO 2010

SATISFACCION Y CRISIS

17 enero 2010

Definitivamente la política española sigue avanzando espectacularmente, a pesar de la crisis. Y ese avance se constata sobre todo en el modo como nuestros gobernantes han acabado por descubrir que, pese a la grave situación, nuestros niveles colectivos de bienestar y autosatisfacción resultan ser ejemplares. Por lo tanto, lo que importará al final no son los datos objetivos que diariamente nos muestran los economistas, ni las cifras de desempleo, ni la peligrosa decadencia de nuestro sistema productivo, sino los datos subjetivos que configuran nuestro bienestar efectivo. Porque son esos los argumentos que al final decidirán la cuestión fundamental: a quién vamos a darle la confianza para que siga gobernando. Y si bajo el actual gobierno nuestras sensaciones subjetivas colectivas son plenamente satisfactorias ¿para qué vamos a cambiar entonces?

Dos series de datos relevantes han venido recientemente a confirmar esta línea de abordamiento de la crisis: por una parte, el flamante observatorio del Centro de Estudios Andaluces nos acaba de demostrar que, pese a las cifras objetivas, la autopercepción colectiva de la sociedad andaluza sigue tan optimista como siempre. Lo que no se sabe es si algunas de las claves de nuestro bienestar subjetivo están relacionadas con los avances legales de Zapatero: porque, a base de revitalizar la memoria histórica ¿quién no se encuentra ahora mejor que en los años negros de la nefasta posguerra, de los viejos tiempos del hambre y los fusilamientos? Es evidente que nuestra situación colectiva, si nos comparamos con un pasado que ya no conocemos, pero se nos reactualiza periódicamente, siempre será positiva. Y esa percepción colectiva tendrá una expresión subjetiva inmediata: estamos mejor que nunca.

Frente a esta evidente realidad virtual, los datos negativos pueden entonces desplazarse hacia un segundo plano ¿Qué importan las lágrimas contenidas de los padres de familia recién despedidos, los proyectos frustrados de los jóvenes, las noches de insomnio de los pequeños empresarios con el agua hasta el cuello, las angustias hipotecarias, el futuro arrebatado a las nuevas generaciones; qué importa la tragedia colectiva de la crisis económica si, al final, nuestras sensaciones cotidianas siguen reflejando una evidente satisfacción colectiva?

Y no digamos nada si atendemos a las recientes encuestas del CIS, el gran oráculo gubernamental, que viene a demostrarnos que, pese a la crisis, los españoles disfrutamos de una satisfactoria vida sexual. Ahí es nada: que vengan todas las crisis del mundo a ver si pueden con nosotros, porque siempre nos quedará el más placentero de los consuelos. El gobierno sigue así la pauta de un viejo anuncio publicitario: ¿ha sido usted despedido de su trabajo? Pues nada, a su casa con su mujer y a disfrutar de la vida.

Seguramente nuestros gobernantes no han caído aún en la cuenta de que con este apabullante marketing están descubriendo una auténtica piedra filosofal: la realidad objetiva, que se expresa en las aburridas cifras que nos muestran los economistas y demás científicos sociales, tendrá en el fondo una importancia secundaria frente a la realidad subjetiva, donde se refleja el auténtico estado de ánimo de los ciudadanos. Es posible que este hallazgo constituya al final un auténtico tesoro cuyas ventajas aún no han sido suficientemente aprovechadas por nuestros dirigentes. Pensemos en la cantidad de realizaciones positivas que podrían encararse siguiendo esta filosofía. Una buena subvención a las asociaciones de amigos del cannabis y se pueden poner a repartir canutos gratis en las colas de parados del INEM. ¿No existe un monumental stock de vinos de Jerez sin poder salir al mercado? Pues ahí tenemos los comedores sociales: con las bellas amazonas del *Tío Pepe* repartiendo morapio, se convertirán en una auténtica romería.

Nuestra alegría de vivir colectiva se configura así como el mejor antídoto frente a la crisis: no es la respuesta desesperada ante la depresión y el malestar, sino el atisbo de una nueva realidad virtual llena de hedonismo y satisfacción, frente a la cual los propios datos objetivos de la crisis, con sus aburridas cifras, serán perfectamente secundarios.

Por eso llevan razón nuestros dirigentes cuando afirman que ya están viendo el final de la crisis: sobre todo ahora que no hay publicidad comercial en la televisión pública y los habituales espacios intermedios se pueden dedicar a la autopromoción pública. Con esto y con un poco de imagen europea, la tarea está hecha. Sólo nos queda comunicárselo a los gobernantes europeos: hemos descubierto por fin la mejor salida de la crisis.

DECISIONES Y NO-DECISIONES

17 mayo 2010

Llevamos tanto tiempo confundiendo la acción de gobierno con las simples tomas de postura que al final ha acabado sucediendo lo que vemos: cuando llega la hora de tomar decisiones de verdad, nuestros gobernantes se convierten en mariposas que vuelan de flor en flor.

El ideal de una realidad virtual, donde se supone que el gobierno gobierna a base de retórica discursiva y, mediante su acción simbólica, resuelve nuestros problemas colectivos, tiene al final sus inconvenientes: y es que si el gobierno no decide, entonces decidirán otros.

Cuando no hay más remedio que enfrentarse a los problemas de verdad, cuando el gobierno tiene que encarar decisiones que implican el riesgo de descomposición del soporte del que nace su propia mayoría, lo primero que comprobamos es que prefiere dejar los problemas pudrirse por sí solos. La realidad se le atraganta. Gobernar se convierte entonces en un proceso de no-acción que se enmascara tras un velo virtual de posturas políticamente correctas.

Tomemos un ejemplo: el gobierno tendría que decidir si debe aceptarse o no el uso del velo islámico en las aulas. O sea, optar por el valor predominante en el espacio educativo: la igualdad sin velo o la diferencialidad fundada en factores religiosos o culturales como el velo, la cruz, la kipá, o la peineta o la barretina. Pero el gobierno no contesta, ni contestan sus expertos o sus ministros. El sistema de decisiones se convierte en un circuito sistemático de no-decisiones donde todos entonan prudentes discursos con razonamientos ecuanímenes, posturas de equilibrio, posiciones políticamente correctas, respeto a los derechos de todos y ponderación de libertades; sesudos carraspeos. Pero nadie decide nada.

Aún más grave es el otro ejemplo: todo un conglomerado financiero de prestamistas observa el gobierno de nuestra economía para determinar el grado de confianza que ésta les merece a efectos de prestarnos dinero. Ante esta tesitura, actuar se convierte en el equivalente a barrer la casa y quitar el polvo cuando esperamos una importante visita. Pero con la barca colectiva encarando los rápidos de un río embravecido, nos dedicamos a la divertida tarea de discutir a ver a quién le toca un mayor o menor trozo de asiento en la bancada; nos engolfamos en el decisivo juego de discutir a ver quién manda aquí y dejamos la barca irse hacia los rompientes. Y al final, tarde y mal, con los muros de la presa derrumbándose, las decisiones para encarar la crisis reiteradamente negada y ocultada, nos sitúan ante auténtico estado de excepción.

De este modo con el paradigma de la no-acción hemos conseguido que el gobierno, el timonel, se coloque al mismo nivel que los remeros: que el que dirige el barco se enroque en la tensión permanente de los amotinamientos que se detectan en la bodega. Y

el sistema de no-decisiones acaba convertido en todo un complejo de des-responsabilidades.

La ausencia de decisiones de gobierno en el campo de la economía constituía durante el lejano siglo XIX la garantía más adecuada para asegurar el desencadenamiento imparable de las crisis. Así sucedió en reiteradas ocasiones hasta que, a partir de Keynes, se comenzó a pensar de otra manera: en la necesidad de atribuir a los gobiernos las riendas para adoptar determinadas decisiones en materia económica; lo que suponía el definitivo abandono del abstencionismo y la confianza ciega en las leyes del libre mercado. Desde la era de Keynes, en la década de los años treinta, hasta nuestros días, sería razonable pensar que la ciencia del gobierno ha debido avanzar en un proceso de aprendizaje que permitiera detectar las claves y las coyunturas que exigen una determinada acción en el campo de la economía, para prevenir y responder a las crisis periódicas. Pero parece que nuestros avances científicos en otros campos han dejado atrás un sector esencial, el de la ciencia del gobierno.

Y por eso ahora, acaso sin darnos cuenta, estamos derivando imperceptiblemente hacia un original neoliberalismo, donde todos nos dedicamos a arrear la burra, pero nadie lleva las riendas. Y si las manos de nuestro gobierno no son las que deciden, entonces tendrán que ser otras las que nos impongan las decisiones. La teoría de los estados fallidos debería seguramente incluir a partir de ahora una nueva categoría: la de los estados cosméticos. O sea, los estados donde la acción se convierte en un puro juego de seducción, en política-espectáculo al servicio de una dinámica competitiva interminable; y donde en consecuencia, la lógica del gobierno se acaba transformando en un instrumento tan estéril como fueron en otras épocas los gobiernos abstencionistas liberales.

EL PARTIDO

(Declaraciones de Felipe González
en vísperas del mundial de fútbol de Sudáfrica)
21 junio 2010

Debo confesar que el oyente entendió, inicialmente, lo que todos entendemos en estos días: o sea, el partido de fútbol. Por unos segundos se admiró nuevamente de la maestría retórica del viejo líder. El partido sería entonces como el partido colectivo en el que todos jugamos, tratando de hacer frente a los avatares de la crisis, el

gran desafío para el futuro de este país. El llamamiento al partido era como hacernos a todos miembros virtuales de “la roja”, la ganadora; era insuflar ánimo a nuestros espíritus decaídos por la incertidumbre, enardecer las voluntades y convocarnos a todos a participar en un esfuerzo colectivo para encarar el futuro. O sea, nuevamente la gran ceremonia mística de la comunión del líder con la ciudadanía, el acto supremo de la vida pública, la catarsis colectiva. Todos a participar en el partido. Y nuevamente el mensaje decisivo en la boca del mismo líder que, treinta años atrás, galvanizó a la opinión pública con el supremo eslogan del cambio. Admirable.

Pero no. Resulta que no era el partido heroico de todos luchando por nuestro destino, no era una forma de expresar la representación suprema de la acción colectiva, el llamamiento al esfuerzo de los ciudadanos y a la confianza en las instituciones, no. “El partido” era simplemente la organización, el aparato, la facción dominante, los que mandan: o sea, el partido político. Y además, pronunciado así, en singular, la imagen retrotraía hacia lejanos ecos de épocas soviéticas. El partido (¿lo recuerdan los más mayores?) en aquellas épocas era así, en singular, el partido comunista. El único. Se le llamaba de este modo, no se sabe si por ubicarlo a la sombra del gran partido comunista de la Unión Soviética o más bien para enfrentarlo más adecuadamente a su alternativa, “el Movimiento”.

El oyente sintió de pronto un chorro de aire helado que le volteaba hacia un escenario tenebroso, de treinta o cuarenta años atrás. Un escenario de aparatos, militancias, lealtades y fidelidades, prietas las filas, que nadie se mueva si quiere salir en la foto, adhesiones inquebrantables; un bloque de unión juramentada entre nosotros los militantes (o mejor, los dirigentes) para seguirnos asegurando el disfrute del poder, el control del presupuesto, el reparto de los despojos, el botín.

El supremo dirigente desgranó ante la audiencia el verbo riguroso de la disciplina y la obediencia, la ausencia de crítica, su plena disponibilidad. Cien años después, el partido era otra vez el aparato, nuestra organización (nuestra, no de los ciudadanos), la palanca suprema que genera las claves de la hegemonía. El anciano líder tuvo incluso la valentía de declararse “disponible”. ¡Disponible! O sea, nuevamente dispuesto a galopar en una campaña electoral, a asumir la suprema responsabilidad del liderazgo, del caudillaje, para enardecer a las masas y movilizarlas hacia el momento supremo de las urnas.

El oyente percibió de pronto que algo rancio y desfasado estaba sustituyendo al espejismo de la movilización colectiva, y apenas tuvo tiempo para recordar los viejos tics: reajustar el cuello, fruncir el ceño en gesto responsable y encarar la realidad con aire de grave seriedad. Hasta sintió algo de vergüenza por haberse dejado

confundir con algo tan frívolo como un partido de fútbol. Allí estaban los líderes, los dirigentes, los vertebradores de la España del siglo XXI, nuevamente dispuestos a seguir empuñando el timón. Venerables ancianos, acompañados de jovencitos con gafas de diseño y rizos bien engrasados.

He aquí, pensó, la alternativa del siglo XXI, la nueva respuesta a los nuevos desafíos: los de siempre. Otra vez dispuestos a todo, afilándose la zarpa para cuando llegue la ocasión decisiva. Ni siquiera se trataba ya de “los partidos” en plural, o sea, del sistema general de la representación, donde se expresan diferentes ideologías o visiones alternativas ante la realidad. No había que descubrir nuevas estrategias, avanzar respuestas innovadoras, o aportaciones de los nuevos maestros pensadores para una sociedad en crisis. Era simplemente el partido, el aparato, la organización, nuestra cosa.

Despertado de su ensoñación, el oyente ya no supo qué pensar: ¿era una conmemoración, una reunión de amiguetes, un acto iniciático o un auténtico aquelarre? Estos deben ser los mimbres con los que tendremos que enfrentarnos a la nueva realidad. Confundido y desnortado, el oyente pensó al final si no sería mejor limitarse indignamente a los auténticos partidos, los del mundial de fútbol. Abochornado y sin respuestas, decidió cambiar de cadena y poner una sintonía deportiva. Para partidos, los que nos esperan en Sudáfrica.

LAS LEYES “PROCLAMÁTICAS”

14 noviembre 2010

El reciente varapalo del Consejo Consultivo andaluz a la ley del olivar parece incidir nuevamente en un aspecto problemático que viene afectando a nuestra producción legislativa. Y es que ahora las leyes no resultan ser, como antaño, un conjunto sistemático de mandatos normativos, sino una serie de proclamaciones, aseveraciones o postulados discursivos, bastante ajenos a los contenidos prescriptivos propios de una norma jurídica.

Ya ha pasado lo mismo con otras leyes, como la ley de economía sostenible, cuajada igualmente de posicionamientos o proclamaciones, con la ambiciosa pretensión de operar una transformación cualitativa sustancial de nuestro sistema económico. O también en parte con la ley de memoria histórica, que aspiraba a una especie de reescritura de nuestra propia historia con la noble

pretensión de introducir a posteriori unos principios operativos de justicia.

No se trata por lo tanto de una original novedad sino de una tendencia sustancial que afecta al soporte instrumental a través del cual nuestros gobernantes (los legisladores que componen la mayoría) pretenden transformar la realidad. Durante la segunda mitad del siglo XX la estrategia consistía en que se intentaba transformar la realidad mediante el intervencionismo público, o sea, mediante la acción del gobierno y las administraciones: las leyes intervencionistas se caracterizaban entonces por contener toda una serie de normas programáticas que establecían los fines o los objetivos orientadores de la acción pública. No eran pues auténticas normas prescriptivas o mandatos normativos en sentido puro, sino normas orientadoras o finalistas, que a veces adolecían de un inevitable voluntarismo.

Parece que ahora la labor de diseño legislativo da un paso más: ya no se trata de formular horizontes de futuro (que deben alcanzarse mediante la acción de los poderes públicos y la colaboración constructiva de los ciudadanos) sino de proclamar en tiempo presente una nueva “realidad” mediante su pura formulación discursiva. Sobrevuela sobre esta nueva visión estratégica una cierta concepción mágica de la ley: o sea, que la ley no se considera ya como un soporte para la posterior acción pública sino como una auténtica formulación de la nueva realidad que se pretende establecer. Se supone pues que, en teoría, la mera inclusión de esa nueva realidad virtual en un soporte legal va a operar por sí misma el milagro de un efecto transformador de la realidad merced a su pura proclamación legislativa.

Nuestros gobernantes y legisladores están apostando por un nuevo tipo de acción virtual: o sea, por modificar el color del cristal con el que miramos la realidad, confiando en que de este modo se acabará modificando la realidad misma. Una filosofía que sin duda responde inconscientemente a un nuevo modo de hacer frente a la realidad, a través de los circuitos *on line* que se plasman en la pantalla o en la imagen virtual, y que percibimos a través del correspondiente soporte audiovisual. En la videopolítica contemporánea, la realidad es percibida en la práctica como un conjunto de imágenes, y así se piensa que modificando la imagen en pantalla, estaremos modificando la realidad misma.

La adecuación de nuestros soportes legales a esta nueva filosofía parece traducirse pues en la pretensión de atribuir a las leyes una función “proclamática”, a través de la cual se hace presente la nueva realidad virtual: sería una visión destinada no sólo a alimentar el discurso político de los gobernantes sino a hacer perceptible ante los mismos ciudadanos los perfiles virtuales de esa nueva realidad. Al final, si todos nos hacemos copartícipes de esa nueva realidad virtual, las leyes habrán cumplido con su misión sin necesidad de medidas

concretas ni de previsiones programáticas o de complejas actuaciones intervencionistas: una vez proclamada en la ley, la nueva realidad virtual debería adquirir plena vigencia. Nuestra confianza en las leyes acabará generando, como un maravilloso efecto mágico, la vigencia virtual de la nueva realidad, con la cual sólo tenemos que sentirnos identificados para atribuirle plena vigencia.

Sin darnos cuenta estamos encarando así uno de los más nuevos y sorprendentes recovecos de la ultramodernidad: la que permite aceptar el solapamiento entre la realidad virtual y la realidad misma. Definitivamente los españoles, a base de una combinación entre videopolítica y buenismo, estamos entrando ya en el siglo XXI. Sólo nos quedaría ensayar esta estrategia con algún sector algo más “duro” de la realidad, como por ejemplo, con una buena ley sobre pleno empleo: quién sabe, a lo mejor se produce el milagro.

TRANSPARENCIAS

(Los papeles de Wikileaks)

15 diciembre 2010

Quienes consideramos que, como consecuencia de la innovación tecnológica, el gran motor revolucionario del siglo XXI va a ser el principio de transparencia, no deberíamos ponernos nerviosos de forma prematura ni sentirnos especialmente afectados. Ya suponemos que transformar los desagües de aguas negras del sistema en immaculadas tuberías de cristal es algo que debe tener sus dificultades y requerirá de un itinerario largo y tortuoso.

Recordemos en todo caso que primero fue la Unión Europea, proclamando un principio de transparencia que fue seguido cansinamente por los distintos Estados, pero que al final se acaba limitando a la mera accesibilidad a los archivos documentales del sector público: un loable pequeño avance, aunque de consecuencias reducidas.

Luego fue la organización *Transparency Internacional*, ofreciendo anualmente su clasificación mundial, donde se detecta indirectamente el grado de corrupción de los distintos países, permitiendo así disponer de un panel, ordenado en distintos niveles, de calidad democrática. Pero se trata de una clasificación basada en entrevistas a periodistas y otros profesionales, con un tono inocuo y relativamente amable, cuyo único mordiente reside en el simple prurito clasificatorio.

Hay también episódicos informes o estudios sobre transparencia que se limitan a un elemental repaso comparativo de diversas webs institucionales, de gobiernos, Comunidades, ayuntamientos u otras organizaciones públicas, con un valor más bien anecdótico. Y es que con frecuencia se viene reiterando el error de confundir la transparencia con la simple visualización de las esferas públicas; sin tener en cuenta que la visualización implica, por su propia lógica, la existencia de esferas opacas o no visualizadas.

Parecía que con *Wikileaks* estábamos ya empezando a entrar en materia, o al menos así lo sugería el morbo mediático que rodeaba la operación. Se trataba nada menos que de “papeles secretos” de los norteamericanos; o sea, las grandes claves conspirativas de orden mundial puestas al descubierto.

El hallazgo final ha sido por ahora el parto de un ratón, cuando comprobamos que los llamados papeles secretos se limitan más bien a constatar lo que todos sabemos. Que la presidenta argentina está un poco ida es algo que se deduce claramente de su mirada. Que el presidente francés tiene ínfulas napoleónicas se constata no sólo por las alzas de sus zapatos y por sus actitudes y comportamientos, sino que forma parte también de una vieja tradición francesa. Que la señora Merkel se caracteriza por una cierta mediocridad no parece ningún descubrimiento. Como lo de que nuestro presidente es como es, o que la monarquía alauita sigue funcionando de aquella manera; o incluso que los Putin y Berlusconi se dedican mayormente a sus propios negocios. Ni siquiera es ninguna sorpresa saber que los servicios secretos paquistaníes son los que mantienen a ciertos grupúsculos radicales. ¡Hasta acabamos que descubrir que el estrecho de Gibraltar tiene una considerable importancia estratégica!

Con semejante bagaje parece que estamos ya descubriendo América. Porque todo ello no tiene al final más sustancia que la de los simples informes elaborados por algunos becarios de embajada consultando la prensa internacional, elevados posteriormente por la vía jerárquica oficial a la categoría de documentos confidenciales. O sea, puras obviedades sabidas por todo aquel que lea diariamente la prensa. El impacto de la transparencia parece que tendrá que limitarse en este caso al intento de formalizar en el discurso oficial una verdad conocida por todos. Y por eso paradójicamente la principal esfera amenazada será la del discurso oficial y su aburrida corrección política: o sea, el neutro y aséptico lenguaje diplomático que rige las relaciones entre estados y que a partir de ahora puede comenzar a percibirse como una retórica sin sentido, pura fachada formal cuajada de falsedades y mentiras. Es posible, como ha señalado Javier Solana, que la misma profesión diplomática no tenga más remedio que enfrentarse a partir de ahora a una gran catarsis creativa. Nada

menos que sumergirse en el difícil desafío de la verdad; en el terrible dilema de llamarle al pan, pan, y al vino, vino.

Mientras tanto, y si consideramos las profundidades abisales en las que tendrá que indagar la transparencia hasta sacar a la luz las auténticas opacidades del sistema, sólo cabe constatar que apenas acabamos de entrar en los preliminares del siglo XXI. Por lo demás, nos limitaremos a comprobar que, con estos pequeños avances, parece que la cosa empieza a animarse: así que paciencia, que la revolución nos espera.

Como en todo ámbito problemático, conviene partir siempre de la variable mayor; o, como se decía antiguamente, de la infraestructura socioeconómica. Y es que, en una realidad social resignada a tasas exorbitantes de desempleo, la Junta de Andalucía y su partido gobernante se configuran como la principal oferta de empleo de nuestra tierra. La mejor opción profesional para los jóvenes bien preparados, en ausencia de otras alternativas, consiste pues en hacerse funcionarios; y así ha sido desde hace décadas.

Hacerse funcionario, en el sentido más clásico y tradicional del término, significa introducirse en un orden legal-racional de carácter estático y conservador donde se da por supuesto que las rutinas legales de la burocracia atienden sobradamente a los objetivos y necesidades del sistema. Cuanto más, hay una línea de innovación tecnológica que apenas modifica las pautas establecidas secularmente, pero que permite creer en el espejismo de la “modernización”: el funcionario cambia la ventanilla y los manguitos por el ordenador y el ratón, y ya estamos. El resto es cosa de los políticos que gobiernan. El funcionario no se hace responsable del resultado final de sus actuaciones, limitándose a cumplir con las normas o a obedecer las órdenes de los gobernantes.

Mientras tanto, la cultura de la gestión pública ha ido evolucionando en el mundo contemporáneo en paralelo a las necesidades y requerimientos de los modernos estados intervencionistas, introduciendo elementos extraños o ajenos a la ancestral cultura funcionarial: objetivos, evaluaciones, consensos sociales, estrategias, diseños organizativos, prestaciones, resultados...

Teóricamente el impacto de estos nuevos modelos se traduce en el desarrollo de organismos públicos relativamente autónomos encargados de gestionar y prestar servicios, que deben actuar mediante estrategias más flexibles y operativas; lo que se ha dado en llamar como “agencias”. Pero al mismo tiempo este proceso supone también una paralela reducción de las tradicionales estructuras burocráticas centrales propias del modelo funcionarial. Se trata de un proceso que exige un diseño sistemático y congruente para la modificación general de los sistemas públicos y que hasta ahora ha

tenido un razonable éxito en los países tradicionalmente más avanzados, implicando respuestas operativas a los riesgos de decadencia del Estado social en momentos de crisis.

Nada de ello se ha hecho hasta ahora en Andalucía: las agencias, organismos autónomos y entidades públicas han ido creciendo en paralelo a las tradicionales estructuras burocráticas centrales. Tampoco se ha desarrollado una mínima “cultura” de la gestión pública, y el personal ha tenido a veces que aprender de forma puramente intuitiva el modo de adecuar su tradicional actividad a la intrincada jerga de estrategias, objetivos, implementaciones, resultados, evaluaciones, etc. Para colmo, los procesos de agencialización se han configurado a veces como simples chiringuitos de corte político donde menudea el enchufismo y la colocación de amiguetes, y no una oferta pública basada en méritos objetivos y en la búsqueda de auténticos especialistas o profesionales.

Hasta la propia filosofía desde la que se ha abordado la regulación de esta materia parece un poco perdida en debates algo desfasados y obsoletos: polarizar a estas alturas el foco de atención sobre la naturaleza “pública” o “privada” de las agencias es como ponerse a discutir si son galgos o podencos. Parece que todavía no hemos asimilado la filosofía de Den Xiaoping, tan grata al propio Felipe González, de que el color blanco o negro del gato es secundario frente a la exigencia de que cace ratones. Mientras tanto, aspectos estratégicos centrales como las relaciones entre la esfera finalista o regulativa central y los circuitos prestacionales (es decir, las agencias) en torno al cumplimiento de objetivos, así como sus instrumentos de control-sanción, parece que brillan por su ausencia.

Tratar a estas alturas de ajustar por vía de urgencia toda esta estructura dispersa y sobredimensionada constituye un proyecto noble aunque algo cargado de ingenuidad. Del mismo modo que encargar un proceso de agencialización a quienes en el fondo son enemigos de la misma. En este contexto, la protesta de los funcionarios se trasmuta de la simple defensa de intereses corporativos en la más legítima de las movilizaciones.

Con estos mimbres, y cuando parece que no hay nadie capaz de marcar un rumbo claro, da la impresión de que los andaluces abordamos el siglo XXI y las estrategias de respuesta a la crisis con las mejores perspectivas para acceder con éxito al siglo XIX.

Dos tipos de pulsiones parecen inspirar el comportamiento social del sur: por una parte un cierto espíritu hedonista que se refleja en el ideal colectivo de una buena vida, fuente de satisfacción y complacencia; por otra, una proyección reactiva o anti-norte, que se expresaría como una singular expresión a escala local del “*going negative*” al que se refieren los sociólogos electorales norteamericanos y que de forma tan operativa vienen usando allí ciertos sectores republicanos.

A nuestra escala, esta proyección negativa o anticentro se traduce en una dinámica reactiva de rechazo al gobierno central, ya sea Zapatero antes o Rajoy después. Pero ahora asume una peculiar dimensión tras el monumental éxito de la política estrella del gobierno socialista, la memoria histórica, que ha venido a situar la política española en un bronco contexto guerracivilista, donde nuevamente los espectros de fusilados y de luchas fratricidas siguen cabalgando en nuestro imaginario colectivo. De este modo retornamos al contexto histórico del más profundo sur, donde todo conflicto social se desenvuelve a modo de una solapada guerra civil, y acabamos por dejar atrás los sueños civilizatorios de un consenso social pacífico, propio de los odiados pueblos del norte.

En un contexto de grave crisis mundial, el espíritu hedonista se configura por su parte como un auténtico hecho diferencial: sería la expresión de una concepción de la vida que se concreta en nuestra tierra en el ideal de “*cervecita y caracoles*”, tan grato a nuestro gran medio de opinión, Canal Sur. Incluso en sus versiones más actuales podría identificarse con el ideal de ese simpático dirigente socialista - hoy en horas bajas- llamado Javier Guerrero, consistente en cocaína y putas gratis.

Traducido en clave electoralista, ambas pulsiones acaban teniendo una expresión simplificada de tipo dualista: por una parte tendríamos las ofertas de un grupo benefactor y generoso, consistentes en ofrecer derechos sociales y de bienestar para todos y todas; por otra, las ofertas de un grupo antisocial y atrabiliario cuyo objetivo consiste en quitarle derechos a los ciudadanos. Por más que esta división maniquea constituya una auténtica ofensa a la inteligencia de los electores, se configura -bien trufada con el contexto

guerracivilista y la conflictividad anti-centro- como una simplificación perfectamente accesible para el último de los escalones sociales a los que hasta ahora no había conseguido acceder el partido popular: el del profundo sur rural, que se proyecta entre el electorado urbano de la mano de los grandes medios de comunicación autonómicos. La elección entre ambas alternativas parece bastante sencilla.

Resulta sorprendente que un Javier Arenas algo apático e indolente no haya conseguido durante la última campaña electoral articular una respuesta discursiva consistente frente a esta auténtica diana competitiva. Por lo visto hasta ahora, sólo cabe pensar que, si el PP sueña con dejar de ser algún día el eterno partido de la oposición en Andalucía, debería plantearse antes que nada una renovación y un rejuvenecimiento de su equipo dirigente.

Pero cuando los vientos de la crisis parece que nos llevan a todos a apretarnos el cinturón, el llamamiento al hedonismo colectivo se configura como una trascendental respuesta reactiva o anti-norte: que se lo aprieten ellos. Pretender que en la tierra de los sueños y las utopías, de las Expos y las sucesivas e imparables modernizaciones, de los derechos sociales universalizados, acabemos aterrizando en la prosaica realidad de unas tasas alucinantes de desempleo, donde la miseria comienza a percibirse por las calles y donde las cifras macroeconómicas se vienen abajo en una caída vertiginosa e inexplicable, constituye un golpe tan traumático que parece imposible asumir colectivamente de una forma realista y responsable. En ese dilema, y prescindiendo de los que tomen el camino de la emigración, la mejor respuesta colectiva sería seguir percibiendo la vida igual que si fuera un sueño; sobre todo cuando asoma por el horizonte el dulce perfume de la primavera andaluza.

Cuando vivimos momentos de crisis comprobamos cómo determinados egoísmos colectivos se proyectan con una mayor intensidad: ahí tenemos a los catalanes detrás del llamado pacto fiscal para conseguir más dinero. Los andaluces apostamos en cambio por una decisión colectiva que implica aceptar la oferta de los derechos para todos y para todas, engolfarnos en nuestra visión color rosa de la realidad y proyectar nuestras frustraciones en una dinámica de conflictividad anticentro; para así, finalmente, conformarnos con nuestra precaria satisfacción colectiva, o sea, a base de cervecita y caracoles.

ADIOS

(A los jóvenes emigrantes)

6 mayo 2012

Debo confesarte, cuando se acerca el momento de la despedida, que en realidad más que el dolor por tu marcha lo que siento es una especie de rabia contenida: rabia porque no hayamos podido ofrecerte un futuro adecuado aquí, en la tierra donde has nacido. Porque todos sabemos perfectamente que tú y tus compañeros sois, sin ninguna duda, la mejor generación que nunca hemos tenido en Andalucía: la más culta y preparada; la única que ha sabido superar esa tradicional incapacidad y apatía que aquí hemos tenido siempre por los idiomas, e incluso por el manejo de las tecnologías. Sabemos que vuestras brillantes licenciaturas y máster han sido el justo fruto de vuestro sudor y vuestro esfuerzo; que habéis sabido sortear los riesgos de las drogas y del *botellón*, enfrentaros al sopor colectivo de la apatía y el pasotismo, y hacer de vuestros méritos el más brillante currículum de toda una generación de jóvenes decididos y voluntariosos.

Sí, ya sé que aunque te vayas muy lejos siempre tendremos circuitos de comunicación instantánea, que esto ya no es la dolorosa emigración de los años sesenta, la de "vente a Alemania, Pepe", que ya no vais con la maleta de cartón atada con una cuerda y la boina bien encasquetada. Ya sé que ahora buscáis un futuro competitivo que se ubica en cualquier lugar del planeta y que vosotros seréis en realidad los auténticos dueños del mundo. Pero, qué quieres, no tendré más remedio que hacer un esfuerzo para contenerme las lágrimas en el momento de darte el abrazo de despedida; y me quedará algo triste de saber que tu vida va a desenvolverse lejos de la tierra donde vivieron tus abuelos y tus antepasados.

Ahora comprendo lo poco que sirve presumir de lo nuestro, engolfarse en la aburrida cantinela de la belleza de nuestros paisajes, la dulzura de nuestro clima y de nuestros vinos, o el encanto de nuestras fiestas y monumentos; de todo eso que causa la admiración de tantos turistas y extranjeros. Porque de qué sirve al final presumir de una tierra que es incapaz de ofrecerle un futuro adecuado a la mejor de sus generaciones. Puede que este sea también un buen momento para hacer un breve balance de lo conseguido en las últimas décadas: para comprobar a dónde fueron finalmente tantas políticas de desarrollo, tantos acuerdos de concertación y empleo, tantos proyectos de sucesivas modernizaciones, tanto fomento de la innovación y apoyo al espíritu emprendedor, tantos proyectos financiados con fondos europeos. Este parece ser al final el auténtico resultado colectivo de la mejor Andalucía que hemos tenido en varios siglos. Y es que, en el fondo, creo que en realidad lo correcto sería

que fuerais vosotros, los miembros de la mejor generación mejor preparada, los que pasarais a ocupar ahora los puestos de dirección y de liderazgo en nuestra comunidad: la garantía para la más auténtica y definitiva de nuestras modernizaciones. Pero el único camino que la realidad parece ofreceros ahora es el de la emigración.

Puede ser también -lo confieso- que todo esto no sea más que el fruto de mi propia incapacidad y negligencia personal, o sea, que tenía que haberme metido hace tiempo en los circuitos del poder y de la política, donde se colocan los enchufados y los recomendados; pero, ya ves, la verdad es que no lo he conseguido. También podríamos haberte encontrado alguna salida mediocre, más o menos llevadera: de promotor inmobiliario o de agente de seguros; de tratante de ganado o vendedor de pompas de jabón. Pero supongo que no es eso lo que tú esperabas.

La decisión de vuestra generación de avanzar hacia un futuro constructivo en cualquier lugar del mundo constituye en realidad un esfuerzo valiente del que nosotros mismos deberíamos sentirnos orgullosos. Al fin y al cabo, sois la primera y auténtica generación cosmopolita que hemos tenido; y por eso vuestra aportación al crisol del mundo globalizado será, con toda seguridad, una fuerza constructiva, como una hermosa semilla destinada a crecer en otra tierra que no esté tan reseca como la nuestra.

Con todo, cuando se acerca el momento del adiós, sólo quisiera transmitirte un deseo de ánimo y coraje, el mismo que tuvieron otros en parecidas circunstancias. Si colectivamente no hemos sabido prever el modo de incorporarnos constructivamente a nuestra sociedad, sólo espero que al menos hayamos sabido daros una preparación suficiente, una formación adecuada para el universo tan complejo de este vuestro siglo; aunque tengáis que demostrarla fuera de nuestras fronteras.

Esperando que sepas comprender toda nuestra frustración y amargura, y que sepas perdonarnos también por todos nuestros posibles fallos, te digo adiós, hijo mío, adiós.

APOCALIPSIS

23 junio 2012

Cuenta Norman Cohn, en su clásico libro "*En pos del milenio*", que los grandes movimientos milenaristas del medievo no se produjeron en rigor sobre el año mil sino con bastante posterioridad en el tiempo. Eran contextos de guerras, hambrunas, epidemias y devastaciones que, además de grandes sufrimientos, generaron la

emergencia de una pléyade de predicadores, líderes reivindicativos y manipuladores de masas, que empujaban a grupos de desesperados y marginados hacia movimientos de un fuerte radicalismo social que se situaban en una especie de visión apocalíptica de la realidad, es decir, en el imaginario de un final de los tiempos inspirado en vagas interpretaciones de textos bíblicos.

Es curioso lo poco que parece haber progresado la humanidad a lo largo de diez siglos. Hoy, en el contexto de nuestra crisis, parece que lo que menos importa es el sufrimiento colectivo de las víctimas sociales del sistema frente al renovado afán de protagonismo de falsos profetas, nuevos predicadores, líderes de opinión y hasta premios nobel convertidos en auténticos gurús, que nos bombardean con mensajes de indignación, llamamientos apocalípticos y falsos diagnósticos o propuestas capaces de resolver de una vez por todas los males de nuestro tiempo.

Cualquiera puede caer así en la perplejidad de no saber si nos enfrentamos al más dramático Armagedon que vieron los tiempos, o simplemente ante la primera ley de Murphy, según la cual todo lo que va mal es susceptible de empeorar, y generalmente empeora. Y de este modo, en lugar de movilizar nuestros esfuerzos en reforzar las experiencias de solidaridad, apoyo mutuo y cooperación colectiva que ya tenemos adquiridas, caemos en el puro dramatismo retórico de un milenarismo reivindicativo de nuevo cuño, transmitido a escala ampliada a través de los circuitos de la red.

Claro que siempre puede objetarse la profunda diferencia que existe entre ambas experiencias históricas. Si la Europa del medioevo era un conglomerado territorial atrasado, violento, desorganizado y multiforme, nuestra flamante Europa del siglo XXI constituye en cambio un entramado bien organizado compuesto por un conjunto de estados civilizados dotados de sistemas constitucionales bien establecidos y dirigidos por gobiernos democráticos que, según suponemos, disponen de amplios conocimientos y recursos para hacer frente a situaciones de crisis.

Tenemos en efecto en Europa distintos tipos de gobiernos: hay gobiernos mayoritarios, minoritarios, consensuales, semipresidenciales; aunque también tenemos gobiernos fallidos, tecnocráticos, desorganizados, e incluso gobiernos al borde de un ataque de nervios. Comenzamos ahora a comprobar que en un contexto competitivo democrático los gobiernos en realidad no son un instrumento mágico para la resolución de los problemas sociales sino el puro botín al que acceden los ganadores de las elecciones; y que el objetivo principal de la acción de gobierno consiste precisamente en mantenerse en él. Y por supuesto, cuando profundizamos en sus sistemas de conocimiento, descubrimos lo más elemental: que nuestros gobernantes no tienen la menor idea de qué hacer para

encarar con éxito la crisis; y si los gobiernos no saben qué hacer, difícilmente pueden plantearse la cuestión de cómo hacerlo. No digamos nada de otros sectores importantes, como los financieros. Es más, hasta estamos llegando ahora a descubrir que ni el mismísimo Franklin D. Roosevelt sabía muy bien qué hacer ante la crisis de los años treinta: simplemente se limitó a apoyar con decisión los programas que consideraba más positivos, y al final la cosa salió rodando por sí sola.

Confiar en los mensajes apocalípticos de falsos profetas y predicadores milenaristas de nuevo cuño constituye hoy una postura tan ingenua e irracional como mantenerse en la creencia de que nuestros gobiernos, sean de uno u otro partido, disponen de una batuta mágica capaz de orquestar los esfuerzos colectivos en la salida de una crisis que nadie conoce. Por eso seguramente el primer argumento de aprendizaje que cabe extraer de este difícil presente es la falsedad de nuestra creencia en que vivimos en un tipo de sociedades organizadas donde gobiernos benévolos y eficientes desarrollan estrategias de éxito para superar los problemas sociales y proveer a nuestras necesidades colectivas.

En todo caso podemos suponer que, si al final tenemos suerte en salir del agujero, los equipos gobernantes serán los primeros en apuntarse el tanto como un éxito de su brillante gestión. Mientras tanto parece que, como siempre, no tendremos más remedio que ser nosotros mismos quienes nos dediquemos a sacarnos las castañas del fuego.

EL DINERO

8 octubre 2012

Es como si, por razones culturales, nos diera un poco de vergüenza. Ya se sabe, hablar de dinero en determinados ambientes puede resultar algo falto de delicadeza, de poco estilo. Los asuntos del dinero nos reflejan una visión triste y prosaica de la realidad, que debemos tratar de ocultar frente a la apariencia noble de la elegancia o la dignidad, es decir, de aquello que está por encima de los asuntos vulgares. Tratar de cuestiones verdaderamente trascendentes y sustantivas es algo que debe estar más allá de las prosaicas preocupaciones dinerarias, propias de judíos y avaros, gentes siniestras y faltas de estilo.

Dicen los historiadores que fue esa visión elegante de la realidad, perfectamente ajena a las cuestiones dinerarias, la que se

reflejaba en los decadentes hidalgos que poblaron nuestro Siglo de Oro, los que aparecen recogidos en la novela picaresca, dispuestos a pasar hambre pero manteniendo en todo caso la dignidad y las apariencias. Dicen también que fue esa actitud social, falsa y ridícula, una de las principales causas de la decadencia de España.

En nuestro tiempo, la visión noble de la realidad social tiene una plasmación perfectamente identificable: se trata de los derechos, los derechos humanos. O mejor dicho, los derechos sociales o de bienestar, que son los que en realidad nos interesan a todos.

Si tales derechos sociales representan de verdad una visión noble de la realidad deberían estar, como es obvio, por encima de las cuestiones dinerarias, puesto que son valores humanos trascendentes, garantizados por la Constitución; y además, tienen que ser en cualquier caso asegurados por el Estado. Se trata por otra parte de valores y derechos que, por ser humanos, son universalizables y deben cubrir (todas) las necesidades de todos, españoles y extranjeros, pues todos somos al fin seres humanos.

Frente a esta elegante proyección idealista de la realidad, está claro que hablar de dinero viene a ser como una falta de delicadeza: ya se encargará el Estado de sacar el dinero de donde sea, y que no nos vengan con gaitas.

Enfrentar a esta idealizada visión de las cosas la prosaica cuestión de dónde está y hasta donde llega el dinero necesario para cubrir las necesidades educativas, sanitarias, asistenciales, etc., constituye sin duda una dimensión incómoda y negativa, que a veces querríamos eludir. Por eso nos resulta más fácil suponer que lo que nos está pasando es simplemente que debe haber algunos "enemigos", malvados neoliberales o especuladores del mercado, empeñados en arrebatar nos tales beneficios sociales mediante un plan salvaje de recortes frente al cual debemos movilizarnos heroicamente.

Aquí reside el más dramático y elemental problema que pesa reiteradamente sobre el discurso de la izquierda: claro que debemos preservar y mantener los derechos sociales. Pero el pequeño detalle es ¿y de dónde sacamos el dinero?

Si durante el siglo XIX existió una creencia idealista más o menos generalizada en la llamada "mano invisible" del mercado, el siglo XX con su desarrollo imparable del Estado de bienestar nos ha traído paralelamente una suerte de fe irracional en la mano invisible del Estado y en su capacidad para obtener recursos financieros de forma indefinida, al servicio de nuestros derechos sociales o de bienestar.

Seguramente por eso en España hemos estado durante algunos años gobernados por nobles y benévolo dirigentes, empeñados en universalizar los derechos sociales y en ocultar

elegantemente la cuestión accesoria de dónde conseguir el dinero necesario para ello. Y es que ya se sabe: cuando el dinero es realmente necesario para algo, si no se tiene, se pide prestado, y punto: qué más da a quién.

Del mismo modo que costó mucho tiempo y esfuerzo descubrir que la tal mano invisible del mercado en realidad no existe, ahora nos está costando también mucho trabajo comprobar que tampoco el Estado tiene una mano invisible que le permita obtener dinero de forma ilimitada para atender a nuestros derechos de bienestar. A veces, los errores colectivos sólo se corrigen a base de sudores y lágrimas (cuando no de sangre).

En cambio, hay otros países donde las cuestiones dinerarias y las finanzas públicas no tienen nada de vergonzoso, y donde la existencia de recursos limitados para atender a las necesidades colectivas es algo aprendido y practicado desde hace tiempo. A la vista de lo que estamos pasando, parece evidente que también nosotros estamos aprendiendo ahora algo que debíamos saber ya desde hace tiempo. Lástima que este conocimiento experimental nos haya llegado un poco tarde, cuando ya por las escaleras del edificio vienen entrando los hombres de negro.

AÑO 2013

LA HORA DE LAS ONGs

23 febrero 2013

Que ni los gobernantes ni los expertos tienen salidas para la crisis -tampoco los ciudadanos- es algo que a estas alturas podemos considerar ya como plenamente asumido. Lo paradójico es que, para abordarla, nos sigamos empeñando en utilizar el mismo viejo instrumental, las mismas categorías explicativas de la realidad que, por lo visto hasta ahora, vienen a ser las que nos han llevado hasta la misma crisis.

Ese instrumental parte, de entrada, de la existencia de una dualidad de trincheras enfrentadas, donde encontramos por una parte al sector público, al Estado, y ahora también a “la política”; mientras que por el otro se nos aparece el sector privado y el mercado (o ese peculiar enemigo que ahora denominamos “los mercados”). Visión dualista de la realidad donde se pretende que todos debemos ubicarnos más o menos a la fuerza, para así redundar en la misma dualidad del “cártel” de partidos que habitualmente nos gobierna, los de derechas o los de izquierdas.

No nos hemos dado cuenta, ni queremos hacerlo, de que desde hace tiempo esta dualidad reduccionista no reflejaba de forma rigurosa la realidad contemporánea: y es que desde hace muchos años hay unos nuevos sujetos activos que han ido alcanzando un gran protagonismo estratégico y una presencia consistente en nuestra realidad social. Un “tercer sector”, surgido a partir de la sociedad organizada (que no del mercado), apoyado a veces (sólo a veces) por el Estado, o más generalmente por nosotros mismos, y que ha sido absolutamente decisivo en algunas de las transformaciones recientes del mundo en ciertos ámbitos estratégicos como el medio ambiente, la cooperación o incluso la asistencia social.

Durante la época de nuestros abuelos lo único que existían en rigor eran “los misioneros”: esos auténticos y anónimos héroes sociales, religiosos o no, capaces de abandonar las comodidades de nuestra civilización para acudir en ayuda del tercer mundo; la pregunta de si eran privados o públicos carecía a todas luces de relevancia. Eran, sin ningún género de duda, nobles espíritus empeñados en una admirable tarea altruista, que han dedicado sus vidas a salvar del hambre y la miseria a pueblos enteros.

Cuando gran parte de ese espíritu altruista y generoso se trasladó a otra serie de colectivos u organizaciones, no quisimos darnos cuenta de lo que en realidad estaba pasando: pero cuando tras un terremoto, una hambruna, una matanza, nos preguntábamos cómo iban a actuar nuestras autoridades, o cómo debía responder la comunidad internacional, descubríamos que ellos ya estaban allí, arrojando el hombro.

Son las ONGs, los *Intermon-Oxfam*, o *Manos Unidas*, los *Médicos sin Fronteras*, los *Greenpeace*, y otros muchos. Ni públicos ni privados, sino un estrato de la sociedad organizada, operando desde hace tiempo en un entorno globalizado, y poniendo en práctica de forma empírica toda una nueva categoría de valores como la cooperación, la solidaridad, la ayuda social o el apoyo mutuo.

Tratar de calificar, o de clasificar a estas organizaciones siguiendo nuestras viejas categorías de públicas o privadas, de derechas o de izquierdas, del estado o del mercado, constituye a todas luces una auténtica incongruencia. Y cuando ni los estados ni los mercados nos ofrecen respuestas a la crisis, a lo mejor ha llegado la hora de volver la mirada hacia estos nuevos sujetos colectivos: pero no porque ellos tengan un mejor conocimiento científico de la realidad o porque dispongan de recursos nuevos y desconocidos, sino simplemente porque están, y llevan mucho tiempo estando, más pegados a nuestros auténticos problemas; aplicando un espíritu crítico ante la realidad y poniendo en práctica un tipo de valores que durante mucho tiempo casi todos nosotros hemos ignorado.

El hombre más rico de España, Amancio Ortega, ya ha apuntado en esa dirección, señalando el mismo camino que siguen también, paradójicamente, los más pobres: el de los bancos de alimentos que dirigen *Cáritas* y otras organizaciones. Cuando nos hacemos tantas y tan dramáticas preguntas sobre el futuro de nuestro Estado de Bienestar, sobre las perspectivas de que si el estado o el mercado, lo público o lo privado, las políticas restrictivas o expansivas, y demás dualidades arcaicas, se nos olvida recordar que esa dualidad de trincheras hace tiempo que venía saltando por los aires con la emergencia de estos nuevos protagonistas activos en nuestra realidad social.

Seguramente ahora, en lo más hondo de la crisis, es cuando debemos pensar no ya en nuevos valores, sino en aquellas organizaciones que desde hace tiempo vienen luchando para poner en práctica esos nuevos valores. Seguramente ha llegado la hora de dirigir nuestra mirada a las ONGs.

Dicen que uno de los grandes éxitos del pensamiento de la derecha en la política, y en general en el mundo contemporáneo, ha consistido en hacer que su visión de las cosas y su sistema de valores se convierta en un modelo común compartido y aceptado por todos.

Es curioso, en este sentido, que una de las principales reivindicaciones actuales de la izquierda (desde los propios partidos hasta algunos de sus principales ideólogos, o incluso los propios movimientos sociales de tipo radical) consista en criticar las altas remuneraciones que perciben ciertos dirigentes de entidades públicas o privadas: desde directivos de banca hasta responsables de grandes empresas o corporaciones. Se considera inmoral que, con la que está cayendo, alguien cobre por su trabajo cantidades exorbitantes, especialmente cuando por medio hay recursos de carácter público.

Sin embargo, para la vieja izquierda del siglo XIX, la del propio Carlos Marx y sus discípulos, ese no era el auténtico problema. El problema consistía en la existencia de propietarios capitalistas que, por el simple hecho de ser detentadores de los recursos del capital, percibían grandes cantidades sin aportar ningún esfuerzo de su propio trabajo. Hoy parece en cambio que esos capitalistas están tutelados por un velo de inmunidad y de legitimidad, y nadie discute sus ingresos, que ni nos resultan problemáticos ni afectan lo más mínimo a nuestra sensibilidad. Lo que criticamos son los salarios que perciben los directivos bancarios, o algunos dirigentes públicos, pero no el reparto de beneficios procedentes del capital que realiza una determinada entidad bancaria, unos beneficios que nos parecen plenamente legítimos. ¿Es este un argumento de izquierdas o de derechas?

Personalmente nunca me ha ofendido que alguien cobre una gran cantidad por su trabajo, si éste resulta ser muy valioso. Que un premio Nobel o un gran investigador, un escritor famoso o un director de cine, cobren grandes cantidades por su trabajo no es más que un reconocimiento al mérito de su esfuerzo y al gran valor que éste tiene para todos. Y del mismo modo puede suceder con los directivos de grandes empresas o corporaciones. Pero hay un numeroso colectivo de personas que perciben grandes ingresos como rentas de su capital sin haber aportado ningún trabajo o esfuerzo para obtenerlo. Para la izquierda clásica, la del siglo XIX, ese era justamente el problema, ahí es donde residía la clave de la explotación y de la desigualdad, el argumento fundamental sobre el que se montaba, en la economía capitalista, la explotación del hombre por el hombre y la dialéctica de la lucha de clases.

En cambio, en la actualidad, no parece haber nadie que critique ni se rasgue las vestiduras por lo ingresos procedentes del capital, obtenidos sin ningún trabajo ni esfuerzo; consideramos que se trata de algo legítimo y aceptado. Ningún colectivo radical expresa su protesta, ningún líder de la izquierda acusa, ningún periodista agita conciencias o llama a la indignación de las masas. ¿Qué pensaría Carlos Marx si levantara la cabeza? ¿Cómo puede ser que critiquemos las migajas del pastel, que se reparten los directivos de las empresas o corporaciones, y nos olvidemos de la auténtica sustancia que va a parar a manos de los detentadores del capital?

Resulta curioso que el foco de luz y de transparencia se sitúe sobre los ingresos procedentes del trabajo mientras que la más rigurosa opacidad ampara las rentas que proceden del capital. En el primer ámbito se proyecta la crítica y la indignación, y se formulan y discuten propuestas reformistas; en el segundo, las aguas fluyen ocultas y subterráneas y nadie revisa, discute, critica o promueve reformas. De esta manera llegamos a la paradójica conclusión de considerar como plenamente legítimas las rentas procedentes del capital, sea cual sea su cuantía, mientras todas las sospechas de ilegitimidad se vuelcan sobre los ingresos procedentes del trabajo si rebasan ciertos mínimos.

EL TESORO

4 agosto 2013

Repetido ya hasta la saciedad, el argumento no tiene más alternativas: el eje de gravedad del planeta hace tiempo que se ha alejado de la vieja Europa. El auge de las economías emergentes, la explosión de China, la capacidad innovadora norteamericana y otros muchos factores, parecen haber dejado a nuestro viejo continente sumergido en un marasmo histórico, sin capacidad de respuestas para hacer frente a la crisis. Europa ya sólo interesa como un sitio confortable para hacer turismo cultural, rincón de encuentro de viejas historias, museos, obras de arte y hermosos monumentos.

No hace mucho, sin embargo, Europa parecía ser un auténtico modelo de proyección mundial. Pero, cuando ahora reflexionamos en perspectiva, tendríamos que preguntarnos ¿un modelo de qué? Y la respuesta parece sencilla: un modelo de desarrollo del Estado social, entendido como un estadio avanzado de la civilización democrática, donde los poderes públicos ostentaban una capacidad demostrada para gestionar economías eficientes, permitiendo al mismo tiempo un

reparto equitativo de la tarta de los beneficios sociales que el propio sistema generaba. Ese constituía nuestro auténtico tesoro, ofrecido a toda la humanidad como un ideal realizable: un proyecto superador de viejas desigualdades y promotor de un modelo de bienestar social accesible a todos, o a casi todos.

Cuando nos aventuramos a afirmar que el proyecto europeo está fracasado, parece razonable pensar que ello se debe, entre otras cosas, a que ha debido surgir otro modelo mejor en algún lugar del planeta: es decir, que el ideal del Estado de bienestar ha sido “desbordado” por otros más avanzados, focalizados bien en las nuevas tecnologías, en desarrollos económicos estables y sostenidos, en nuevas formas de dinamismo social o demográfico, en nuevas pautas culturales, etc.

Sin embargo, cuando analizamos la realidad de esos otros países emergentes descubrimos que, en rigor, no existe un auténtico modelo alternativo. Más bien comprobamos, incluso, que esos países emergentes parecen aspirar a ser reproducciones más eficientes del mismo modelo de Estado social que surgió en la vieja Europa. O sea que, de mayores, quieren ser como nosotros.

Obviamente los europeos podemos entonar un *mea culpa* en el sentido de que, a lo mejor, por un exceso de optimismo imprudente, hemos acabado por comernos nuestra propia tarta, nuestra gallina de los huevos de oro. Es decir, no hemos conseguido que nuestro modelo ideal, inspirado en principios de justicia social, se convirtiera en un sistema sostenible a largo plazo, capaz de enfrentarse incluso a los avatares de una descomunal crisis económica.

Sin embargo, a la hora de abordar una estrategia de supervivencia ante la crisis, cuando nos empeñamos en tratar de salvar algunos muebles del naufragio, cuando escondemos bajo tierra nuestro viejo tesoro para tratar de recuperarlo en tiempos mejores, debemos ser conscientes de que en realidad estamos intentando salvar un modelo que, para la humanidad civilizada, sigue siendo el más atractivo. Un modelo que constituye en realidad una expresión ideal de las aspiraciones comunes a cualquier sociedad democrática avanzada de cualquier lugar del planeta. Por eso nuestra supervivencia, la supervivencia de la vieja Europa, sigue constituyendo un esfuerzo por el mantenimiento de un modelo de progreso social de proyección universal; aunque acaso hoy sólo se mantenga o bien en algunos países del norte de Europa o en algunas sociedades de corte occidental como Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

Europa se ha convertido así en la isla del tesoro, que todos tratarán ahora de descubrir o de reencontrar, puesto que en los sistemas políticos contemporáneos no existen mejores modelos alternativos. El ideal de la integración entre la economía de mercado

y las necesidades sociales o colectivas no tiene hoy por hoy otra concreción conocida, salvo su proyección mundializada. Acusar a este noble modelo de ser una reproducción de viejas visiones eurocéntricas supone desconocer las aspiraciones a la igualdad y al bienestar social que subyacen en el corazón de todos los pueblos del planeta. Por eso nuestro ideal no es, en el fondo, el ideal único y exclusivo de la vieja Europa, sino la mejor expresión de las aspiraciones hacia el progreso social inherentes a toda sociedad democrática avanzada.

Nuestros esfuerzos por salvar este tesoro son también los esfuerzos de la humanidad civilizada por disponer de unos sistemas públicos avanzados, sensibles a las necesidades y demandas de todos.

PROFESIONALES DE LA POLÍTICA

9 septiembre 2013

La contradicción es paradójica y reiterada: a los políticos les pedimos que, antes de ser políticos, tengan otra profesión, es decir, que hayan sido médicos, profesores o abogados, o lo que sea. En cambio, cuando vamos a un médico o un abogado lo que queremos es que sean unos auténticos profesionales, y no unos aficionados que se hayan dedicado antes a otro tipo de actividad. No le pedimos a un médico que antes de ser médico haya sido abogado, o a un fontanero que antes haya sido electricista.

Parece que no acabamos de aceptar que la profesión de político sea como otra cualquiera, una actividad que se puede ejercer desde joven con vocación, entusiasmo y dedicación exclusiva. Y de esta forma, no conseguimos que la clase política acabe investida del prestigio profesional que necesita para llevar a cabo sus funciones de una forma adecuada. Son algunas de las injustificadas críticas que se han vertido contra la nueva Presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

¿Pero en qué consiste la profesión de político? Con frecuencia la confundimos con la del gobernante, es decir, con la imagen del gran dirigente capaz de intuir los vientos de la historia y mover la maquinaria del estado para dar respuesta a las demandas y necesidades ciudadanas. Otras veces la entendemos como la tarea propia de un líder carismático, capaz de movilizar a las masas y guiar a los pueblos hacia horizontes de futuro, llenos de romántica grandeza. Son visiones un poco excepcionales y grandilocuentes, que no se ajustan a la prosaica realidad del día a día. Los políticos no

tienen por qué ser profetas o estadistas, ni grandes cerebros guiados por una inteligencia superior: porque entonces correremos el riesgo de que se lo crean y sería mucho peor. Teóricamente lo que deberíamos pedirle a un político es que tenga capacidad de representar, es decir, capacidad para expresar el conjunto de sentimientos o de aspiraciones de una colectividad. Sentimientos que no siempre son virtuosos ni están orientados por la bondad o el amor a los semejantes.

En la práctica, y en el contexto presente, un político profesional es un miembro cualificado de un partido político. Es decir, alguien que forma parte de un colectivo organizado que se dedica a la promoción interior y a la competencia con los demás. Una persona avezada en las virtudes maquiavélicas de la conspiración, la movilización de apoyos, la orquestación de lealtades precarias, las zancadillas al contrincante, la máscara de la sonrisa ocultando un corazón de hierro. Alguien que considera a los suyos como los únicos detentadores de la verdad, mientras que los demás malviven en un cúmulo de mentiras y engaños. Esta es, si pudiéramos llamarle así, la “cultura” que respiran esas organizaciones llamadas partidos políticos a las que nuestra Constitución ha otorgado el privilegio de la representación política.

Desde una perspectiva idealista, todos deseáramos que esa cultura política, en cuyo ambiente se forman las nuevas generaciones de dirigentes, estuviera orientada hacia la búsqueda del bien común, la honestidad y la transparencia, la atención a los más necesitados, el rigor y la eficiencia en la acción pública. Pero esto sería lo correcto si de verdad nuestras aspiraciones colectivas se situaran en torno a esos nobles horizontes, donde rezuman las esencias de la democracia avanzada propia del siglo XXI. De este modo, la función representativa del político profesional operaría satisfactoriamente en búsqueda del bien común y la honestidad en la cosa pública. Pero la triste realidad no nos permite respirar ese optimismo: si fuera así, hace tiempo que, con nuestro voto, hubiéramos mandado a su casa a toda la pléyade de políticos corruptos que nos rodean.

Es posible que nuestras aspiraciones colectivas, en realidad, no se muevan en torno a esos horizontes tan optimistas de bondad y de honestidad, sino más bien alrededor de aspiraciones más prosaicas y egoístas, bastante más tolerantes con la mentira, la corrupción, la búsqueda del beneficio individual o el odio hacia el contrincante. Y si esas son nuestras aspiraciones colectivas, entonces el político profesional será alguien capaz de enmascarar, tras la retórica del bien común, una realidad donde predomina el egoísmo, la mentira, la corrupción, el beneficio individual o el odio al contrincante.

Un político profesional debe saber reflejar y representar las aspiraciones de su pueblo. Y cuando su itinerario de formación se

despliega en el interior de la propia maquinaria partidista, estará bien preparado para esta tarea de simulación. Por eso suele decirse que cada sociedad tiene la clase política que se merece.

ERRORES DEL GOBIERNO

14 octubre 2013

Ha sido espectacular y brillante la presentación de la presidenta Susana Díaz en la corte del reino. Nada menos que reconociendo públicamente que el actual y dramático nudo gordiano del conflicto catalán tiene su origen en un simple y elemental error del presidente Zapatero. Sería la expresión ejemplar de un nuevo tipo de discurso político más sincero, abierto y transparente, que viene a convertir a nuestra presidenta en un nuevo referente de futuro para el socialismo español, capaz de proyectarse más allá de las fronteras de nuestra comunidad.

Pero lo que resulta de verdad sorprendente es que en el seno del socialismo no hayan caído durante más de una década en este pequeño detalle. ¿No se habían dado cuenta? ¿O lo sabían todos, pero no se atrevían a decirlo en voz alta? No se sabe cuál de las dos hipótesis es más preocupante.

Teóricamente toda sociedad democrática vive en la confianza de que su gobierno constituye un núcleo de masa crítica capaz de disponer de todos los recursos de conocimiento e información necesarios para detectar posibles errores en el diseño de su actuación. Y en consecuencia que el Gobierno, en rigor, no se equivoca nunca: porque antes de que se produzca un error ya se habrán puesto en marcha todos los circuitos necesarios para detectarlo precozmente y corregirlo de forma inmediata. Si no fuera así, la precariedad de nuestra vida democrática sería verdaderamente dantesca. Se supone, pues, que los gobiernos deberían ser capaces de aprender de sus potenciales errores para desarrollar así actuaciones que, al cabo del tiempo, serán cada vez mejores, más justas y eficientes. Y si no lo hacen, serán sustituidos mediante procesos de alternancia dando lugar a otros gobiernos que siempre serán mejores.

La hipótesis de que el Gobierno no se equivoca nunca constituye un referente de seguridad que se conecta con una pretensión de infalibilidad del Estado. Pero alguien podría pensar que, frente a esta razonable hipótesis, existen toda una serie de lacras que acompañan a nuestros gobernantes permitiendo una serie

interminable de errores: fundamentalmente el hecho de estar rodeados de una cohorte de aduladores que se dedican simplemente a aplaudirles, sin plantear la menor perspectiva crítica respecto de sus actuaciones. O sea, que no existe una misteriosa caja negra desde la cual se adoptan decisiones racionales e infalibles en nombre del Estado, sino la pura expresión de la precariedad humana: el riesgo que cualquiera tiene de equivocarse sin que nadie se lo advierta.

Aunque es posible que en el fondo no se trate en realidad de un riesgo que afecte al gobierno en sentido estricto, sino más bien al partido que gobierna. Es decir, que todo partido gobernante sigue desarrollando en el poder su misma dinámica de cooptación, ausencia de debate interno, y apoyo incondicional a la facción mayoritaria que caracteriza su vida ordinaria. Y en consecuencia el discurso de los líderes se aplaude, y los errores no se detectan ni se critican, acabando así en una degradación progresiva de nuestra vida pública.

Aunque también cabría suponer, por último, que hay errores que son inevitables. Y es que el desliz de Zapatero no fue en rigor un error sino un mero mecanismo de supervivencia para mantenerse en el poder con el apoyo del llamado tripartito catalán. Es decir, que la debacle autonómica que nos ha invadido desde la puesta en marcha del nuevo Estatuto catalán ha sido simplemente el precio que hemos tenido que pagar los españoles para disfrutar de un presidente tan juncal como José Luis Rodríguez Zapatero.

Y no cabe decir que esto sea, en rigor, una novedad. La dinámica de chantaje nacionalista a la gobernabilidad del Estado procede casi desde el mismo momento originario, y los españoles nos hemos habituado a ella del mismo modo que los italianos se habían habituado ya a las gamberradas de Berlusconi. Por lo tanto, a lo mejor no se trata de un error de Zapatero sino de un fallo de nuestro propio sistema, articulado a través de una ley electoral que permite, por ejemplo, atribuir a las minorías nacionalistas una representación mayor que la de Izquierda Unida, a pesar de que ésta obtenga siempre un número superior de votos.

La lógica de la gobernabilidad apoyada en minorías desleales constituye un error originario de nuestro sistema de gobierno que el tiempo ha venido a profundizar dramáticamente. Y lo de Zapatero habría sido simplemente la guinda del pastel. La dinámica de pedir siempre más para asegurar la gobernabilidad constituye un pozo sin fondo a favor de ciertas Comunidades que, al final, acabamos pagando todos los españoles.

LA CIUDADANÍA COSMOPOLITA

3 noviembre 2013

Puede afirmarse que prácticamente todas las grandes mutaciones históricas que se han sucedido en el pasado han contado con un sujeto colectivo capaz de asumir el papel protagonista. Así, el concepto de *Pueblo* fue el gran hallazgo de las revoluciones burguesas, luego encuadrado dentro de la órbita de la nación, implicando un sujeto colectivo integrado por ciudadanos iguales que, liberados de las viejas trabas feudales de gremios, feudos o corporaciones, serían capaces de expresar los intereses generales de la comunidad.

Para el pensamiento marxista clásico, ese sujeto colectivo debía ser el *proletariado*: un auténtico motor de la historia, capaz de asumir la responsabilidad de una acción revolucionaria tras la que debería llegar un tiempo nuevo, una vez liberado el mundo de las lacras de la explotación del hombre por el hombre.

El concepto de *ciudadanía* se ha manejado en el siglo XX como una categoría adecuada para atribuir a los miembros de la comunidad una titularidad de derechos activos en el contexto de los estados democráticos contemporáneos. Pero la ruptura y disolución de fronteras territoriales que ha traído consigo la globalización, unido a los grandes procesos migratorios de nuestra era, parece desdibujar su relevancia y su papel protagonista en el siglo XXI.

Hay sin embargo una nueva y emergente dimensión de ciudadanía que se está proyectando a través de las redes en la escala globalizada y que comienza a adquirir una cierta y consistente masa crítica. Probablemente hasta ahora su punta de lanza viene representada sobre todo por sectores de jóvenes dotados de una perspectiva cultural y generacional parecida, con capacidad para manejarse en una lengua franca (el inglés) y con unas posibilidades de acción comunicativa que rebasan las tradicionales fronteras estatales para proyectarse ahora en la escala planetaria.

Es posible que no se trate siquiera de colectivos perfectamente homogéneos, aunque sí dotados de elementos comunes en términos generacionales, culturales, tecnológicos o de perspectivas de vida. E incluso están acreditando ya una capacidad más que sobrada para movilizarse activamente en apoyo de determinadas organizaciones o en torno a proyectos específicos.

En clave histórica, constituyen seguramente un escalón posterior a lo que hasta ahora han sido las tradicionales ONGs, o los llamados nuevos movimientos sociales, que se expresaban fundamentalmente en programas o actuaciones específicas, o en torno a acciones de protesta caracterizadas por un cierto espontaneismo y una relativa desorganización.

Es cierto que inicialmente la expresión más contundente de esta nueva ciudadanía cosmopolita parece reflejarse hasta ahora en actos de protesta dotados de una rápida capacidad de movilización y de una notable ubicuidad estratégica. Pero a través de estas actuaciones comienzan ya a entrecruzarse visiones y proyectos emergentes similares que, por más que se activen de forma contextualizada y dependiendo del respectivo país o circunstancia, comienzan a diseñar un perfil histórico novedoso que está comenzando a resonar en todos los confines del planeta.

Parece evidente que, en términos objetivos, la principal novedad del fenómeno reside en los soportes tecnológicos sobre los que esta nueva ciudadanía cosmopolita viene operando: un sistema comunicativo audiovisual e instantáneo que opera a través de internet, mediante el cual se estaría apostando no sólo por compartir valores o experiencias sino también, desde una perspectiva crítica, por el descubrimiento y la apertura de nuevos horizontes de transparencia que van más allá de las tradicionales fronteras de los territorios de los estados. Un aliento de transparencia tras el cual se acaban enfrentando obstáculos comunes o similares, incluso entre países con culturas o tradiciones históricas diferentes.

Del mismo modo que la burguesía revolucionaria supo identificar en su momento a la vieja nobleza como su enemigo histórico, o que el proletariado se concentró en combatir a la burguesía capitalista, la objetivación de un “enemigo” común puede convertirse en un factor de canalización de esta nueva y emergente ciudadanía cosmopolita, dotándola de una mayor congruencia en sus posiciones sociales. Todo ello contando con la capacidad expansiva que al cabo del tiempo consigue siempre alcanzar todo movimiento liderado por la juventud, permitiendo que otras generaciones se incorporen al nuevo proyecto.

La nueva ciudadanía cosmopolita parece configurarse como el primer elemento social objetivo sobre el cual será posible empezar a soñar durante el siglo XXI en el horizonte, hasta ahora utópico, de un gobierno del planeta.

AÑO 2014

LA INDEPENDENCIA DE PADANIA

25 enero 2014

Se trata de un país mediterráneo. Como en tantos otros, el norte del país es más rico y desarrollado que el sur: aunque su desarrollo económico se ha basado históricamente en un mercado nacional y en una abundante mano de obra emigrante y barata procedente del sur. Como sucede en casi todos los países europeos, durante el remoto medievo este país estaba fragmentado en reinos, y cada territorio conserva todavía recuerdos diferenciados de retazos de cultura y de viejas tradiciones. Hasta hay notables diferencias lingüísticas.

Como en tantos otros países europeos, su proceso de unificación estatal estuvo cuajado de precariedades e incertidumbres, pero mientras soplaban vientos de bonanza económica las cosas marcharon razonablemente bien, y los grandes empresarios del norte se enriquecían con el esfuerzo de todos. Igualmente se puso en marcha hace tiempo un modelo regional que concede amplia autonomía a los diferentes territorios y les permite desarrollar sus propias políticas y su propio proceso democrático.

Y como en todos los estados europeos, una constitución democrática y un sistema fiscal más o menos progresivo asegura una igualdad básica de derechos, así como un sistema de prestaciones y de inversiones públicas que se deciden desde el gobierno central.

Por supuesto, esa región del norte es muy importante: tanto que incluso a veces condiciona la gobernabilidad del país cuando algunas de sus fuerzas políticas territoriales deciden apoyar a un gobierno central sin mayoría absoluta. Algunas ventajas han ido consiguiendo así a lo largo del tiempo.

Naturalmente sus tasas de desempleo son bastante más reducidas que en el atrasado sur y, por supuesto, sus niveles de bienestar y de consumo están generalmente por encima de la media.

Pero sucede que, cuando sobrevienen tiempos de depresión económica y las cosas empiezan a torcerse, sus habitantes, dirigidos por singulares fuerzas nacionalistas, comienzan a sentirse "incómodos". Tan incómodos, por otra parte, como los del resto del país, que también sufren en sus carnes las consecuencias sociales de una crisis. Pero resulta que en el norte a veces incluso se ponen a pensar que, con sus impuestos -propios de una tierra rica- se está

financiando injustamente a los habitantes del perezoso sur; que el resto del país no les concede el reconocimiento que se merecen; y que verdaderamente eso de la solidaridad no está bien diseñado, porque no depende de su propia voluntad.

Es un curioso pensamiento teniendo en cuenta que a menudo sus cuentas públicas resultan deficitarias y tienen que ser los recursos del estado los que vengán a socorrerlos ante una situación que podría acabar en una auténtica quiebra.

Pero esta región del norte de un país mediterráneo, con su dinámica de egoísmo territorial propia de un territorio rico del norte que no quiere solidarizarse con el atrasado sur, se ha visto contaminada por un peligroso virus colectivo: el virus del nacionalismo. En realidad, era un virus que ya estaba presente en ese territorio desde hace tiempo. Y he aquí que, a comienzos del siglo XXI, aquella vieja ideología burguesa del siglo XIX, el “nacionalismo”, se ha puesto a cabalgar de nuevo, sumergiendo a su población en un imaginario de sueños, nebulosas y utopías que, entre otras cosas, sirven para enmascarar las duras consecuencias de la crisis. Pero sus dirigentes carismáticos se sienten verdaderamente investidos de una trascendental misión histórica que les impulsa a descubrir nuevos horizontes colectivos más allá de todo orden racional y de toda lógica. ¿Qué diría el viejo y socarrón Josep Pla si visitara este país?

Verdaderamente resulta sorprendente que en pleno siglo XXI y en un territorio europeo que se supone culto, desarrollado, y acaso hasta cosmopolita (o al menos lo parecía), de pronto nos vengán con estas gaitas. Ya nos habían advertido algunos pensadores, como Habermas, que los nuevos tiempos corrían el riesgo de traernos una especie de nuevo “feudalismo” donde los egoísmos colectivos podrían volver cabalgar otra vez, en una visión fragmentada de la realidad.

En principio, cabe pensar que en un territorio cuya población está en realidad compuesta mayoritariamente por un colectivo de trabajadores emigrantes, este sector de la población conseguiría equilibrar cualquier tendencia egoísta o separatista. Pero no tenemos en cuenta dos factores: primero, que en una situación general de precariedad laboral los trabajadores emigrantes sólo pueden comportarse como buenos esclavos, besando la mano del amo que les da de comer; y segundo, que al cabo de dos o más generaciones, los hijos o nietos de los emigrantes se han transformado en “conversos” que buscan una lealtad y una radicalidad extremas con la que tratan de identificarse, alejándose de sus ancestrales identidades sureñas.

Y aquí tenemos el numerito: la independencia de Padania.

VOLVER A LA EDAD MEDIA

10 marzo 2014

Se ha puesto de moda la revisión de la transición española. Y como sucede con los argumentos pendulares, ahora parece que encontramos en ella la causa de todos nuestros males. Pero se trata de una visión incongruente y equivocada: la transición supuso para la sociedad española recuperar un espíritu de consenso y concordia tras casi un siglo de desastres y miserias; un aire de ilusión colectiva ante el futuro que nos permitió incorporarnos a la modernidad y entrar con todas sus consecuencias en una auténtica democracia.

Aunque como es lógico, algunos fallos los hubo: algo normal, por otra parte, en cualquier construcción humana. Uno de los que durante mucho tiempo hemos ocultado con cierta vergüenza fue el de los pactos forales que permitían a Navarra y País Vasco disfrutar de una especie de hacienda propia. Como ya casi lo hemos olvidado, conviene acaso traerlo a la memoria, porque incluso en aquella época hubo voces que protestaron ante la incongruencia que supone introducir en una Constitución democrática un elemento propio de los pactos medievales entre reinos; como la del más prestigioso constitucionalista de la época, Manuel García Pelayo, recién vuelto del exilio.

En realidad, en la lógica del consenso y la concordia que presidió aquel momento de nuestra historia, se trataba efectivamente de una especie de “pacto”: un pacto en virtud del cual los españoles les entregábamos a vascos y navarros sus impuestos a cambio de paz, es decir, de que cesara el terrorismo. O sea, más dinero a cambio de que se acabaran las bombas. Los resultados son bien conocidos: ellos se quedaron con sus impuestos y nosotros continuamos durante décadas a base de bombas y tiros en la nuca. Fue un pacto incumplido. Pero como ya se había incluido en la Constitución, no había marcha atrás.

Ahora parece que, con la reapertura del proceso territorial y el llamado desafío soberanista, otra vez nos vienen ofreciendo nuevos tipos de pactos. En realidad lo tenemos ya sobre la mesa: puesto que al parecer no va a ser posible conceder la independencia a Cataluña, por lo menos trataremos de responder a su demanda de sentirse “cómodos”. Y la rebaja parece muy clara: en vez de independencia, un régimen foral al estilo vasco o navarro para que así se queden con sus impuestos y termine de una vez el teórico “expolio fiscal” al que están siendo sometidos por el resto de los españoles. Aunque no se haya explicitado de forma suficiente, hay bastante gente que, en el fondo, estaría dispuesta a aceptar semejante propuesta. Después de lo que estamos sufriendo con la crisis, si de esta forma por fin se van a callar y van a dejar de tocarnos las narices, bien está. Y por

supuesto, se trata igualmente de que ese pacto se incluya nuevamente en la propia Constitución, para que así no haya forma de cambiarlo a posteriori. De este modo los siempre generosos e hidalgos españoles respondemos a los desafíos que nos plantea nuestra propia historia.

Naturalmente no pensamos por ahora en el conocido efecto dominó: porque si se concede tal privilegio fiscal a Cataluña sobrarán razones para no rechazar algo parecido en el caso de Canarias que, como todos sabemos, siempre ha tenido algunas peculiaridades fiscales debido a su insularidad y su lejanía de la península. Y lógicamente, ante semejante desafío, no van a faltar de inmediato otras valientes Comunidades dispuestas a sacar pecho y a pedir lo mismo. No se trata de una construcción imaginaria sino del modo habitual como ha discurrido el proceso autonómico en nuestro país desde los años ochenta.

Ni el más alucinado de los historiadores medievalistas podría imaginarse semejante sorpresa: la España del siglo XXI dejándose llevar por una dinámica de pactos entre reinos y territorios, al viejo estilo medieval. Algo que, por supuesto, alguien podría incluso llegar a entender como auténticamente “democrático”, puesto que de este modo cada cual decidiría en el patio de su propia casa.

Aunque a veces le rezamos a Bruselas para que vengan a poner un poco de orden y cordura en nuestro país, ya sabemos que suelen ser muy respetuosos con los llamados “asuntos internos”. Ante esta hipótesis, seguramente pensarán que, definitivamente, los españoles nos hemos vuelto locos.

Así que ya tenemos el horizonte cosmopolita y abierto al mundo que parece definir nuestra apuesta por el universo globalizado del siglo XXI: el retorno a las haciendas forales y a los pactos medievales entre territorios. ¡En pleno siglo de internet y de las nuevas tecnologías!

Y si esa es la vía que definitivamente parecemos dispuestos a aceptar, este humilde ciudadano que suscribe tiene muy claro cuál será su duro e inevitable camino: el exilio.

EL TRAPECISTA SIN RED

(Adolfo Suárez)

24 marzo 2014

Conseguir llegar a ser el hombre adecuado para estar en el lugar y el momento adecuado de la historia, constituye un singular privilegio al alcance de muy pocos. A lo largo del complejo proceso de

la transición española discurrieron numerosos personajes que trataron de adaptarse mejor o peor a los vientos del cambio, aunque acaso no consiguieron ser el gozne sobre el que giró el trascendental cambio histórico de nuestro país.

Y es que la transición fue una especie de encuentro mágico entre dos procesos que lo mismo podían ser complementarios que alternativos: por una parte era el resultado del empuje democrático de la sociedad española, empeñada en quitarse de encima los anclajes del franquismo a base de movilizaciones sociales impulsadas por el pueblo; por otra, según una visión elitista que se desenvuelve en los despachos del poder, la transición fue el resultado de un diseño visionario gestado por algunos hombres extraordinarios que, desde arriba, movieron los hilos de nuestra historia. Dos visiones enfrentadas que, en diversas ocasiones, corrieron el riesgo de convertirse en un auténtico choque de trenes.

El hombre que supo convertirse en el vértice sobre el que pivotaron y se ensamblaron estos dos procesos, se llamaba Adolfo Suárez. Era en principio un hombre del “régimen”, aunque seguramente tenía meridianamente claro que la dificultad del envite obligaba a adoptar decisiones sin guion previo; e incluso, cabe decir, hasta a dar saltos mortales sin red en el trapecio. Y para ello había que tener ese espíritu chispeante y optimista, esa fuerza de seducción, desparpajo e imaginación que se le supone a un tahúr del Mississippi, según las habituales imágenes de Hollywood. Es decir, había que chorrear capacidad de simulación, imaginación creativa, ambición sin límites y sonrisas sin piedad. Y por supuesto, una alta dosis de buena suerte, la marca de los que han sido señalados por la diosa fortuna.

Pero sucede que quienes llegan a ocupar una página tan decisiva de la historia suelen ser al final estrellas fugaces, personajes que no parecen destinados a envejecer en la poltrona del poder. Seguramente a Adolfo Suárez fue la enfermedad la que le obligó a retirarse pronto y a mantenerse durante décadas en un discreto recuerdo.

También se ha convertido en un tópico decir que su caída del poder se debió fundamentalmente a que fue traicionado y apuñalado por sus correligionarios de la Unión de Centro Democrático: un partido compuesto por retazos improvisados de aquí y de allá, al que se acusaba de no tener la consistencia, la coherencia y la homogeneidad de los auténticos “partidos”. Así la Unión de Centro Democrático fue barrida por la historia, y su organización sucesora, el Centro Democrático y Social, no consiguió llegar a despegar de su condición de minoría. Hoy, visto en perspectiva, la existencia de un partido centrista que hubiera servido de pivote a nuestro sistema democrático se ha convertido en una lamentable carencia que viene enrareciendo

desde hace décadas el funcionamiento de nuestro proceso político. Y visto también en perspectiva, la idea de que los partidos son, o deben de ser, organizaciones compactas, jerarquizadas, cerradas y homogéneas, seguramente se está demostrando como una auténtica falacia que estaría conduciendo a nuestra democracia por el camino de la esclerosis y el anquilosamiento.

Con la pátina que da el paso del tiempo, seguramente las jóvenes generaciones del siglo XXI no están en condiciones de percibir el enorme grado de modernidad que Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático supieron traer en su momento a la sociedad española. El nivel de compromiso que llegaron a adquirir con el sistema de libertades, con el proyecto de una auténtica democracia constitucional; su capacidad para tratar de llevar a la sociedad española hacia un camino democrático siguiendo un proceso de carecía de cualquier guion previo y tenía que impulsarse precariamente día a día.

Luego vinieron con el tiempo otras lecturas y relecturas, otros líderes y otros partidos, otras sombras e inercias. Pero el recuerdo de aquel espíritu de consenso y compromiso, de aquel dechado de audacia y de ingenio ante circunstancias imprevistas, de aquella muestra de confianza en última instancia en la propia sociedad española, sigue constituyendo una de las más brillantes páginas de nuestra historia y un ejemplo que seguramente nos debe servir de guía en las difíciles circunstancias presentes.

ESTIGMAS

(Política asistencial en Andalucía)

5 abril 2014

El trasfondo de la información suscita verdadera perplejidad: la Junta de Andalucía estudia retirar ayudas de alimentación a favor de niños escolarizados para evitar su “estigmatización”.

Debo reconocer mi absoluto desconcierto: parece que lo importante entonces no es que en Andalucía haya niños pasando hambre, sino que lo que no está bien es que en nuestra tierra los pobres den la imagen de ser pobres. En consecuencia, parece que la titularidad de uno de los más flamantes derechos reconocidos en nuestro Estatuto (el derecho a la asistencia social) no debe tener un carácter público, ni ser reconocible por todos -todos los que, con nuestros impuestos, financiamos el coste de la asistencia- sino que se convierte en una especie de estatus vergonzante y secreto; algo

similar a tener una enfermedad venérea, que conviene ocultar a toda costa de los ojos de los demás.

La Junta estaría así inventando una nueva categoría al servicio de la interpretación jurídica de los derechos humanos que seguramente interesaría al mismísimo Ferrajoli (el gran teorizador de los derechos de bienestar): la ponderación del grado de estigmatización que comporta el ejercicio de un determinado derecho. Así por ejemplo, si un ciudadano necesita asistencia sanitaria al sentirse enfermo, podrá solicitar su ocultación de las listas del SAS para evitar su efecto estigmatizador. O sea, los derechos sociales existen, pero algunos de ellos deben ubicarse en un trasfondo opaco y no visualizable de nuestra realidad, como si se situaran en el interior de la caverna de Platón, para que así todos los ciudadanos nos sintamos plenamente confortados en un plano de titularidad de derechos sin ningún atisbo de estigma.

Francamente, por muchas vueltas que se le dé a la cuestión, no se encuentra su auténtica clave: recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la asistencia social se pone en marcha a partir de los correspondientes informes de los funcionarios encargados (los asistentes sociales) donde se declara oficialmente a alguien como “pobre” y en consecuencia titular de un derecho a la asistencia. Ser pobre no constituye en América ninguna vergüenza ni deshonor, sino un mero requisito objetivo para la tramitación de la correspondiente ayuda social. Alguien pensará que el consolidado espíritu cívico y republicano de los americanos no llega ni de lejos a las sofisticaciones propias de la avanzada Europa: y así, en España podremos ser pobres sin serlo (oficialmente). No se sabe muy bien si porque al final en Andalucía cualquier pobre puede ser, sin que nadie lo sepa, beneficiario de unos de esos múltiples EREs que investiga la juez Alaya; o incluso titular de una cuenta corriente en Suiza. Es como aquello tan antiguo del “usted no sabe con quién está hablando”.

El auténtico problema consiste en que a lo mejor no se trata en realidad de un asunto referido sólo a los “pobres” (nuestros honrados y dignos pobres) sino de una cuestión mucho más general y sofisticada: pensemos que en Andalucía nuestra realidad cotidiana nos ofrece un panorama social donde una gran mayoría de ciudadanos carece de empleo, o de vivienda, o de una adecuada atención sanitaria, educativa o asistencial; mientras que paralelamente, todos disponemos de unos soportes normativos estatutarios que nos “garantizan” el derecho al empleo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc., incluso hasta un derecho a la “buena administración”. Disfrutamos pues, virtualmente, de todos los derechos propios de un Estado de bienestar avanzado, mientras la realidad del día a día nos ofrece un siniestro panorama que, por tan siniestro, consideramos que sería mejor tratar discretamente de

ocultarlo. Nuestro brillante Estado social avanzado se habría convertido así en una especie de Estado de bienestar virtual, donde todos tenemos derecho a todo, aunque en la práctica no tengamos de nada.

Reproduciendo así el patético error de los hidalgos españoles muertos de hambre, que reflejaba la literatura picaresca del siglo de Oro, sólo habría que proponer a la Junta que repartiera miguitas de pan para colocarse por la pechera, dando la impresión de haber comido opíparamente: una forma sencilla y barata de evitar cualquier atisbo de estigmatización.

Verdaderamente resulta dramático pensar que, cuando se trata del hambre física de criaturas inocentes, podamos todavía venir con estas gaitas. Y es que cuando los gobernantes se empeñan en refugiarse en una realidad virtual o ficticia, de la que pretenden que participemos todos los ciudadanos, al final ya no sabemos si estamos pasando hambre o es que alguien pretende estigmatizarnos. Todo porque la triste realidad de lo que sucede en nuestro entorno más inmediato nos molesta y nos perturba, y nos empeñamos en rechazarla.

PUZZLING

(Elecciones europeas)

20 mayo 2014

Viene a ser como encajar las piezas de un rompecabezas: o sea, ajustar elementos diversos y heterogéneos para que compongan un conjunto final armonizado. Nuestra dinámica social y política contemporánea parece adecuarse a esta elemental categoría: esferas socioinstitucionales múltiples y relativamente autónomas, enfrentadas, como piezas móviles, a la necesidad de incorporarse a un conjunto más amplio que, en principio, no está claramente predefinido.

El cambio de perspectiva histórica se percibe mejor si se enfrenta a los paradigmas del pasado: o sea, al viejo ideal de unos estados unitarios y compactos dirigidos por unos gobiernos omnipotentes, que asumen la tarea de crear desde arriba por vía jerárquica una realidad social homogénea y de defenderla con uñas y dientes frente al exterior. Eran como imaginarios de la modernidad, reflejos de un pasado que al final se nos aparece como algo elemental e imperfecto, y que tratamos de mejorar desde el contexto presente.

Esta sería la representación más adecuada para intentar abordar la complejidad de una realidad europea a la que debemos

hacer frente desde las urnas sin saber exactamente de qué se trata: fragmentos de identidades, lenguas, culturas, instituciones, proyectos, políticas, creencias e ideologías que se diluyen en un todo diverso y multiforme, sin tener una clara partitura que nos guíe o que nos sirva de pauta. Porque además, no se trata solamente de encontrar claves de afirmación en positivo, sino también de expresar ante las urnas actitudes de negación y de crítica, o sea, de legítima protesta ante una realidad que en estos momentos no nos resulta satisfactoria. Aunque no sepamos muy bien de qué protestar ni ante quién.

En su expresión más positiva, a esta confusa noción algunos le llamamos gobernanza: un modo de entender la acción pública democrática lejos de las concepciones jerárquicas y simplificadas propias de la modernidad. Un sistema de ajustes mutuos desde la cooperación y la diversidad que, sin embargo, debe respetar la existencia de ciertos derechos y valores (hijos al fin de la modernidad) que se nos representan dotados de una pretensión de universalidad. Si todo esto lo analizamos desde la tradicional perspectiva de los gobiernos, se trata sin duda de un sistema débil y algo torpe; que carece, por ejemplo, de la osadía de la Rusia de Putin o de la temeridad suicida de la Siria de Al Assad.

Sin embargo, todos intuimos que detrás de esa incertidumbre subyace el ideal indefinido de un sistema mejor, de un modelo de democracia más avanzado; por más que la diversidad de las piezas de esta compleja realidad no acaben de encajarse con facilidad. Y por más que el desencadenamiento de una tensión norte-sur nos haya golpeado dramáticamente como consecuencia de la crisis. Pero también sabemos que debemos aprender de nuestros errores y tratar de tener una visión colectiva de las cosas que vaya más allá de nuestro respectivo corralito. Aunque puede que tantas cosas al mismo tiempo sean, al final, demasiadas exigencias para tratar de resolver a través de la simple opción de una papeleta, de un voto.

Acaso por eso la gobernanza europea resulta siempre algo insuficiente: porque nuestro voto en las elecciones europeas debe sumarse al de las elecciones nacionales, o autonómicas o locales; así como a nuestra presencia directa como ciudadanos o como colectivos organizados. Es el conjunto de todos esos elementos el que compone al final el *puzzling* de la realidad presente. No estamos decidiendo sólo entre proyectos políticos más o menos homogéneos y dispuestos a aplicarse en su generalidad, sino apostando por la emergencia de un nuevo sistema de ajustes de carácter complejo y apenas entrevisto, que puede lógicamente suscitar la desconfianza del miedo al vacío, o la incertidumbre frente a lo desconocido.

En realidad, es como si estuviéramos eligiendo a quienes, al mismo tiempo que van a tener que llevar una batuta como directores

de orquesta, serán también los responsables de improvisar simultáneamente la partitura: demasiadas responsabilidades para nuestros representantes y demasiada responsabilidad sobre nuestras espaldas de simples electores.

Pretender que se trate de un ejercicio que se puede responder con una plenitud de visión y de conciencia, donde vamos a ser capaces de manejar los argumentos adecuados para una auténtica elección racional, resulta una auténtica ilusión. Sólo nos queda confiar en nuestra capacidad de intuición colectiva para descubrir por donde soplan los vientos de la historia y esperar a que, al final, el *puzzle* se vaya componiendo adecuadamente.

LA ABDICACIÓN ANUNCIADA

3 junio 2014

Lo menos sorprendente de un sistema constitucional es que las instituciones funcionen. Y la mejor prueba de ese funcionamiento reside en su capacidad de renovación a lo largo del tiempo. Por más que la monarquía se perciba a veces como una forma arcaica y vetusta, vinculada a claves vitalicias, siempre tendrá la posibilidad de adecuarse a los tiempos, asegurando así claves de estabilidad del sistema. En consecuencia, el proceso de sucesión en la Corona debería convertirse en un acontecimiento de normalidad democrática. Aunque a estas alturas es algo que no debe sorprendernos, cuando sucede ya hasta con el propio Papado.

Porque si hay algo realmente viejo en política contemporánea es el debate histórico entre monarquía y república: desde el momento en que toda jefatura del Estado se somete a un marco constitucional democrático, parecen quedar ya muy lejos los tiempos en que toda república se pensaba como una forma más progresista de Estado, claramente enfrentada a las reminiscencias feudales y absolutistas de la monarquía. Son debates propios de hace más de un siglo, que no resisten ya la prueba de una dinámica democrática consolidada.

Por supuesto, como vivimos tiempos de prédica milenarista, no van a faltar las voces que invoquen al poder constituyente o que clamen por la urgente necesidad de reformarlo todo: la forma de Estado, el teórico pacto territorial, la forma de gobierno, los partidos políticos y hasta el patio de mi casa. Son voces ya tan habituales que, aparte del puro morbo mediático, apenas suscitan el interés ciudadano.

Por supuesto, lo previsible de la noticia no hace sino destacar ahora algunos de los déficits regulativos que aún contenía nuestra Constitución: en este caso la necesidad de una ley orgánica sobre el estatuto de la Corona que cubriera algunos de los detalles pendientes. Cuestiones que al final parece que van a tener que abordarse de forma precipitada y algo precaria.

Se va el Rey Juan Carlos dejando un último mensaje positivo para la sociedad española: la necesidad de un relevo generacional. Un argumento que seguramente debería hacerse extensible al conjunto de nuestras instituciones. Una bonita forma de cerrar todo un balance positivo en términos históricos, al mismo tiempo que se eluden las inevitables salpicaduras que dejan casi cuarenta años al frente de la Jefatura del Estado, alcanzando incluso a su círculo familiar más inmediato.

Es cierto que, en su origen remoto, el Rey Juan Carlos era una figura procedente del franquismo: aunque sus dudas de legitimidad originaria se disiparon desde el momento en que se convirtió en el motor de la transición democrática y se formalizaron en clave democrática desde el instante mismo en que tuvo lugar la aprobación de la Constitución Española. Pero casi cuarenta años al frente de la Corona, con sus inevitables tropezones, así como una salud precaria, son razones más que justificadas para buscar el relevo; sobre todo teniendo en cuenta el momento dulce que en estos momentos representa el Príncipe, envuelto en un entorno de discreción y de prudencia.

Por supuesto la principal tarea seguramente va a consistir ahora en definir las claves de una modernización de la monarquía capaz de responder a los desafíos del siglo XXI: porque las estrategias de buscar una proximidad afectiva al pueblo así como la proyección a través de los medios de comunicación, son mecanismos que ya fueron puestas en marcha por la monarquía británica tras la I Guerra Mundial. En el difícil y complejo contexto presente seguramente se trata de abrir otras ventanas, incrementando el grado de transparencia y control de la Casa Real, sin romper con las claves de equilibrio y neutralidad que deben caracterizar a la figura de un Rey. Es el momento en que el estilo personal del Príncipe tendrá que demostrar hasta dónde llega su capacidad seductiva para conseguir reactualizar aquellas ancestrales funciones de moderación y arbitraje que, desde los tiempos de Benjamín Constant, caracterizan a esta vieja institución europea.

Como sucedía antiguamente en todo momento de sucesión monárquica, el adiós al pasado es al mismo tiempo la bienvenida a un presente que nos abre las puertas del futuro: momentos de incertidumbre donde, como siempre, las instituciones democráticas tendrán que demostrar su auténtica funcionalidad. Y la sucesión

normalizada constituye seguramente una de esas pruebas de fuego que pueden llegar a colocar a un país en la historia.

ESTILOS DE PROTESTA

16 junio 2014

La imagen de la protesta social se ha proyectado siempre con un estilo subversivo y espectacular. Es algo que se confirma en la historia de la humanidad: desde Juan el Bautista al Che Guevara, desde Gandhi hasta Fidel Castro. La ruptura del orden establecido requiere siempre de ciertos elementos de visualización que movilicen a los colectivos, generando así una fuerza de atracción hacia el líder, quien proyecta de forma multiplicada su propia imagen como un centro de referencia. Y la imagen de los líderes acaba siendo replicada por los propios colectivos. ¿Quién no ha soñado alguna vez con parecerse a la inmortal imagen del Che Guevara?

Entre los estilos de subversión o protesta de nuestro orden social podríamos clasificar una tipología dual: los de pelo corto, frente a los coletas.

Los de pelo corto han tenido su mejor proyección entre nosotros en el movimiento *abertzale*; llevan camisetas sin cuello, un discurso contenido y algo torpe cuajado de evidencias implícitas, y una amenazante apuesta por la acción violenta. Los coletas parecen expresar en cambio una imagen algo más dulce: integran en su estilo reminiscencias del pacifismo *hippie* junto con la diarrea verbal propia del universo caribeño (o, como se dice ahora, bolivariano). Los de pelo corto suelen ser altos, cuadrados y algo atléticos; los coletas, más flacos, blandengues y descuidados. Es razonable pensar que los de pelo corto apuesten por el vino peleón de la tierra mientras que los coletas prefieran el aromático humillo de los canutos. Los de pelo corto son como nobles bárbaros del norte, mientras que los coletas se imaginan místicos activistas del sur. Ambos son urbanitas, aunque a veces se transporten a una especie de arcadia rural imaginada. Los de pelo corto sueñan con estacas y pistolas, los coletas con mesiánicos movimientos de masas. Aunque todos tratan de expresar en su simbología y su gestualidad las aspiraciones difusas de un sentimiento utópico que, al final, acabará tocando en nuestros corazones.

A veces la combinatoria de estilos llega a ser original. Por ejemplo, el modelo del revolucionario campesino tiene su mejor

expresión en el inefable Sánchez Gordillo, con un cierto aire a lo Juan el Bautista: la camisa de cuadros bien desabrochada y ocultando apenas la embarazosa panza, la barba y melena descuidadas, la mirada mesiánica y el aire desenvuelto de un permanente desafío ante todo y frente a todos.

Se supone que el estilo ayuda a orquestar un discurso: aunque es posible que el discurso tenga al final un valor secundario frente a la contundencia de las evidencias gestuales. En todo caso, los líderes de la protesta tienen que ser algo maleducados en su comportamiento, si de verdad quieren proyectar una imagen de subversión colectiva. Pero el estilo hosco y contenido de los de pelo corto se contrapone a veces al desparrame verbal y florido de los coletas.

Aunque en realidad puede que la clave no esté en el discurso sino en la posibilidad de hacer ruido, que es lo que de verdad llega a todo el mundo: quizás por ello en la música pop se dice que, al final, los Rolling le ganaron la batalla a los Beatles. Porque el ruido rítmico y reiterativo es el llamamiento más directo a la subversión, el reclamo de las masas, el elemento aglutinador que permite a los colectivos sentirse protagonistas activos de la acción, participando del romántico sentimiento de ruptura inmediata del orden establecido. El éxito final de ese ruido dependerá de su transmisión a través de los circuitos audiovisuales: y es evidente que en la actualidad el ruido de la protesta circula y se proyecta a través de las redes y los medios de masas.

Para poner la letra bastaría tan sólo con algunos retazos de discurso: como los que se expresan de forma cotidiana en la voz prodigiosa de los tertulianos y líderes de opinión de las grandes cadenas. Diagnósticos telegráficos de la realidad multiplicados hasta el infinito mediante su réplica en las redes sociales, que convierten en grandes protagonistas de la actualidad a esos brillantes conocedores de todo, informados de todo y sabedores de todo; que tanto nos admiran desde los grandes medios de comunicación y nos hacen pensar en el irremediable eslogan de “tertulianos al poder”.

El potencial explosivo que surge de la combinación de ambos circuitos ya lo hemos comprobado en las pasadas elecciones europeas. Lo que no sabemos es si ahora los dirigentes de Izquierda Unida van a dar la consigna de dejarse coleta o si más bien van a tratar de conquistar puestos en el reñido escalafón de los opinadores de radio y televisión. En una sociedad del sur como la nuestra, parece que por ahora los coletas llevan la delantera.

EL MANTRA DEL PACTO

3 agosto 2014

El pacto, el acuerdo, el consenso, se han convertido desde hace tiempo en uno de los grandes ideales de nuestro tiempo. El proceso de pacificación de la convivencia que impone toda lógica democrática parece exigir el desarrollo continuado de un esfuerzo de negociación y de diálogo entre distintas partes; y el pacto se configura así como un cauce abierto y civilizado que sirve para limar aristas, amortiguar conflictos y canalizar el desarrollo de la acción pública en sociedades pluralistas, evitando el desencadenamiento de tensiones “guerracivilistas”.

Sin embargo, subyace a veces en la percepción de este prestigiado recurso un cierto desajuste metodológico: y es que un pacto no es en realidad un fin en sí mismo, sino un marco procesual a través del cual tratan de canalizarse determinadas propuestas o aspiraciones. Todo pacto tiene al final unos contenidos que son los que determinan finalmente la acción. Y en todo pacto o en toda negociación, las partes esperan siempre ganar algo; o al menos existe la posibilidad de que unos ganen y otros pierdan.

Por eso el pacto puede incluso acabar siendo a veces la piel de cordero tras la que se disfraza el lobo: aspiraciones ilegítimas, pretensiones egoístas, deseos hegemónicos o venales, se camuflan de forma atractiva detrás de la retórica del pacto. Sectores movilizados o activistas promueven la necesidad de “pactar” aquello que afecta o beneficia a sus propios intereses, aprovechándose a menudo de la indolente apatía que invade a las mayorías silenciosas, sobre todo bajo el dulce sopor del verano.

En un marco institucional como el que vivimos, donde los sectores gobernantes están siendo asediados (puede que con justicia) por un permanente ataque a su grado de legitimidad, donde la clase política resulta identificada con la interminable oleada de corrupción o con su incapacidad para dar respuestas efectivas a la crisis, la función de tutela de los intereses generales que se supone deben asumir los gobernantes puede verse debilitada ante las pretensiones inmediatas de ciertos sectores por negociar o pactar propuestas que, al final, pretenden beneficiar a sectores o intereses concretos.

Subyace así, detrás de la retórica del pacto, un conflicto latente donde a veces se sustancian pretensiones de hegemonía, aspiraciones egoístas o incluso el puro logro de beneficios sociales a favor de determinados sectores más poderosos o mejor organizados que el resto.

Afirmar ahora que el conflicto catalán se va a resolver fácilmente mediante la negociación o el pacto, no pasa de ser una pura voluta retórica. Quienes se han encargado durante años de atizar el fuego nacionalista y excluyente, pretenden ahora convocarnos de forma inmediata a un gran pacto anti-incendios que atienda a sus “legítimas” aspiraciones. Un pacto “de Estado”, se supone, donde incluso debería intervenir la Corona. Un pacto para aceptar lo que ellos han decidido por su cuenta, mientras se dedicaban a restringir las pretensiones pluralistas de la propia sociedad catalana; un pacto para que les digamos que sí a todo, o a casi todo, y donde por supuesto ellos serían de entrada los ganadores, no vayamos a dejarles en mal lugar porque entonces sería peor.

Y si todo ello no es posible, entonces acudiremos al gran pacto de los pactos: o sea, a modificar nuestras reglas de juego para que las pretensiones hegemónicas de cierta burguesía catalanista alcancen el reconocimiento de todos.

Cuando los términos de la partida resultan estar tan envenenados de entrada, engolfarse en la retórica del pacto no pasa de ser un intento de entonar una especie de mantra colectivo que nos permitirá alejarnos de la difícil realidad, para situarnos en el nirvana virtual de una armónica convivencia colectiva: la deconstrucción cubista de nuestro sistema territorial confirmada así bajo la pátina legitimadora del pacto.

FALSEDADES

16 agosto 2014

Nuestra filosofía de la crisis ha acabado reproduciendo un sistema de dualidades simplificadas que parecen servirnos de argumento en el difícil presente: los recortes frente a los estímulos.

Nuevamente los esquemas maniqueístas vienen a recolocarse en clave derecha-izquierda para ofrecernos sus fórmulas salvadoras: señal inequívoca de que, definitivamente, la política ha puesto ya sus manos sobre el mundo de la economía. Entre recortes y estímulos, sobrevuela la triste sombra de los derechos sociales, como estrellas migratorias de una lejana galaxia, mientras el magma del malestar y la desgracia se ceban en el oscuro trasfondo cotidiano de nuestras fachadas.

En principio, cualquier esquema simplificado como éste debe ser bienvenido si sirve para interpretar mejor la realidad y así poder actuar sobre ella. Pero la auténtica duda consiste en determinar si en

este caso la realidad resulta ser la que vemos o percibimos, o si se trata de una realidad inventada o falseada. Porque teóricamente, recortes o estímulos operan sobre una realidad que percibimos y que se nos expresa en forma de cifras: ya sean de la contabilidad pública o de la privada, son esas cifras las que expresan las posibilidades reales de nuestros recursos económicos y nuestras capacidades para hacer frente a la crisis.

Sumergidos en la inopia de la buena fe, damos por supuesto que las cifras que manejan gobernantes, empresarios y analistas responden en efecto a la realidad de las cosas. Sólo que a veces salta alguna chispa y el cuadro se descompone. La última ha sido la de Gowex, una de nuestras más recientes empresas estrella, plenamente instalada en el tren de la globalización y brillante perceptora de innumerables ayudas públicas. Ni siquiera los inefables sabuesos de Hacienda se habían oído que debajo de tan brillante proyecto empresarial, no había nada.

Es un reiterado rumor, que de vez en cuando sobrevuela entre líneas, que las contabilidades que reflejan nuestras instituciones bancarias (las buenas, o sea, las que han conseguido sobrevivir a la crisis) esconden todo un trasfondo de profundidades y misterios abisales prácticamente imposibles de descubrir.

Cuando en pleno estallido de la crisis se descubrió que Grecia había falseado sistemáticamente sus cuentas públicas, las que presentaba ante la Unión Europea, todos nos sonreímos con cierta suficiencia en el convencimiento de, naturalmente, en España no pasaba eso. Siempre hay diferencias. Nuestros mecanismos de información y control están a otro nivel, lógicamente. Ya se sabía más o menos que, en la sociedad griega casi nadie pagaba impuestos y todo era una especie de realidad ficticia: hasta que estalló la bomba de la crisis.

Seguramente nos entraría un cierto sudor frío si tratáramos de responder con honestidad a la pregunta de si aquí, en España, todos pagamos realmente nuestros impuestos, si nuestras empresas reflejan una contabilidad real, y por supuesto si nuestras cuentas públicas son un reflejo fidedigno y controlado de su estado real. Porque cuando empiezan los rifirrafes de la financiación autonómica siempre asoma la patita de si algunas Comunidades lo que hacen en realidad es ocultar y retrasar facturas para así conseguir “cuadrar” sus cuentas. Mejor no preguntarle a los responsables de la financiación sanitaria. O a algunos gobiernos locales.

Cuando vivimos en una retórica desenfadada de recortes o anti-recortes, de estímulos o de austeridades, seguramente no somos del todo conscientes de cuál es la auténtica realidad sobre la que pisamos ni de cuáles son realmente los recursos económicos con los

que contamos. Nuestra visión de las cosas se asienta sobre todo un cúmulo de falsedades.

TODOS QUEREMOS MAS

13 octubre 2014

La capacidad de enmascaramiento que los discursos políticos son capaces de desplegar, resulta a veces sorprendente. La realidad elemental de las cosas acaba mágicamente transformada y modificada: de ser puras y simples relaciones de poder, pasan a convertirse en recovecos retóricos o simbólicos, dotados de pliegues ocultos y misteriosos, tan absurdos que a veces parecen alucinantes.

Pongamos lo de Cataluña. Durante la ahora tan menospreciada transición, resultó claro que la realidad territorial española no podía montarse siguiendo el venerable modelo francés, basado en una rigurosa igualdad que implicaba una uniformidad de realidades geográficas y se traducía en un modelo centralista. Para centralismo, ya habíamos tenido a Franco.

Cuando comenzó la historia autonómica, todo parecía diseñado a favor de las comunidades llamadas históricas, que tenían sus propios partidos nacionalistas, Cataluña y País Vasco. Casualmente las más ricas de España, allí donde había acudido la emigración del sur. Pero tras la apuesta de Andalucía, comenzó a primar un principio tan grato a la tradición federalista como el de igualdad. Lo que supone ajustar la diversidad a un complejo de posibilidades múltiples según decida el respectivo gobierno de cada Comunidad, pero sobre la base de una igualdad de recursos y de competencias, que afectaría lógicamente a la propia igualdad de los ciudadanos.

Y eso es lo que tenemos: cada Comunidad decide en el marco de sus respectivas competencias sus distintas políticas, contando con la presencia de una realidad superior llamada Unión Europea. La igualdad dentro de la diversidad: el hallazgo mágico finalmente logrado gracias el empuje andaluz.

Pero claro, el problema consiste en que algunos siempre quieren más. Y dentro del sistema de gobiernos débiles predominante en España, quienes tenían (como catalanes y vascos) algunos votos que ofrecer para asegurar la gobernabilidad en Madrid siempre podían obtener algunas prebendas. Ya sea más dinero para sus territorios, o bien la vista gorda de Madrid ante algunos de los

desmanes que sus dirigentes venían cometiendo; o incluso ante algunos de los flagrantes incumplimientos del ordenamiento legal.

Y cuando algunos quieren más, el problema es que siempre acabarán pidiendo más, y mucho más. Además, con la que está cayendo, quién no se apunta a un bombardeo. Y como todo es susceptible de enmascararse, ahora resulta que aparece el bucle melancólico, la identificación inmaterial, el ser como nación, el derecho a decidir. Una apuesta apoyada por lo hijos y nietos de los emigrantes andaluces, que se identifican ahora con la tradición cultural catalana después de haber renunciado a sus raíces culturales sureñas: son los sectores más radicales de apoyo al independentismo.

Todo es un invento interesado, porque su identificación colectiva y su lengua ya la tienen, sus competencias ya las tienen, sus instituciones ya las tienen, sus políticas lo mismo. Lo que no aceptan es el principio de solidaridad territorial que implica la existencia del Estado español. Que lo suyo sea para ellos mismos, porque así tendrán más.

El modo en que las pretensiones hegemónicas de la burguesía catalana pretenden enmascararse para convertirse en la legítima pretensión colectiva de todo un pueblo, resulta pintoresco y, en el fondo, hasta divertido. Pero que se sintieran estafados ante la falsa oferta que les hizo un tahúr llamado Zapatero, no es asunto que tengamos que pagar los demás ciudadanos.

Y como durante décadas en España hemos estado en Babia pensando que todo desarrollo autonómico era positivo, la cosa se ha convertido en una historia de querer más y mucho más. Con el detalle -que a veces se nos olvida- de que lo que algunos consigan de más otros lo tendremos de menos. Y así es como avanzamos los españoles en la lucha contra la crisis y la construcción de un futuro mejor para nuestra complicada Europa.

Cuando los niños chicos caprichosos se ponen pesados a base de pedir cosas sin límite, sus padres les enseñan una de las primeras y más básicas palabras del conocimiento humano: la palabra *no*. Y así las cosas vuelven a su justo equilibrio. La palabra *no* es la que sitúa al ser humano ante el mundo, la que le hace ser consciente de sus posibilidades y sus límites, la que proporciona el choque más inmediato ante la realidad existente. Y sólo a partir de la realidad existente es posible construir un futuro que merezca la pena. Quienes se empeñan en querer más y mucho más, seguramente deberían ser capaces de bajar de sus sueños y enfrentarse de una vez a la realidad.

LOS VENGADORES

17 noviembre 2014

El argumento lo sugirió el viejo Tocqueville, en su análisis de la democracia americana: las reacciones a las crisis suelen producirse cuando ya el vórtice mismo de la propia crisis ha pasado, es decir, cuando las sociedades y sus colectivos acceden a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo.

Y cuando lo que ha sucedido es una suerte de gran catástrofe colectiva, la reacción parece inmediata: hay que sacrificar a todo chivo expiatorio que se encuentre en las inmediaciones. Es un fenómeno particularmente conocido en el universo mediático, tan dado a reacciones instantáneas y sobreactuaciones llenas de espectacularidad. Algo por otra parte muy familiar para quienes somos aficionados a las viejas y clásicas películas del oeste: ahorcar al primer pardillo que se encuentre por medio. Pura apariencia de “justicia” inmediata y primitiva, ejecutada por espontáneos jueces justicieros que, en realidad, esconde un simple deseo de venganza colectiva, con el falso afán de purificarnos en la sangre sacrificada.

Se suponía que la aparición del Estado de Derecho había venido a acabar para siempre con estas primitivas lacras, propias de sociedades semisalvajes. Porque si la justicia está en manos de jueces profesionales sometidos a la ley, se supone que todo afán de venganza debe quedar excluido: y aparecen criterios de objetividad, proporcionalidad y ponderación destinados a eliminar cualquier atisbo de arbitrariedad y, por lo tanto, todo rastro de venganza.

Pero la balanza puede acabar por desequilibrarse cuando, tras la catástrofe de la crisis, los impulsos colectivos de venganza contra la clase gobernante se filtran a través del caldo de cultivo mediático y terminan manifestándose en forma de histeria apocalíptica: entonces, los resultados pueden amenazar con desbordar el propio marco de referencia del Estado de Derecho y su sistema de garantías, construido durante siglos al servicio de todos.

De entrada, porque cuando se exageran los fenómenos de judicialización de la vida social y política, el sesgo del control jurisdiccional sufre una inevitable desviación hacia el circuito penal: es decir, que las responsabilidades se sustancian con la cárcel. Lo que significa que todo el resto de mecanismos de control existentes (incluso de otros ámbitos jurisdiccionales) se acaban desplazando a un segundo plano. Ni control financiero, ni político, ni administrativo, ni de gestión, ni por supuesto civil: sólo la lógica del procesamiento criminal. Y el circuito penal, tan cargado de interminables garantías, opera en nuestro país con tal lentitud que convierte a los propios

sumarios en mecanismos de condena social previa e indirecta. Lo que se refuerza inevitablemente cuando emerge el fenómeno de los jueces estrella.

Pero lo más grave aparece cuando este desbordamiento de los afanes de ajusticiamiento público se acaba traduciendo en una pérdida de los criterios de proporcionalidad y de igualdad de trato que, se supone, deben ser esenciales a la administración de justicia. Que un exalcalde andaluz como Pedro Pacheco esté cumpliendo cinco años de cárcel por colocar a dos enchufados, sólo invita a imaginar las decenas de miles de años de cárcel que le esperan a la mayoría de nuestros gobernantes. ¿Va a ser posible? ¿O simplemente es que han ahorcado al primero que pasaba por allí?

Seguramente cabe pensar que, en otros casos, una justicia como la nuestra, suficientemente domesticada tras años de politización, acabará siendo algo más comprensiva. Con Pacheco y la Pantoja en la cárcel, ya tenemos suficiente dosis de sangre y de espectáculo. Y el resto quedará a la espera de que aparezcan las sombras de la impunidad.

Cuando los instrumentos de garantía que la humanidad civilizada ha ido desarrollando durante siglos comienzan a olvidarse. Cuando los criterios que determinan la actuación de la justicia vienen condicionados por un descontrolado deseo colectivo de venganza. Cuando la actuación de los jueces no se sabe si es causa o consecuencia de la presión del circo mediático. Cuando las frustraciones colectivas de todo un pueblo tratan de liberarse mediante el ajusticiamiento de algunos chivos expiatorios. Y cuando hasta los propios jueces se ven incapaces de asegurar criterios de proporcionalidad y de igualdad suficientemente ponderados, es posible que algunos de los cimientos del edificio del Estado de Derecho estén comenzando a resquebrajarse.

NUEVOS PARTIDOS, NUEVA POLÍTICA

14 diciembre 2014

Los intentos de modernizar nuestra democracia pasan, lógicamente, por renovar los partidos. Desde principios de siglo, parecía que dos partidos de tipo centrista y de proyección estatal, *UPyD* y *Ciudadanos*, se configuraban como la nueva opción complementaria de nuestro sistema; aunque parece que ahí siguen, sin ponerse de acuerdo entre ellos.

Seguramente los españoles no contábamos entonces con la intensidad del tsunami que se nos venía encima: el doble impacto de la crisis y de la oleada de corrupción, que dibujan la tormenta perfecta para hacer explotar una dinámica de protesta antisistema que, aunque siempre ha existido, parecía reducida hasta entonces a unas dimensiones tolerables. La oportunidad política consistirá entonces en montarse en esa ola aprovechando los circuitos de innovación y modernidad, básicamente el soporte mediático, autoalimentado progresivamente con el flujo hirviente de redes y tuiteros.

Parece una realidad incontestada que la política española contaba desde hace tiempo con una serie de protagonistas estrella, que nos sorprenden y nos admiran cada día desde los medios de comunicación: los tertulianos. Unas figuras brillantes y omniscientes, de gesto decidido y acerada capacidad argumentativa, dotados de una imagen atractiva y de un impulso arrollador. Unos seres superiores que nos obligan a formular íntimamente el eslogan evidente de “tertulianos al poder”.

La combinación de ambos elementos, movimiento antisistema y estrellato mediático, sólo puede producir un resultado explosivo. Es como mezclar a Berlusconi con Beppe Grillo: pura dinamita electoral.

El impulso modernizador resulta tan evidente que sólo cabe dedicarse ahora a barrer las pavesas del pasado, para intensificar así la rabiosa actualidad de la nueva oferta: ni viejas constituciones o transiciones, ni viejos partidos, ni casta de corruptos. Ni por supuesto, viejos hábitos de la política, como la manía de exigirle a los partidos un determinado programa. *Podemos* ha demostrado con claridad que constituye el partido político más moderno de la democracia española: el primero que ha constatado con precisión que, en realidad, los programas electorales son pura bagatela, una banalidad, un simple subproducto de marketing político. No sirven para nada a efectos puramente electorales.

Si se presentaron a las europeas con un programa (aquellas propuestas “bolivarianas” de suspensión del pago de la deuda, el salario social universal, la refundación constitucional o la alternativa republicana), ahora ya están elaborando otro. Y si con éste, el gran líder no consigue llegar al poder, no será necesario que se plantee dimitir: bastará con elaborar otro nuevo. Y así sucesivamente: se trata al final de ofrecerle a la gente lo que la gente quiere. Los programas, en última instancia, son pura cosmética. En realidad parece una original plasmación del pensamiento marxista: se acuerdan ¿verdad? era aquello de “estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros”, o sea, puro marxismo de Groucho Marx.

Si a todo ello le añadimos un simpático toque caribeño o de estilo peronista, ya lo tenemos: nuevo constitucionalismo, nuevo Estado de bienestar, nueva política, nueva democracia, nuevos

líderes, ¡Todo nuevo! Los ciudadanos españoles podemos enfrentarnos al proceloso siglo XXI con la seguridad de estar renovando de raíz nuestras viejas estructuras políticas.

Venir ahora con las consabidas críticas contra los populismos, parece como un resabio de viejos. Al fin y al cabo, ¿qué líder político no practica en el fondo algo de populismo? ¿Qué partido ha demostrado tomarse en serio eso de las propuestas programáticas o la intención de cumplirlas? Ya es hora de decirle adiós definitivamente al viejo universo histórico de la transición y su inalcanzable ideal de unos partidos políticos ideológicamente compactos, más o menos ubicados en el eje izquierda/derecha, tratando de plasmar sus propuestas en programas solventes, con los que se comprometían ante el electorado o ante el propio Congreso. Estilos del siglo pasado, perfectamente desfasados a estas alturas.

La nueva política tiene ya pues sus nuevas claves y sus nuevos líderes. ¿Qué nos importa lo que piensen de nosotros esos a los que llamábamos “países democráticos serios”? Para formar un coro de aduladores o una iniciativa regional de nivel mundial, ya tenemos a algunos de nuestros amigos sudamericanos: de Chávez a Perón, siempre habrá algún enfoque atractivo para la España del siglo XXI.

Cuando las sociedades no son capaces de generar un aprendizaje virtuoso a partir de la experiencia de su pasado inmediato, parecen condenadas a estrellarse detrás de cualquier caudillismo carismático.

GENERACIONES DEL FUTURO

2014

El recurso a la sabiduría que dan la edad y la experiencia es un mecanismo bien conocido por la humanidad desde tiempos inmemoriales. Ya en las sociedades primitivas existían los “consejos de ancianos”, que ofrecían a sus pueblos el apoyo de un conocimiento adquirido a lo largo del tiempo para ayudarles en momentos difíciles. El propio Senado romano era en cierto modo un órgano orientado a este tipo de tareas: ofrecer un bagaje de reflexión y de conocimientos, especialmente útiles en situaciones de crisis. El respeto y la atención a los mayores constituían así un soporte de seguridad para la continuidad de las sociedades y de las culturas.

Pero el paso de las sociedades estacionarias primitivas a la progresiva aceleración de los cambios históricos que trae consigo la era moderna parece haber modificado esta situación, y en el contexto

presente el asunto presenta bastantes resistencias. La venerable devoción por los ancianos se ha sustituido por un indisimulado cachondeo ante vejetes y jubilatas, empeñados en contar sus reiteradas historietas sin darse cuenta de que están perfectamente alejados de la realidad, tan transformada con la aceleración de la historia y las nuevas tecnologías. En este entorno modificado, el anciano parece como si estuviera en otra galaxia, fuera del mundo y de la realidad, y su destino más honorable sería limitarse a contar sus trilladas historietas en el apacible marco de su familia o en un asilo de ancianos.

A veces se siguen estrategias distintas, consistentes en organizar asambleas de sabios en foros o coloquios por parte de fundaciones o *think tanks*, donde se buscan respuestas ante las incertidumbres del presente. Son reuniones donde no acuden ancianos, sino más bien políticos retirados dispuestos a ofrecer su bagaje de conocimientos y experiencias para orientarnos ante el futuro. Es una respetuosa deferencia hacia quienes en el pasado dirigieron nuestros destinos tomando trascendentales decisiones políticas. Y damos por supuesto que su condición de “expolíticos” les otorga un plus de conocimiento del que carecemos los ciudadanos de a pie.

Pero se supone que en una sociedad del conocimiento a todo líder de opinión se le suele pedir su currículum. Y en el caso de los políticos profesionales ya sabemos cuál es: personas que se han dedicado a medrar en una determinada organización política; que consiguieron adquirir una posición de liderazgo a base de codazos a sus contrincantes y una aleatoria fortuna en las urnas; y que han tenido el privilegio de tomar decisiones de Estado con unas consecuencias a veces muy discutibles. Incluso están ya habituados a colocarse a sí mismos en loor de multitud y soltar sus brillantes monólogos con la pretensión de estar haciendo historia. O sea, no son grandes sabios avezados en el conocimiento de la historia, la ciencia o las ideas, sino antiguos profesionales de la política que nos siguen dando la matraca bajo un brillante envoltorio de retórica algo ajada.

La duda de si son ellos los personajes adecuados para darnos consejos útiles en el difícil presente, se hace comprensible. Porque si recordamos la historia, resulta que los grandes movimientos sociales que modificaron el curso de la humanidad fueron protagonizados por generaciones jóvenes, gente que no llegaba a los cuarenta años. Los revolucionarios franceses, los impulsores del romanticismo, los personajes que marcaron con su arte, sus ideas o sus proyectos los nuevos vientos de la historia, eran en su mayoría sujetos bien alejados de la edad de la madurez: gente con la energía y el entusiasmo de la juventud, con capacidad para apostar con fuerza y decisión por un nuevo futuro.

Y es que, cuando el desafío histórico consiste en avanzar hacia nuevos horizontes modificando sustancialmente la realidad presente, los viejos, francamente, no tenemos mucho que decir. Construir nuevos soportes colectivos para el futuro es una tarea que requiere el brillante entusiasmo de la juventud, el empuje y la fuerza que sólo pueden darnos las nuevas generaciones llenas de energía.

Hoy podemos afirmar que, al menos en el mundo occidental, nuestras jóvenes generaciones son afortunadamente las mejor preparadas. Las que están transformando el mundo de las tecnologías, la investigación y los nuevos descubrimientos que necesita la humanidad. Pero también son, en Andalucía, los mismos jóvenes a los que hemos condenado al abismo del desempleo, la precariedad y la frustración.

Con estas cartas sobre la mesa, sólo nos queda confiar en que ellos mismos sean capaces de encontrar la vía para tomar el control y coger el futuro entre sus manos. Si no, esto va a acabar siendo una aburrida letanía de abueletes.

EL CÍRCULO VIRTUOSO

28 diciembre 2014

Es un hallazgo interesante de uno de los libros científicos mejor acreditados de los últimos años: *¿Por qué fracasan los países?*, de los americanos Acemoglu y Robinson. Aunque generalmente interpretada desde una perspectiva de historia económica, la obra tiene en realidad una decisiva conexión política en la medida en que trata de determinar cómo las claves de desarrollo económico de ciertos países dependen en realidad de la emergencia de soportes institucionales de naturaleza política (las llamadas instituciones “inclusivas”) que permiten superar las tradicionales y arcaicas economías extractivas, basadas en la detracción de recursos de la mayoría oprimida a favor de ciertas minorías privilegiadas.

Pero no se trata tan sólo de determinar el tipo de acontecimientos de ruptura histórica o de revolución social que permitieron “liberar” a ciertos países de las trabas de la historia; ni siquiera del establecimiento de las coordenadas sociales y jurídico-políticas que han permitido el desarrollo de economías dinámicas (lo que denominamos normalmente como revoluciones burguesa e industrial), sino del modo como ciertos países han conseguido mantener en el tiempo tales pautas de apertura democrática para acabar asegurando la presencia de los intereses de la mayoría; sobre

todo cuando aparecen determinadas amenazas al sistema. Es aquí donde aparece la noción de “círculo virtuoso”.

Por expresarlo en términos más sencillos: no se trata sólo de determinar las coordenadas históricas que determinan la aparición de las democracias, o como en nuestro caso, del tan debatido balance de la transición que culmina en la Constitución de 1978. De lo que se trata es de las claves que permiten la consolidación y el mantenimiento en el tiempo de tales democracias cuando algunos de los sectores sociales que contribuyeron a su advenimiento intentan “beneficiarse” del mismo para acceder a nuevas posiciones de privilegio.

Algunos ejemplos históricos ayudan a entender la noción de “círculo virtuoso”. La expansión económica que trajo consigo la revolución industrial norteamericana dio lugar desde finales del siglo XIX a la aparición de los primeros grandes potentados capitalistas; los Rockefeller, Morgan, Vanderbilt, etc. Teóricamente estaban destinados a controlar la economía americana con sus imponentes “trusts”, hasta que comenzaron a ser calificados como los “*robber barons*” o barones ladrones por un amplio movimiento social de protesta que consiguió reforzarse hasta impulsar las legislaciones antimonopolio a partir de Teddy Roosevelt y los siguientes presidentes norteamericanos. Los hijos millonarios de la revolución industrial, que trataban de asegurarse posiciones de privilegio con los beneficios acumulados, tenían así que frenar sus pretensiones hegemónicas subordinándose a los intereses generales de la mayoría.

En nuestro caso, parece evidente que el catalanismo fue durante la transición uno de los elementos constructivos que permitieron la aparición de un sistema de instituciones “inclusivas”, en la expresión de Acemoglu y Robinson, plasmado en nuestra Constitución de 1978. También es evidente que desde hace algún tiempo esos sectores catalanistas tratan de romper con tal sistema inclusivo para adquirir posiciones de privilegio. ¿Estamos en consecuencia los españoles en condiciones de poner en marcha nuestro propio “círculo virtuoso” para frenar las pretensiones hegemónicas de un sector tan poderoso?

Es curioso que, aun tratándose de un libro fundamentalmente económico, los autores insisten en precisar que las claves de todo círculo virtuoso residen en los parámetros propios de un Estado de Derecho, es decir, en asegurar los principios legales de igualdad que están al servicio de todos. Así, cuando la alta burguesía inglesa del siglo XVIII trató de frenar las incursiones de los peligrosos “*blacks*” (bandas de furtivos que, con las caras tiznadas, merodeaban en las grandes propiedades) se encontraron con que la propia judicatura se

resistía a una aplicación rigurosa de los instrumentos represivos: era la lógica del *rule of law* que, al final, protegía a todos.

El círculo virtuoso se convierte así en la clave de bóveda que debe asegurar la consolidación y el mantenimiento en el tiempo de los sistemas democráticos cuando determinados sectores que contribuyeron al advenimiento de tal sistema pretenden adquirir una posición de privilegio. Y la experiencia histórica nos demuestra que tales inflexiones se han podido superar con éxito cuando han sido los intereses de la mayoría, apoyados en el principio de igualdad y en la lógica del Estado de Derecho, los que han conseguido frenar las pretensiones de los sectores más poderosos.

Es el momento de decidir si somos capaces en España de poner en marcha nuestro propio círculo virtuoso, es decir, nuestro sistema de defensa de la igualdad y de la mayoría.

AÑO 2015

SUEÑOS

(Sobre la red de internet)

19 enero 2015

Tras el reciente debate sobre la reforma de la ley de propiedad intelectual, tras el balance de los incisivos relatos acerca de los abusos que viene desarrollando *Google* en relación con los derechos de autor, tras la abundante información sobre los ingresos de publicidad que se generan en la red, parece que los términos del debate están comenzando a aclararse: resulta que, al final, se trataba de una simple cuestión de dinero.

Fuimos muchos lo que, con el nacimiento y apogeo de internet, tuvimos un sueño. Un sueño de apertura y de transparencia más allá de las fronteras. Un sueño de accesibilidad gratuita y disponible para todos, en cualquier punto del planeta. Un sueño que nos permitía pensar en la cultura entendida como un valor libre y abierto, igual que el sol, el viento o la lluvia. Un sueño susceptible de unirnos y de comunicarnos a todos los habitantes del mundo globalizado.

Pero parece que había un detalle, una pequeña cuestión, la de siempre: la propiedad. De donde surge la nueva visión dominante de internet, entendido como una auténtica oportunidad de negocio. Y es que los autores, los creadores, los propietarios, aspiran a obtener sus correspondientes ingresos. Hay que suponer que se trata de potenciales autores de inmortales bestsellers, vendedores de miles o de millones de valiosos libros o de preciosas obras de arte; seres dedicados a la innumerable labor de la "creación", y legítimamente dispuestos a vivir de ella. Todo perfectamente normal y conocido, o sea, nuevamente la lógica de los mercaderes llevada al campo de la cultura.

Otros pensábamos que, como ha sucedido en otras épocas, la creación podía entenderse también como un esfuerzo que se aporta al ámbito de lo común, que se dimensiona en lo colectivo; algo así como un regalo que se proyecta hacia afuera expresando lo que nos sobra o lo que nos desborda, lo que damos a los demás de forma gratuita, como damos una sonrisa o un saludo. Igual que sucedió, por ejemplo, en la época de los constructores de catedrales. Se trataría del proyecto de arrimar el hombro en una especie de ONG virtual, conformando una auténtica comunidad planetaria donde cada uno aportaría lo que pudiera: sus experiencias, sus conocimientos, su

creatividad, haciendo así de la cultura un valor común que se proyectaría libremente para todos, superando las viejas fronteras. Para ello sólo se requiere una plataforma tecnológica adecuada, de la que ya disponemos. Pero parece que esos sueños eran al final puros sueños utópicos, destinados a acabar chocando contra la lógica inexorable de los mercados y los mercaderes.

Por eso cabe sugerir si esta nueva dualidad de opciones no debería traducirse igualmente en diferentes marcos jurídicos, como ha sucedido en otras épocas. Porque no todo ha sido siempre propiedad privada, sino que también ha existido y existe la propiedad común o colectiva, el patrimonio de todos o accesible para todos; igual que subsiste hasta en nuestros días la lucha contra un campo lleno de barreras o de cercados o contra unas vías pecuarias privatizadas. Así que, a partir de ahora, quien pretenda vivir de sus ingresos en internet, que se ponga en la fila de los propietarios. Y quienes aspiramos a participar en una plataforma abierta y gratuita, disponible para todos, en una fila distinta.

Pero por favor, que no nos privaticen a todos en contra de nuestra propia voluntad. Que no nos persigan por confiar en la transparencia, entendida como una palanca que nos permite proyectarnos hacia un futuro mejor. Que no nos acusen por confiar en una utopía, pues, como decía Bertrand Russell, las utopías se demuestran empíricamente. Y un mundo sin circuitos de transparencia seguirá siendo al final un tinglado de pozos sin fondo donde se ocultan las corrupciones, las ingenierías financieras, las dudosas farsas de los servicios secretos, el dorado de las grandes corporaciones financieras o el chollo de los grandes traficantes y delincuentes internacionales.

Confiar en una plataforma abierta a la información y la cultura no sería en el fondo sino un intento de democratización desde abajo de la nueva realidad planetaria; un proyecto desde el cual podremos dar los primeros pasos hacia una ciudadanía cosmopolita; un intento colectivo para darle vida y contenidos a una red que, sin la aportación de cada uno, sería como una carcasa o una plataforma vacía.

Quienes confiamos en ese horizonte utópico no debemos ahora dejarnos torcer el brazo: mejor no empecemos de nuevo con los viejos sueños de forrarse a base de pelotazos. Porque la simple disponibilidad de instrumentos de cooperación no permite alcanzar por sí misma sus objetivos si efectivamente los propios ciudadanos no cooperan.

DOS TRINCHERAS

(Sobre el caso de corrupción de los ERE)

17 mayo 2015

Como caminos separados. Y al parecer, destinados a no encontrarse nunca. Este es el panorama que se descubre en el trasfondo del caso de los ERE, dejando por ahora de lado la presencia de chorizos y mangantes. Al menos es lo que se deduce de las posiciones que han manifestado ante el Supremo la juez Alaya por un lado y los principales dirigentes socialistas de la época por otro. Un problema que, en sus líneas fundamentales, se planteó en las democracias occidentales hace ya prácticamente un siglo.

A un lado el Estado de Derecho, tratando de hacer vigente el consagrado principio del *rule of law* a través de su circuito máspreciado, el judicial: un circuito que sólo se preocupa de la aplicación de las leyes, con la pretensión de frenar todo atisbo de discrecionalidad en el funcionamiento de la administración y de los poderes públicos. Al otro lado, el proceloso mundo de la intervención del Estado en la esfera de la economía y la sociedad, o sea, el Estado social: donde en principio opera el puro circuito de la política, con unos gobernantes tomando decisiones estratégicas arriesgadas para atender a ciertos fines de carácter social.

A un lado el formalismo jurídico, el más puro y ciego legalismo, la hostilidad frente a todo atisbo de discrecionalidad por parte de los poderes públicos, la pretensión garantista de defensa de los principios fundamentales de la seguridad jurídica: una trinchera de inevitable aroma conservador, claramente enfrentada a la libertad de decisión política de los gobernantes; con el escenario de una administración sometida y limitada al puro cumplimiento de las leyes. Al otro lado, el impulso de unos políticos audaces y sensibles a las demandas sociales, dispuestos a tomar decisiones difíciles al servicio de la ciudadanía, en un contexto de respuesta a las necesidades colectivas; un ámbito que parece completamente ajeno a la capacidad de decisión de los jueces, sumergidos en su mundo de garantías procesuales y exquisiteces jurídicas.

Dos trincheras enfrentadas, incapaces de comprenderse y de armonizarse. Habría que habérselo preguntado al legendario F. D. Roosevelt cuando el Tribunal Supremo americano le puso la proa a sus iniciativas para intentar sacar a Norteamérica del pozo sin fondo de la crisis, y pronunció aquellas célebres palabras de "*los tribunales deben actuar como un cuerpo judicial y no como un cuerpo para hacer políticas*". Dos universos autónomos y enfrentados: el rígido y conservador *Rule of Law* frente a la ancha y flexible esfera política que trata de ser sensible, desde una perspectiva "progresista", a las necesidades sociales.

Discursos y narrativas absolutamente diferenciadas: para unos, los nobles y decididos gobernantes de izquierda, preocupados por atender a las necesidades sobrevenidas del proceloso mundo de la realidad socioeconómica, la opinión de los jueces carece de relevancia. ¿Qué pueden decir sobre unas decisiones estratégicas de complejas políticas públicas unos profesionales de la judicatura cuyo principal mérito profesional para acceder a sus puestos habrá consistido, en el mejor de los casos, en haberse memorizado las leyes procesales y algunos códigos? Para otros, formados en la consistencia autónoma del ordenamiento jurídico, las decisiones de los políticos se acaban moviendo en la pura arbitrariedad, donde no se trata de favorecer a colectivos necesitados sino más bien a los amiguetes y clientelas electorales. ¿Qué saben al final del auténtico Estado de Derecho unos personajes del mundo de la política cuya única “cultura” parece haber sido la de trepar en el marco de organizaciones opacas y competitivas, donde la sospecha de las “mordidas” y las comisiones sobrevuela en toda intervención que mueva dinero público?

Universos separados y hasta cierto punto autistas, como dos líneas paralelas que no se encuentran hasta el infinito. Un panorama que en otros países se planteaba de forma parecida hace ya un siglo, y que desde entonces ha ido encontrando cauces de acercamiento y de armonización: el camino que aún nos queda por recorrer.

Lástima que en el caso ERE exista al final una especie de clave de bóveda que cierra el sistema: la disponibilidad de unos recursos públicos, es decir, del dinero de todos, que debe estar sometida a unos controles que en este caso fallaron estrepitosamente de una forma continuada a lo largo del tiempo. De ahí que el palo más débil sea el que sostiene a Griñán: era responsabilidad del Consejero de Hacienda controlar los desajustes de gasto y atender a las llamadas de la intervención.

No es ninguna sorpresa afirmar que, como le sucedió a Roosevelt, en este enfrentamiento entre la política y el derecho, la decisión final le corresponde a la esfera más nuclear y originaria: la del Estado de Derecho.

PRESIDENCIALISMOS

9 mayo 2015

Es evidente que los sistemas políticos contemporáneos presentan ciertas tendencias de evolución hacia fórmulas de tipo más o menos presidencial. El reforzamiento del liderazgo del ejecutivo, la

deriva “personalizada” de la representación política, el reiterado prestigio del sistema de listas abiertas, la fuerte proyección mediática de los gobernantes y su presencia constante y directa ante la ciudadanía, constituyen, junto a otros factores, argumentos que explican esta tendencia.

Naturalmente el proceso se enfrenta a ciertas resistencias desde las inercias del pasado: así, la tradicional lógica parlamentaria europea impone una dinámica de fuerte contenido partidocrático donde, más que las personas, interesa la representación de los partidos entendidos como instrumentos objetivos de expresión del pluralismo político de la sociedad. Los gobiernos, más que el resultado de un liderazgo personalizado, son el resultado de una suma de voluntades partidistas que se integran en torno a una mayoría absoluta, mejor o peor definida según los casos.

La idea de intentar mejorar o complementar los sistemas parlamentarios introduciendo elementos de elección personalizada del jefe del ejecutivo (desde el gobierno central a los ayuntamientos) ha contado ya con ciertas experiencias que hasta ahora no presentan sin embargo un balance de resultados suficientemente solvente, aunque sí un cierto prestigio desde la perspectiva teórica o académica. Ni la transitoria experiencia de Israel en los noventa ni las iniciativas innovadoras en las regiones italianas en la última década permiten disponer todavía de un bagaje de experiencias suficientemente consolidado; y por eso el llamado “parlamentarismo de *premier*” sigue constituyendo más bien un prestigioso modelo (teórico) de referencia. Otra cosa sería dar el “salto” hacia el modelo semipresidencial de estilo francés, donde aparece un ejecutivo dualista sometido a ciertas tensiones: la elección directa por el electorado del Presidente de la República frente a la confianza parlamentaria con que debe contar el Presidente del Gobierno.

Es un tema que recientemente ha replanteado Susana Díaz proponiendo la elección personalizada de los presidentes mediante un sistema de doble vuelta. Aunque es una lástima que este debate no se hubiera propuesto en su momento adecuado, la década pasada, cuando la elaboración del nuevo Estatuto de Andalucía. Algo que, como otras cosas, y con tanto mirarnos en el espejo de Cataluña, seguramente “se nos olvidó”.

Pero naturalmente siempre hay elementos de la realidad que pueden marcar una tendencia hacia esos modelos de carácter más “personalizado”. De hecho ya lo ha comenzado a poner en práctica la misma Susana Díaz al identificar su reciente campaña electoral con su propia persona: “*Yo con Susana*”. Y en consecuencia reclama ahora que su investidura se ajuste a la misma lógica de automatismo personal con la que han cantado las urnas.

El problema es que una cosa sería la investidura de la Presidenta, que podría contar con una presunción de confianza personalizada conquistada en las urnas, y otra muy distinta el nombramiento de su gobierno, que deberá contar con la confianza de la cámara. En realidad, se trata de una dinámica que está ya más que practicada en la larga experiencia histórica norteamericana; aunque se trata de un sistema distinto, recordemos que allí el Presidente tiene una potestad de nombramiento de altos cargos que deben ser ratificados por el Senado. Para evitar desautorizaciones, el Presidente se limita a “proponer” a los candidatos a altos cargos (el equivalente a ministros u otros puestos de alta dirección) y el nombramiento final no se produce hasta que cada uno de ellos cuente con el visto bueno del legislativo. Pero la cámara ratifica o rechaza las propuestas después de haber puesto en marcha las correspondientes comparecencias en comisión, donde se revisa la idoneidad (no sólo política, sino también en términos de mérito y capacidad) del candidato a alto cargo. Una tarea donde con frecuencia son los propios medios de comunicación los que mejor “investigan” el currículum de todos y cada uno de los candidatos.

Susana Díaz tiene pues en sus manos la posibilidad de introducir una innovación sustancial y avanzada en nuestro sistema político: el compromiso de arrancar una abstención constructiva a su favor por parte de ciertas fuerzas políticas en “su” investidura como Presidenta, a cambio de someter sus propuestas de nombramiento de consejeros y altos cargos a la ratificación de la cámara. Toda una espectacular innovación institucional que debería ser saludada como una muestra del dinamismo democrático de nuestra sociedad.

GOBERNAR

8 junio 2015

La pregunta de si Susana Díaz quiere realmente gobernar constituye una auténtica perogrullada: por supuesto que sí quiere, puesto que ha ganado las elecciones y de eso se trataba.

Algunas malas lenguas han sugerido que lo que realmente le gusta a la candidata no es gobernar sino simplemente mandar. Que lo de gobernar es una tarea difícil y compleja, donde se mezcla la formulación de horizontes colectivos con las dificultades que trae consigo la gestión de recursos escasos y la movilización de la sociedad y del sector público. Una tarea de acción de gobierno donde todavía, en rigor, ella no se ha estrenado.

Puede que a lo mejor lo que desee la candidata no sea tanto gobernar como estar al mando del Gobierno: o sea, que no se trataría de actuar sino simplemente de *estar*. Y si acaso la maquinaria pública ya se irá moviendo por sí sola...

Para merecer estar al mando del Gobierno, Susana Díaz ha ganado las elecciones como líder de la lista más votada. Pero ya sabemos que eso no es suficiente cuando no se dispone de mayoría absoluta, y podemos recordar que en la anterior legislatura la lista más votada fue la del Partido Popular.

Si Susana Díaz quisiera realmente gobernar estaría formulando propuestas concretas para comprometer la confianza de los restantes grupos en su investidura; estaría diseñando horizontes finalistas precisos y realistas con los cuales se va a comprometer políticamente ante la Cámara y ante el resto de la ciudadanía. Es lo que se espera de alguien que aspira legítimamente a ser investida como presidenta de la Junta.

Si Susana Díaz quisiera realmente gobernar estaría utilizando esa gran empatía que, según dicen, sabe desplegar en las distancias cortas, para generar acercamientos en torno a un programa de gobierno riguroso y bien planteado; estaría forjando compromisos concretos en torno a las tareas que la Junta se comprometerá a llevar a cabo a lo largo de la legislatura: compromisos de los cuales tendrá que dar cuenta ante una cámara donde la mayoría está ahora en la oposición, no en el Gobierno.

Que la mayoría esté en la oposición y no en el Gobierno no significa que vaya a *gobernar* el Parlamento (como algunos soñaron durante el lejano periodo de la *pinza* en los años noventa), sino que la capacidad de control del Parlamento sobre el Gobierno se va a situar ahora en unas cotas como nunca se habían visto en Andalucía. Para responder a esa capacidad acrecentada de control, el Gobierno no tendrá más remedio que establecer unos compromisos precisos y rigurosos ante la Cámara; porque, si no, se encontrará con leyes rechazadas, reprobaciones generalizadas y, lo más grave, con unos presupuestos sin aprobar que le impedirán mover la maquinaria del sector público y la administración.

El advenimiento de una nueva etapa de mayorías precarias en la vida política andaluza y española significa que los compromisos de confianza política que deben gestarse entre ejecutivo y legislativo no pueden concebirse ya como simples nubes de humo, ni como un intercambio de favores o de cromos. Significa que el sistema parlamentario tendrá que desenvolverse ahora con toda su potencialidad: es decir, como un engranaje riguroso y preciso, donde el Gobierno y el Parlamento se sitúan en una posición de igualdad de armas, y donde ya no existirá el viejo rodillo

de las mayorías absolutas que apoyaban al Gobierno en cualquier momento o circunstancia.

Todo ello significa pues que ahora no hay más remedio que intentar "gobernar" de una manera auténtica y efectiva: o sea, acción de Gobierno. Porque otra cosa muy distinta sería limitarse al simple hecho de *estar* en el Ejecutivo, y de engolfarse en la tarea cosmética de las reiteradas comparecencias ante los medios, para formular cálidas y atractivas declaraciones que nos sitúen a los andaluces ante una amable realidad virtual llena de sonrisas y de simpatía: pura *gobermedia*, tras la que se esconde al final el riesgo de la no-acción.

Puede que esa sea al final la auténtica jugada que Susana Díaz espera poder ganar: lograr un intercambio de cromos a cambio del compromiso de dejarla "estar" al mando del Gobierno. O sea, un escenario donde no existiría, en rigor, un auténtico *programa* comprometido ante la Cámara, y donde no habría más remedio que dejar a los aparatos de la Junta sobrevivir en su secular y apática indolencia: sin orientaciones que seguir, sin concretas propuestas u objetivos que cumplir, sin compromisos que responder. Otra vez el paradigma de la no-acción y la decadente visión política del sur. Ante semejante riesgo, sólo podemos desear que, en efecto, Susana Díaz quiera realmente gobernar Andalucía.

IDEOLOGÍAS Y GUARRADAS

12 julio 2015

La ocurrencia que tuvieron hace tiempo algunos cándidos pensadores conservadores de predicar una cosa tan ridícula como el "ocaso de las ideologías" suscitó una respuesta que empezó a crecer como una bola de nieve. Y así frente a tal pretensión comenzó a prevalecer la contraria; es decir, la posición progresista, según la cual todo resulta ser en definitiva la expresión de una determinada ideología.

El balance de esta polémica resulta, al final, muy claro: desde entonces parece que toda actuación, todo gesto, toda imagen, estará impregnada de un inevitable (y respetable) componente ideológico. Y por lo tanto, dotada al mismo tiempo de un elemento, en el fondo, de tipo algo provocador. Así que fuera disimulos, especialmente cuando, como en la actualidad, vivimos en plena civilización de la imagen. Quien pretenda afirmar la existencia de valores universales y compartidos, situados por encima de toda dualidad ideológica, será

condenado vergonzantemente como un sospechoso de conservadurismo.

De modo que ya lo sabemos: nada de principios generales asumidos por todos, nada de valores propios de la civilización humana, nada de buena educación y hábitos de cortesía, nada de consensos o valores superiores más allá de la recurrente lógica izquierda y derecha; y, sobre todo, nada de cohibirse al servicio de las buenas costumbres. Como las bandas de monos que se enfrentaban entre árbol y árbol, así seguimos los seres humanos al cabo de milenios, atizándonos con la estaca ideológica. Ni siquiera valen ya consideraciones de higiene o de sanidad pública: hasta vacunar o no vacunar a los niños podrá constituir un acto de plena libertad ideológica, con independencia de los riesgos para la salud pública. Y así continuamos.

Una tía meando en medio de la calle: a cualquiera podría parecerle no sólo una grosería injustificable sino una auténtica guarrada (a saber el guantazo que le habría dado su madre). Pero no, ahora resulta que es una cuestión ideológica. E incluso más, una expresión no sólo de libertad política sino también de tipo “artístico”. Es algo que, a poco que se piense, resulta evidente: hasta el propio Rafael Alberti había dedicado un poema a las meadas en las calles de la ciudad de Roma. Una tía meando en mitad de la calle puede ser entonces una expresión de actitudes artísticas post-avanzadas que no sólo hay que respetar sino que, adicionalmente, hay que admirar. O sea, como una auténtica obra de arte. La de la gran artista Águeda Bañón, jefa de prensa del ayuntamiento de Barcelona.

Al tratarse de una actitud democrática post-avanzada, cabe sospechar que el contenido artístico-ideológico parece inherente a la condición femenina de la autora: o sea, que una meada de un tío no sería interpretable bajo los mismos cánones. Hay, o debe de haber, una inexorable lógica de género en el fenómeno (ya se sabe, hegemonía del patriarcado judeocristiano, falocracia occidental, etc.). Así que varones abstenerse, porque semejante libertad de expresión artística sólo parece estar en las manos de minorías o de activistas privilegiadas.

A partir de ahí, una vez asimilado -y aceptado- el fenómeno en clave progresista, cabe suponer que nadie sería capaz de negarse a una expresión colectiva de tan espectacular “*performance*”. No es nada complicado: pongamos por ejemplo una botellona donde varios miles de tías se pongan a mear en medio de la calle. Toda una auténtica apoteosis del arte colectivo, algo que ni Miguel Ángel ni Picasso pudieran haber llegado a imaginar nunca en su vida. Dado el considerable éxito que vienen teniendo las botellonas en nuestra tierra, el envite parece evidente: siguiendo ese camino, y con un poco de suerte, podríamos llegar a convertirnos en la nueva Florencia de

los Medicis del siglo XXI; o sea, un foco universal de proyección artística y centro motor de la libertad ideológica al nivel mundial. Los inconvenientes, en términos de apestanamiento urbano, serían menores comparados con las ventajas.

Todo ello porque se trata de afirmar, frente a toda evidencia, que no existen ni deben existir valores universales y compartidos, criterios y usos de buena educación, o pautas de convivencia civilizada que al final no serían ni de derechas ni de izquierdas sino inherentes a la propia condición humana.

Ese respeto a toda actitud beligerante, esa visión positiva del enfrentamiento ideológico llevado hasta su máxima expresión es, en el fondo, el mismo espejo deformado que nos devuelven cotidianamente los activistas del ISIS ¿habrá algo más “ideológico” que cortar las cabezas de los enemigos? A veces parece que la humanidad civilizada cabalga imparabile en su camino de regreso hacia los árboles.

CATALONIA IS DIFFERENT

2 agosto 2015

Así lo ha proclamado al gran líder y supremo dirigente de *Podemos*, Pablo Iglesias: “*Catalonia is different*”. Aceptar la diferencia es aceptar la excepción, y si Cataluña es diferente habrá que reconocer entonces su derecho a la autodeterminación.

La “diferencia” de Cataluña es precisamente el soporte que mueve al proyecto independentista apoyado por la poderosa burguesía catalanista con la colaboración de diversos compañeros de viaje. Es el proyecto de los ricos catalanes del norte, reacios a compartir sus recursos con los pobres “africanos” que vivimos en el sur: un proyecto que se ha engordado a base de incumplir leyes y sentencias, forzando hasta sus límites el Estado de Derecho y la Constitución.

Todos suponíamos que las fuerzas de izquierda eran, en teoría, defensoras del principio de igualdad y que, salvo despistes u ofuscaciones, apoyaban la solidaridad entre zonas ricas y pobres de España. Pero seguramente la igualdad y la solidaridad se han convertido ya en valores anticuados, propios de la vieja Constitución de 1978 de dudosos orígenes franquistas. Unos principios defendidos por la *casta*, mientras que la “*gente*” de hoy ya no se preocupa por esas zarandajas propias de antiguos burgueses afrancesados,

escasamente sensibles a las innovaciones de los nuevos tiempos. Ahora la clave está en la diferencia.

De esta manera la estrategia de la ambigüedad contribuye a reforzar las posiciones de quienes defienden la independencia de Cataluña, o de quienes apoyan que los catalanes se queden con sus propios recursos y así desaparezca cualquier solidaridad con el atrasado sur. Porque lo que Cataluña se lleve de más en esta operación, será lo que Andalucía se llevará de menos.

Y en esa ambigüedad entran ahora quienes defienden una reformulación de las reglas de juego, para que los viejos instrumentos del poder (la monarquía, la Constitución, o los principios de igualdad y solidaridad) acaben saltando por los aires y poder diseñar un nuevo modelo surgido de un proceso constituyente iniciado desde abajo.

Pero si Cataluña "*is different*", alguien debería explicarnos cómo vamos a hacer para cubrir con menos recursos las necesidades de un sur atrasado, con tasas exorbitantes de paro, con una joven generación estrangulada en la más absoluta nada y con un tejido empresarial que tras la crisis está más desarbolado que nunca. Siguiendo la estrategia de Pablo Iglesias, será cuestión de organizar un referéndum y después "ya veremos". Aunque no cabe duda de que, cuando los politólogos de *Podemos* lleguen al poder, todo será distinto: las calles cambiarán de nombre, las ceremonias religiosas serán sustituidas por eventos laicos, las chaquetas y corbatas serán desplazadas de cualquier protocolo, y los símbolos monárquicos serán sustituidos por otros republicanos y progresistas.

Y los principios de solidaridad y de igualdad podrán darse también por superados: valores obsoletos de épocas pasadas. Por eso, si Cataluña "*is different*", el triunfo histórico de la burguesía catalanista en su apuesta por la independencia tendrá que ser saludado como una muestra de democracia y de progresismo.

Uno piensa, en su humilde ignorancia, y pidiendo perdón por ello, que los valores de igualdad y de solidaridad son principios irrenunciables de toda convivencia civilizada; que los egoísmos de las clases altas y de los pueblos ricos no tienen cabida en un orden civilizado que se proclama constitucional y democrático. Que la pretensión de independencia de Cataluña es un montaje que ni los propios catalanes saben a estas alturas cómo parar, y que los pueblos pobres no debemos dejarnos caer en la ambigüedad o en la apatía dando por buenas unas pretensiones que, en el fondo, son ilegítimas y perjudiciales para el atrasado sur. Que no debemos dejarnos avasallar por los ricos del norte.

Uno piensa que las necesidades estratégicas de las fuerzas políticas no deben conducir al debilitamiento de ciertos valores que constituyen la esencia misma de la democracia. Que las instituciones *inclusivas* que permiten el desarrollo de los países se fundamentan en

los principios de igualdad y solidaridad, y en la prohibición de todo tipo de privilegios a favor de los más poderosos. Uno piensa que los imaginarios colectivos no deberían sobrepasar su dimensión meramente cultural ni derribar los grandes valores que fundamentan el orden de las democracias civilizadas: valores que son o deben ser válidos para todos, y que no debemos trocear o fragmentar.

Uno piensa todas estas tonterías, seguramente obnubilado por los calores de este sur africano y por la desesperanza de seguir creyendo en ciertos valores que en otros tiempos fueron la bandera de la izquierda.

GUERRA ENTRE CONTROLADORES

7 agosto 2015

Las agencias reguladoras independientes son un invento procedente de Norteamérica que en los últimos tiempos se han ido generalizando en los sistemas democráticos contemporáneos. Son instituciones encargadas de regular un determinado sector, ya sea de la economía, de la energía, de las comunicaciones o de otros ámbitos, sin una dependencia directa de la esfera política. Tienen también capacidad para sancionar a empresas cuando éstas actúan de forma contraria a las reglas de la competencia o a las regulaciones de cada sector.

Lo cierto es que en la práctica se han ido extendiendo y generalizando en el mundo occidental, bajo la justificación de que operan un tipo de control de carácter más o menos "neutral" (o sea, menos político), al mismo tiempo que introducen un cierto grado de especialización tecnocrática en los criterios sobre los cuales se determinan las pautas de conducta de un determinado sector.

Pero, como sucede con otros ámbitos del sector público, tienen un riesgo: el llamado riesgo de captura que se produce cuando grandes empresas o grupos de interés consiguen que sus especialistas o allegados se coloquen al frente de tales instituciones, sesgando así los criterios de control y la objetividad necesaria para el desempeño de sus funciones. A lo que se añade el riesgo alternativo de captura política, cuando los nombramientos de sus dirigentes se ajustan a los intereses del partido gobernante. De ahí que el problema de los nombramientos constituya uno de sus principales problemas. La sustitución de agencias sectoriales especializadas por otras de tipo más horizontal o de mayor amplitud,

parece una tendencia detectable al nivel comparado, tratando así de superar posibles riesgos de captura.

Pero la pregunta de si estas instituciones molestan a alguien tiene ciertamente una respuesta: parece que molestan a los jueces, que tradicionalmente mantienen el monopolio de la capacidad de control sobre la actuación de todos los sujetos de un sistema. Un monopolio que procuran defender con bastante celo sin tener en cuenta que el incremento de los mecanismos de control constituye en realidad una forma de mejorar el propio sistema democrático. Del mismo modo que -aunque apenas se diga- también parece molestar a los jueces (y a los abogados) la generalización de los mecanismos de mediación social o familiar, que apenas consiguen despegar en nuestro país pese a sus evidentes ventajas potenciales.

La multiplicación de los mecanismos de control (o de mediación) es una característica de las democracias avanzadas, que sirve precisamente para incrementar los sistemas de control, superando visiones liberales o decimonónicas basadas en la exclusividad de la instancia judicial. Si tales mecanismos de control se hubieran multiplicado adecuadamente en España, algunos de los grandes casos de corrupción que hoy nos asolan (desde los ERE a la Gürtel) no habrían llegado a producirse, porque se habrían detectado y neutralizado de forma inmediata.

Lo que resulta paradójico es que, a pesar de tratarse de un sector claramente sobrecargado, la judicatura sea reacia a trasvasar o compartir competencias de control con otras esferas institucionales. Y mucho más curiosa es la evidente discrepancia de criterios con los que se juega: así, recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) había sancionado a determinadas grandes empresas con cantidades verdaderamente elevadas y ejemplares que sin embargo, en posteriores recursos ante el Supremo, han sido sustancialmente rebajadas por los jueces. O sea, a las grandes empresas les resulta más beneficioso el control jurisdiccional que el de la agencia correspondiente.

Pero la cosa parece que va a más y se está convirtiendo ya en un auténtico enfrentamiento entre dos grandes sectores corporativos de nuestro país: reguladores por un lado y jueces por otro. El Tribunal Supremo acaba de propinar un directo al mentón de la CNMC al plantear tres cuestiones prejudiciales al Tribunal de la Unión Europea relacionadas con la propia creación de este organismo en 2013, integrando a otras diversas agencias preexistentes y afectando al mandato de sus consejeros por el cese anticipado.

Lo que por ahora parece un ajuste de cuentas entre élites corporativas de nuestro país (jueces contra reguladores) corre el riesgo de hacernos olvidar la necesidad de mejorar nuestro marco institucional para ajustarlo a los modernos sistemas de control y a sus

mecanismos de *accountability*. Y lo verdaderamente lamentable es que, en este enfrentamiento en las alturas del sistema, nadie parece echar de menos que a los ciudadanos no nos hayan dado ni una velita en este debate.

ACCION INSTANTÁNEA

Agosto 2015

Seguramente es el signo de los nuevos tiempos: la *instantaneidad* en los procesos de comunicación impuesta por la explosión de las tecnologías que nos permite visualizar, conectar o responder mediante un simple *click* desde cualquier punto del planeta. En este apasionante vértigo tecnológico, la conectividad se desencadena de forma inmediata y nos permite acceder en pantalla a todo el conocimiento humano, al alcance de nuestras manos en una décima de segundo. Es evidente que sólo cabe descubrirse ante tan espectacular desbordamiento de la creatividad tecnológica: vivir estos momentos apasionantes de nuestra historia, cuando el conocimiento se hace accesible para todos desde cualquier punto del planeta.

El problema, lógicamente, es que a través de este mecanismo de instantaneidad no pretendemos solamente informarnos o comunicarnos, sino también obtener respuestas. Porque las redes son por definición un conjunto de sistemas interactivos donde cada petición, cada demanda, cada *input* se supone que debe implicar una respuesta inmediata. Y no ya respuestas de otros, sino, sobre todo, respuestas *públicas*. O sea, respuestas de las instituciones estatales: actuaciones de las administraciones públicas en respuesta a las necesidades o demandas que formulamos los ciudadanos en un contexto democrático avanzado.

Y la primera dificultad consiste en que, de forma instantánea, las instituciones públicas sólo podrán darnos en todo caso respuestas meramente virtuales. La otra dimensión, la auténtica acción pública intervencionista, requerirá en cambio de todo un complejo de actuaciones que deben diseñarse, planificarse, implementarse y controlarse a través de un proceso largo y complejo. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que la demanda instantánea de un ambulatorio, de un instituto o de una carretera pueda ser respondida en la práctica de forma inmediata. Por más que un debate en *twitter* sobre tal asunto pueda encontrar multitud de respuestas instantáneas, la lógica de la acción pública intervencionista supone trasladarse a un plano distinto: el plano de la realidad.

Y la realidad de la acción pública en el actual contexto democrático aparece marcada, siguiendo el simultáneo incremento de la presencia social sobre la esfera pública, por un crecimiento progresivo de la complejidad: lo que implica al final una inexorable dilación en el tiempo. Y es que, cuando el número de actores con pretensiones de tener “voz” en los procesos de decisión pública tiende a multiplicarse, tales procesos de decisión serán no sólo más democráticos y legítimos sino también y al mismo tiempo más *lentos* y costosos. Imaginemos lo que sucede por ejemplo en un debate legislativo si a la natural lentitud del procedimiento parlamentario le añadimos adicionalmente una dosis creciente de presencia ciudadana mediante audiencias públicas (ya sea de expertos o de colectivos afectados): en tal caso, el plazo de aprobación de la ley se acabará prolongando adicionalmente en el tiempo.

Y no se trata solamente de una dificultad en términos de estricto proceso decisional, es decir, de llevar a cabo un programa o un proyecto determinado, sino igualmente del creciente impacto de transversalidad en cualquier actuación administrativa: porque toda decisión pública genera como mínimo una serie de impactos de tipo medioambiental, de género, o patrimonial-cultural, lo que vendrá a ralentizar adicionalmente el proceso de acción pública.

Pero la cosa no acaba aquí. Porque hay que recordar que en un Estado de Derecho toda actuación pública está sometida a mecanismos de control legal a posteriori: tanto los de carácter financiero o de auditoría pública como los propios instrumentos jurisdiccionales. Y ahora sí, cuando la instancia judicial comienza su actuación, los problemas de retraso o de dilación en el tiempo pueden llegar a alcanzar dimensiones galácticas...

Paradójicamente, justo en el momento en que la comunicación fluye de forma tan rápida e instantánea a escala planetaria, la complejidad de los procesos de acción pública tiende a incrementarse de forma paralela. La contradicción está servida: sistemas de conectividad y de comunicación ciudadana propios de las nuevas tecnologías del siglo XXI, se enfrentan a modelos de acción pública propios del siglo XX; y todo ello, bajo circuitos de control judicial propios del siglo XIX.

Al final, lo único que la esfera pública podrá ofrecernos de forma instantánea serán puras respuestas virtuales: declaraciones, posicionamientos o titulares de prensa. Y la actuación, la auténtica acción pública intervencionista, quedará desplazada hacia un indefinido futuro. Los ciudadanos no tendremos más remedio que esperar.

Sin darnos cuenta, la forma de responder a esta vieja pregunta, que tanto llegó a interesar al mismísimo Lenin y que nos sigue preocupando en tiempos preelectorales, ha ido experimentando una larga deriva, siguiendo nuestro proceso evolutivo de aprendizaje democrático.

Inicialmente se suponía que la cuestión podía tener una clave simplificada de respuesta: bastaba con depositar la confianza en algún partido. Y la propia organización política, con el auxilio de su aparato y su inspiración ideológica, se encargaría del resto, localizando las respuestas adecuadas para todos los problemas. La clave estaba pues en los partidos. Simplemente había que pensar en ciertas pautas mínimas de identificación ideológica para situarse en el eje derecha-izquierda, y punto. Cada partido, con su correspondiente programa y con su propio aparato, se encargaría de rellenar el resto.

Pero con el tiempo empezamos a descubrir que los partidos se convertían en organizaciones opacas y procelosas, donde trepas y listillos hacían su agosto. Comprobamos que se generaban dinámicas clientelares (yo te doy mi voto y tú me das algo a cambio) y, al final, ha resultado que el clientelismo generalizado acaba conduciendo a la corrupción generalizada. Comprobamos incluso que muchos de los teóricos proyectos de gobierno finalmente ni siquiera se llevaban a cabo. Empezamos a intuir que estábamos viviendo en una democracia de baja calidad, donde las ideologías y los programas eran con frecuencia simples señuelos para conseguir nuestro voto.

Entonces pensamos que la clave no estaba en los partidos, ni en los programas o las ideologías, sino sólo en las personas. Es el soporte final de la confianza que debemos prestar: el aspecto, la mirada, la gestualidad de alguien; todo lo que nos hace sentirnos representados en esa persona que refleja nuestras mejores aspiraciones de honradez, de diligencia, de seguridad y confianza.

Pero llegaron los artistas de la imagen y los productores de televisión. Los populistas que proclamaban mensajes seductivos o discursos lacrimógenos, los predicadores de la retórica brillante y emotiva, aunque vacía de contenidos. Los engañadores de cara bonita y corazón caliente, que nos embarcaban en el espejismo de su nave de confianza colectiva, sin rumbo ni destino.

Buscando salidas y con un poco de ánimo, podríamos acaso tratar de renovar la pregunta: por ejemplo, optando por elegir entre lo viejo y lo nuevo, con la ilusión de que toda democracia genera con el tiempo una dinámica de renovación que teóricamente se orienta siempre hacia un mejor funcionamiento del sistema. Aunque al final

se nos suscita la duda de si se trata de elegir entre lo malo conocido y lo que no se sabe aún por conocer. De si lo nuevo no va a acabar al final pareciéndose a lo viejo, o si las novedades son al final simples florituras cosméticas donde no hay en rigor respuestas sustancialmente innovadoras, sino simplemente más de lo mismo.

A veces uno puede acabar sintiendo la santa tentación de indignarse con lo que sucede, pero ¿dónde están los canales adecuados para encauzar esa indignación? ¿Cómo saber que no estamos cayendo de nuevo en manos de falsos predicadores del apocalipsis y de la retórica milenarista, que nos pueden llevar a un camino sin salida?

Y a veces surgen también iniciativas experimentales: por ejemplo, ensayar un sistema donde no se vote ni a partidos ni a personas, sino a políticas concretas. Sería un mecanismo para tratar de objetivar las prioridades colectivas, es decir, determinar “qué” debe hacerse y no tanto “quién” va a ser el encargado de hacerlo; pues al final, más o menos, todos lo harán de aquella manera. Pero son proyectos que aún no están madurados y que apenas comienzan a ensayarse experimentalmente.

En tamaño laberinto parece que ya no hay grandes opciones de salida, y que el intento de explorar alternativas para nuestra procelosa democracia del siglo XXI parece un camino interminable. ¿Partidos con programas e ideologías; o personas con propuestas y compromisos concretos? ¿Lo viejo o lo nuevo? ¿La justa indignación frente a la paciencia y la templanza?

La política del siglo XXI parece enfrentada a una multitud de desafíos sin salida donde, al final, lo que se comprueba es que todos aspiramos a una democracia de mayor calidad; pero en realidad, no sabemos muy bien cómo conseguirla. Demasiada responsabilidad para tratar de enfrentarla con éxito mediante un simple e inocente voto.

LA INERCIA BIPARTIDISTA

2015

Por desgracia el fenómeno es bien conocido en ciertos ámbitos científicos: una vez establecido un paradigma teórico, si la realidad no se ajusta al mismo, lo que falla es la realidad, no el paradigma.

Durante largo tiempo, al abordar el análisis nuestro sistema político, nos hemos habituado a operar sobre un esquema bipartidista. Algo hasta cierto punto inevitable si recordamos que el bipartidismo

(como han demostrado desde Duverger hasta Sartori) constituye la forma más simple para este tipo de análisis: es la expresión de un esquema binario izquierda-derecha, que reproduce visiones sencillas de la realidad (lo mismo que arriba-abajo, grande-pequeño, o dentro-fuera); categorías simplificadas que nos permiten abordar la complejidad de una forma más o menos ordenada. Además, el bipartidismo constituye la expresión mínima o básica del pluralismo político, puesto que por debajo (o sea, con un solo partido) ya dejaría de existir el pluralismo y estaríamos fuera de todo sistema democrático.

Pero cuando la dinámica social acaba tomando otros derroteros, nuestros esquemas mentales tienden a reproducir la misma cantinela, y así podremos seguir confiando en una realidad bien ordenada, es decir, ajustada a nuestros propios pre-juicios. De manera que el panorama resultante parece muy claro: *Ciudadanos* sería un satélite del PP y *Podemos* uno del PSOE. Viene a ser como si clasificáramos a los equipos de la liga de fútbol entre satélites del Real Madrid o del Barcelona.

Aunque por supuesto hay elementos de la propia dinámica política que parecen orientarse en torno a estas hipótesis: es la teoría de los llamados “partidos *cárter*”, según la cual los partidos hegemónicos (lógicamente dos) tienden a operar ciertas alianzas implícitas, de respeto o de apoyo mutuo, que afectan a ámbitos como el sistema de financiación, los nombramientos institucionales, o incluso otras esferas no visualizables. Es algo que puede suceder en España cuando ambos partidos están pillados en lo más flagrante: nada menos que la gran oleada de corrupción, que en la práctica se aparece como un espejo de doble cara donde PSOE y PP se contemplan en la misma imagen. Así puede recordarse, por ejemplo, que al final de la anterior legislatura andaluza, PSOE y PP se apresuraron a “blindar” los nombramientos del órgano de control (la Cámara de Cuentas) con sus correspondientes amiguetes, para así tener las espaldas bien cubiertas.

Que ahora aparezcan nuevas fuerzas políticas cuya línea programática esencial consiste precisamente en enfrentar una tarea de regeneración democrática, con el utópico horizonte de sacar al país del sumidero de mierda en que está sumergido, es algo que, por supuesto, rompe con estos simplificados esquemas mentales. Así que ya lo sabemos: si aplicamos el paradigma bipartidista, los partidos regeneracionistas serían simples “satélites” al servicio de la división maniquea de la realidad entre buenos y malos. Y la receta electoral es instantánea: vote usted a la marca, no a las imitaciones.

No recordamos si, cuando Joaquín Costa puso en marcha a finales del siglo XIX su gran proyecto regeneracionista español, fue acusado de ser de unos o de otros: pero es evidente que de aquel

regeneracionismo crítico nació lo mejor de nuestro país en la frontera entre dos siglos. Desde la Institución Libre de Enseñanza hasta la Generación del 98; desde los intelectuales de la República hasta la efervescencia universitaria de la época. El regeneracionismo ha sido probablemente la aventura más preciosa de nuestra historia política durante siglos.

Pero ahora, cuando la sociedad comienza a apoyar a nuevas fuerzas regeneracionistas emergentes, nos seguimos empeñando en que los viejos esquemas mentales prevalezcan sobre la propia realidad: y ni los propios políticos, ni por supuesto los periodistas, parecen dispuestos a bajarse del burro.

No se trata de sostener ahora que un esquema bipolar izquierda/derecha constituya uno más de los posibles dualismos en que podemos clasificar la realidad política (y no precisamente el más actualizado); del mismo modo que hay otros criterios clasificatorios, como puede ser la divisoria rural/urbana, el eje centralista/autonomista, y así una serie interminable. De lo que se trata es de saber si, cuando la realidad se transforma, las inercias mentales del pasado se pueden convertir en un obstáculo para la adecuada comprensión del presente. Porque si no sabemos interpretar rigurosamente el presente, nuestras respuestas ante la realidad acabarán convirtiéndose en dramáticos errores históricos: y en ese caso, nuestra propia capacidad de supervivencia colectiva como sociedad democrática se estaría poniendo en duda.

EL RUIDO PARLAMENTARIO

30 septiembre 2015

El ruido es lo que nos impide escuchar el silencio. Y el silencio, el dramático silencio, es el que ha invadido a la administración de la Junta de Andalucía tras el estallido de los graves casos de corrupción.

Que algunos altos funcionarios de la Junta hayan tenido que dar con sus huesos en el calabozo por unos papeles aparentemente mal firmados, ha generado tal escalofrío entre el personal público que ha acabado por extenderse como un auténtico tsunami por los resquicios del aparato burocrático de la Junta. Por supuesto, ya sabemos que se trata de sumarios abiertos donde aún no hay sentencia firme; ya sabemos lo que es la presunción de inocencia, del mismo modo que percibimos la sombra de la sospecha de corrupción generalizada que sobrevuela como un ave de mal agüero sobre

nuestra realidad. Pero, mientras tanto, los funcionarios se ven enfrentados individual y personalmente no sólo al oprobio de la detención y el procesamiento, o a la vergüenza de la corrupción, sino a la ruina adicional de tener que costearse abogados de prestigio para su propia defensa. O sea, la ruina. Porque, para unos profesionales del sector público que viven de sus medianos sueldos, el asunto es pura y simplemente una ruina.

¿Habrá a partir de ahora algún funcionario dispuesto a firmar cualquier papel que implique algún compromiso, una innovación o una inversión nueva o arriesgada? ¿Habrá algún interventor dispuesto a dejar pasar algún gasto más allá de la más rigurosa de las inspecciones? El gobierno de la Junta, sin el apoyo de sus principales instrumentos burocráticos, se acaba enfrentando así al abismo de la pura no-acción.

Ciertamente no se trata de ninguna novedad desde el punto de vista teórico: ya en los años sesenta del siglo pasado los americanos Bachrach y Baratz habían detectado el fenómeno de la no-acción, entendida desde una perspectiva de “*non decision making*” que limitaría al sector público a la mera reiteración de las rutinas burocráticas, pero sin poner en marcha ningún proyecto nuevo, innovador o de impacto. Incluso más recientemente entre nosotros, Bruno Dente y Joan Subirats han demostrado la dificultad que supone poner en marcha programas innovadores que vayan más allá de las rutinas establecidas (*Decisiones públicas*, Ariel 2014). El riesgo de no-acción se configura así, como la principal amenaza para el desarrollo efectivo de nuestro Estado social en la escala autonómica.

Pero por supuesto, ante esta amenaza siempre nos queda la *gobermédia*. Porque los andaluces al fin y al cabo no carecemos de un Gobierno; y siempre podremos dejarnos envolver por la cálida empatía de nuestra Presidenta que nos acompañará diariamente con sus declaraciones llenas de afecto y cariño, acompañadas de agudos comentarios y sugerencias sobre la política general. Un liderazgo tierno y aceptado, que nos ayuda en tiempos difíciles. Y por su parte, los Consejeros siempre tendrán cosas que inaugurar, o eventos ante los que comparecer para pronunciar brillantes discursos y demostrar la coherencia de sus ideas y planteamientos. O incluso pueden acudir ante los medios de comunicación para participar en amenos programas y tertulias que se acaban proyectando por la red de tuiteros. La no-acción siempre puede camuflarse como una apariencia de acción virtual que se canaliza a través del circuito mediático.

La única pieza que falta sería, evidentemente, el ruido. Y para ruido tenemos al Parlamento: basta con poner el micrófono a un volumen amplificado para oír el desorden. El desorden propio de un sistema donde el pluralismo político se ha multiplicado, pero sin

modificar sus reglas de funcionamiento, y así no consigue expresarse de forma coherente.

Y ya tenemos aquí el ruido parlamentario. Las invocaciones apocalípticas, el rasgarse las vestiduras, las críticas aceradas e implacables, las miradas de odio, la crispación y los argumentos enfrentados: todo el espectacular teatro de la política en la más feroz de sus manifestaciones. ¿De qué serviría en este escenario intentar hablar de consensos, de diálogo, de compromisos, del trascendental sentido de la representación política, de la relevancia de la Cámara en nuestro sistema institucional, o incluso de la simple cortesía parlamentaria?

El Parlamento se convierte así en el espectáculo necesario, el circo mediático donde se proyectan las tensiones, los conflictos y las frustraciones. La trampa que nosotros mismos nos construimos para no percibir lo más dramático y evidente, para no oír el silencio: el patético silencio de la Junta.

Y de este modo podemos subsistir sin perder las ilusiones: así que, como cualquier ciudadano que acude a una ensordecedora discoteca, vámonos al ruido, mucho ruido.

LEALTAD Y COERCIÓN

(Artículo 155)

1 noviembre 2015

Vienen a ser como las dos caras de la moneda: la ordenación de los sistemas territoriales se ajusta a un principio de carácter integrador, la lealtad, cuyo incumplimiento generaría un tipo de respuesta extraordinaria del Estado en forma de coerción federal. Prevalece en todo caso la Constitución y en condiciones de normalidad no hay que acudir a los instrumentos extraordinarios.

Puede recordarse sin embargo que la noción de lealtad no es una categoría aceptada generalizadamente en la doctrina. Así un autor tan prestigiado como Konrad Hesse manifiesta sus dudas: cuando hablamos de gobiernos territoriales democráticos que responden cada uno a distintos proyectos políticos, hablar de lealtad sería como negar el pluralismo político. Y en la práctica de nuestro país esta dinámica parece más que constatada: los gobiernos territoriales procuran actuar siempre a la contra de un gobierno central de color contrario; y los cambios de gobierno en Madrid suponen una reorientación automática de los respectivos gobiernos autonómicos.

Se entiende sin embargo que, frente a esta dinámica ordinaria donde cada Comunidad ejerce correctamente sus competencias, la hipótesis de la coerción tendría una dimensión extraordinaria: es decir, supone violaciones graves del sistema competencial que pueden afectar a los intereses generales y al propio funcionamiento del Estado. Así fue como la fórmula lealtad-coerción, tras las duras experiencias del periodo de entreguerras, acabó incorporándose generalizadamente a las Constituciones contemporáneas; aunque un mecanismo federal de ese tipo ya estaba previsto en la Constitución norteamericana de 1787. En España la previsión se formaliza en el artículo 155 de la Constitución, directamente inspirado en el 37 de la Ley Fundamental de Bonn.

Pero a partir de aquí todo son dudas e incertidumbres al tratarse de un mecanismo que hasta ahora no se ha utilizado. Sobre el papel, la coerción federal, en cuanto instrumento extraordinario, implica el uso de la fuerza coactiva del Estado. Como decía García Pelayo se trataría de una “acción coactiva y, si es necesario, armada de la Federación sobre los Estados para obligar al cumplimiento de la Constitución y de las leyes federales”; para Kelsen, sería un acto coercitivo de reacción del ordenamiento estatal violado. ¿Pero en qué supuestos concretos, durante qué plazo, bajo qué condiciones y dentro de qué límites?

Durante largo tiempo en España hemos vivido el sueño del optimismo constitucional: un escenario de democracia abierta donde en rigor no existen enemigos; o donde los enemigos son tolerados sin suscitar reacciones agresivas del propio Estado. En consecuencia el artículo 155 era como un simple adorno constitucional destinado a dotar de plena coherencia sistemática a nuestro sistema territorial. De aquel sueño parece que comenzamos a despertar con la última versión de la ley de partidos de 2002, donde se introdujeron ya supuestos de comportamientos políticos que pueden conducir a la ilegalización de ciertos partidos próximos al terrorismo. La “democracia militante” supone pues el uso de un instrumental beligerante contra los enemigos de la democracia.

Seguramente el paso hacia la coerción federal era algo perfectamente lógico: en realidad la hipótesis llegó a plantearse ya a principios de siglo a propósito de las maniobras del lehendakari Ibarretxe, y seguramente en la actualidad parece un recurso inevitable ante la incontrollable deriva catalanista.

Se supone en principio que los circuitos de protección constitucional que pueden movilizarse serían dos: en primer lugar el judicial en manos del Tribunal Constitucional, recientemente ajustado para mejorar su eficacia, desde donde podrá declararse la inconstitucionalidad de determinados actos y suspender su tramitación; y en segundo lugar el ejecutivo, que actuará en última

instancia contando con el visto bueno del Senado. Algo que, por supuesto, puede ser aprobado por la Diputación Permanente, pues precisamente para eso existen estos órganos cuando las cámaras están disueltas: para evitar vacíos de poder.

Las medidas a adoptar deberían establecerse mediante Decreto, con previsión de actuaciones para un plazo de tiempo determinado, implicando la posibilidad de suspender el funcionamiento de ciertos órganos de una Comunidad y el nombramiento de un gobernador con poderes extraordinarios. Teóricamente el Gobierno debería determinar si procede adicionalmente la declaración de un estado de excepción por un mes, conforme a la Ley orgánica reguladora de 1981, implicando entonces la aprobación de la diputación permanente del Congreso. Al final, ambas cámaras están presentes en la defensa de la Constitución.

LAS ELECCIONES MEDIÁTICAS

(Tras las elecciones de 20 diciembre 2015)

22 diciembre 2015

No es ninguna novedad. Que las elecciones se deciden según el grado de apoyo mediático con que cuentan los respectivos partidos, es un fenómeno suficientemente conocido y experimentado al nivel comparado.

Por supuesto, no cabe negar que los ciudadanos somos libres: es decir, nos sentimos protagonistas decisivos en el momento supremo de ejercer nuestra opción soberana ante las urnas. Y en efecto, somos tan soberanos como el consumidor que compra en unos grandes almacenes; aunque nunca lleguemos a ser conscientes de que hay ciertas fuerzas que nos “venden” determinados productos o nos impulsan en un sentido u otro. Bienaventurados en nuestra relativa ignorancia.

Las elecciones se han decidido de forma exacta según el respectivo apoyo mediático de las fuerzas protagonistas. En primer lugar el partido gobernante, por supuesto, que ha sabido actuar en clave de gobermedia contando con los principales soportes mediáticos. En segundo lugar el PSOE, apoyado en el poderoso grupo Prisa que ha vuelto a demostrar su capacidad contando con la colaboración de algunos canales autonómicos, salvando así la pervivencia precaria del “cártel” bipartidista. Han sido terceros los mediáticos de Podemos, apoyados desde la Sexta. Mientras que

Ciudadanos, huérfanos de todo soporte mediático, se han quedado en la cola, limitándose a crecer de forma lenta y consistente.

La lógica mediática ha impuesto su ley: una ley de bronce de dimensión competitiva que se apoya en la espectacularidad, la crispación y la bipolaridad; que se desencadena con toda su fuerza de atracción durante el momento seductivo de la competencia y, por eso, suele ser tan resistente para reconducirse de forma constructiva cuando llega el momento posterior de la gobernabilidad. Puede que ahora algunos candidatos se arrepientan de no haberse mordido la lengua cuando respondían a la avidez periodística, anticipando posiciones o trazando líneas rojas para después de las elecciones. Porque en estas ocasiones siempre es mejor dejar que los ciudadanos hablen primero.

La agenda que se abre tiene pues una doble dimensión: en primer lugar la gobernabilidad, y a continuación las posibles reformas legales e institucionales, donde seguramente empieza a estar madura la convicción de que con este sistema electoral ya hemos andado lo suficiente.

Pero hablar de gobernabilidad significa hablar de coaliciones: un lenguaje hasta ahora poco usado en nuestra vida política. Y entrar en coaliciones de gobierno significa abordar compromisos efectivos para participar en el ejecutivo y compartir la acción de gobierno. Un envite donde inconscientemente comenzamos operando desde el nivel más elemental, es decir, contando cuál sería la mayoría mínima necesaria para gobernar: lo que en Europa se denominan como modelos "*minimum winning*". Aunque se trata de un modelo que, curiosamente, no se ha demostrado ni tan estable ni tan eficiente como las coaliciones supramayoritarias, o también llamados modelos "*oversized*", hacia donde parecen apuntar los resultados globales en nuestro caso.

Porque si la ciudadanía no ha permitido que se formen coaliciones "mínimas" (ya sea PP-Ciudadanos, o PSOE-Podemos), eso significa que la sociedad española espera coaliciones supramayoritarias, con programas de gobierno originales e integrados, y con sinergias constructivas y plurales desarrolladas conjuntamente. Todo un desafío que nos sitúa en un entorno similar a los que se vienen sucediendo en las democracias nórdicas o los Países Bajos. Un envite de compromisos y responsabilidades compartidas a los que, hasta el presente, nuestros líderes no parecen muy acostumbrados.

Como mínimo, y por ahora, tendríamos la hipótesis de una gran coalición centrista PP-Ciudadanos-PSOE, o de una gran coalición izquierdista Ciudadanos-PSOE-Podemos. Son hipótesis seguramente demasiado frontales o directas para hacerse realidad, porque algunos querrán intentar hacer experimentos o equilibrios en

la cuerda floja contando con las minorías residuales de corte nacionalista. De donde podemos sospechar entonces un riesgo de mantenimiento de dinámicas inerciales, con un bipartidismo imperfecto apoyado desde formaciones nacionalistas periféricas: o sea, más de lo mismo. ¿Ha sido eso lo que al final han decidido los ciudadanos? ¿Puede entenderse entonces que estamos ante un auténtico “cambio” y no ante un mantenimiento precario de los mismos mimbres anteriores?

Por ahora, lo más consistente sería pedirle a todos los jugadores que se metan de lleno en la *melé* y dejen de pensar en nuevas elecciones anticipadas: porque, si no, a ver quién le explica a los ciudadanos que, con estos mimbres, no han sido capaces ni de formar gobierno.

AÑO 2016

JUEGO DE TRONOS

28 enero 2016

Hubo un tiempo remoto en que la política de los países se decidía en clave puramente personal: todo dependía de quién fuera el rey, que es quien tenía el poder absoluto. Por eso la personalidad del monarca, o del candidato a la corona, era la clave decisiva; y la cuestión se centraba al final en sus aptitudes personales, sus habilidades, capacidad, astucia, incluso su propia fortuna.

Afortunadamente aquellos tiempos remotos pasaron, como pasaron las monarquías absolutas, el “Príncipe” de Maquiavelo o las tragedias de Shakespeare. Porque en el contexto de las democracias contemporáneas la política se decide en una clave pluralista y objetivada, donde distintas fuerzas organizadas como partidos tratan de expresar las aspiraciones de la mayoría de la población y, una vez han pasado por las urnas, asumen el poder de forma legítima y pacífica. La democracia moderna no es pues exactamente un asunto de personas, aunque la personalidad de los líderes siempre sea un factor a tener en cuenta. Los proyectos de gobernabilidad se conforman partiendo de los contenidos y orientaciones de los programas de los partidos mayoritarios. Y la acción de gobierno se configura entonces como un proyecto objetivo y congruente, que no depende ya de factores subjetivos o personales más o menos aleatorios.

Pero sucede que la evolución de nuestro sistema democrático de partidos ha ido derivando siguiendo algunas pautas originales. Por una parte, el impulso mediático ha venido a reforzar el componente personalista de los liderazgos políticos. Es un fenómeno inevitable: cuando los partidos se convierten en un foco de corrupción, cuando sus programas se cargan de ambigüedades electoralistas más o menos difusas, cuando los ciudadanos nos vemos conquistados por el universo de la imagen, el electorado no tiene al final más remedio que dejarse guiar por esos elementos aparentemente más “seguros” como serían la propia personalidad o el estilo de los líderes o candidatos. La desconfianza creciente en unas organizaciones opacas y escasamente democráticas como son los partidos, reconduce el foco de atención ciudadana hacia los perfiles subjetivos de los líderes. Y la imagen, la presencia o la simpatía de los

candidatos se convierten en los factores decisivos a la hora de suscitar confianza ciudadana.

Por otro lado, los partidos se han ido dejando llevar por una creciente tensión competitiva, acentuando progresivamente sus diferencias hasta el punto de acabar proyectándolas como auténticas fronteras irreconciliables. Y un sistema pluralista de partidos que acentúa hasta el extremo sus perfiles conflictuales, puede acabar convertido en un caótico *puzzle* de facciones y banderías que ni se entienden ni se hablan ni se comprenden entre sí, perdiendo entonces toda capacidad de diálogo. El peor camino posible si se trata de forjar proyectos de gobernabilidad cuando el electorado se manifiesta dividido y ninguna opción consigue mayoría absoluta. La dinámica competitiva, tan grata en los momentos electorales, se convierte en un obstáculo insalvable cuando llega el momento de los acuerdos y el consenso, cuando se trata de buscar los puntos de encuentro y no las diferencias.

Pero todavía puede ser peor: porque sucede a veces que la tensión conflictiva se desenvuelve sordamente, incluso con mayor intensidad, en el interior de los propios partidos. Y es que, al final, el principal “enemigo” de un determinado líder resulta ser no el dirigente de otro partido sino el contrincante de su propia organización, que espera su caída en desgracia para ocupar su puesto. Desconfianzas añadidas y encadenadas que acaban degenerando en un ambiente de paranoia que bloquea toda perspectiva de diálogo transparente y constructivo.

Aunque todo ello no sería un obstáculo especialmente grave si, a la hora de formar gobierno, los partidos y sus dirigentes dispusieran de un tiempo indefinido para conectar, hablar, para ir atando cabos sueltos y resolviendo desencuentros, para sugerir consensos y concertar acercamientos. Pero sucede que la precariedad institucional de los momentos de transición de un gobierno a otro no admite plazos largos o indefinidos: y, o los dirigentes se ponen las pilas, o la sociedad tendrá que pensar en otras opciones.

Y el riesgo sería que, en esa urgente precariedad, alguien prefiera sacar a relucir sus perfiles personales y carismáticos, o su estilo de caudillaje caribeño, adornado por una fraseología propia de guion de cine. Lo que nos faltaba: ¡otra vez la lógica competitivo-seductiva! Empujados por la vorágine mediática, estamos convirtiendo el escenario de la democracia pluralista en una especie de juego de tronos.

INSTRUMENTOS DE DESBLOQUEO

17 julio 2016

La serie de fábulas que se vienen vertiendo acerca del bloqueo institucional que padece nuestro país parece interminable. De entrada, nos hemos instalado imperceptiblemente en la peligrosa filosofía de la no-acción, acompañada de su correspondiente orquestación mediática. Nuestros dirigentes se empeñan en lanzar diariamente declaraciones provocadoras y se olvidan de buscar soluciones a los problemas; salvo excepciones, reiteran mensajes descalificadores y argumentos de bloqueo en lugar de lanzar señuelos en positivo, suscitando un tipo de discurso capaz de promover el acercamiento y el consenso.

La no-acción se predica en primer lugar por el mismo Presidente en funciones: al parecer, Rajoy baraja nuevamente la equivocada estrategia de no aceptar la propuesta de investidura si no cuenta de entrada con los apoyos necesarios para la formación de gobierno. La idea de presentarse sin apoyos sería congruente en alguien que, sin tenerla, roza la mayoría absoluta; pero ante un contexto donde la amplia mayoría de los españoles no desea el gobierno de Rajoy está claro que éste no puede eludir, al menos en primera votación, mostrar su debilidad ante la cámara. Porque ante los ciudadanos no caben malabarismos políticos y los resultados electorales son conocidos por todos. En la anterior legislatura, tal responsabilidad pudo ser compartida por Pedro Sánchez, que aceptó el envite; pero esa hipótesis ya no se plantea en el contexto presente.

Mucho más grave es la filosofía de la no acción aplicada a la jefatura del Estado. Por supuesto, ya sabemos que los jefes del Estado, sean monárquicos o republicanos, están para no hacer nada. Pero para no hacer nada cuando las cosas marchan correctamente. Ahora bien, cuando se bloquea gravemente el funcionamiento de las instituciones es la hora decisiva en que no tienen más remedio que ponerse las pilas. ¿Quién no recuerda los acelerados movimientos del Presidente de la República italiana cuando hay una situación de crisis de gobernabilidad? ¿Alguien ha puesto en duda que se haya salido del marco constitucional?

Por supuesto, el jefe del Estado no tiene por qué bregar con estas tareas de forma personal y directa: pero sí puede designar con discreción a algún representante para que se encargue de forzar e impulsar los acuerdos necesarios para la formación de gobierno. La idea de que el jefe del Estado no debe nunca hacer nada es algo que no se sostiene ni siquiera en la propia historia de la democracia española: a estas alturas parece que ya se nos ha olvidado que, si esa filosofía la hubiese aplicado el rey Juan Carlos I en la tarde del 23 de febrero de 1981, en España hubiera triunfado un golpe de Estado.

Tampoco es congruente la idea de que el jefe de Estado no pueda “forzar” la maquinaria del artículo 99 de la Constitución realizando sucesivas propuestas durante un plazo de dos meses, en lugar de quedarse a la espera de la iniciativa de los grupos. Nada le impide proponer candidatos que, en apariencia, puedan incluso romper con las previsiones iniciales de los grupos políticos. Imaginemos por ejemplo que el Rey propone la formación de Gobierno a Soraya Sáenz de Santamaría: ¿no resultaría a lo mejor que, milagrosamente, al cabo de unos días se hubiese llegado al acuerdo de investidura?

La idea de que el jefe del Estado debe permanecer hierático y paralizado en momentos como estos no se corresponde con la lógica de un sistema institucional diseñado para asegurar la gobernabilidad. Porque aunque ahora todos quieran apuntarse a la oposición hay que recordar la obviedad de que, sin gobierno, no hay oposición.

Y lo que no cabe duda, es que asuntos de consenso sobre los cuales se pueda forjar un proyecto de gobierno existen a montones. Tanto para gobernar como para votar a favor sin participar en el gobierno, o como para abstenerse a favor de quien gobierne. La serie de posibilidades es numerosa y el asunto se desbloquea en una tarde de conversación.

Pero el espectáculo de una clase política pasiva e indolente esperando nuevas elecciones a la sombra del chiringuito veraniego, resulta verdaderamente un asombro y un auténtico escándalo. Lo mismo que la cantinela de venir ahora a predicar la reforma de la Constitución: lo que la Constitución exige es que los grupos políticos se pongan de acuerdo, y eso es lo que los ciudadanos debemos exigir a los dirigentes: que estén a la altura de las circunstancias. Y no venir ahora a pedir milagros constitucionales. Lo que no podemos consentir es que la galbana veraniega venga a provocar una parálisis institucional que bloquee cualquier hipótesis de gobernabilidad.

AÑO 2017

LLAMAR AL PUEBLO

(Ante el desafío independentista)

4 octubre 2017

Suele afirmarse que, en democracia, la última palabra la debe tener siempre el pueblo: es un argumento que, además de servir como soporte legitimador del sistema, suele valer también a veces como un mecanismo democrático para resolver conflictos. Cuando se habla de la disolución parlamentaria como una salida ante situaciones de crisis, en ciertos momentos o situaciones en que la política ya no ofrece alternativas, en realidad de lo que se trata es de disolver para darle la voz al pueblo.

En nuestro caso se trata de un conflicto que a estas alturas carece ya de márgenes razonables de abordamiento. Por más que algunos líderes nos bombardeen con la retórica del diálogo, la negociación o el consenso, es que ya no queda nada por negociar. El desafío independentista se presenta de un modo frontal y directo, con visos de sedición y levantamiento popular. Cualquiera que estuviese al frente del gobierno se quedaría con las mismas opciones que ahora mismo tiene Rajoy, porque ya no es cuestión de personas sino de Estado. De auténtico golpe de Estado.

Jurídicamente no caben opciones desde que el Tribunal Constitucional, la máxima instancia, lo ha dejado bien claro: en la Constitución Española no cabe un referéndum secesionista puesto que no existe una soberanía fragmentada. Las tramposas fulleries puestas en marcha por el gobierno catalán en su propio Parlamento eliminan cualquier resto de formalismo o de respeto a las reglas. Operar desde pautas exquisitas propias de un Estado de Derecho, o hacer recaer la respuesta a la crisis sobre los jueces, es algo que seguramente carece ya de sentido cuando lo que está en juego es la ocupación violenta de la calle.

Pero cuando el derecho deja de servir, una segunda opción alternativa consiste en acudir a los soportes que están debajo del propio derecho, es decir, a las claves de legitimidad que, en su caso, apoyan determinadas posiciones. Y en el contexto presente, el valor que se percibe en Cataluña expresa las consecuencias de una revuelta fiscal de los ricos del norte, autoalimentada con un virus nacionalista que acaba derivando en pautas o estilos de comportamiento propios del nazismo. Los españoles comprobamos ahora cuál es la verdadera catadura que escondía la serpiente que hemos estado amamantando durante años: puro egoísmo colectivo

montado sobre una serie de mentiras, desde que España nos roba hasta que Cataluña es una “víctima” de un poder madrileño de naturaleza franquista. Egoísmo, insolidaridad, xenofobia. Esos son los valores que se perciben. Los valores que han venido comprobando y percibiendo en sus carnes tantos emigrantes del sur a los que con frecuencia hemos olvidado, inmersos en un sistema de adoctrinamiento de base lingüística donde los niños son las primeras víctimas, privados del derecho al uso de la lengua materna.

Por eso, cuando todo falla, en democracia se propone a veces la necesidad o la conveniencia de acudir directamente al pueblo. En este momento, se trata de una opción que cuenta al menos con dos posibilidades de desarrollo.

Por una parte, convocar un referéndum, un referéndum legal se entiende, donde todos los españoles manifestemos si apoyamos o no la independencia de Cataluña. Es una forma de evidenciar lo que durante mucho tiempo hemos dado por supuesto, ya que las cosas parecen tan confusas. O, al menos, de saber exactamente cuál es el tamaño del cáncer que padecemos. Si ya no hay alternativas, que el pueblo se exprese. Si los catalanes protestan de que, en realidad, lo que quieren es democracia, démosles una buena dosis de democracia: la opinión de todo el pueblo. Es el momento de poner todas las cartas sobre la mesa.

La segunda posibilidad la ha formulado Albert Rivera: consiste en abrir el bloqueo político e institucional existente hacia unas elecciones en Cataluña, utilizando para ello la vía indirecta del artículo 155 de la Constitución. Es cierto que las visiones tradicionales del artículo 155 se sitúan más bien en ámbitos de actuación propios del poder ejecutivo, o relacionados con el control de competencias autonómicas. También es una competencia autonómica, ciertamente, la facultad de disolver y convocar elecciones. La propuesta de Rivera tiene al menos el valor de lo que supone apostar por la democracia, es decir, por darle la palabra al pueblo en un momento de impasse decisivo que carece ya de opciones a las que agarrarse.

La lógica del llamamiento al pueblo constituye la mejor de las respuestas, la respuesta desde la democracia.

AÑO 2019

EL “ESPÍRITU” DE LA TRANSICIÓN

(Tras la muerte de Pérez-Llorca)

2019

Suele entenderse, en el discurso más moderno y progresista, que hablar del “espíritu” en asuntos de política constituye una suerte de regresión más o menos arcaica y conservadora. Una forma torpe y vana de invocar valores inconcretos del pasado, de manejar argumentos vagos perfectamente polvorientos y desfasados. Paradójicamente, sucede aquí en España a la inversa de cómo se percibe el asunto en otros países o democracias históricamente más consolidadas, donde los elementos inmateriales y puramente valorativos se consideran como el bien máspreciado, en términos de pertenencia y de integración colectiva.

Renunciar a entender y valorar el “espíritu” de una Constitución supone pues situarse en un plano histórico limitado o de cortos vuelos, es decir, en un entorno inmediato de simples sumas y restas, de cálculos egoístas y racionales, entendidos desde una visión de tipo coste/beneficio; donde, al final, el antes y el después se pueden acabar reelaborando artificiosamente al servicio de intereses coyunturales y concretos.

Frente al riesgo de un manoseo reiterado de la historia, el espíritu de una Constitución trata de reflejar en cambio, algo distinto: una especie de momento fundacional donde, a modo del mítico “contrato social” del que hablaban los clásicos, los seres humanos nos ubicamos en una dimensión trascendente y atemporal, expresando un compromiso irreversible de convivencia pacífica que se proyecta de forma indefinida hacia el futuro. Invocar el espíritu de una Constitución significa algo así como sobrevolar por encima de la historia y de las coyunturas, para tratar de asentar unos valores perennes de libre y pacífica convivencia. Unos valores universales destinados a sobrevivir más allá del tiempo.

Se trata de una especie de aprendizaje colectivo bastante elemental al que seguramente los españoles, cuando acabamos de celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución, deberíamos prestar mayor atención. Sobre todo cuando los testigos directos de ese momento fundacional están ya desapareciendo. La muerte de Pérez-Llorca constituye una buena ocasión para reactualizar esta dimensión “espiritual”, tan preciosa en toda Constitución, que debe

proyectarse más allá de la pura circunstancia personal de quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad directa de redactar el texto articulado. Empeñarnos ahora en detectar si durante ese proceso constituyente se encajaron mejor o peor ciertas piezas del engranaje institucional, si unos perdieron o ganaron, si hubo más sumas que restas o a la inversa, constituye seguramente una tarea excesiva que acaso convendría dejar en manos de historiadores o de especialistas.

Como ciudadanos, lo que no deberíamos es olvidar el “espíritu” de aquel momento fundacional, cuando muchos tuvieron que apretar los dientes en aras de una nueva etapa histórica que se estaba inaugurando. Y no olvidemos que, seguramente, quienes más tuvieron que apretar los dientes fueron los propios comunistas, tradicionales e históricos “enemigos” de la patria. Aquel sacrificio monumental que muchos hicieron, desde distintas perspectivas políticas o ideológicas, no puede valorarse ahora siguiendo el enfoque de un reduccionismo egoísta, o de cálculos de tipo coste/beneficio. Por el contrario, el sentido de ese momento constituyente que solemos expresar tras la noción del “espíritu” de la transición, constituye un hito trascendente que se proyecta más allá de la historia, para tratar de reflejar una voluntad de superación del guerracivilismo por siempre jamás. Porque éste es el más auténtico y genuino significado de toda Constitución: dejar atrás para siempre todo atisbo de guerra civil, sin que ello signifique renunciar a la existencia de conflictos y tensiones, de diferencias sociales o ideológicas, sino simplemente que todas esas tensiones tendrán un marco de encauzamiento que debe impedir la degeneración hacia una guerra civil.

Se trata de una dimensión inmaterial o espiritual que, paradójicamente, debería ser más intensa en aquellos países donde, como en España, hemos vivido una auténtica guerra civil. Porque nuestra necesidad de aprendizaje colectivo seguramente es más urgente que la de otros países donde no se han visto enfrentados a un conflicto interno de tal naturaleza. Desde esta perspectiva, remitirse a una dimensión “espiritual” significa algo así como tratar de colocarse por encima de la historia. Y al cabalgar por encima de la historia, estaríamos reforzando día a día la vigencia de aquel espíritu de conciliación colectiva al que pretendimos atribuir un carácter irreversible y de dimensión intemporal. Que nunca más resuciten los fantasmas de la guerra civil.

Y que el recuerdo de quienes participaron directamente en aquellos momentos de transición constituyente, nos sirva precisamente para hacer más intensa la dimensión constructiva e integradora de aquel “espíritu” de la transición que nunca debería desaparecer de nuestra memoria colectiva. Que la memoria de quienes ahora se marchan nos sirva para poder invocar al mismo

tiempo la dimensión espiritual de lo que, al final, resultó ser lo más precioso de su obra: un espíritu de reconciliación y convivencia al que llamamos normalmente como “espíritu” de la transición.

¿VACACIONES?

19 julio 2019

No está escrito en ningún sitio que el procedimiento de investidura, seguramente el más importante de la vida parlamentaria, deba interrumpirse “por vacaciones”. Es más, debería ser más bien al contrario: que las vacaciones son las que deberían esperar a que se constituya el gobierno, permitiendo así la urgente normalización de la vida institucional del país.

La apatía y la desidia con la que estamos encarando uno de los hitos fundamentales de nuestra vida pública no tienen parangón. Habitados ya a una perenne provisionalidad, que en este caso viene desde la propia moción de censura del año pasado, parecemos a punto de descubrir la más elemental evidencia: que se vive mejor sin gobierno. O que esto del gobierno viene a ser, en el fondo, una cuestión secundaria; total, para el diálogo de sordos que vienen manteniendo, qué más da, mejor nos vamos de vacaciones; porque si valoramos lo que están haciendo -que es no hacer nada- acaso estaríamos mejor en la playa o el chiringuito.

Seguramente ya no recordamos los riesgos que las vacaciones parlamentarias suscitaban sobre las precarias democracias liberales del siglo XIX, dejando las manos libres al monarca y su gobierno. Y seguramente tampoco queremos ser conscientes del grado de desgaste que esta actitud colectiva provoca hoy sobre la legitimación de nuestras instituciones democráticas, alimentando la sensación de que, al final, un gobierno no sirve apenas para nada; o incluso que, en definitiva, gobernar no consiste más que en aparecer de vez en cuando en los medios para decir algunas cosas bonitas.

No sabemos si se trata de una elemental confusión conceptual, en el sentido de que estamos equiparando el Gobierno con un simple servicio administrativo que, como suele ser habitual, “cierra por vacaciones”, o si es más bien un nuevo triunfo de nuestra imborrable memoria histórica; porque después de la memoria de la guerra civil debemos andar ya por la era del franquismo. Y ya se sabe, para la “sociología” del franquismo (que tan brillantemente sabe reinterpretar nuestro PSOE) eso del gobierno era una cosa secundaria y prescindible. Lo importante era, como se decía en aquellos remotos

tiempos, que había una lucecita que brillaba por las noches en una ventana del Pardo, sirviendo de amparo a todos los españoles. Y como hoy esa lucecita la tenemos ya todos y cada uno de nosotros en nuestros móviles, para qué necesitamos más.

En nuestro escenario colectivo, parece que nos basta con ver aparecer de vez en cuando a nuestros líderes en los medios para así entrever la cotidiana representación simbólica del Gobierno. Que tal Gobierno exista o no realmente, que cuente o no con el apoyo parlamentario necesario para poder aprobar anualmente la ley de presupuestos o para atender a los compromisos legislativos que tenemos con Bruselas, todo eso son cuestiones secundarias y prescindibles. Nuestro brillante Pedro Sánchez cumple sobradamente con esas funciones al “aparecerse” de vez en cuando en la pantalla saludando a los grandes líderes mundiales o diciendo hermosos monólogos: y con eso, ya no necesitamos nada más.

Con este panorama no deberíamos extrañarnos si luego nos vienen grandes sabios o politólogos extranjeros a hablarnos de la “fatiga” democrática o de la amenaza difusa de los populismos con sus falsas soluciones. El efecto de deslegitimación democrática que estamos viviendo no puede ser más impactante, porque detrás del fracaso anunciado de la investidura lo que sobrevuela al final sería la misma intrascendencia de nuestro voto; o sea, la banalidad de las elecciones como soporte esencial de nuestro sistema institucional; y en consecuencia el carácter prescindible de la propia democracia como forma civilizada de gobierno.

No son riesgos de debiéramos ignorar dilatando el acuerdo de investidura bajo la burda excusa de que ellos, nuestros políticos, también “necesitan” vacaciones. Todo lo contrario: acaso deberíamos tener el poder colectivo de encerrarlos en una sala y prohibirles la salida hasta que hayan llegado a un acuerdo, como se hace con el cónclave papal en la capilla Sixtina. ¿Vacaciones? Sólo para los que han aprobado sus exámenes en junio: el resto, a trabajar durante el verano.

ACLAMACIÓN

10 julio 2019

Esta era la categoría que usaba Carl Schmitt, el famoso constitucionalista filonazi, para justificar la evolución “espontánea” de una democracia parlamentaria hacia un sistema caudillista. Una categoría, la *acclamatio*, que tenía el mismo sentido histórico que el nombramiento de los emperadores romanos por sus legiones: una

especie de catarsis “democrática” que elimina de un plumazo todos los inconvenientes del parlamentarismo, con sus conciliábulos, pactos, vetos, negociaciones, acuerdos y demás zarandajas, para atribuir directamente todo el poder a su auténtico destinatario.

La simplicidad del argumento es evidente: sobre todo a la vista del prestigio creciente que viene adquiriendo el sistema presidencial entre nosotros. La cuestión es, si ha habido diversos candidatos, entonces el que ha ganado las elecciones ¿para qué necesita de ese ceremonial parlamentario desplegado en multitud de conversaciones y acuerdos multipolares que deben desembocar en la investidura, si acaso bastaría mejor con su simple aclamación?

Y es que no cabe duda de que toda investidura supone en efecto una complejidad procedimental añadida. Cualquier lector con sentido común que lea el artículo 99 de la Constitución española, deducirá que el periodo que transcurre desde las elecciones hasta la formación del gobierno debe ser el más intenso y acelerado de toda la vida política en una legislatura. Cuando las reuniones, las propuestas, los programas, las valoraciones entre candidatos, deben desplegarse en un sinfín de mesas de negociación. Cuando las maquinarias de los partidos echan humo ante la urgencia de encontrar la solución mayoritaria; cuando hay que negociar y renegociar a varias bandas; cuando hace falta en su máxima expresión aquella “*finezza*” que reclamaba el viejo democristiano italiano Andreotti para la gestión de la política democrática.

Sin embargo en España venimos ensayando desde hace tiempo una alternativa mucho más simplificada: basta con que cada líder exprese su posición ante los medios, y todo está hecho. En lugar de la negociación bastan las tomas de postura. En lugar de las propuestas y contrapropuestas, de las negociaciones, programas y cabildeos, será suficiente con la pura imagen de los líderes. Sobre todo cuando -como sucede en España- uno de esos líderes es el presidente en funciones: no tiene más que acudir aquí o allá bajo el palio de la Presidencia del gobierno, para ofrecer su imagen virtual ante todos los ciudadanos. Y en lugar de negociar, bastará con esperar y ver. Una simple *acclamatio*.

De esta forma el paradigma de la no-acción cabalga de nuevo nada menos que en el momento álgido de la vida parlamentaria, reafirmando el perverso postulado de que lo mejor que puede hacer un político es no hacer nada. Primero le hemos atado las manos al Jefe del Estado: y es que ya se sabe, de un jefe de estado monárquico es mejor no fiarse demasiado, y tampoco está bien que el Rey empiece ahora a equivocarse presentando candidatos distintos y sucesivos a la presidencia. Tampoco le hemos pedido al presidente o presidenta del Congreso que sea quien se encargue de mover los hilos del proceso, impulsando acercamientos o acuerdos, a la manera

del famoso “*formateur*” belga. El momento más álgido e intenso de la vida parlamentaria se ha convertido en una suerte de ausencia vacacional, donde los líderes políticos ni están ni se les espera; salvo para comparecer de vez en cuando en los medios. Y ahora hasta el mismísimo CIS nos pregunta a los ciudadanos si no sería mejor eliminar todas estas complejas zarandajas constitucionales de la dichosa investidura para acudir a una simplificada *aclamatio*, como la que defendía un personaje tan siniestro y brillante como Carl Schmitt.

Decían los estudiantes de mayo del 68 que debajo de los adoquines de París se encontraba la arena de la playa. Ahora sabemos más bien que debajo de los adoquines de la democracia no está la playa, sino la larga sombra del autoritarismo populista que se asoma a los mismos pies de nuestra democracia parlamentaria.

LO VIEJO Y LO NUEVO

24 septiembre 2019

Sucede, cuando las cosas no funcionan, que nos ponemos a buscar a los responsables o a los chivos expiatorios correspondientes. Pero como vivimos tiempos de elusión de responsabilidades, algunos, para no atribuirle a nadie la culpa del fracaso en la formación de gobierno, se plantean ahora la reforma de la Constitución: lo que equivale a buscar una especie de varita mágica para que alguien, sin la mayoría suficiente, pueda gobernar. Ignorando que gobernar no significa simplemente “estar” en el gobierno sino contar, como mínimo, con las mayorías anuales necesarias para aprobar los correspondientes presupuestos; además de compartir un proyecto de gobierno. Lo que requiere de los acuerdos específicos correspondientes, dando lugar a gobiernos de coalición. Es la lección que hace apenas unas semanas nos acaban de dar los italianos: cómo superar una crisis de gobernabilidad negociando a puerta cerrada y fuera de los focos, dejando de lado las posturas mediáticas.

Otros prefieren apostar por la añoranza del pasado, la era de aquel viejo bipartidismo que permitía una aparente y segura gobernabilidad, y frente al cual parece que la nueva eclosión del pluralismo conduce al caos y la ingobernabilidad. Sucede que la memoria humana es a veces un poco flaca: volver al viejo bipartidismo supone volver a la dinámica de la corrupción tolerada, al control partidista sobre las instituciones independientes, a la politización del sistema, a una sociedad adormecida y narcotizada, con colectivos y asociaciones colonizadas a base de subvenciones; o sea, el

clientelismo, la apatía y el desencanto. Lo que identificamos como crisis de representación. Aquello que comenzamos a superar con dificultades hace apenas unos años, pese a que los viejos dinosaurios se resistan a morir.

Afirmar que el nuevo pluralismo que ha emergido en España constituye una deriva negativa o patológica supone ignorar nada menos que al gran Giovanni Sartori, considerado el gran teórico de partidos contemporáneo: su modelo de “pluralismo polarizado” es precisamente el que ha emergido en nuestro país de forma libre y espontánea, con cinco partidos, uno al centro, dos a derecha e izquierda, y otros dos a la extrema derecha y extrema izquierda. Nada anómalo, salvo la presencia de minorías territoriales que, en rigor, si aplicáramos una barrera electoral del cinco por ciento al nivel nacional, como hacen en Alemania, desaparecerían del mapa.

No es pues la Constitución ni el sistema de partidos lo que provoca el bloqueo sino la pura ignorancia y el egoísmo de algunos líderes: como el falso sueño en el que parece embarcado Pedro Sánchez de que vivimos en una especie de sistema presidencial, donde basta con “ganar” las elecciones para pretender gobernar, aunque esa victoria no asegure la gobernabilidad necesaria ni para la investidura ni para cuatro años de legislatura. Porque en un sistema parlamentario la formación de gobierno no es ni debe ser responsabilidad de los votantes sino de las fuerzas representativas, a las que se les exige diálogo y negociación; como han hecho en Italia. Pero el juego peligroso de repetir las elecciones nos puede conducir finalmente a escenarios de bloqueo, como el que acabamos de ver en Israel. O a una deriva como la que experimentó hace un siglo la República de Weimar, preludiando la llegada de Hitler.

¿Qué van a hacer nuestros flamantes líderes ante el supuesto probable de que los resultados sean sustancialmente similares a los anteriores? Porque pensar en grandes vuelcos electorales es como soñar con fantasías: tras cinco años votando casi continuamente, las posiciones ideológicas de los españoles están bien asentadas y, salvo el incremento en la abstención, no hay perspectivas de cambio sustancial.

Nuestro sistema político se mueve entre la agonía del dinosaurio, o sea, del viejo bipartidismo que nos condujo a un estancamiento progresivo, y las novatadas de los advenedizos, que apenas saben adecuarse a la lógica pluralista. Pues ni Pablo Iglesias debería pedir más de lo que puede, ni Albert Rivera debería empeñarse en cerrar, desde antes de la campaña, sus futuros proyectos de acuerdo: porque en política primero hay que oír lo que dicen las urnas y después actuar con cintura y responsabilidad.

Entre la añoranza de lo viejo y la vorágine de lo nuevo, parece que a muchos españoles sólo les queda la salida de la abstención y

el pasotismo. O sea, nuevamente la crisis de legitimación cabalgando gracias a la torpeza de nuestros líderes.

AÑO 2020

EL EFECTO REINA ROJA

23 febrero 2020

Tras el gran éxito editorial de Acemoglu y Robinson en su libro “El pasillo estrecho” del pasado año 2019 (ed. Deusto), el concepto de la Reina Roja, tomado de *Alicia en el País de las Maravillas*, parece tener un nuevo e interesante despliegue: sería una forma de describir las interacciones entre Sociedad y Estado entendidas como clave histórica del desarrollo democrático de los países.

Se supone que Alicia y la Reina Roja corren, pero permaneciendo en el mismo sitio: en paralelo, el incremento de la capacidad de poder del Estado debe ir acompañada de un incremento igual de la presencia activa de la Sociedad sobre la esfera pública, manteniéndose así dentro de ese “pasillo estrecho” que marca las características de las democracias consolidadas. La interacción recíproca será la que condicione el equilibrio dinámico donde se encuentran históricamente los países democráticos que, en cierta manera, al moverse se mantendrían en el mismo sitio. Sin correr el riesgo de degradación democrática que puede conducir al posible apogeo del despótico Leviatán-Estado.

Aunque el concepto se ha aplicado a distintos ámbitos, como la evolución de las especies, la carrera armamentística u otras (dando lugar así a distintas categorías de “reinas rojas” como fluctuante, escalada, de suma cero, etc.) es una lástima que, como historiadores de la economía, Acemoglu y Robinson no le presten demasiada atención al entramado constitucional, que constituye precisamente la clave de esa interacción constructiva entre Sociedad y Estado, de donde surgiría el equilibrio dinámico del llamado “efecto reina roja”.

En efecto, no cabe duda en primer lugar de que los riesgos de degradación populista, similares a los que se desencadenaron en la Alemania de Weimar hace casi un siglo, amenazan hoy a las democracias occidentales, con el riesgo implícito de romper el equilibrio que marcaría el efecto reina roja. Sólo que nos empeñamos en ver al principal factor de amenaza, el populismo, como un elemento extraño y siniestro, que se nos ha aparecido misteriosamente venido desde fuera y sin saber cómo; igual que se encontró el señor Samsa convertido una mañana en un horrible insecto, según la metamorfosis de Kafka. No queremos entender que, en realidad, las raíces del populismo hace mucho tiempo que prendieron en nuestro entorno

democrático, contaminando a todas las fuerzas políticas que tratan de operar con éxito en el contexto de la *gobermmedia* contemporánea. ¿Alguien conoce a algún partido político que no formule diagnósticos simplificados y algo falseados de la realidad, o que no presente propuestas fáciles y sencillas para resolverlos? ¿A algún líder que no mienta de forma más o menos descarada? ¿A algún político que no piense en otra cosa que no sea en incrementar su poder a toda costa?

Si no comprendemos hasta qué punto están extendidas las raíces del populismo, seguramente no sabremos cómo y cuándo debemos reforzar nuestros impulsos de presencia activa y de control social sobre las instituciones públicas para evitar el desencadenamiento de la dinámica que conduce hacia un Leviatán despótico o desencadenado.

Pero también hay otros efectos curiosos de reina roja, como la dinámica en bucle, que parece afectar especialmente a nuestro proceso territorial. Un bucle sería la dinámica que impulsa a ciertas Comunidades empeñadas en reforzar su posición de liderazgo en esa carrera interminable que desde hace tiempo denominamos como “proceso autonómico”. Tal proceso se ha caracterizado fundamentalmente por su dinámica incremental: es decir, las Comunidades Autónomas “quieren” siempre más competencias. Cuando a estas alturas ya están agotadas las previsiones competenciales de los artículos 148 y 149 de la Constitución, está claro que sólo queda pedir la luna y las estrellas: en nuestro caso, las competencias de la Seguridad Social, lo que durante el siglo XX ha sido precisamente la columna vertebral del Estado Social. Por si no bastaba con el privilegio fiscal de las haciendas forales en País Vasco y Navarra, arrancado a sangre y fuego por el terrorismo etarra durante la transición, ya tenemos nuevos elementos para autoalimentar el efecto en bucle de los nacionalismos del norte a la búsqueda de nuevos privilegios.

Mientras tanto, apenas le prestamos atención a la otra y auténtica cara problemática del sistema territorial: los déficits de coordinación y la ruptura de los postulados de solidaridad e igualdad que deben asegurar el equilibrio del sistema. Cuando unos corren, los demás debemos también correr para mantener el equilibrio: sólo que debemos saber en qué dirección corremos, si hacia un sistema de desigualdades y de privilegios o hacia un modelo que sea congruente con las exigencias constitucionales de igualdad.

MATAR AL ENFERMO

(En pleno desencadenamiento de la pandemia)

26 mayo 2020

Ya sabemos que los problemas de salud son muy delicados. Lo conocen muy bien los médicos que trabajan en casos extremos, y también quienes hemos tenido que padecer en nuestra familia alguna enfermedad grave: determinados tratamientos muy eficaces, pero también muy agresivos, no se pueden aplicar a ciertos enfermos que están ya muy débiles, simplemente porque se mueren. Por eso, cuando hablamos de salud, no debemos plantear la cuestión términos absolutos, sino dependiendo del estado general del enfermo.

Si pasamos de la salud individual a la colectiva, los problemas son algo parecidos: el estado general del enfermo presenta matices originales que determinan su capacidad social de resistencia. ¿Podemos resistir todavía los españoles, o sucederá que, cuando hayamos superado la pandemia, ya estaremos colectivamente muertos?

La fortaleza colectiva de un país se suele medir en primer lugar en clave puramente económica: si para cuando vencamos la pandemia resulta que nuestro tejido empresarial se ha extinguido, entonces es que ya estaremos muertos. Ponderar adecuadamente entre distintos valores, en estos momentos difíciles, se supone que es una tarea propia de buenos gobernantes; algo de lo que seguramente carecemos.

Se ha dicho que, si prescindimos del estado de alarma, entonces no tendremos instrumentos adecuados para enfrentarnos a la crisis: no es cierto. Si la Ley orgánica de estados excepcionales se hizo hace ya mucho tiempo (demasiado, en 1981), las posteriores leyes sanitarias establecieron previsiones de actuación para supuestos extremos como epidemias o similares; a lo que se une una variada normativa sobre seguridad o sobre protección civil, etc. La diferencia sería que tales actuaciones serían asumidas ahora por las Comunidades Autónomas y requerirían de control judicial. En todo lo cual no se acaba de percibir ningún inconveniente: la sanidad de nuestro país hace ya décadas que se viene gestionando territorialmente. Lo que no es sino un simple reflejo de lo que somos a estas alturas, un Estado autonómico consolidado. El cuanto al control judicial, es algo que seguramente debe molestar mucho a la Rusia de Putin, o a países como China o Turquía, pero no a un Estado de Derecho bien consolidado como es el nuestro. Antes al contrario, decisiones controladas judicialmente tienen siempre un mayor grado de garantías.

No hay más que ver la forma como se ha gestionado desde el ministerio de sanidad para comprender que, contrariamente a lo que

suele ser la percepción ordinaria, la centralización de competencias no ha producido buenos resultados, sino que más bien al contrario, ha traído caos, imprevisiones y desorganización. Y nadie puede dudar que, a estas alturas, nuestras autoridades autonómicas estén suficientemente preparadas para enfrentarse a la pandemia. Y también para determinar en qué grado y en qué sectores hay a mantener vivo el tejido empresarial para que no se extinga del todo.

Pero también hay otro tipo de salud que a veces se nos olvida: la salud democrática. Porque éste es un sector donde no se ha tenido en cuenta la opinión de los “expertos”, es decir, de los constitucionalistas. Y es que cualquier estado excepcional supone una prueba de sufrimiento para los derechos y libertades públicas, que constituyen nuestro bien colectivo más valioso. Por eso, la opinión general que cabe deducir del pensamiento constitucionalista es que los estados excepcionales deben durar en todo caso *lo mínimo posible*.

Porque en plena vorágine de la pandemia, resulta que la restricción de libertades no está afectando sólo a la movilidad sino igualmente a otros ámbitos como las libertades de opinión y de expresión, o al ambiente general en el que se desenvuelve nuestra vida colectiva. Y al mismo tiempo, la coyuntura está permitiendo al gobierno desbordar las previsiones de actuación sanitaria para introducir, en el río revuelto, determinadas medidas que van mucho más allá de lo que sería una gestión transitoria de la crisis.

Cuando desde el constitucionalismo se afirma que los estados excepcionales deben durar siempre lo mínimo posible, no se está jugando con frivolidades o bagatelas, sino con ciertos bienes o valores que constituyen la misma esencia de nuestra salud colectiva: es decir, esos valores democráticos que, por mucho que sea al desastre, debemos conservar a toda costa.

Por eso en estos momentos difíciles sólo cabe intentar una estrategia de gestión de la crisis para luchar contra la pandemia sin que al mismo tiempo se nos muera el enfermo, ni se nos muera la economía, ni se nos muera nuestra propia democracia.

SÍNDROME DE ESTOCOLMO

(Viviendo el confinamiento)

20 junio 2020

Lo que en su momento fue una gran novedad para la psicología social, el llamado “síndrome de Estocolmo”, parece haberse instalado

ya como una categoría normalizada en el contexto histórico del presente. Y así nos sucede a los españoles que después de la horrible vorágine del miedo colectivo que hemos pasado, sólo se nos suscita un gran agradecimiento hacia los benévolos gobernantes que nos han sacado del abismo. Sobre todo, cuando éstos se nos aparecen casi diariamente en nuestras televisiones, a modo del famoso “Aló Presidente” latinoamericano: gobernantes llenos de meliflua bondad y rebosantes de amor hacia todos.

Porque en estos momentos de emoción colectiva sólo nos queda la satisfacción de haber sobrevivido (de momento). Y en esta perturbada perspectiva ¿quién se acuerda ya de los detalles? Aunque no sepamos ni la cifra exacta de fallecidos por la pandemia, ni cuántos ancianos quedaron olvidados en sus residencias, ni cuántos seguimos todavía contaminados por el virus ¿qué importancia tienen ahora algunos detalles secundarios ya pasados: como que nuestros gobernantes se dejaran estafar por alguna empresa pirata china, o que la descoordinación haya sido monumental, o que se haya ido improvisando en todo y dando palos de ciego? Es el momento de mirar hacia el futuro con ilusión y esperanza, con la satisfacción de saber que hemos sobrevivido.

De entrada, debemos sentirnos satisfechos porque en todo momento hemos sido dirigidos por los “expertos”: lástima que nuestros gobernantes no sepan todavía que los expertos, para ser tales y auténticamente expertos, deben ser “independientes”, o sea, que no pueden ser altos funcionarios de la administración. Porque en ese caso no sabemos si actúan como expertos independientes o más bien como obedientes burócratas al servicio de los gobernantes.

También debemos sentirnos satisfechos porque hemos dado un gran paso adelante al descubrir una nueva categoría, la de la *co-gobernanza*. Sin duda un hallazgo destinado a configurar nuestro futuro. Lástima que nuestros gobernantes no sepan todavía que la noción de gobernanza expresa, por sí misma, la idea de una coordinación entre diversas esferas institucionales. Así que hablar de co-gobernanza viene a ser lo mismo que si hablamos de co-coordinación, o sea, una absoluta redundancia.

Con razón decían algunos viejos gobernantes que a lo único que había que tenerle miedo es al miedo mismo. Porque precisamente el miedo es el principal instrumento de corrosión de la democracia, aquello que nos autojustifica colectivamente a la hora de renunciar a nuestra libertad para alcanzar a cambio algo de seguridad: el instrumento que en el pasado han utilizado cuantos dictadores en el mundo han sido, para doblegar a sus pueblos.

Qué lejanos ya aquellos gloriosos tiempos en que el gran Voltaire se permitía protestar en nombre de la Razón y de la dignidad humana contra las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, a

propósito del terremoto de Lisboa. Hoy las fuerzas de la naturaleza parecen sustituidas por hipótesis conspiranoicas, como que el virus procede de Bill Gates, Georges Soros, o de algún laboratorio chino. Y menos mal que no se ha aparecido por medio Aznar, que si no... ¿Realmente hay alguien que apueste coherentemente por protestar frente a esta angustiosa realidad?

Pensar que la razón o la dignidad humana puedan tener hoy algún sentido, que la libertad o la democracia sean valores que debemos defender activamente, seguramente es algo perfectamente secundario y prescindible a estas alturas. Lo importante es que hay una ventanita iluminada en la Moncloa desde donde nuestro bendito Presidente vela día y noche por nosotros. ¿Qué sentido tiene en este contexto andarse con zarandajas democráticas, como las críticas de la oposición parlamentaria, las alternativas de gobierno, o incluso las investigaciones judiciales? En realidad sólo nos cabe ya unir nuestros corazones y aplaudir todos al unísono para agradecer a nuestras autoridades por los favores recibidos. Este parece ser el auténtico bagaje de partida con el que encaramos el incierto escenario de la llamada “nueva normalidad”.

El síndrome de Estocolmo cabalga desenfrenado a lomos del coronavirus, como cabalgó hace siglos el caballo de Atila, arrasando cuanto encontraba a su paso. Y a ver si ahora somos capaces de organizarnos colectivamente para hacerle frente, o si más bien preferimos dejarlo todo en manos de nuestros gobernantes. Total, con todo lo que hemos pasado, a cualquiera le puede parecer que ya hemos sufrido bastante.

LA PELIGROSA REFORMA DEL CGPJ

16 octubre 2020

El artículo 122 de la Constitución Española constituye uno de los hitos por los que discurre el itinerario problemático de nuestro Estado de Derecho: regula el *Consejo General del Poder Judicial*, considerado como uno de los instrumentos de control que garantizan la autonomía del poder judicial, evitando así las interferencias procedentes de la esfera política y asegurando la nuclear independencia de los jueces en el desarrollo de sus funciones. Toda una garantía del principio de división de poderes que, desde Montesquieu, preside la configuración de los modernos Estados de Derecho.

Por desgracia la Constitución hizo sólo un diseño parcial de tal órgano, dejando en manos del legislador la capacidad para concretar mediante Ley Orgánica algunos aspectos referidos a la representación del sector profesional de jueces y magistrados que, con doce miembros, deben constituir la mayoría, frente a los ocho miembros restantes de profesionales y especialistas en Derecho, cuyo nombramiento sí quedó bien perfilado en el texto constitucional.

La larga historia problemática del Consejo es una muestra de la dificultad que tenemos los españoles para entender lo que significan los órganos independientes, es decir, los que no surgen ni deben surgir de la coyuntural mayoría política existente en cada momento. Cuando la Constitución “quiere” un órgano independiente establece una mayoría especialmente cualificada en su mecanismo de nombramiento: se trata pues de “órganos supramayoritarios”, que deben estar por encima del oscilante mundo de la política. Y por eso su periodo de mandato no coincide con el cuatrienal del periodo normal de las legislaturas sino, en el caso del Consejo, de cinco años.

Por desgracia a lo largo de décadas tal exigencia de consenso ha sido más o menos trampeada mediante el informal “sistema de cuotas”, establecido en beneficio de nuestros partidos mayoritarios, PP y PSOE, de donde deben surgir los consensos necesarios para alcanzar una mayoría de tres quintos. En todo caso, y a la vista de lo que se nos viene encima, cabría decir que el viejo sistema de cuotas respetaba mínimamente el espíritu de la Constitución, aunque no siempre asegurara la mejor calidad de los designados: y es que en el sistema de cuotas con mayoría de tres quintos se supone que cada partido se coloca una venda a la hora de valorar a los candidatos que propone el otro partido; al final se comprometen a votar a todos en bloque. Y aunque los candidatos profesionales vinieran “filtrados” desde 2001 por una elección interna, al final la decisión correspondía a las cámaras, o sea, a la esfera política; pero por mayoría cualificada.

Determinar cuáles son los límites que establece la Constitución al legislador orgánico a la hora de modificar la regulación de la elección de los doce miembros profesionales parece relativamente sencillo: si para los juristas o abogados se exige una mayoría cualificada de tres quintos, es lógico deducir que para la elección de jueces y magistrados se exigiría una mayoría similar. Es decir, una configuración congruente para un órgano independiente que debe tener carácter supramayoritario.

Oscilar desde el sistema de altas mayorías cualificadas previsto en la Constitución hasta un sistema de pura mayoría política supondría el definitivo triunfo de la política partidista sobre la esfera judicial, rompiendo así con los delicados equilibrios que, desde Montesquieu se supone que deben configurar el principio de división de poderes. Lo cual nos situaría ante el riesgo de hacer oscilar el

edificio de nuestro Estado de Derecho hacia la peligrosa categoría de las democracias bolivarianas, tras las que se esconde todo un proceloso precipicio que conduce, al final, hacia los llamados estados fallidos: o sea, al desastre histórico.

Desde ciertas esferas internacionales, y también desde la Unión Europea, se han intentado establecer cláusulas de garantía para evitar estos procesos degradatorios: son las llamadas cláusulas *rule of law* o Estado de Derecho. Un instrumento civilizatorio que trata de frenar el riesgo de degradación democrática presente en muchos países, especialmente cuando nos enfrentamos a la mayor pandemia que vieron los siglos.

Aprovechar el río revuelto de la pandemia para barrenar los cimientos de nuestro Estado de Derecho no parece una estrategia democrática consistente: a nuestros gobernantes deberíamos pedirles que, primero, nos saquen a todos de esta angustiada supervivencia, cuajada de errores y sinsabores, para después plantearse serenamente cómo poner en marcha de forma adecuada los mecanismos constitucionales que permitan la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una estrategia tras la que sólo existe una exigencia alcanzable: el consenso que exige nuestra Constitución.

QUINCE DIAS

(Segundo estado de alarma)

29 octubre 2020

Es lo que dura el estado de alarma. Salvo que sea prorrogado por el Congreso por otros quince. Y así sucesivamente. Es la interacción entre ejecutivo y legislativo la que asegura el mantenimiento en el tiempo de esta situación transitoria, donde las esferas públicas pueden asumir unos poderes excepcionales suspendiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al final, es el viejo principio de división de poderes de Montesquieu el que asegura ese delicado equilibrio que permite el mantenimiento de nuestro Estado de Derecho.

El estado de alarma, declarado inicialmente por el gobierno, puede durar como máximo quince días porque así lo establece el artículo 6º, dos, de la vigente Ley Orgánica de 1981. Más allá de esos quince días, será decisión del Congreso prorrogarlo en su caso por otros quince días, así como determinar posibles contenidos o límites. ¿Por qué quince días? Porque, si el primer periodo son quince días, y

a continuación debe intervenir el Congreso, ¿cuánto deberán durar los siguientes periodos? No hay que hacer un ejercicio excesivamente complejo para adivinarlo.

El esquema es sencillo y relativamente claro: cada quince días el Congreso (el Pleno del Congreso) debe valorar el estado de la situación y determinar en su caso la posible prórroga del estado de alarma a solicitud del ejecutivo. Cualquier otro tipo de vías que traten de forzar esta pauta constituye un atentado contra nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho.

Si las prórrogas quincenales se han de continuar durante un tiempo más o menos indefinido, a lo largo de varios meses, es una decisión que dependerá de la voluntad de nuestros representantes legítimos, los diputados. Establecer una única prórroga a lo largo de seis meses sin un control quincenal del Congreso constituye un claro atentado a nuestro Estado de Derecho que altera el equilibrio de poderes establecido en la Constitución, para hacer derivar nuestro sistema hacia un proceloso estilo de visos autoritarios. Porque el Congreso es el que decide, no el que “es informado” en una Comisión donde vaya a comparecer el inefable ministro Illa.

Sí, ya sabemos que a veces los sistemas políticos pueden caer en una deriva autoritaria, que los gobernantes saben muy bien cómo presentar señuelos seductivos y argumentos populistas cargados de atractivo ciudadano. Sobre todo, cuando sobreviene la enorme incertidumbre y la angustia colectiva en la que estamos inmersos. Cabría imaginar así el formidable panorama: o sea, seis meses con un escenario mediático a base de nuestro “Aló Presidente” derramando cotidianamente su meliflua bondad por todos los rincones de nuestro pobre país, tan gravemente herido por el impacto de la pandemia. Seis meses de nuestro amable doctor “experto” televisivo, especialmente experto en ocultar datos incómodos. Seis meses de vicepresidente Iglesias aprovechando el río revuelto de la pandemia para meter bajo cuerda sus propuestas programáticas. Seis meses sin poder levantar voz, sin capacidad ciudadana, sin movilidad colectiva. Sin nada.

Para engañarnos más adecuadamente en ese señuelo seductivo, el gobierno ha tenido la gran idea de ofrecer un menú “a la carta” donde las Comunidades Autónomas podrán disfrutar del atractivo placebo de ajustar las limitaciones con mayor o menor intensidad, establecer detalles complementarios, precisar aspectos concretos; o sea, imaginar que gobiernan. Seis meses bajo el falso escenario de que son todos los poderes del Estado los que están colaborando en la lucha contra la pandemia. Y todo ello porque no hemos sido capaces durante este tiempo de aprobar una adecuada *ley-covid* que atendiera de forma permanente a todos los requerimientos de la pandemia.

Ya lo experimentamos en la anterior etapa de alarma: el gobierno, por sí sólo, no tiene suficiente capacidad para frenar la pandemia. Tampoco las Comunidades Autónomas. Pero avanzar hacia un escenario de gobernanza donde todos puedan colaborar constructivamente en la lucha contra la pandemia no significa que debamos renunciar a las garantías establecidas para proteger nuestro Estado de Derecho, entre las cuales se encuentra la limitación en el tiempo de los estados excepcionales.

Desde esta perspectiva alguien podría preguntarse ¿pero qué hay de malo en que todos nos pongamos nuestras propias cadenas, en que renunciemos a nuestra libertad? A veces la lógica del Estado de Derecho, del imperio de la ley, establece barreras que están más allá de nuestra propia voluntad ciudadana: barreras para proteger nuestra libertad colectiva.

Pero si aceptamos que nuestro país es un Estado de Derecho plenamente consolidado ¿qué problema supone que quincenalmente el Congreso ratifique la prórroga del estado de alarma?

LA DERIVA AUTORITARIA

21 noviembre 2020

Lo que era previsible que sucediera, ya está sucediendo: los estados de alarma prolongados en el tiempo colocan a los poderes del Estado en una situación de precariedad, donde la centralidad exorbitante del ejecutivo y la débil situación de los derechos fundamentales configuran un escenario adecuado para la deriva autoritaria del sistema.

Es el gran riesgo de las democracias sometidas a situaciones de estrés duradero: la falsa creencia que algunos tenemos de que la democracia es un logro adquirido de una vez para siempre y de que, en consecuencia, todo sistema democrático se sostiene a sí mismo a lo largo del tiempo sin necesidad de una mayor precaución o vigilancia, se está demostrando en la práctica histórica como un error dramático. Al contrario, las democracias son mecanismos complejos y delicados que requieren de toda nuestra atención y cuidado para mantenerse incólumes a lo largo del tiempo.

Y no se trata ya de una simple cuestión de estilos: claro que, si el estilo bronco y gamberro de los Trump, Berlusconi o Maduro se contagia a algunos de nuestros dirigentes, ya tenemos una tendencia populista de la que no puede esperarse nada bueno. La panorámica de unas periódicas sesiones de "Aló Presidente" donde un supremo

dirigente lleno de candor melifluido nos derrame sus bondades y nos pondere sus benéficas actuaciones ante una situación dramática, constituye una deriva negativa del sistema donde desaparecen alguna de las esencias de la democracia: la capacidad de crítica y la formulación de alternativas.

Mucho más peligroso es que se haya llegado a crear, mediante Orden Ministerial (!), una Comisión de la verdad que filtrará y censurará todas nuestras opiniones si no se ajustan a la “verdad” estimada por el gobierno. Una iniciativa que nos aproxima a escenarios orwellianos, donde nuestra buena memoria democrática sabe olfatear el terreno más próximo, el de la dictadura franquista. En un instante hemos dejado atrás de un plumazo aquellos gloriosos tiempos en que las libertades de información y expresión se consideraban como una garantía institucional del sistema, condición necesaria para la existencia de una auténtica democracia. ¿Acaso es que ya no lo somos?

Mayor complicación suscita el protagonismo de algunos de los sujetos que conforman la nueva mayoría: como la propuesta de rebajar el presupuesto del Tribunal Constitucional, el supremo órgano de control, que ya sabemos hacia donde se orienta. O como la pretensión de bregar a favor de sus respectivos corralitos privilegiados: porque las iniciativas de ERC o de Bildu tienen un claro sabor territorial, bien reconocible por todos los españoles. Se trata de conquistar beneficios colectivos a favor de los pueblos más ricos del norte de España, mientras a los bereberes del sur se nos dejan las migajas que queden de Bruselas. Que semejantes iniciativas se disfracen además como proyectos “de la izquierda” constituye una sorpresa adicional: ¿desde cuándo la izquierda actúa a favor de los ricos y poderosos y deja en la cuneta a los pobres y marginados? ¿Desde cuándo han dejado de apoyar la igualdad y la solidaridad entre pueblos y territorios?

Lo verdaderamente peligroso es la pasividad emergente de una sociedad narcotizada ante el riesgo de pandemia. Pero que todos estemos confinados ante la amenaza de nuestra salud colectiva no significa que no sepamos entender e interpretar las maniobras del ejecutivo: un gobierno débil y asentado sobre soportes precarios, que juega con la incapacidad legal de las Comunidades Autónomas para tratar de reforzar su propia posición, y que maneja los recursos mediáticos en modo populista, inundándonos de tuits y de *fake news*, hasta el punto de hacernos creer que no ha habido pactos con los etarras donde ha habido pactos con los etarras; o que se trata de luchar contra las *fake news* cuando es el ejecutivo el principal creador y propagador de *fake news*; o que no se está menospreciando a la oposición cuando sólo falta pisarles el cuello.

Decían los estudiantes de mayo del 68 que debajo de los adoquines de París se encontraba la arena de la playa. Medio siglo después, ya sabemos que en realidad bajo los adoquines de nuestras ciudades no está la arena de la playa, sino la larga sombra del autoritarismo populista que se asoma a los mismos pies de nuestra democracia.

Cuando nos enfrentamos a tiempos de amenaza para nuestro Estado de Derecho, sólo el reforzamiento de los instrumentos del parlamentarismo democrático, sólo la reivindicación de nuestras libertades y la defensa de nuestro propio sistema de garantías nos permitirá sobrevivir a las consecuencias de la gran pandemia.

LUCECITAS

21 diciembre 2020

Esta parece ser la más brillante aportación de la actual clase gobernante en España: y ahí está la famosa iniciativa de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, para hacer de su ciudad un foco espectacular de luces de colores cuyo resplandor, según dicen, se puede divisar desde lo alto de los rascacielos de Nueva York, al otro lado del Atlántico. El alcalde Abel Caballero se ha colocado así en la avanzadilla de la vanguardia mundial, y su ejemplo es hoy conocido y admirado en todos los rincones del planeta.

Seguramente es el signo de los tiempos, porque al final esto sería lo único que les queda por hacer a nuestros gobernantes: llenarnos el entorno de luces de colores para que así la triste realidad quede ocultada y camuflada, como algo imperceptible o inexistente. Por supuesto, hay que reconocer que se trata de una iniciativa destinada a tener futuro: porque las próximas generaciones, o sea, los que ahora son niños, recordarán para siempre esta apabullante y luminotécnica muestra de liderazgo y buen gobierno. Y de este modo nuestros gobernantes conquistarán cifras crecientes de popularidad en nuestro país, a base de lucecitas de colores.

Hay que recordar que Abel Caballero no es ningún advenedizo: al contrario, es alguien que forma parte desde hace tiempo del núcleo más característico del PSOE español. Forjado en la generación inmediatamente anterior, cuando el felipismo y el guerrismo; pero capaz al mismo tiempo de renovar su liderazgo cada cuatro años con el firme apoyo de su electorado. Todo un ejemplo de gobernante solvente y actualizado, con el suficiente fuelle para cabalgar en los

nuevos y “juveniles” entornos, para superar acechos y emboscadas, y para acabar dejando la huella imborrable de su brillante acción de gobierno en forma de innumerables lucecitas de colores.

Es también alguien que pudo contemplar desde primera línea cómo el PSOE de Zapatero perdía el norte durante la primera década de este siglo, al decidir aliarse con las derechas nacionalistas. Recordemos que durante esa misma época en Italia, ante una tesitura similar, la izquierda decidió apostar por la igualdad y la solidaridad territorial frente a las pretensiones de la derecha de introducir un regionalismo asimétrico con el apoyo de Berlusconi y de la Liga Norte; lo que se resolvió en el referéndum de julio de 2006.

El cambio de orientación en España, al servicio de las ambiciones de poder de Zapatero, demuestra en qué modo un partido puede perder la coherencia de su ideología y su línea política, renunciando a los valores que son propios de la izquierda. Lo que se dice perder la brújula. O sea, cuando se empezó a joder España. Y si los gobernantes pierden el norte, sólo quedan las lucecitas. Y la memoria histórica. Y así, con tanta explosión de colores, los españoles sólo necesitamos que el gobierno nos reparta gratuitamente las vacunas para entrar en un horizonte de felicidad colectiva.

El ejemplo no es ni frívolo ni circunstancial. Desde hace tiempo la acción de gobierno se configura como una simple cuestión de luces de colores: menos mal que Donald Trump no se dio cuenta a tiempo. La estrategia con que pretenden operar nuestros gobernantes constituye un proyecto virtual destinado a desplazar de nuestro entorno todo tipo de desgracias, para remontar hacia un nivel más elevado y lleno de felicidad. Y si nuestra percepción de la realidad está cargada de lucecitas, no habrá lugar para percibir el lado oscuro de las cosas y nuestros espíritus se elevarán, limpios y agradecidos, hacia un plano de bienestar colectivo.

Las lucecitas son el más precioso instrumento de gobierno para nuestra actual sociedad, inmersa en el apogeo de lo audiovisual y en la apoteosis de la gobermedia, a través de la cual nuestros gobernantes derraman sus proyectos de felicidad sobre el entorno. Un cambio que comenzó hace ya más de medio siglo, en los tiempos de Guy Debord, el autor de “La sociedad del espectáculo” e impulsor de un movimiento llamado “situacionismo”, hoy casi ignorado o desconocido: desde el momento en que el valor de las cosas no se determina ya por el valor-trabajo acumulado, como decía la venerable teoría de Carlos Marx, sino por su mero envoltorio, la frontera entre la realidad y la apariencia comienza a diluirse de forma progresiva. Y así vamos avanzando, rodeados de lucecitas de colores, mientras se van debilitando nuestras instituciones.

El éxito de Abel Caballero es la confirmación del nuevo estilo de gobierno, que nos sitúa en la definitiva pista de despegue para el siglo XXI.

AÑO 2021

EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO

(Artículo no publicado)

El Parlamento andaluz ha decidido reformar su Reglamento. A uno le cabe la duda razonable de esperar que pueda tratarse, por fin, de “la” reforma general esperada por todos; o si nuevamente se trata de ponerle parches puntuales, dejando el marco preestablecido sin modificaciones sustanciales.

Si consideramos la importancia del Reglamento parlamentario como norma encargada de servir de cauce a la expresión del pluralismo político y sus exigencias deliberativas, sólo cabe ilusionarse pensando que, por fin, sus señorías hayan decidido abordar la modificación de unas reglas de juego obsoletas, que se gestaron y diseñaron en los tiempos pasados de predominio del cuasibipartidismo. O sea, si se trata de una vez por todas de superar un modelo que dejó de existir a partir de 2015 y abrir la página a la nueva realidad del pluralismo político; o más bien si seguimos en la filosofía del “ir tirando” poniéndole parches y remiendos a los viejos ropajes parlamentarios.

Pensemos que en algunos casos el mantenimiento de las viejas inercias está rozando ya las fronteras del auténtico escándalo: recordemos por ejemplo que en el vigente Reglamento una cuestión tan decisiva como la investidura del Presidente del gobierno se sigue regulando por las viejas pautas del Estatuto de 1981 (!): sí, han leído bien, de 1981. O sea, que a la altura del año 2021 el Estatuto de 2007 no ha llegado todavía al Reglamento del Parlamento andaluz.

No sabemos exactamente cuáles son las causas de este desfase, que empieza ya a rozar el ridículo: si es que las viejas fuerzas dominantes se resisten a prescindir de lo que fue su instrumento de funcionamiento ordinario, o si es que las nuevas fuerzas, todavía minoritarias, no saben todavía cómo organizar el complejo rompecabezas en que se ha convertido la política andaluza.

Pero lo que de verdad sorprende es que, puestos a reformar, sus señorías se enfrenten a la tarea desde la inercial perspectiva de “qué hay de lo mío”, o sea, adopten una posición de autismo institucional para mirarse su propio ombligo, considerando la cámara como si fuera su corralito donde se opera desde la perspectiva de una

especie de autoregulación en la cual los ciudadanos somos al final unos convidados de piedra.

Porque esto es lo que se desprende de la última iniciativa puesta en marcha para reforzar la posición hegemónica de los Grupos. Una iniciativa donde nuestros representantes han sacado a pasear a uno de los más inefables fantasmas que merodean desde hace años por la política española: el *pacto antitransfuguismo*. Un acuerdo entre partidos para tratar de condicionar el modo como se debe castigar a quienes no cumplen con los mandatos de sus órganos dirigentes; un pacto que se cumple cuando se cumple y, cuando no, no pasa nada. Los acuerdos antitransfuguismo prohibieron hace años que los partidos se “prestaran” votos para constituirse como Grupos, y no hay más que ver cómo se mueven las fichas a comienzos de cada legislatura para comprobar cómo van las cosas. Que semejante instrumento, en la práctica una especie de pacto entre truhanes, se pretenda usar ahora como si fuera una auténtica fuente del derecho, es algo que roza ya lo surrealista.

Sí, ya sabemos (lo han desempolvado algunos periodistas) que detrás de esto hay una cuestión de dinero. Pero no es sólo cuestión de dinero sino de algo más trascendente: se trata de quienes son los auténticos dueños de la representación. O sea, de quiénes y bajo qué parámetros van a asumir la tarea decisiva de gestionar el sentido de nuestro voto colectivo.

Durante largo tiempo se ha venido sosteniendo la idea de que los auténticos soberanos son los partidos, o sus equivalentes parlamentarios, los Grupos; con lo cual el papel del diputado individual resulta intrascendente. Y aún mucho más intrascendente el papel de la sociedad, a la que teóricamente representan. La jurisprudencia constitucional se ha venido resistiendo a esta hipótesis, considerando que en un sistema donde se prohíbe el mandato imperativo los diputados asumen una representación general, como establece el artículo 101 del Estatuto de 2007. En consecuencia, ni pueden ser revocados ni pueden ser limitados hasta convertirse en simples títeres al servicio de los órganos dirigentes de sus respectivos partidos. Los tráfugas no siempre resultan ser unos malvados *trolls* que buscan desestabilizar el sistema, sino representantes que aspiran a moverse con un cierto grado de libertad.

Apelar a los pactos antitransfuguismo como si fuesen una auténtica fuente del derecho constituye una muestra indirecta del bajo nivel de calidad de nuestro ordenamiento parlamentario. Y otra vez a dar por aparcada la necesaria reforma general del Reglamento.

EL GOLPE INVISIBLE

30 marzo 2021

Tan invisible que, cuando nos acercamos ya a los seis meses, ni nos hemos dado cuenta. Es natural: cuando la emergencia afecta a la propia supervivencia colectiva, las cuestiones sofisticadas de tipo constitucional, se convierten en perfectamente secundarias.

La prórroga de seis meses del estado de alarma ha sido un atentado contra la Constitución: el harakiri del Congreso del pasado mes de octubre constituía una decisión ilegítima. Para entenderlo, pensemos la cuestión en un contexto distinto ¿Qué sucede si, en el momento de la investidura, el Congreso decide sobre la duración que va a tener la misma? O sea, si en vez de un mandato de cuatro años, se decide que sea por doce o por veinte. ¿Entenderemos que se trata de un golpe contra la Constitución? El Congreso no puede decidir la duración del estado de alarma porque ya lo ha decidido la Constitución: quince días, prorrogables quincenalmente de forma indefinida.

Sin embargo, paradójicamente ninguna fuerza política de la oposición ha levantado la voz ¿Por qué? Obviamente porque el *bypass* institucional, eliminando al Congreso de su obligado trámite de renovación quincenal, beneficia indirectamente a los partidos políticos al darles un nuevo protagonismo en el circuito de la gobernanza territorial, desde donde se decide ahora sobre la pandemia. Porque los gobiernos autonómicos están en manos de diferentes partidos que ahora se ven mejor representados en el órgano sectorial, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La lógica de las relaciones mayoría/oposición se proyecta entonces sobre el escenario disperso de la gobernanza territorial (bautizada por el Presidente con el curioso nombre de “cogobernanza”), donde todos los partidos tienen una presencia y un poder relevante. Y así las decisiones finales las adoptan los respectivos gobiernos de las Comunidades mientras que los ciudadanos, permanentemente confinados, haremos mejor en guardar silencio.

Las ventajas para el gobierno central son evidentes: después de ensayar un sistema hipercentralizado en la primavera de 2020, con sus riesgos de imputación y desgaste, el gobierno central descubre ahora que, en el nuevo escenario, ya no va a ser políticamente “responsable” de las consecuencias de la pandemia. La siniestra dinámica de la no-acción se ha hecho presente incluso en momentos tan excepcionales como los que vivimos. La responsabilidad por los

fallos en la lucha contra la pandemia se imputará ahora sobre los gobiernos autonómicos, para diluirse al nivel general en el correspondiente Consejo Interterritorial.

En este contexto, las deficiencias arrastradas desde hace décadas en nuestro sistema de gobernanza territorial, la existencia de diferencias excesivas en las restricciones que cada Comunidad decida libremente establecer, el déficit de actuación en áreas que superen la estrictamente territorial, todos esos inconvenientes se convierten en cuestiones secundarias e irrelevantes porque los partidos han incrementado por fin su poder y su capacidad de decidir.

Y porque, mientras tanto, el gobierno central se ha liberado, como Poncio Pilatos, de sus responsabilidades directas y ya puede lavarse las manos. Y ahora, en lugar de lidiar con el negro presente, en lugar de saturarnos con agotadoras sesiones de “Aló Presidente”, en lugar de computar cadáveres y estrellarse contra las diversas oleadas, se puede dedicar a la más noble de las tareas: la de construir el futuro. Un futuro idílico y salvador donde, con la ayuda del maná que va a venir de Bruselas, nos sumergimos en la utopía verde y digital, la innovación y las biotecnologías. Un futuro donde el presente no es más que un lejano recuerdo porque, una vez todos vacunados, ya hemos entrado virtualmente en el escenario de la *Next Generation*. Innovación, sostenibilidad, energías limpias, respuestas al cambio climático, ultramodernización. He aquí el auténtico milagro: la pandemia nos ha traído el futuro, donde ya todos tendremos nuevas tecnologías, nuevo desarrollo sostenible, nuevo modelo de sociedad, nueva cultura, ¡todo nuevo!

Venir a estas alturas con el cuento de un golpe contra la Constitución no pasa de ser una pura zarandaja. Porque seguro que dentro de poco alguno de nuestros dirigentes hasta nos sorprenderá con el hallazgo de un proyecto de nueva Constitución.

Así hemos descubierto, sin darnos cuenta, un modo mucho más brillante y llevadero de enfrentarnos ante la dura realidad: en lugar de engolfarnos con virus y muertos, con crisis y desempleo, con angustias y desesperación, mejor transportarnos hacia los dulces sueños de un utópico futuro que nos llegará desde el cielo de Bruselas. Y de este modo, todos vacunados, estaremos avanzando hacia la utopía digital y sostenible. Del golpe contra la Constitución, ya sólo quedará el tenue recuerdo de su invisibilidad.

Aunque hemos dado por supuesto que, en plena pandemia, nuestros gobernantes trabajaban sin descanso para sacarnos de la emergencia, al final resulta que las cosas no son exactamente así. Cuando nos acercamos al final de la larga pesadilla de seis meses de estado de alarma, donde el grueso de la actuación ha recaído sobre las Comunidades Autónomas, ahora resulta que el ejecutivo central no ha sido capaz de prever un marco legal adecuado para sustituir a la vieja y desfasada Ley Orgánica de 1981. Lo que simplícidamente se ha dado en denominar como Plan B.

Cualquiera podrá decir que, claro, en plena pandemia, ante la vorágine de urgencias médicas y las subsiguientes emergencias sociales, no es momento de ponerse a elaborar leyes, siempre necesitadas de un contexto de serenidad y reflexión y requiriendo largos plazos de tiempo por delante. Y sin embargo resulta que, mientras tanto, el ejecutivo ha batido el pasado año el récord de decretos-leyes llegando a casi cuarenta. Se supone que tales decretos-leyes son elaborados por prestigiosos equipos de juristas que, a las órdenes del ejecutivo, se han movilizad con entusiasmo para establecer todo tipo de previsiones normativas y regulativas afectando al contexto de la crisis. Y a veces hasta en relación con cosas que no tenían nada que ver con la crisis. O sea, no cabe duda de que la potencialidad normativa del ejecutivo y la capacidad reflexiva de sus expertos juristas se ha mostrado en toda su plenitud.

¿Cómo es posible que durante casi un año tan prestigiosos equipos de juristas no hayan sido capaces de elaborar un proyecto de ley-Covid para tramitar de forma urgente ante las Cortes?

Es cierto que existen otras alternativas: precarias alternativas deducidas a partir de la legislación sanitaria, cuajadas de inseguridades e incertidumbres. ¿No será acaso que, en realidad, el gobierno ha estado cruzado de brazos, o entretenido con campañas electorales y otras bagatelas? O más bien lo que sucede es que el gobierno se mantiene en su conocido estado de autismo institucional, demostrando que solamente tiene capacidad para dialogar consigo mismo, y por eso prefiere al final la vía fácil del Decreto-Ley en lugar de buscar una normalización legislativa a través de una adecuada Ley Orgánica. Porque no olvidemos que, mientras tanto, se han aprobado numerosas leyes: no ya los Decretos-leyes reconvertidos en leyes, sino hasta incluso alguna Ley Orgánica como la de eutanasia. O sea, a estas alturas los españoles debemos tener claro que el sistema funciona, y de que nuestro parlamento también funciona con toda la celeridad que se necesite. No carecemos de capacidad normativa ni de un entramado institucional adecuado para ponerla en marcha.

¿Por qué engolfarse entonces en la rutina de los interminables decretos-leyes, en lugar de normalizar nuestro marco regulativo, de conformidad con la Constitución y con el sistema de fuentes, aprobando una ley orgánica con capacidad para limitar derechos fundamentales en el contexto de la pandemia? Cuando en un sistema democrático de tipo parlamentario el ejecutivo renuncia ejercitar a su capacidad de diálogo con el legislativo, algo extraño y peligroso está comenzando a suceder: porque es evidente que no nos podemos mutar de un día para otro en un sistema presidencial, donde es más acusada la separación entre poderes y donde el diálogo ejecutivo-legislativo no es un elemento consustancial del sistema. Y si la dinámica interactiva entre legislativo y ejecutivo deja de funcionar, la propia lógica de nuestro sistema parlamentaria se estaría viniendo abajo.

Pensemos que simplemente ordenando y sistematizando el entramado regulativo de la numerosa serie de Decretos-leyes aprobados, cualquier jurista acreditado podría pergeñar en un par de tardes un borrador de Ley Orgánica para tramitar por vía de urgencia ante el legislativo. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Acaso el ejecutivo espera obtener ventajas en un estado de confusión regulativa, haciéndole sudar tinta china a las Comunidades Autónomas? ¿Acaso hemos pensado que la vieja Ley Orgánica de estados de alarma del año 1981 era una institución eterna y permanente, en lugar de ser, como cualquier ley, modificable por otra ley posterior?

Si no percibimos que nuestro sistema institucional es un instrumento flexible al servicio de las necesidades cambiantes de la sociedad, si nos mantenemos en la arcaica y nefasta concepción de que las instituciones son como emanaciones divinas destinadas a permanecer a lo largo de los siglos, nuestra capacidad de respuesta general a las emergencias que nos trae la historia se estará viniendo abajo. Y en ese contexto, dejar sólo al gobierno engolfado en su interminable serie de decretos-leyes es una de las vías más seguras para avanzar en la degradación de nuestro sistema democrático.

JUGAR CON FUEGO

26 abril 2021

Por más que lo tenemos repetido en los libros de historia, al final siempre acabamos tropezando en la misma piedra: la reiteración de convocatorias electorales repetidas e inopinadas en contextos de crisis y de fuerte polarización del electorado, sólo pueden acabar

generando resultados negativos, como sucedió en la Alemania de los años 30.

Ya lo hemos experimentado en Cataluña en una convocatoria electoral forzada e injustificada, ¿con qué resultados? Evidentemente con un bloqueo político que se tratará de salvar con una previsible repetición electoral donde de nuevo se repetirán los mismos resultados, y así indefinidamente. Jugando con fuego.

Y ahora nos viene una Díaz Ayuso en Madrid, algo sobrecargada de asesores, con una convocatoria inopinada e injustificada cuyo resultado previsible sólo puede ser sustituir al socio Ciudadanos por un nuevo socio Vox. La espectacular y rápida maniobra de corto plazo no ha sido capaz de plantearse una mínima perspectiva estratégica de medio o largo plazo: ¿se ha preguntado Pablo Casado cuál va a ser el volumen de presiones que tendrá que soportar desde Bruselas cuando reciba la llamada de Angela Merckel pidiéndole explicaciones por una alianza con la extrema derecha?

Jugar con la gobernabilidad como si fuera un inocente juguete de efectos inocuos tiene estos inconvenientes. La gobernabilidad, como demostró el desaparecido maestro Giovanni Sartori, se mueve constructivamente por el centro y se pierde por los extremos, ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha. Después del reciente tirón de orejas de Bruselas al Ministro de Justicia a propósito de la original idea podemita de modificar el sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial, lo debemos tener muy claro. La preocupación de la Unión Europea por la degradación democrática en Hungría o Polonia parece que ha desplazado ahora su foco hacia nuestra península. Y si Pedro Sánchez no ha sido capaz de resistir la presión ¿qué va a hacer el pobre de Pablo Casado cuando desde Bruselas se disparen los truenos y relámpagos?

Las visiones políticas miopes orientadas hacia maniobras de corto plazo contando con el viento favorable de las encuestas, implican un grave ejercicio de irresponsabilidad cuando ponen en juego la gobernabilidad del sistema, tan complicada en el nuevo entorno histórico de pluralismo polarizado e inestable. Y las convocatorias electorales reiteradas en unos momentos de crisis terminal como la que vivimos, vienen a ser como un niño jugando con pólvora con un encendedor en la mano. Seguramente otros líderes más maduros, como Núñez Feijoo, no se plantean este tipo de maniobras.

Y no podemos negar que en España ya se viene preparando el terreno desde hace tiempo: la reiteración de la memoria histórica en el discurso político cotidiano es algo que sólo puede acabar resucitando los fantasmas gerracivilistas de nuestra memoria colectiva, que se activan como una mecha al montarnos en una

oleada electoralista reiterada y permanente. Y cuando sopla el viento huracanado de la mayor crisis histórica que hemos vivido, ponerse a jugar con las encuestas y las elecciones como si fueran un inocente instrumento democrático de efectos inocuos, constituye la mayor de las imprudencias.

Como no somos alemanes, el ejemplo de la Alemania de Weimar se nos olvida con demasiada frecuencia: la Constitución de Weimar de 1919 se construyó como un sistema de garantías para frenar lo que entonces se entendía como la principal amenaza política que se cernía sobre Europa, el comunismo soviético. Era como el cuento de “que viene el lobo, que viene el lobo”. Y la sorpresa fue que, efectivamente, vino el lobo, pero no era el lobo comunista, de la extrema izquierda, sino un lobo pardo llamado Hitler, de la extrema derecha. El hundimiento de la democracia alemana de entreguerras, en un ambiente de elecciones reiteradas, preludiaba históricamente la tragedia del hundimiento de nuestra Segunda República.

Y ahora, alimentados por dudosos asesores de imagen y por manipuladores de encuestas, algunos de nuestros imberbes políticos se ponen otra vez imprudentemente a jugar con fuego. ¿Se han preguntado, más allá del corto plazo, qué horizontes de gobernabilidad pueden preluarse, o se trata simplemente, otra vez, del juego del reparto de la tarta? Desde luego, nuestros gobernantes parecen tener la misma perspectiva histórica que un niño jugando con fuego.

Por fortuna, ya sólo podemos confiar en que desde el entorno histórico del presente sí tenemos una última agarradera en la que engancharnos: aún nos queda Europa. Que se vaya preparando el bueno de Pablo Casado.

VOLVER AL PASADO

18 mayo 2021

Parece que eso es lo que, en el fondo, deseamos todos. Que acabe ya esta pesadilla y podamos volver a ser como éramos antes. Retornar al viejo orden perdido, donde era posible salir, entrar, moverse, divertirse, y hasta abrazarse.

Esta sensación o ese deseo colectivo de retorno es la causa de la gran oleada de conservadurismo que nos llega: un conservadurismo entendido en su sentido más originario, el de conservar pautas del pasado que hemos perdido con el tsunami de la

pandemia. O sea, volver a lo que éramos antes de que comenzara la pesadilla colectiva.

Se percibe de entrada en los comportamientos electorales: las elecciones en Madrid han sido una combinación del efecto chivo expiatorio, que ha abrasado al PSOE, y de retorno al pasado representado por el Partido Popular. Pero se percibe sobre todo en el modo como tratamos de recomponer los muebles tras el desastre. Porque ahora lo que realmente queremos es recuperar lo anterior: nuestro brillante sector turístico, nuestro dinámico sector inmobiliario, nuestros bares, nuestras ferias y fiestas, nuestras puertas abiertas de par en par.

Estrangulado en su inevitable rol de chivo expiatorio, a Pedro Sánchez sólo le cabe ya ponerse de perfil y guardar silencio sobre el duro presente para tratar de sumergirnos a todos en la utopía futurista que ya casi parece que estamos tocando con los dedos: cuando, una vez todos vacunados, nos incorporemos al elevado escenario de la nueva generación verde y digital, con la ayuda del maná que nos va a llegar de Bruselas.

Y por esa misma razón, las minorías políticas más recientes parecen también estar en riesgo de quedar estranguladas. Porque nuestra visión del pasado político viene a ser como el imaginario de un estable bipartidismo más o menos asumido por todos, que ahora parece llamado a retornar. Y allá vamos. O, mejor dicho, ya lo tenemos aquí: tenemos a Grau y Rubio. O a Rubio y Grau. Cada uno de ellos de uno de los dos partidos de siempre. La corrupción asumida y tolerada que de nuevo se nos hace presente; el esperado retorno a los Gurteles y los Eres, tan “añorados”, justo cuando casi estábamos a punto de olvidarlos.

Qué importancia tiene ya que, apenas hace una década, nuestro pluralismo político nos asomara a un contexto esperanzado de protesta y regeneración, de crítica y reconstrucción desde dentro de nuestra democracia. Un proyecto de superación de la vieja y asfixiante democracia bipartidista, llena de cuotas, de clientelismos y de corrupciones toleradas: cuando todo estaba bajo el control de nuestros viejos y venerables partidos que ahora tratamos de reflotar. Lo que era nuestro pasado, o sea, esa democracia deficiente que ahora queremos recuperar.

Por eso, frente al proyecto regeneracionista, frente al ideal complejo y problemático de una democracia mejor, parece más sencillo soñar con la pura y simple vuelta al pasado. Y si a ese afán de recuperar el pasado le unimos nuestra inefable memoria histórica, ya lo tenemos: la invocación al tiempo pasado viene a ser una sutil forma indirecta de retornar al mismo. La alegría de tener ya casi superada la pandemia nos impulsa hacia un camino conservador que nos lleva de vuelta hacia otros tiempos que algunos todavía

recordamos. Y conviene recordarlo bien: eran los tiempos del desempleo, de la corrupción tolerada, del conservadurismo institucional y de la falta de alternativas.

¿Acaso es que, según los sabios de Bruselas, necesitamos ahora un futuro verde e innovador? Pues no hay problema: a partir de ahora nuestros hoteles turísticos serán verdes, nuestro sector inmobiliario será circular, nuestros desempleados estarán reciclados en la nueva e innovadora Formación Profesional, y nuestra incultura será plenamente solidaria. Volver al pasado, como decía Ortega y Gasset, es como retornar a nuestra condición de primates y empezar a subirnos a los árboles. Pero puede que a lo mejor ni siquiera necesitemos tanto esfuerzo: basta con volver a votar a los que votábamos hace más de una década, y todo estará hecho.

Recuperar nuestro pasado es la mejor forma de desembarazarnos al fin de esta pesadilla colectiva, dejarnos llevar por el bucle melancólico y retornar a una época remota que siempre imaginaremos como mejor. Y quién sabe lo que vendrá después, porque detrás de los fondos *Next Generation* vendrán los procesos de corrupción contra los que se van a quedar con las correspondientes comisiones. Todo será un eterno retorno, un volver a empezar, un bucle melancólico sin fin que nos sitúa en un puro conservadurismo.

CÁNCER

25 junio 2021

La hipótesis de que las sociedades puedan padecer una enfermedad grave como el cáncer, igual que los individuos, no parece suficientemente explorada a pesar de que cotidianamente se nos multiplican los casos.

En el Campo de Gibraltar, por ejemplo, tenemos un cáncer: se ha ido generando una especie de “narcosociedad”, con toda una red de complicidades relacionadas con el tráfico de hachís procedente de Marruecos que acaba afectando perversamente a casi todos los recovecos del tejido social e institucional, con numerosas ramificaciones hacia afuera, especialmente en la Costa del Sol. Algo parecido a lo que ha podido pasar en ciertos momentos en Colombia o México, por no hablar de lo que significó en el siglo XIX la guerra del opio en China.

En Cataluña también tenemos un cáncer: el virus nacionalista se ha transmutado en supremacismo, impidiendo cualquier posibilidad

de diálogo social constructivo y bloqueando las posibilidades de una dinámica colectiva mínimamente integrada. Cuando los ciudadanos no nos consideramos iguales ni aceptamos integrarnos con los demás, no hay alternativas posibles. Es también algo parecido a lo que sucedió en algunos países ultranacionalistas europeos hace casi un siglo, dando lugar a las sucesivas guerras mundiales.

Y si los comportamientos sociales se acaban convirtiendo en auténticas patologías, sólo tenemos en principio un instrumento de acción: las fuerzas de seguridad y el Código Penal. Un instrumental algo burdo y a veces escasamente personalizado, que aplican de un modo cansino nuestras instancias judiciales, acaso conscientes en el fondo de su relativa inadecuación. Lo mismo que sucede también con algunos anticuados tratamientos contra el cáncer.

Pero ahora parece que en Cataluña hemos decidido emprender otro tipo de estrategia: un camino novedoso y original, sustituyendo el marco penal por otros instrumentos de carácter político inspirados en el diálogo y la generosidad, en la clemencia y el perdón. Sus perspectivas de éxito son toda una incertidumbre, porque los propios protagonistas activos del independentismo siguen proclamando la misma estrategia para el futuro, o sea, que van a seguir siendo independentistas pese a todo y contra todos. Del mismo modo que, pese a detenciones y procesamientos, muchos campogibaltareños van a seguir siendo traficantes de droga.

En consecuencia, si el independentismo no cabe en nuestro ordenamiento constitucional ¿qué les podemos ofrecer a cambio, más allá de amnistías y perdones? El nacionalista, igual que el enfermo, no consigue sustraerse nunca de esa coletilla tan profunda del “¿qué hay de lo mío?”. Se supone que, si no podemos conceder la independencia, más allá de posibles gestos de generosidad sólo podremos ofrecerles a los catalanistas un nuevo privilegio, a ver si se conforman; o sea, lo que ya venían pidiendo, un privilegio fiscal al estilo vasco, camuflado bajo la apariencia de un pacto. Lo que consiguieron en el País Vasco durante la transición con el apoyo del terrorismo de ETA. Entonces, si no puede ser la independencia, a ver qué les damos a cambio: pues un privilegio fiscal, para que los ricos del norte se queden con su dinero. Todo ello oportunamente envuelto en la piel de cordero tras la que se disfraza el lobo: el noble envoltorio de un pacto de Estado.

La hipótesis podría ser igualmente extrapolable a otros supuestos: si el Código Penal no nos permite dejar que en el campo de Gibraltar se sigan dedicando al tráfico de hachís ¿qué les podemos ofrecer a cambio? ¿Podríamos, por ejemplo, permitirles que se dediquen más bien al tráfico de cocaína, o de éxtasis, o al cultivo directo de marihuana? Seguramente en el campo de Gibraltar no tienen todavía un marco de interlocución adecuado para expresar y

concretar esta demanda, pero todo se andará. O a lo mejor se trata simplemente de hacer la vista gorda.

En el mundo de la medicina, ciertas enfermedades sólo se solventan mediante la estrategia del bisturí, la que aplica el cirujano cuando en una intervención quirúrgica extirpa el tejido enfermo. Pero en el mundo de la vida social carecemos de ese instrumental tan directo y contundente. Los cánceres sociales no se extirpan y los tratamientos paliativos suelen ser insuficientes.

Es algo que ya sabemos todos, y por eso nos vamos habituando con sorda resignación a seguir nuestra reiterada dinámica histórica del *Día de la Marmota*: vendrá otra declaración de independencia, otra condena penal, otra amnistía, y así indefinidamente. De la misma forma que las lanchas de contrabandistas de hachís en el Estrecho seguirán planeando a toda velocidad, y el cáncer del narcotráfico cabalgando sin solución.

LA NO-ACCIÓN

26 julio 2021

Por más que el argumento sea ya conocido, al final nunca deja de sorprendernos. La tarea fundamental del gobierno parece consistir en no hacer nada. Incluso algo más: no hacer y no dejar hacer, como está sucediendo ahora.

Se supone que el gobierno debería ser el principal actor en la última y más aguda de las oleadas de la pandemia que nos golpea con la última variante del virus. Como también debería esforzarse en rebajarnos la factura de la luz que nos asfixia en plena emergencia. Por no hablar del desastre económico. Pero hace tiempo que Pedro Sánchez parece desconectado de estas molestas cuestiones y se encuentra más cómodo en su brillante atalaya, la de señalarnos el magnífico horizonte futuro que nos espera. Seguramente es que hoy a los españoles nos interesan más otras cuestiones más alejadas de la realidad presente, como la memoria democrática, así que mejor olvidarnos de la gran crisis en la que estamos sumergidos.

El gobierno probó la estrategia de la acción centralizada a comienzos de la pandemia, en 2020, y tiró prontamente la toalla para dejar las decisiones en manos de las Comunidades Autónomas. Prometió presentar proyectos para renovar nuestros soportes legales y se la han olvidado. Afirmó que estaría al servicio de las CCAA en la lucha contra la pandemia y ahora se pone a mirar para otro lado,

dejándolas bregar solas con una legislación inadecuada y un poder judicial que ofrece respuestas heterogéneas. ¿Acaso lo que nos interesa a los españoles a estas alturas es saber qué se va a hacer con los restos de José Antonio? Un personaje al que ignoran la mayoría de las actuales generaciones.

Pero es que la no-acción no consiste solamente en cruzarse de brazos: se trata de desarrollar paralelamente una estrategia de imagen, un relato, una presencia virtual en pantalla, un nicho atractivo donde visualizar a nuestros dirigentes en sus comparecencias mediáticas sin preguntas de los periodistas. La no-acción se transmuta así en pura acción virtual, y se supone que todos nos sentimos felices de ver a Pedro Sánchez viajando por Estados Unidos: bonitos enfoques, atractivas sonrisas, oportunos discursos. Es el gran momento de éxito de los asesores de imagen, esos brillantes periodistas que ignoran toda estrategia consistente de gobierno, para preocuparse de otras cuestiones más decisivas como el share o el tuiteo.

La no acción se ha convertido ya en el paradigma que explica la lógica de la acción gubernamental, y no sólo porque exista una evidente incapacidad estratégica o instrumental en el seno de nuestro ejecutivo sino por una segunda y ventajosa razón: quien no actúa ni se equivoca ni se hace responsable. ¿Cómo acusar ahora al exvicepresidente de asuntos sociales de ser políticamente responsable del desastre que sufrieron nuestras residencias de ancianos en las primeras semanas de la pandemia? Si él no hizo nada, no puede ser responsable de nada, además de que se trataba de un ámbito de competencias autonómicas. Del mismo modo que la ministra de sanidad tampoco hace ni puede hacer nada, porque la sanidad está también en manos de las CCAA, y en consecuencia ella no es responsable de nada, aparte de dar bonitos discursos.

Este objetivo final de no hacerse responsable de nada es la consecuencia inmediata de un postulado previo: que la auténtica misión del gobierno es la de no hacer nada. El poder del gobierno ha dejado de ser un instrumento destinado a transformar la realidad y a resolver problemas sociales, para pasar a convertirse en un simple trofeo, un premio del que disfruta la mayoría: o sea, para hacerse fotos y salir en la tele. El gobierno hoy es pura *gobermedia*, desarrollando una mera acción virtual sin ninguna implicación de responsabilidades.

Y por supuesto, queda la última vuelta de tuerca: ¿Entonces quién es el responsable de que las cosas vayan tan mal en nuestro país, de que vaya mal el empleo, la vivienda, la economía y la sanidad? La respuesta parece sencilla: obviamente la culpa es de la oposición. Lo está vendiendo ya Sánchez en Estados Unidos: el único problema de nuestro país reside en la oposición. De esta forma, el gobierno sólo tiene que desarrollar una estrategia simple, oponerse a

la oposición y punto. Nada de objetivos programáticos, medidas instrumentales, previsiones financieras, movilización burocrática, apoyo de la ciudadanía, orquestación de las esferas públicas. Nada de nada.

La no-acción se ha convertido en la estrategia de gobierno perfecta y por eso según el CIS el PSOE está subiendo en las encuestas.

BAROJA

6 agosto 2021

Que el tiempo de verano es una buena ocasión para la lectura o la relectura, parece un dato bien conocido. Y entre las numerosas invitaciones siempre aparecerá el inagotable Pío Baroja. Una buena ocasión para sumergirse, por ejemplo, en las aventuras de Eugenio de Aviraneta, aquel clarividente conspirador liberal cuya biografía discurre a lo largo del siglo XIX, desde la guerra de independencia hasta las guerras carlistas, y cuya confusa estela siempre acababa en una interminable serie de fracasos.

Merece la pena discurrir de la mano magistral de Baroja por aquella oscura atalaya de Bayona, donde se concentraba gran parte del exilio español: primero liberales intentando reconquistar España al mando del general Mina y fracasando estrepitosamente, luego carlistas apoyados por realistas franceses enfrentados al ejército cristino, luego un maremágnum interminable de facciones donde todos se mezclaban en un sinfín de espionajes y conspiraciones cruzadas; donde los personajes exhibían un cúmulo de egoísmos, divisiones, hipocresías, celos y ambiciones; muestra inevitable de su profunda ignorancia y de la ausencia de todo espíritu de unidad. Eran los tiempos difíciles en que España se mecía en un entorno casi permanente de guerras civiles y pronunciamientos, desde el fusilamiento de Torrijos hasta la partida del carlista jiennense Gómez cruzando España desde el norte hasta la misma Gibraltar, perseguido por los generales liberales Alaix y Narváez en pugna entre ellos; cuando, tras la ocupación de Córdoba, hasta la misma Puerta Real de Sevilla tuvo que ser tapiada ante la inminente amenaza. Oscuros recuerdos del tormentoso siglo XIX, cuando España se debatía en las dificultades históricas para configurar una precaria democracia liberal.

Hoy tenemos afortunadamente una democracia consolidada en nuestro país y un marco constitucional solvente: el brillante fruto de la hoy denostada Transición. Y por eso las amenazas de golpes de

Estado no tienen que formularse ya desde fuera de las fronteras como en el siglo XIX, sino desde las propias instituciones públicas: sólo hay que oír la reiterada cantinela de los gobernantes catalanes para comprobarlo. Ya no hay fusilamientos ni exiliados forzosos perseguidos por el pérfido ministro Calomarde bajo la siniestra sombra de Fernando VII, sino confortables residencias voluntarias en Bruselas bajo la benévola promesa de un indulto y responsabilidades civiles a cubierto por parte de la hacienda catalana.

Hoy el futuro de España se puede negociar en cualquier mesa bilateral sin que los españoles nos sintamos atormentados por efervescencias revolucionarias o amenazas de pronunciamientos. Hoy, ante el altar de la gobernabilidad, cualquier partido se siente con ínfulas suficientes para sacrificar derechos y principios constitucionales, o para tolerar la falta de respeto a las libertades de opinión o de expresión en algunas partes del territorio del Estado. Hoy los grandes conspiradores del pasado, como Aviraneta, han sido sustituidos por amables asesores de imagen que nos venden su falsa mercancía con el mismo descaro que los ministros de Isabel II utilizaban para mantenerse en el poder.

La sensación de que todo ha cambiado pero que, en el fondo, no ha cambiado nada, se hace inevitable. Hasta los propios e ilustrados gobernantes catalanes de hoy prefieren adoptar el estilo de los catetos payeses que dibujaba el legendario Josep Pla en su clásico *Viaje en autobús*: permanentemente enfurruñados y sólo cavilando en cómo engañar al amo. Sólo que en este caso el amo resulta ser el Estado español. La sensación de que la gran aportación institucional con que nos hemos estrenado en el siglo XXI, nuestro flamante Estado autonómico, no sólo ha servido para generar un marco operativo de gobernanza para luchar contra la pandemia, sino que, al mismo tiempo, nos ha hecho a todos un poco más provincianos. Y cuando la melancólica mirada endógena se va reforzando hasta mutarse en virus nacionalista, el camino que queda por recorrer está ya bien marcado por la historia del siglo XX: del nacionalismo se pasa sin solución de continuidad al nacionalsocialismo.

Las interminables volutas de la historia parecen cabalgar por encima de los siglos y sólo la pluma de algunos grandes escritores nos permite descubrir las pinceladas maestras que componen y descomponen nuestra realidad nacional en un caleidoscopio donde presente y pasado se dan la mano por encima de los siglos.

Hoy muchos añoramos no poder contar ya con la inconmensurable pluma de Pío Baroja para retratar el cúmulo de egoísmos, vanidades, envidias, celos, ambiciones e hipocresías que componen el deconstruido cuadro de nuestra realidad nacional. Y

como le sucedía al gran conspirador Eugenio de Aviraneta, todos los nuevos desafíos parece que nos llevan de fracaso en fracaso.

¿ESPAÑA O LA INDIA?

28 agosto 2021

La pretensión de nuestros dirigentes por manipular conceptos científicos del ámbito de la politología o del derecho público para reutilizarlos a su servicio, parece que no tiene límites. Primero fue la noción de gobernanza, una categoría en gran medida aún ignorada, que propone una visión horizontal y coordinada de los procesos de acción pública y que ha acabado derivando en el redundante palabro de la “co-gobernanza”.

Y ahora es la noción de *gobernanza multinivel* la que se trata de manipular al servicio de sospechosos intereses. Gobernanza multinivel significa interacción entre esferas institucionales colocadas a distinta escala (local, regional, estatal, europea); es una categoría que se refiere al ámbito de las instituciones y no a la sociedad. Ser europeo no quiere decir ser superior a ser español, como ser español no quiere decir ser superior a ser andaluz o extremeño. En los modernos estados de derecho, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. La gobernanza multinivel sería una forma de entender las interacciones entre las distintas esferas institucionales de cada uno de los territorios organizados, y tiene en la Unión Europea uno de sus principales campos de desarrollo.

Pero pretender forzar las dimensiones semánticas de determinadas categorías para proyectarlas fuera de su ámbito constituye un juego propio de aprendices de brujo cuyas consecuencias no siempre sabemos calcular.

El ejemplo negativo más conocido es el que han destripado Acemoglu y Robinson en su obra *El pasillo estrecho* de 2019: el caso de la India. Teóricamente la India es una democracia bien asentada con un marco constitucional consistente, donde sin embargo no se cumple el primero de los postulados que configuran cualquier Estado de derecho, el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La realidad de la India manifiesta por el contrario un mantenimiento del ancestral y milenario sistema de castas que coloca a cada ciudadano en un nicho social diferenciado y bloqueado del que es imposible salir, a pesar de que las castas estén prohibidas por la Constitución. Hablar de un auténtico “Estado” sobre la base de un soporte social

caracterizado por su radical desigualdad constituye una auténtica falacia: sin igualdad de los ciudadanos no existe ningún tipo de Estado. Por eso en rigor la India no debería ser conceptuada como un auténtico Estado constitucional.

Proyectar la categoría de la gobernanza multinivel más allá de la esfera de las relaciones interinstitucionales o del derecho público para colocarla en un ámbito de dimensión social o socioterritorial, supone hacernos a todos los ciudadanos desiguales sin que nos demos cuenta del cambio. Por supuesto que las desigualdades sociales y económicas siguen existiendo, como han existido siempre, pero el poder del Estado y de la ley debe ser igual para todos, de lo contrario avanzamos por el mismo camino que la India. Y así en España, siguiendo el modelo hindú, las castas se transformarían en territorios dotados de una desigual posición ante el Estado, de tal modo que los derechos y libertades de los españoles serían distintos según el territorio en el que habiten. En la cima de la jerarquía estarían dos Comunidades que todos conocemos, equivalente a los *brahmanes*, en su origen maestros, intelectuales y sacerdotes; en una escala inferior los *kshatriyas*, guerreros o funcionarios; luego los *vaishyas*, granjeros y comerciantes; y finalmente los *sudras*, simples obreros. Por último, en el sur del sur quedaríamos los marginados, los *dalits* o parias.

Durante largos años nos hemos habituado a considerar el paradigma de la diversidad como un principio avanzado y progresista que permite al Estado afinar sus políticas para ajustarlas a una realidad inevitablemente diferente. No habíamos pensado en las consecuencias imprevistas y a largo plazo de tal dinámica. No habíamos entendido que, en el fondo, cuando yo digo “soy diferente” estoy, de forma implícita y sutil, tratando de decir “soy superior”. Tras las diferencias aparecen las desigualdades, tal como en la India reemerge y se mantiene a lo largo de los siglos el milenarismo sistema de castas.

Si lo que pretendemos es que todos vayamos a sumergirnos alegremente en un sistema de diferencias territoriales consolidadas, y si además y para colmo aspiramos a que no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, entonces está claro: nuestro futuro se llama un Estado multinivel. Es un concepto tan moderno que a todos nos encantará, sin darnos cuenta de dónde nos estamos metiendo. Y no cabe duda de que las diferencias serán aceptadas y consensuadas felizmente. Mediante la forma de Estado multinivel España se colocará nuevamente en la avanzadilla mundial.

ESTADOS DE EMERGENCIA

29 septiembre 2022

No es ninguna sorpresa comprobar que los juristas, como otros científicos sociales, solemos trabajar sobre modelos teóricos dotados de una lógica noble, actuando al final como si el mundo real no existiera. O sea que, si la realidad no se ajusta a tales modelos, lo que falla es la realidad, no la teoría.

Semejante paradoja se viene repitiendo a partir de las valoraciones judiciales sobre la declaración del estado de alarma. En principio, los juristas solemos actuar sobre calificaciones puramente formales o cualitativas, donde *alarma* equivaldría a emergencia sanitaria, *excepción* a emergencia terrorista, y *sitio* a emergencia bélica, conforme a una codificación que deducimos de la Ley Orgánica de 1981. O sea, no utilizamos un elemental criterio alternativo de codificación gradual o cuantitativa, perfectamente ajustable a la realidad, según el cual *alarma* significaría emergencia leve, *excepción* emergencia mediana y *sitio* emergencia máxima.

Así el paso de uno a otro modelo no lo explicamos mediante una ponderación gradual conforme a la gravedad de la situación real, sino en base a criterios formales y apriorísticos de carácter cualitativo. Y desde esa perspectiva no llegamos a entender que, aunque generada por un factor sanitario, la crisis producida por el virus del covid ha desbordado ampliamente sus dimensiones sanitarias para convertirse en una crisis global de impacto social, económico, e incluso civilizatorio. Calificar lo que hemos pasado como estado de alarma es como empeñarse en utilizar un insecticida anti-mosquitos para un bicho del tamaño de un dragón. El estado de alarma era insuficiente para atender la emergencia, y por eso en realidad lo que hemos tenido es un estado de excepción camuflado bajo el rótulo formal de estado de alarma.

Imaginemos que el árbitro de un partido de fútbol utiliza distintas tarjetas para sancionar las faltas de los jugadores, según que éstas hayan sido cometidas con la pierna, con el brazo o con la cabeza ¿Sería correcto manejarse con este criterio puramente formal? ¿O más bien lo que el árbitro debe sancionar es la gravedad o intensidad de la falta -o sea, un criterio cuantitativo- para así ponderar el tipo de sanción a aplicar en forma de tarjeta?

Que las categorías formales definidas en la desfasada y anticuada ley de 1981 se consideren como postulados superiores establecidos *sub especie eternitatis*, viene a ser al final un simple reflejo de nuestra tradicional cultura jurídica, asumida a lo largo de generaciones, donde las categorías formales se consideran válidas y predominantes por sí mismas sin necesidad de enfrentarlas a la

realidad. Por eso hemos identificado de forma primaria emergencia sanitaria con estado de alarma. Y ahora resulta que la realidad no nos cuadra con ese rótulo: un confinamiento generalizado de largos meses, con suspensión efectiva de ciertos derechos fundamentales y alteración en el funcionamiento normal de nuestras instituciones centrales no era, evidentemente un estado de alarma sino algo mucho más gordo.

A estas alturas no cabe ya en la cabeza pensar que el miedo a la noción de estado de excepción proceda todavía de los resabios frente a las remotas situaciones de excepción del régimen franquista; o sea, de ese bucle melancólico del pasado remoto que parece autoalimentarse con tanta memoria histórica. Porque lo mejor que se puede hacer ante leyes desfasadas como la de 1981 es reformarlas de forma inmediata para readaptarlas de forma pragmática a la realidad cambiante.

Que nuestros inspirados dirigentes no hayan tenido tiempo para caer en semejante obriedad sólo se explica desde el conjunto de prejuicios mentales y metodológicos que conforman en España nuestra tradicional formación académica y profesional como juristas. Una formación de tipo formalista, mantenida en el tiempo durante generaciones, que refleja una filosofía de inevitable aroma conservador y que se asienta sobre recitativos memorísticos de normas preestablecidas, teóricamente dotadas de una pretendida autorracionalidad. Un conjunto de prejuicios culturales que sigue cabalgando en la actualidad como se demuestra en las memorísticas oposiciones que se celebran periódicamente para seleccionar a nuestros cuerpos de burócratas y otros profesionales del mundo del derecho.

Todo lo cual nos lleva al final a encarar colectivamente la realidad mediante unas anteojeras jurídico-formales que eliminan todo pragmatismo a la hora de valorar tal realidad. Y si al final los juristas no sabemos encarar la realidad, si nos seguimos refugiando en nuestras rutinarias categorías formales dotadas de una pretendida racionalidad destinada a mantenerse a lo largo del tiempo, nuestra percepción de los cambios que trae consigo la historia durante estas procelosas décadas iniciales del siglo XXI será la propia de un mundo de ciegos.

LA BANALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

9 septiembre 2021

De ser una categoría mágica y trascendente, destinada a solventar de una vez por todas los seculares problemas históricos del constitucionalismo español, parece que en apenas unas décadas hemos avanzado de forma tan acelerada en una normalización de la noción de democracia, que estamos ya en el camino de su pura banalización.

Teóricamente sería una dinámica propia de las llamadas democracias “avanzadas” donde a lo largo del siglo XX no han tenido interrupciones históricas tan negativas como la española. El fenómeno se percibe, por ejemplo, en el famoso “día de reflexión” que sirve para asegurar la libertad y la propia reflexión de los votantes en la víspera electoral; o sea, para liberarnos del exceso de presión propagandística que hemos tenido que soportar durante la campaña y poder deliberar libremente y sin presiones. Hay algunos países, como hemos comprobado en Alemania, donde tal jornada de reflexión no existe: porque se entiende que el ciudadano actual está ya suficientemente habituado a digerir la presión de la publicidad en nuestros medios de comunicación o en las interminables *cookies* de nuestros móviles. Y si ya estamos habituados ¿qué sentido tiene mantener la formalidad de la jornada de reflexión?

Pero aún más grave es el hecho de que consideremos a las propias elecciones como acontecimientos ordinarios e intrascendentes, que se pueden celebrar en cualquier momento o circunstancia. En realidad, ya sucedió en 2004, cuando el electorado se vio envuelto en una sospechosa dinámica de cambio impulsada por una cadena de atentados terroristas seguidos de movilizaciones “espontáneas” convocadas desde redes y circuitos mediáticos. Y ha vuelto a suceder durante el confinamiento de la pandemia, sin que hayamos prestado atención al dato de que las circunstancias excepcionales no son momentos aconsejables para celebrar elecciones.

En realidad, no se trata de una pura reflexión teórica sino de una previsión que está ya explicitada en la propia Constitución: su famoso artículo 116 dedicado a los estados excepcionales contiene en su apartado quinto un mandato que nos ha pasado completamente desapercibido. Dice “*No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo*”. Para el entendimiento común, debe recordarse que “disolución del Congreso” equivale a “convocatoria de elecciones”; o sea, la Constitución nos aconseja no convocar ni celebrar elecciones bajo una situación excepcional.

Sin embargo, parece que durante la pandemia no nos hemos acordado de semejante mandato; y así hemos tenido reiteradas convocatorias electorales en Galicia y País Vasco en julio de 2020, en Cataluña en febrero de 2021 y en Madrid en mayo de 2021. Mientras

diversos presidentes al frente de algunos ejecutivos han estado desojando la margarita de la disolución anticipada y subsiguiente convocatoria de elecciones. Si las elecciones se han celebrado en semejante tipo de situaciones, entonces es que sin darnos cuenta hemos renunciado a atribuirle al momento electoral ese carácter tan trascendental y significativo que se deduce del texto constitucional, o que le concedíamos en el momento de la transición.

Al final, para algo tan vulgar como las elecciones da igual celebrarlas en cualquier momento o circunstancia: qué tontería, esto de las elecciones viene a ser como una bagatela intrascendente, un trámite rutinario ordinario o superfluo. Ya no entendemos una elección como el acontecimiento decisivo de la vida democrática, el momento clave en el que la voluntad popular se expresa a través del voto para decidir sobre el futuro de la comunidad, cuando nos comportamos como auténticos ciudadanos titulares de esa *volonté generale* de que hablaba el legendario Rousseau.

Y lógicamente, si estamos ya banalizando la democracia al final acabaremos banalizando igualmente el resto de sus elementos: ¿Cumplir las leyes o las órdenes de las autoridades? Menuda broma, a quién le importa la convivencia ordenada y pacífica; ya podemos organizar botellones, destrozar plazas y jardines y atacar a las fuerzas del orden. Si hemos banalizado el momento mágico y excepcional de las elecciones, está clara cuál será nuestra opinión sobre el resto de los elementos que componen una democracia civilizada y pacífica. Del gamberrismo institucional con que nos han obsequiado numerosos gobernantes, rompiendo ante las cámaras resoluciones judiciales o haciendo caso omiso a las decisiones del Tribunal Constitucional, hemos pasado siguiendo un proceso previsible al puro gamberrismo ciudadano. Si hasta lo hemos comprobado en la Norteamérica de Trump, con las masas de gamberros ocupando el Capitolio, qué vamos a esperar ahora.

La banalización de la democracia nos lleva en un camino cuesta abajo del que no podemos esperar nada bueno.

LA VUELTA A LA NORMALIDAD

22 octubre 2021

Seguramente es lo que estábamos deseando: dejar atrás por fin los avatares y las angustias de la pandemia para volver a ser como éramos. Dejar a un lado la crispación y las tensiones para retornar a la felicidad de los botellones y la juerga, las salidas y los viajes. Y también el esperado retorno a los grandes acuerdos mediante los

cuales los partidos de siempre se repartían las instituciones como si fueran porciones de una tarta: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otros. O sea, volver a la democracia secuestrada, a las instituciones colonizadas, a seguir disimulando ante Europa para que no nos metan en el pelotón de los malos, junto con Hungría y Polonia.

Porque ese era el sistema del pasado, cuando las instituciones independientes eran secuestradas mediante falaces acuerdos entre partidos que se comprometían a respetar mutuamente sus respectivas cuotas. Y ahora se aparece como el reencontrado consenso exigido por la Constitución, con sus mayorías cualificadas, para la designación de ciertos órganos.

¿Alguien dijo alguna vez que se trataba de instituciones independientes? Bueno, sí, lo decía la Constitución, aquella antigualla de la Transición que hay que reformar de inmediato. Porque el problema no es sólo que se rompa con la exigencia de independencia de unas instituciones que tienen como función ejercer el supremo control sobre el sistema, ya sea el control de constitucionalidad o el control contable de las finanzas públicas; el problema adicional es que la propia calidad del personal que es nombrado para tales cargos prosigue su procelosa cuesta abajo sin solución posible. Qué lejos ya aquellos tiempos en que los miembros del Tribunal Constitucional eran los primeros espadas de sus respectivas especialidades jurídicas, los tiempos de los Rubio Llorente o Tomás y Valiente, los de Gimeno Sendra o Rodríguez-Piñero. Ahora, para acceder a un cargo tan relevante, sólo se exige una condición: ir con el carnet del partido en la boca y buscar un buen padrino. Lo de “juristas de reconocido prestigio” parece como una broma pesada para adornar el pastel. Y para colmo, hasta el mismo exministro Juan Carlos Campo se pone a esperar en la cola. Con este panorama en ciernes, lo más sencillo sería que los nombrados estuvieran previamente incluidos en las listas electorales del respectivo partido, para que no haya dudas. Así luego no tendríamos que extrañarnos cuando el Tribunal de Luxemburgo o el mismo Tribunal Federal Alemán pretenden darnos lecciones de derecho.

Tan difícil nos resulta entender lo que significan las instituciones independientes que a veces no nos damos cuenta de que las tenemos delante de las narices: pongamos las Juntas Electorales, llenas de reconocido prestigio al cabo del tiempo. ¿Que cómo se asegura su independencia? Pues mediante un sistema de sorteo entre jueces. El primigenio sistema de la democracia ateniense. Un mecanismo sencillo que elimina de un plumazo la perversa interferencia partidista para colonizar unas instituciones independientes que, por su propia naturaleza, deben ser de todos y actuar el servicio de todos, no de sus respectivos patrones.

Cuando a partir del año 2015 comenzó a eclosionar el nuevo pluralismo político, pareció entreverse la posibilidad de romper con estas perversas inercias del pasado: si se necesitan mayorías amplias que hay que buscar entre muchos partidos, parecía claro que, al final, sólo debería primar la calidad de los candidatos suscitando así un apoyo al margen de toda militancia partidista. Era como si empezara a soplar un viento regeneracionista, una apuesta por la calidad democrática, donde el concepto de independencia institucional podría recobrar su auténtico sentido. Pero al final los viejos partidos han acabado reventando la ilusión y reavivando esos oscuros vientos que inspiran nuestra triunfal deriva democrática.

¿Quién dijo independencia? ¿independencia de qué? No debe haber más pauta que la que marcan las urnas y controlan los partidos con mano férrea. Y si los controladores pertenecen a la misma panda que los controlados, pues mejor para todos. Ya estamos un poco aburridos de Gurteles y Eres, de bofetadas a la mayoría, de frenos o límites a la inexorable deriva populista con que nos seducen nuestros gobernantes.

Sólo cabe lamentar una vez más la posición débil que asume al final la sociedad, nuestro papel como ciudadanos: porque con el sistema de reparto de la tarta entre los partidos, o más bien entre los partidos dominantes, al final nadie nos da vela en este entierro. Como si no fueran nuestras instituciones, las de todos, sino sólo los instrumentos a través de los cuales quienes mandan pretenden transmitir y reproducir su poder.

LA CÁMARA ESTRELLADA

21 noviembre 2021

La cámara estrellada o *Star Chamber* fue un edificio antiguo de Londres, desaparecido en alguno de los históricos incendios que sufrió la ciudad, donde se reunía el Consejo de la Corona que, con el paso del tiempo, dio lugar al actual Gabinete británico. No se sabe con exactitud si es que el edificio tenía forma o decoración de estrellas, porque ya no existe.

La sala donde se reúne el consejo de ministros en España no está decorada con estrellas ni tiene forma estrellada. Sin embargo, nuestro proceso territorial se mueve entre la duda de practicar la gobernanza territorial en modo cooperativo, como se ha demostrado durante la pandemia, o practicar el modelo de bilateralismo que puesto en marcha tras la reunión en Barcelona de la Mesa de Diálogo. Si se opta por lo segundo, como desean algunos socios del gobierno,

parece que el ejecutivo, antes de decidir sobre cualquier cuestión, deberá consultar previamente a la Comisión bilateral Estado-Generalidad. Una comisión prevista en el Estatut (artículo 183) que va a constituir en la práctica el auténtico “gabinete” hacia el que se irá desplazando el poder del Estado, puesto que cualquier asunto aprobado por el gobierno podrá afectar de forma más o menos indirecta a Cataluña. El Consejo de Ministros sólo podrá decidir allí donde previamente le autorice la Comisión bilateral y en los términos o con los límites que ésta establezca; de lo contrario se estaría produciendo una violación del ordenamiento fundamental del estado. Así que ya tendríamos en España un “gabinete” hacia el que se irá desplazando el centro de gravedad de la actividad de dirección política del gobierno.

Para resolver los inconvenientes potenciales de este sistema, nuestros dirigentes tuvieron hace algo más de una década una idea genial: copiar el Estatut en los nuevos Estatutos de las restantes Comunidades. Y así, con la generalización del nuevo modelo, el panorama resultante parece claro: al final, no habrá una comisión bilateral sino diecisiete. En consecuencia, cada sesión del Consejo de ministros tendría que ser precedida de un largo preámbulo donde el Ministro de la Presidencia tendrá que recorrer un itinerario a través de las diecisiete comisiones bilaterales antes de poder adoptar la decisión correspondiente: lo que en la práctica supondrá diecisiete puntos de veto.

Para abordar operativamente este complejo proceso convendría que el Consejo de ministros comenzara a reunirse en una cámara estrellada, es decir, una sala en forma de estrella con diecisiete puntas, donde en cada una de las esquinas se constituiría la correspondiente comisión bilateral; o sea, los diecisiete gabinetes que conformarán en la práctica el futuro gobierno de la confederación ibérica. Hay que imaginarse el panorama. No es una elucubración, sino el resultado lógico de aquello que los españoles votamos al ratificar las reformas de nuestros respectivos Estatutos de autonomía.

En cada una de las esquinas de esa sala estrellada donde se reúna el Consejo de ministros podrán expresarse los símbolos y fundamentos históricos de cada Comunidad: unas se situarán antes de 1839, como ha pedido recientemente el País Vasco; otras podrán acudir a la época de los vándalos o alanos, o incluso a las milenarias raíces ibéricas y tartésicas. La sala estrellada será un compendio de los símbolos y legitimidades de nuestra historia remota, donde residen las raíces de nuestro ser como nación.

No pensemos que tal sistema (si es que se le puede llamar sistema) va a llegar a paralizar nuestro gobierno: si hay unanimidad en las comisiones bilaterales, al final los ministros podrán hacerse la correspondiente foto. No pensemos tampoco que tal sistema va a

producir un bloqueo en el gobierno, porque siempre existirán ámbitos exentos de la decisión previa de las comisiones bilaterales: por ejemplo, si trata de conceder una medalla o un indulto, podrá decidirlo de forma perfectamente autónoma.

Esta es nuestra doble alternativa territorial en términos históricos: acudir al modelo cooperativo para ajustarse a las exigencias de la gobernanza global del siglo XXI, o apostar por el reforzamiento de los poderes de autogobierno de las autonomías, con sus comisiones bilaterales. De este modo, las posibles emergencias globales con que nos amenaza el siglo XXI, como la pandemia, el cambio climático, la crisis energética u otras vicisitudes de dimensión mundial, podrán ser encaradas y respondidas de forma inmediata. Nuevamente España asumiría un papel de vanguardia para situarnos ante la forma de gobierno del siglo XXI.

La única duda que se puede suscitar es si, como sucedió en Inglaterra en los remotos tiempos de la monarquía absoluta con su Cámara estrellada, al final no vamos a acabar todos estrellados.

INDICE

- AÑO 2003.** Pág. 3
CHAPAPOTE CONSTITUCIONAL (Sobre la nueva oleada de reforma de los Estatutos)
¿MODERNIZACIÓN O REFORMA? (El debate sobre la administración)
EL CONTROL DE LA POLITICA LOCAL (Vísperas de elecciones locales)
- AÑO 2004.** Pág. 11
LEGITIMACIÓN O VICTORIA (Vísperas elecciones generales)
¿OFERTAS PROGRAMÁTICAS O CANDIDATOS? (Campaña electoral)
ANDALUCIA: EL IMPACTO DE LOS VOTOS NEGROS (Elecciones generales marzo 2004)
LA CRISIS DE LEGITIMACIÓN (Reflexión tras las elecciones de 2004)
ELOGIO DE LA ALTERNANCIA (Tras la constitución del nuevo Congreso)
TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA
Y NO ESTAR LOCO (Sobre la política socialista en Madrid y Andalucía)
PERDÓNALES, SEÑOR (A las minorías)
PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA
- AÑO 2005.** Pág. 29
GOBIERNOS ¿FUERTES O DÉBILES?
EL “IMPULSO DEMOCRÁTICO” (Política autonómica en Andalucía)
POLÍTICA O PROZAC
LA DEMOCRACIA ABURRIDA (Referéndum Constitución europea)
EL FRACASO DE LA POLÍTICA
SOY UNA NACION
ADIOS, GUNDER FRANK (Necrológica)
TEORIA DEL “PUTSCH” (Revoluciones de los colores)
¿SEGURIDAD O PENITENCIA? (Ante el terrorismo islámico)
ECOS DE LA TRANSICION
NOSOTROS EL PUEBLO (Reforma de los Estatutos)

- EL OMBLIGO DEL MUNDO** (Fracaso del referéndum del proyecto de Constitución europea en Francia)
LA CLAUSULA SAGRADA (Reforma del Estatuto catalán)
NO FOTOCOPIABLE (Tras publicarse el proyecto de Estatuto de Cataluña)
NORTE Y SUR
LAS ESTRATEGIAS FATALES (Sobre movilizaciones populares)
LOS PARTIDOS “CÁRTEL”
¿INSTITUCIONES INDEPENDIENTES O DE CUOTAS?
- AÑO 2006.** Pág. 65
EL SILENCIO DE LOS CHARNEGOS (Tras el referéndum de ratificación del proyecto de Estatuto catalán)
LECCIONES DEL REFERENDUM ITALIANO (Tras el referéndum de reforma constitucional de julio 2006 en Italia)
LA “REALIDAD NACIONAL” (Tras aprobarse el proyecto de Estatuto de Andalucía)
LIDERAZGOS
LAS REGLAS DE JUEGO
LA HORA DE LOS JUECES
EL TREN DE LA SEGUNDA MODERNIZACION
EL SISTEMA DE PARTIDOS
LA CAMPAÑA DE CONVERGENCIA
LA POLÍTICA DE IGUALDAD
LA REALIDAD INVERTIDA
CONSTITUCION O GUERRA (Palestina)
- AÑO 2007.** Pág. 89
EDUCAR CIUDADANOS
QUE EL SISTEMA FUNCIONE (A Fernando Savater)
LO QUE CUESTA UN VOTO (Ante las elecciones locales)
LIMITAR LOS MANDATOS
AGENDA DE GOBIERNO
LA LINEA ROJA
LA CÁMARA ESTRELLADA (Artículo no publicado)
ESPAÑA, ESPAÑA
CATALUÑA Y LA CONSTITUCIÓN
DOBLE JUEGO
DEBATES PARLAMENTARIOS
- AÑO 2008.** Pág. 109
SECRETOS ELECTORALES
DIVINAS PALABRAS
EL CASO DE ITALIA
ECOS DEL 68
CONGRESOS Y LEGISLATURAS
ESTOS LODOS
LOS CIENTÍFICOS Y LA POLÍTICA
LA DEMOCRACIA MILITANTE
- AÑO 2009.** Pág. 125
LA ERA DE CHAVES: RETRATO EN SEPIA
EL “NUEVO” MODELO ZAPATERO
FINANCIACIÓN Y HEGEMONÍA
EL SAINETE HONDUREÑO
EL TAO DE LA POLITICA
EL RUIDO JUDICIAL
- AÑO 2010.** Pág. 137
SATISFACCION Y CRISIS
DECISIONES Y NO-DECISIONES
EL PARTIDO
LAS LEYES “PROCLAMÁTICAS”
TRANSPARENCIAS (Los papeles de Wikileaks)
- AÑO 2011.** Pág. 147

- FUNCIONARIOS**
- AÑO 2012.** Pág. 149
- EL SUR
 - ADIOS (A los jóvenes emigrantes)
 - APOCALIPSIS
 - EL DINERO
- AÑO 2013.** Pág. 157
- LA HORA DE LAS ONGs
 - IZQUIERDAS
 - EL TESORO
 - PROFESIONALES DE LA POLÍTICA
 - ERRORES DEL GOBIERNO
 - LA CIUDADANÍA COSMOPOLITA
- AÑO 2014.** Pág. 169
- LA INDEPENDENCIA DE PADANIA
 - VOLVER A LA EDAD MEDIA
 - EL TRAPEICISTA SIN RED (Adolfo Suárez)
 - ESTIGMAS (Política asistencial en Andalucía)
 - PUZZLING (Elecciones europeas)
 - LA ABDICACIÓN ANUNCIADA
 - ESTILOS DE PROTESTA
 - EL MANTRA DEL PACTO
 - FALSEDADES
 - TODOS QUEREMOS MAS
 - LOS VENGADORES
 - NUEVOS PARTIDOS, NUEVA POLÍTICA
 - GENERACIONES DEL FUTURO
 - EL CÍRCULO VIRTUOSO
- AÑO 2015.** Pág. 195
- SUEÑOS (Sobre la red de internet)
 - DOS TRINCHERAS (Sobre el caso de corrupción de los ERE)
 - PRESIDENCIALISMOS
 - GOBERNAR
 - IDEOLOGÍAS Y GUARRADAS
 - CATALONIA IS DIFFERENT
 - GUERRA ENTRE CONTROLADORES
 - ACCION INSTANTÁNEA
 - QUÉ HACER
 - LA INERCIA BIPARTIDISTA
 - EL RUIDO PARLAMENTARIO
 - LEALTAD Y COERCIÓN (Artículo 155)
 - LAS ELECCIONES MEDIÁTICAS (Tras las elecciones 20 diciembre 2015)
- AÑO 2016.** Pág. 221
- JUEGO DE TRONOS
 - INSTRUMENTOS DE DESBLOQUEO
- AÑO 2017.** Pág. 225
- LLAMAR AL PUEBLO (Ante el desafío independentista)
- AÑO 2019.** Pág. 227
- EL “ESPIRITU” DE LA TRANSICIÓN (Tras la muerte de Pérez-Llorca)
 - ¿VACACIONES?
 - ACLAMACIÓN
 - LO VIEJO Y LO NUEVO
- AÑO 2020.** Pág. 235
- EL EFECTO REINA ROJA
 - MATAR AL ENFERMO
 - SINDROME DE ESTOCOLMO
 - LA PELIGROSA REFORMA DEL CGPJ
 - QUINCE DIAS

LA DERIVA AUTORITARIA
LUCECITAS

Año 2021. Pág. 249

EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO (no publicado)

EL GOLPE INVISIBLE

LA LEY COVID

JUGAR CON FUEGO

VOLVER AL PASADO

CÁNCER

LA NO-ACCIÓN

BAROJA

¿ESPAÑA O LA INDIA?

ESTADOS DE EMERGENCIA

LA BANALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

LA VUELTA A LA NORMALIDAD

LA CÁMARA ESTRELLADA